

LAS DERECHAS IBEROAMERICANAS.  
DESDE EL FINAL DE LA PRIMERA  
GUERRA HASTA LA GRAN DEPRESIÓN

Ernesto Bohoslavsky  
David Jorge  
Clara E. Lida  
Coordinadores



EL COLEGIO DE MÉXICO



LAS DERECHAS IBEROAMERICANAS.  
DESDE EL FINAL DE LA PRIMERA  
GUERRA HASTA LA GRAN DEPRESIÓN

Ernesto Bohoslavsky  
David Jorge  
Clara E. Lida  
Coordinadores



EL COLEGIO DE MÉXICO



LAS DERECHAS IBEROAMERICANAS  
DESDE EL FINAL DE LA PRIMERA GUERRA  
HASTA LA GRAN DEPRESIÓN



COLECCIÓN «AMBAS ORILLAS»

**Consejo Editorial**

*Clara E. Lida*  
directora

*Javier Garcíadiego*

*Andrés Lira*

*Carlos Marichal*

*Tomás Pérez Vejo*

*José Antonio Piqueras*

*Nicolás Sánchez Albornoz*



LAS DERECHAS IBEROAMERICANAS  
DESDE EL FINAL DE LA PRIMERA GUERRA  
HASTA LA GRAN DEPRESIÓN

*Ernesto Bohoslavsky*  
*David Jorge*  
*Clara E. Lida*  
coordinadores



EL COLEGIO DE MÉXICO

320.9809042

E5627

Encuentro Iberoamericano: Prácticas y culturas políticas de las derechas, desde el final de la primera Guerra Mundial hasta la Gran Depresión (2018 : Ciudad de México).

Las derechas iberoamericanas : desde el final de la primera Guerra hasta la Gran Depresión / Ernesto Bohoslavsky, David Jorge, Clara E. Lida – 1a. ed. – Ciudad de México, México : El Colegio de México, 2019. 355 p. ; 21 cm – (Colección Ambas Orillas).

“Este libro recoge como artículos algunas de las ponencias presentadas en marzo de 2018, en el ‘Encuentro Iberoamericano: Prácticas y culturas políticas de las derechas, desde el final de la primera Guerra Mundial hasta la Gran Depresión’, auspiciado por la Cátedra México-España de El Colegio de México”. – p. 9.

Incluye referencias bibliográficas

ISBN 978-607-628-568-8

1. Derecha e izquierda (Ciencia política) – América Latina – Historia – Siglo xx – Congresos. 2. Derecha e izquierda (Ciencia política) – España – Historia – Siglo xx – Congresos. 3. Derecha e izquierda (Ciencia política) – Portugal – Historia – Siglo xx – Congresos. 4. América Latina – Política y gobierno – Siglo xx – Congresos. 5. España – Política y gobierno – Siglo xx – Congresos. 6. Portugal – Política y gobierno – Siglo xx – Congresos. 7. Conservadurismo – América Latina – Historia – Siglo xx – Congresos. 8. Conservadurismo – España – Historia – Siglo xx – Congresos. 9. Conservadurismo – Portugal – Historia – Siglo xx – Congresos. I. Bohoslavsky, Ernesto Lázaro, coord. II. Jorge, David, coord. III. Lida, Clara E., 1941- , coord. IV. El Colegio de México. Cátedra México-España. V. t. VI. Ser.

Primera edición impresa, 2019

Primera edición electrónica, 2020

DR © EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C.

Carretera Picacho-Ajusco 20

Ampliación Fuentes del Pedregal

Alcaldía Tlalpan

14110 Ciudad de México, México

[www.colmex.mx](http://www.colmex.mx)

ISBN impreso: 978-607-628-568-8

ISBN electrónico: 978-607-564-177-5

Conversión gestionada por:

Sextil Online, S.A. de C.V./ Ink it ® 2020.

+52 (55) 5254 3852

[contacto@ink-it.ink](mailto:contacto@ink-it.ink)

[www.ink-it.ink](http://www.ink-it.ink)

# ÍNDICE

[Advertencia y agradecimientos](#)

[Introducción](#)

*Ernesto Bohoslavsky, David Jorge y Clara E. Lida*

[La movilización conservadora frente a la revolución: las uniones cívicas en España \(1917-1931\)](#)

*Eduardo González Calleja*

[Las derechas en Portugal después de la primera Guerra Mundial. El camino del autoritarismo](#)

*António Costa Pinto*

[Los conservadores de Argentina \(1916-1930\). De la ilusión con la democracia a la decepción con el pueblo](#)

*Ernesto Bohoslavsky*

[Las derechas empresariales en Argentina ante la militancia obrera: la Asociación del Trabajo \(1918-1930\)](#)

*Norberto O. Ferreras*

[Las derechas uruguayas en los años veinte](#)

*Magdalena Broquetas San Martín*

[La derecha radical brasileña entre el tradicionalismo, las ligas nacionalistas y la seducción del fascismo \(1917-1932\)](#)

*João Fábio Bertonha*

[La derecha conservadora y liberal chilena frente al asedio del comunismo y de la derecha radical \(1918-1932\)](#)

*Verónica Valdivia Ortiz de Zárate*

[Las derechas en Colombia durante la década de 1920](#)

*Ricardo Arias Trujillo*

[Tradicón, anticomunismo y nacionalismo en el México de los años veinte \(1922-1929\)](#)

*Ricardo Pérez Montfort*

[La liberación de la mujer. Conflictos, \(des\)encuentros y paralelismos entre mujeres derechistas y progresistas en América Latina durante las décadas de 1920 y 1930](#)

*Sandra McGee Deutsch*

[Perfiles biográficos](#)

## ADVERTENCIA Y AGRADECIMIENTOS

Este libro recoge como artículos algunas de las ponencias presentadas en marzo de 2018, en el “Encuentro Iberoamericano: Prácticas y culturas políticas de las derechas, desde el final de la primera Guerra Mundial hasta la Gran Depresión”, auspiciado por la Cátedra México-España de El Colegio de México. En esa ocasión, cada ponencia tuvo un comentarista particular que planteó los términos del debate y dio sugerencias para revisar esos textos y convertirlos en los artículos que ahora presentamos. Para esta edición hemos sumado dos colaboraciones más. Por un lado, la conferencia de clausura que Sandra McGee Deutsch dictó en ese Encuentro. Por otro lado, el de Verónica Valdivia que analiza el caso chileno. Todos los artículos incluidos en este volumen fueron, además, sometidos a evaluación externa.

Los coordinadores de dicho Encuentro y de esta publicación queremos agradecer el apoyo de otros colegas que, como comentaristas o evaluadores, participaron con nosotros en este proyecto: Eugenia Allier, Horacio Crespo, Aymer Granados, Marco Palacios, Manuelle Peloille, Sebastián Rivera Mir y Pablo Yankelevich. Estamos endeudados con la presidenta de El Colegio de México, Silvia Giorguli, por apoyar la publicación de este libro dentro de la Colección Ambas Orillas, así como con Gabriela Said, directora de Publicaciones de la institución, por su labor editorial.

## INTRODUCCIÓN

### **I. PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN**

Este libro rastrea las diversas maneras en las cuales grupos de derecha de la Península Ibérica y de varios países de América Latina procesaron los desafíos globales y nacionales vividos entre el final de la primera Guerra Mundial y la crisis económica de 1929-1930. El tema central es el análisis de las culturas políticas, las ideologías y las prácticas políticas de las derechas. Los artículos incluidos en esta compilación se centran en los casos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Portugal y Uruguay, y prestan atención a cinco cuestiones centrales.

1. En general, los textos analizan el vínculo entre el régimen político y los intereses dominantes. El análisis de los actores centrales —individuos o grupos— en los conflictos de la década de 1920, así como los intereses que representan permiten conocer mejor los enfrentamientos producidos por el aumento de la conflictividad sindical, la influencia de la Revolución rusa (y en ciertos casos, la mexicana), la creación de los partidos comunistas, la influencia del fascismo italiano y la reacción de los dueños del capital, de la Iglesia y de los poderes oligárquicos tradicionales.
2. Respecto del papel de la Iglesia católica, varios de los autores han buscado mostrar cómo impactaron a esta institución, a sus organizaciones y seguidores el retroceso de la ideología liberal y evolucionista decimonónica y el afianzamiento de ideologías de derecha radical, así como los desafíos desde la izquierda. En estos textos se ha intentado examinar las formas de diálogo, competencias y tensiones entre la Iglesia y sus voceros dentro del arco más amplio de las derechas.
3. En todos los estudios están presentes las preocupaciones políticas de los actores de derecha. Se trata de ilustrar los intereses centrados en la política formal, en la agitación social, en el impacto de la posguerra y de las crisis

económicas. Esto se vincula con la necesidad de aclarar cómo los actores se definían, principalmente, por sus antagonistas (anticomunistas, antisindicalistas, antiliberales, antifeministas, etc.), por sus propuestas alternativas o por ambos.

4. El estudio de las ideologías y sus prácticas políticas (formales o no, clandestinas o públicas) es central a muchos de los artículos. Varios de los autores se han preocupado por caracterizar las formas institucionales que desarrollaron las derechas para organizar y defender sus intereses (partidos, ligas, asociaciones empresariales, guardias blancas, etcétera).

5. La violencia política no podría faltar en el estudio de esta época. Los artículos incluidos en esta compilación identifican la intensidad y frecuencia de las prácticas violentas de agentes estatales, paraestatales y particulares. Interesa, además, percibir las tensiones que se desarrollaron entre las fuerzas armadas y quienes ejercían violencia de clase, como las guardias blancas o las milicias de partido. También hay preocupación por rastrear los esfuerzos realizados para teorizar y debatir sobre el uso de la violencia como una herramienta política legítima.

El recorte temporal aquí adoptado inicia tras la Gran Guerra, que trajo consigo los remolinos económicos posbélicos, pero que también alentó las réplicas del comunismo fuera de Rusia y el impacto del fascismo más allá de Italia. El otro límite cronológico con que cierran estos estudios es la profunda crisis financiera y económica de 1929, cuyos efectos en algunos países durarían hasta la segunda Guerra Mundial. Algunos países como Argentina, Brasil, Uruguay —y hasta cierto punto, México—, dieron un giro hacia el proteccionismo y la intervención del Estado, dando inicio a un crecimiento “hacia adentro”. La crisis económica debilitó las democracias liberales en Europa y en América Latina y estimuló el auge de modelos políticos alternativos, como el comunismo y el nazi-fascismo en la década de 1930.

## **II. OCCIDENTE: DE LA BELLE ÉPOQUE IMPERIALISTA AL DESENLACE DE LA GRAN GUERRA**

Cuando comenzamos a pensar en este proyecto colectivo coincidimos en que las derechas en el mundo ibérico en los lustros posteriores a la Gran Guerra estaban poco estudiadas y que valdría la pena explorarlas más. Éramos conscientes de

que, en general, la atención de los historiadores se había centrado en la sobresaltada década de 1930, sin duda para explicar el auge de ideologías extremas y la imposición por las armas de dictaduras que contaron con el beneplácito de las élites económicas y amplios sectores de las clases medias. El que la década culminara en una segunda Guerra Mundial, apenas un cuarto de siglo después de iniciada la primera, ha dado al estudio de los años treinta una preeminencia más que válida. Pero ello ha llevado a opacar el estudio de los años anteriores, que nos interesaba rescatar en su dimensión iberoamericana, según se desarrolla en las páginas siguientes.

Las dos décadas previas a la primera Guerra Mundial fueron para la Europa más desarrollada, Estados Unidos y algunos pocos países en las periferias, una verdadera belle époque. El desarrollo y bienestar marcaron a las clases sociales más acomodadas, pero no solo a ellas. El acceso de las pequeñas burguesías a nuevos espacios laborales, hoy llamados de “cuello blanco”, a emprendimientos económicos estables, a la educación y al consumo antes reservados a los sectores más pudientes, les dio una inédita seguridad y holgura materiales. Por su parte, las clases trabajadoras accedieron paulatinamente a mejores salarios y condiciones de trabajo, y a una indudable significación política por su militancia en vigorosas organizaciones partidarias y sindicales.

Esos años también marcaron el surgimiento de nuevas ideologías contrarias al liberalismo y al parlamentarismo. Un caso de especial trascendencia fue el ejemplificado por Charles Maurras y su *Action française*. Con su crítica al capitalismo, a la democracia y al Estado liberal, el integrismo maurrasiano tuvo una enorme influencia entre las derechas europeas y su influencia cruzó el Atlántico y permeó en diversos movimientos católicos en Iberoamérica, como se verá en varios de los artículos que se incluyen en esta compilación. Por otra parte, la acción de grupos paramilitares, guardias privadas y asociaciones de civiles armados en países como España (Somatén catalán), Gran Bretaña (Voluntarios del Ulster), Francia (Camelots du Roi), Alemania, Austria-Hungría, Italia, etc., por sólo mencionar algunos, permite entender que en la Europa de la belle époque se expandieron las organizaciones violentas que sumaban miles de hombres, mayoritariamente jóvenes, muchas veces al servicio de intereses políticos y económicos particulares, a menudo —pero no siempre— al margen del Estado.

Tampoco faltaron las tensiones políticas ni la violencia armada en y entre naciones. Durante esos años la competencia por mercados y territorios coloniales

creó serios conflictos entre viejas y nuevas potencias imperialistas, incluso externas a Europa, como Estados Unidos contra España o Japón contra Rusia, así como la guerra de los Boers contra Gran Bretaña, en el sur de África; la de los Boxers en China, contra la penetración europea, la lucha del Imperio otomano en Asia menor, contra Italia, y otros. Sin embargo, mientras en la propia Europa no hubiera enfrentamientos bélicos entre las grandes potencias y en tanto el auge de los nacionalismos, como en los Balcanes en 1912 y 1913, no significara un fuerte reto a la integridad territorial de las mismas, los indicios de malestar no siempre fueron adecuadamente entendidos. Por ello, en julio y comienzos de agosto de 1914 muchos pudieron pensar que los sucesos que se desarrollaban en el centro y este de Europa eran apenas escaramuzas locales y no el comienzo de una Gran Guerra que se prolongaría durante cuatro años, extendiéndose por otros continentes y cambiando radicalmente el panorama mundial.

Ya durante la guerra, la urgencia por alimentar a las poblaciones y proveer a la industria bélica con materias primas llevó a los gobiernos de los países beligerantes a abandonar el liberalismo económico y a intervenir directamente, planeando y dirigiendo la producción de guerra, racionalizando los recursos, priorizando las importaciones de insumos imprescindibles, etcétera. Ello llevó a carestías, inflación y endeudamiento, a la vez que para los países neutrales, como España, México y la mayoría de los países sudamericanos, así como para Estados Unidos y Brasil antes de entrar como beligerantes en abril de 1917, abrió oportunidades materiales inéditas al convertirse en acreedores y en exportadores netos de materias primas y elaboradas. La sustitución de importaciones también tuvo un marcado efecto en procesos de industrialización en algunos países de América Latina y Asia, como en Argentina o Japón.

La contienda, además, dio lugar a la injerencia oficial para dictar controles y censura sobre la información impresa y desarrollar una industria de propaganda del Estado que instara al compromiso patriótico. Durante esos cuatro años, los imaginarios se nutrieron de continuos llamados al nacionalismo por los Estados en pugna y de una indudable exacerbación de la xenofobia. La guerra también resquebrajó ciertas barreras de clase al llamar a filas a pobres y clases medias, a ricos y trabajadores. Pero el conflicto y la consiguiente debacle demográfica también derribaron barreras de género al reclutar masivamente por vez primera en la fuerza de trabajo a las mujeres, mientras los hombres iban a la guerra. Muchas también participaron en el frente de batalla como enfermeras y telegrafistas y en otras labores en las retaguardias. Aunque lentamente, en diversos países se fue reconociendo el derecho al voto femenino y a la

ciudadanía plena. Estaba claro que la guerra trajo cambios profundos que habían llegado para quedarse.

Los costos de esa Gran Guerra se pueden medir de varias maneras, pero tal vez la más escalofriante fue la pérdida de vidas humanas, especialmente de hombres jóvenes: entre ocho y diez millones de combatientes murieron, más de veinte millones fueron heridos o discapacitados y más de siete millones de víctimas civiles constituyeron el saldo brutal de aquella contienda. Esto sin mencionar la limpieza étnica practicada por el Imperio otomano, responsable del genocidio armenio, que entre muertos y deportaciones forzosas, ascendió a más de un millón de víctimas. Catastrófica fue también la destrucción material en las zonas de guerra, como en la frontera belga-franco-alemana y los Balcanes, especialmente en Serbia. Y ni qué decir de los costos económicos de la conflagración. El mundo que surgió en 1918 estaba en las antípodas del optimismo de los lustros anteriores: de la belle époque ya no quedaba más que el recuerdo. Lo que se abría era una enorme incógnita para la que las cansadas fuerzas del liberalismo decimonónico parecían estar poco y mal preparadas.

### **III. BANDERA ROJA Y CAMISAS NEGRAS**

Rusia, donde la guerra trajo consecuencias radicales, ya había sentido en 1905 el hondo malestar de la población contra el zarismo, tras la derrota sufrida ante Japón. Si en la década siguiente el Imperio ruso se había repuesto de la crisis y contaba con la tasa de crecimiento económico más alta de Europa, durante la Gran Guerra, la escasez, la carestía y el hambre generalizados mostraron que la economía estaba prácticamente destruida. Por ello, no fue sorpresa que en febrero de 1917 las huelgas y las protestas en la capital —rebautizada Petrogrado al comienzo de la guerra—, se generalizaran y se produjera una revolución que al mes siguiente llevaría a la abdicación del zar Nicolás II. A partir de entonces, la revolución se fue extendiendo por el país, abarcando a trabajadores, campesinos y sectores de las clases medias; en octubre, los bolcheviques, con Vladimir Lenin a la cabeza, no vacilaron en hacerse del poder. Si bien esto condujo a una guerra civil y a la intervención armada de varios países —que en ciertos lugares se prolongó hasta 1925—, la Revolución rusa logró consolidarse y pervivir más allá de la muerte de Lenin, en 1924.

La firma del armisticio con las potencias centrales en diciembre de 1917 y del

Tratado de Brest-Litovsk, en marzo de 1918, le dieron un respiro a la nueva República Socialista Federativa Soviética de Rusia —definida como una república de obreros, soldados y campesinos— encabezada por Lenin. Esta fórmula federal se aplicó también en Ucrania y Bielorrusia, que en 1922 se fusionaron en la nueva Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Las transformaciones promulgadas resultaron en un viraje radical de la política económica al decretarse la nacionalización de la banca y la industria, el control obrero de las empresas, la abolición de la gran propiedad, incluyendo las tierras y los bienes de los grandes terratenientes, la Iglesia y la Corona, así como la anulación de la deuda interna y externa del Estado. En materia social, las reformas bolcheviques tuvieron también un amplio impacto. Entre éstas cabe mencionar la jornada de ocho horas, la protección del trabajo, la promulgación del divorcio, la igualdad legal, laboral, salarial y social de las mujeres y de los diversos grupos étnicos. La educación universal y laica y una intensa campaña de alfabetización produjeron, además, una profunda transformación cultural a la sombra de la bandera roja con la hoz y el martillo. Éstas y muchas otras reformas se consolidaron a partir de la primera década de la Revolución.

Ya en marzo de 1918 se había formado el Partido Comunista de Rusia, que en 1922, con la creación de la URSS, pasaría a llamarse Partido Comunista de la Unión Soviética (bolchevique), conocido como PCUS. A partir de 1919, por iniciativa de Lenin y el PC ruso, se fundó la Tercera Internacional, Internacional Comunista o Comintern (1919-1943), para alentar la creación y organización de partidos comunistas en el resto del mundo. En muy pocos años, el éxito de esta propuesta se pudo medir por la rápida formación de partidos comunistas en los cinco continentes.

El desenlace de la Gran Guerra y de la Revolución bolchevique tuvieron impactos indudables y profundos en otros países. La derrota de los grandes imperios centroeuropeos y su consiguiente desaparición influyó en la creación de la República alemana, tras su proclamación en Weimar, en noviembre de 1918, y la casi simultánea disolución del Imperio austrohúngaro. Lo contrastante e inesperado fue el profundo impacto en países como Italia, que en 1915 había entrado en la Gran Guerra del lado de los futuros vencedores, a la espera de obtener ventajas territoriales en Europa y en el norte de África en consonancia con el irredentismo histórico. Aunque Italia consiguió la mayoría de los territorios anhelados, muchos nacionalistas manifestaron su frustración al no poder anexarlos todos. A ello se sumó la alta tasa de soldados y civiles muertos (más de 600 000) y la grave crisis económica posbélica que condujo a

explosiones sociales y protestas obreras que, para los liberales y conservadores, evocaban ecos de la Revolución bolchevique. Ante el miedo, muchos de ellos apoyaron al ultraderechista Partido Fascista, encabezado por Benito Mussolini, quien tras la Marcha sobre Roma en 1922 se hizo del poder político prácticamente hasta su muerte, en abril de 1945.

El fascismo planteaba transformaciones económicas dentro de un sistema corporativo impulsado por el Estado para regular las relaciones entre el capital y el trabajo y eliminar así la lucha de clases. Se trataba de una “tercera vía”, de una política económica dirigista en la producción y asignación de recursos, que respetaba la propiedad y la iniciativa privadas, pero que las supeditaba al control estatal. La modernización económica del fascismo estaba igualmente alejada del comunismo y del laissez-faire liberal. Finalmente, el nuevo régimen propuso un ambicioso programa de obras públicas, comunicaciones, transportes, creación de una industria bélica, etc., para convertir a Italia en un país desarrollado y fuerte. En su dimensión social, también planteaba mejoras en la educación y la salud, la jornada de ocho horas, la seguridad social y laboral (enfermedad, invalidez, jubilación), entre otras medidas.

Desde el punto de vista político, los principios propuestos incluían el rechazo tanto del liberalismo y de la democracia como del marxismo. Asimismo se prohibieron las organizaciones obreras independientes, sus reivindicaciones laborales y sociales y el “pacifismo antipatriótico” del que habían hecho gala en 1914, oponiéndose al ingreso de Italia en la guerra. La defensa de la violencia desde el Partido y el Estado y la creación de grupos de choque armados de “camisas negras”, squadristi, contribuyeron a imponer el control sobre organizaciones obreras y políticas disidentes. Aunque el fascismo fue inicialmente secularista y anticlerical, a medida que avanzaron los años, se produjo un acercamiento con la Iglesia y en 1929 reconoció al Vaticano como Estado independiente. La mezcla de valores seculares con otros tradicionales, como la reducción de la presencia pública y laboral de las mujeres, su papel como madres, la exaltación de la virilidad, etc., caracterizaron al fascismo a lo largo de esas décadas.

#### **IV. ESPAÑA Y PORTUGAL: ENTRE DICTADURAS Y REPÚBLICAS**

Con el surgimiento en Europa de regímenes autoritarios apoyados en novedosas movilizaciones de masas, otros países que habían permanecido al margen del conflicto bélico también sintieron los sacudimientos de la época. En el caso de España, durante los años comprendidos entre la huelga general de Barcelona en 1917 y la proclamación de la Segunda República, en 1931, se pueden apreciar claros ecos de los acontecimientos del resto de Europa. Ya en 1917, las Juntas de Defensa militares, que agrupaban a jefes y oficiales descontentos con sus salarios y sistema de promoción, se habían convertido en grupos de presión corporativa ante el gobierno. Por otra parte, las Juntas devinieron grupos de choque para controlar las huelgas de los obreros catalanes, percibidas como amenaza al orden social.

En 1921, con la derrota colonial en Annual (Marruecos), España sufrió un severo golpe a sus ambiciones expansionistas en África. Esto allanó el terreno para que dos años después, el general Miguel Primo de Rivera, quien con un discurso antiliberal y antiparlamentario apelaba al patriotismo y, al igual que Mussolini en Italia, exaltaba la virilidad en la política, diera un golpe de Estado. La dictadura de Primo (1923-1930) fue un régimen autoritario apoyado por una monarquía desprestigiada tras el desastre marroquí. Como en la Italia fascista, Primo instrumentó prácticas corporativas para regular las relaciones entre el capital y el trabajo y eliminar la lucha de clases. Su éxito fue lograr la colaboración del Partido Socialista Obrero español (PSOE) y su Unión General de Trabajadores (UGT). Esto desbrozaba el camino para perseguir a organizaciones radicales, como las anarquistas y comunistas, apoyándose también en formaciones armadas como las Uniones Cívicas y los somatenes, según muestra el estudio de E. González Calleja en esta compilación.

Gracias al superávit comercial obtenido por las exportaciones durante la Gran Guerra, España logró que los “felices años veinte” tempranos se tradujeran en una auténtica prosperidad económica. Aunque ello permitió a la dictadura poner en práctica un ambicioso plan de obras públicas, su enorme costo mermó drásticamente la Hacienda Pública. Esta situación se arrastró más allá de la dictadura y condicionó la política económica de años posteriores. A la crítica situación de la Hacienda contribuyó también la decisión de Primo de reanudar la guerra en Marruecos, esta vez con el apoyo de Francia. Pese a los costos materiales de la aventura africana, el régimen supo capitalizar este éxito colonial y diseñar una política más civilista. Ya desde abril de 1924 había creado un partido personalista, la Unión Patriótica, y al año siguiente formado un Directorio Civil, para luego convocar una Asamblea Nacional Consultiva,

encargada de elaborar un proyecto de Constitución. Sin embargo, el fracaso de la dictadura para forjar un régimen nuevo, la creciente oposición de antiguos aliados, como el PSOE, el malestar empresarial ante el aumento de intervención sindical por parte de la UGT, la oposición de intelectuales y universitarios liberales, que veían a Primo perpetuarse en el poder, paulatinamente minaron la capacidad de control del régimen. Si a esto sumamos el deterioro económico, acentuado aún más con la Gran Depresión, entenderemos por qué en 1930, ante el descontento cada vez más extendido, Primo de Rivera se viera obligado a dimitir. En su lugar, Alfonso XIII nombró al general Dámaso Berenguer a la cabeza del gobierno (tildado irónicamente como “dictablanda”), pensando así retornar a la normalidad constitucional. Pero el aval que Alfonso XIII le había dado a un gobierno contrario a la Constitución acabó por hundirlo en el descrédito que lo llevaría al exilio y a la proclamación de la Segunda República en 1931.

La especificidad de Portugal dentro del marco europeo resulta notoria y se explica por variables históricas, socioeconómicas y culturales propias, pero también por la configuración de su política exterior. La experiencia colonial lusitana fue determinante en la constitución de la identidad nacional; además, la ausencia de reivindicaciones territoriales, de problemas fronterizos o de minorías nacionales, así como la estrecha relación tradicional con el Reino Unido, desempeñaron también un papel esencial en la defensa de los intereses nacionales. La vinculación con y la influencia de Inglaterra influyeron también en la orientación política de ciertas élites, lo cual permitiría explicar la atenuada influencia de modelos de derecha radical tras la Gran Guerra y la excepcional y muy temprana experiencia democrática y parlamentaria que se dio con la proclamación de la República en 1910.

Sin embargo, la transición de la monarquía a la república no fue fácil y, como bien lo explica António Costa Pinto en su artículo, en las postrimerías de la Guerra dio lugar a sucesivas escisiones dentro del republicanismo, a una oposición monárquica (con reiteradas e infructuosas intentonas restauradoras) y a sucesivos levantamientos militares de corte conservador, aunque no explícitamente monárquico. Todo ello supuso una crisis de legitimidad de la República, acusada de haber enviado a la guerra a soldados sin una preparación bélica adecuada. La tensión militar motivó levantamientos en los cuarteles y descontento popular por la participación en la contienda y los costos humanos, económicos y sociales. Entre 1915 y 1919, dicho malestar dio paso a un difícil paréntesis de regímenes militares dentro de un marco republicano. En Portugal

se conjugaron así dos elementos clave de la crisis de entreguerras: la activa participación de los militares en la vida pública del país, a menudo aliados a políticos de derechas, y las propuestas populares reivindicando cambios sociales, ya fuese por cauces reformistas o revolucionarios.

La cuestión religiosa constituyó también otro elemento polarizador, con especial participación del Partido del Centro Católico, que aglutinaba a los disconformes con el anticlericalismo republicano como António de Oliveira Salazar. Pero en lo que a la radicalización de las derechas políticas se refiere, el principal protagonismo recayó en el llamado Integralismo lusitano. Se trató de un tradicionalismo integrista surgido en las aulas universitarias de Coimbra, que combinaba el catolicismo, monarquismo y dos elementos innovadores para las derechas: sindicalismo y municipalismo. En su estudio, A. Costa Pinto señala la influencia de la Action française y el maurrasismo en dicho movimiento, con su inclinación al “corporativismo integral” y a la atracción de unas masas ya insertas en la vida política. El integristismo portugués tuvo una importancia notable, no solo por sí mismo, sino por moldear las derechas monárquicas portuguesas después de la Guerra.

Al igual que en no pocos otros casos de la época, las milicias, las organizaciones paramilitares y la violencia desempeñarían un papel destacado. Lo propio hizo el nacionalsindicalismo, que también preparó el terreno para la posterior dictadura salazarista. El paulatino ascenso de Salazar tras ser ministro de Finanzas de la Dictadura Militar de 1926 y de un régimen clerical-autoritario llamado Dictadura Nacional en 1928, le permitió imponer un riguroso control de las cuentas públicas y obtener un inédito superávit en 1929. Ello sirvió para que las posiciones más radicales de la derecha portuguesa lo colocaran a la cabeza del país, con la creación del Estado Novo, en 1933. En síntesis, en los años veinte, lo que determinó la particularidad portuguesa fue la suma de los elementos que conformaron las nuevas derechas: el autoritarismo castrense, el integristismo católico, el corporativismo sindical y la tradicional alianza con Gran Bretaña.

## **V. LOS AÑOS VEINTE LATINOAMERICANOS**

Gran parte de los cambios derivados de la primera Guerra Mundial y del triunfo de la Revolución bolchevique también influyeron en el desarrollo de América Latina. Tras el final de la contienda, la caída de la demanda europea de bienes

primarios (agropecuarios y minerales) condujo a sucesivas crisis en las áreas exportadoras de América Latina. El aminoramiento de la actividad industrial europea, la reducción de los contingentes bélicos y el auge paulatino de la ganadería y de las áreas sembradas en la posguerra incidieron para que América Latina exportara menos. Si bien algunos de los valores del comercio internacional mostraron recuperación hacia mediados de la década de 1920, nunca se regresó al nivel de intercambio comercial multilateral de los lustros previos a la guerra. A partir de la década de 1920 el comercio se fue haciendo bilateral o triangular por el creciente peso que las inversiones estadounidenses comenzaron a tener en actividades como el cobre, el petróleo, las bananas y los bancos. Sin embargo, los sacudimientos de la economía latinoamericana en la primera posguerra fueron menores que los vividos después, con la Gran Depresión de 1929.

Las consecuencias económicas de la posguerra se asociaron a la intensificación del miedo a la influencia de la Revolución rusa. La renovación de la conflictividad sindical, impulsada por los cambios en Rusia, incentivó la adopción de posturas más belicosas o abiertamente antidemocráticas de las clases dominantes o sus representantes políticos. En esta compilación ese proceso en Argentina es retratado por Norberto Ferreras, y en Colombia por Ricardo Arias. Ello se conjugó con la intensificación de los reclamos de los estudiantes universitarios por la Reforma universitaria iniciada en la muy tradicional Universidad de Córdoba (Argentina) en 1918, cuyos ecos llegaron pronto a países como Chile, Perú, México y Cuba. El “miedo rojo” de las derechas contribuyó a dar cuerpo a la idea de que la movilización de los estudiantes era la antesala de la instalación de soviets en el continente.

Una particularidad significativa de esos años fue el impacto en América Latina de la Revolución mexicana, iniciada en 1910 (véase el texto de R. Pérez Montfort). Parece haber un tono definitivamente latinoamericanista en las lecturas políticas surgidas a partir del desarrollo y las sacudidas de la revolución. El levantamiento de Francisco I. Madero contra la dictadura de Porfirio Díaz, al que siguieron las sucesivas y complejas movilizaciones de las diversas “familias revolucionarias” y de las fuerzas contrarrevolucionarias, tuvieron fuerte repercusión en el imaginario de las clases políticas del continente. Algunos dirigentes mostraron indudable entusiasmo ante el potencial político del campesinado e, incluso, ante la radicalidad de ciertos planteamientos, incorporados en la Constitución mexicana de 1917. Pero también es cierto que en el continente, una porción no menor de líderes políticos percibieron la

Revolución como una amenaza de lo que podría pasar si no se introducían reformas políticas y sociales, como lo muestran M. Broquetas en su artículo sobre el Uruguay y E. Bohoslavsky en el referido a Argentina. En otros casos, el espectro de la revolución sirvió para tomar conciencia de la necesidad de desactivar conflictos entre las élites y unificarlas para evitar el posible triunfo de un desafío desde abajo.

Otro aspecto que vale la pena reseñar es el agotamiento político de muchos de los regímenes oligárquicos, sometidos a diversos desafíos y exigencias de democratización. El cansancio ante los modos fraudulentos, excluyentes y violentos de conducir las prácticas electorales y la estrechez de los espacios políticos controlados por las élites locales y nacionales condujo en varios países a cuestionamientos electorales encabezados a menudo por las nuevas clases medias urbanas. El caso de Chile, analizado por V. Valdivia, y el de Brasil, bajo la lupa de J.F. Bertonha, dan cuenta de los desafíos a los regímenes oligárquicos, tanto desde la izquierda como desde la derecha radical. Los reclamos de democratización, en los que las mujeres comenzaron a hacer su aparición pública en el ámbito hispanoamericano, como lo demuestra S. McGee Deutsch, deben ser entendidos, además, como exigencias de mayor inclusión simbólica e identitaria.

En conclusión, en este libro hemos querido mostrar cómo después de la Gran Guerra, la Península Ibérica y Latinoamérica fueron escenarios en los cuales los modelos excluyentes de nación fueron confrontados por una lucha encarnizada y a menudo frustrada en su afán de reemplazarlos por procesos democráticos incluyentes. En España y Portugal se desarrollaron las crisis de las respectivas monarquías, pero también las de las repúblicas que las sustituyeron en una confrontación pendular entre proyectos autoritarios y progresistas. En diversas latitudes de América Latina, desde la década de 1910 en adelante, los escenarios fueron las naciones que desde México, al norte, hasta la Argentina y Chile, al sur, vieron surgir nuevos actores sociales y políticos dispuestos a disputar el poder a los tradicionales regímenes oligárquicos. Todos estos fueron procesos lentos, contradictorios y a menudo inconclusos, que durante la década de 1920 señalaron una ruta que en muchos lugares todavía se sigue construyendo.

Pero no cabe duda de que la experiencia de la década de 1920 marcó en la Europa ibérica el surgimiento de nuevas culturas políticas y construcciones de derecha e izquierda de las cuales se desprendieron retos y confrontaciones inéditas que continuaron, incluso, después de la segunda Guerra, durante la

llamada Guerra Fría. Asimismo, a partir de la Revolución mexicana se produjo en Iberoamérica una recuperación simbólica de la nación por medio de la incorporación del pasado precolombino a la historia nacional. En otras palabras, de manera paulatina se fue forjando una inclusión imaginaria de los pueblos originarios por medio de la reivindicación del indigenismo, del mestizaje y de la herencia africana, así como de los sujetos de origen rural, serrano y andino. Pero la idealización y recuperación de las poblaciones nativas fueron —y siguen siendo— parte de una época marcada por realidades políticas, culturales y simbólicas que revelan sociedades fracturadas y todavía excluyentes en términos materiales, sociales, de género, étnicos y regionales.

ERNESTO BOHOSLAVSKY

DAVID JORGE

CLARA E. LIDA

## LA MOVILIZACIÓN CONSERVADORA FRENTE A LA REVOLUCIÓN: LAS UNIONES CÍVICAS EN ESPAÑA (1917-1931)

EDUARDO GONZÁLEZ CALLEJA

*Universidad Carlos III de Madrid*

La “oleada revolucionaria” europea iniciada en 1917 produjo un fenómeno político, social y cultural hasta ahora poco estudiado: las uniones cívicas, una novedosa iniciativa antirrevolucionaria de movilización callejera de los sectores conservadores frente a la creciente incapacidad del Estado liberal para garantizar el orden público. El movimiento “cívico” tuvo alcance continental e intentó coordinar sus actuaciones y objetivos mediante la convocatoria de conferencias internacionales y la creación de una entidad supranacional de apoyo e información: la Entente Internationale contre la IIIe Internationale.<sup>1</sup>

En España la ofensiva “cívica” se sustentó en la creación de diversas organizaciones de autodefensa, como el Somatén de Barcelona, la Unión Ciudadana madrileña y otros grupos armados que proliferaron en los núcleos urbanos y zonas rurales de todo el país durante este conflictivo periodo. Experimentos locales que, tras diversas tentativas de fusión en una única entidad, desembocaron durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera en la constitución del Somatén Nacional como gran reserva armada —y también política— del régimen. La progresiva institucionalización y militarización del Somatén Nacional vinculó su suerte a la que habría de correr la dictadura. El desmoronamiento de ésta llevó a su momentánea desaparición. Con diverso sesgo político, el somatén reapareció en Cataluña durante la República y en toda España en los primeros años del franquismo.

Los rasgos definitorios de las uniones cívicas (populismo interclasista, ultranacionalismo, antiliberalismo) fueron reformulados por la derecha radical en los años veinte, y representan un antecedente válido de la movilización de los grupos fascistas y fascistizados en diverso grado. Las uniones cívicas fueron, por tanto, el necesario eslabón contrarrevolucionario entre la pasividad en la acción

defensiva de los sectores sociales conservadores y la permanente agitación pública de los fascismos.

## **MOVILIZACIÓN CIUDADANA Y CONTRARREVOLUCIÓN**

Las secuelas revolucionarias de la primera Guerra Mundial fueron una llamada de atención para las clases conservadoras de todo el continente, que, ante la creciente incapacidad del Estado liberal para garantizar el orden público, se movilizaron con la excusa del cumplimiento de indeclinables deberes de ciudadanía. El fantasma del bolchevismo trató de ser conjurado mediante la implicación en las luchas callejeras de las organizaciones sociales y económicas más interesadas en mantener el statu quo. Así nacieron en Europa y en América las “uniones cívicas”, organizaciones de voluntarios que asumieron el mantenimiento del orden y de los servicios públicos esenciales.<sup>2</sup> En paralelo, y a veces en íntimo contacto con las frecuentes movilizaciones paramilitares de corte nacionalista que se dieron en naciones como Alemania, Finlandia, Austria, Hungría, Yugoslavia, Polonia, Checoslovaquia, Italia o los países bálticos para la defensa o la reivindicación de los territorios conquistados, perdidos o irredentos tras la Gran Guerra, en el fenómeno de las “uniones cívicas” subyacía una actitud defensiva interior de ciertos sectores sociales y de ciertas fuerzas económicas y patronales. Éstos consideraban que los recursos coercitivos o reformistas del tradicional sistema liberal parlamentario no los protegían de forma satisfactoria frente a una oleada subversiva “comunista” que atacaba las mismas bases de su poder. Como creación más o menos espontánea de los grupos sociales amenazados por la crisis revolucionaria de posguerra, la “unión cívica” se diferenciaba de las emergentes milicias de partido en su independencia de una opción político-ideológica que aspirase a la conquista o el control del Estado, y por su inferior nivel de teorización y de planteamientos organizativos y estratégicos respecto a la administración de la violencia política. Las “uniones cívicas” se centraron en la protección de los recursos productivos y la continuidad de las relaciones de producción preexistentes, aunque algunos de sus postulados antirrevolucionarios serían llevados hasta las últimas consecuencias políticas por cierta derecha radical en los años siguientes. Incluso la heterogénea composición social de estas “guardias cívicas” y algunos de sus vagos principios ideológicos pueden prefigurar ciertos rasgos del fascismo. Aunque eran denunciados por sus enemigos como defensores a ultranza del laissez faire socioeconómico y del conservadurismo político más retrógrado, los grupos

“cívicos” nunca cuestionaron la esencia del sistema parlamentario, aunque se mostraron dispuestos a impedir una excesiva e incontrolable democratización del mismo, incluso mediante el apoyo coyuntural a una salida autoritaria. En ello discreparon de los movimientos fascistas y de derecha radical, empeñados en el establecimiento de una dictadura estable y “moderna” que impulsara la nacionalización de las masas y patrocinara incluso la transformación de ciertas estructuras sociales y económicas en sentido corporativo. Tampoco se adaptan con comodidad a un concepto más reciente como el de “vigilantismo”, que despliegan ciertos grupos de conflicto cuando ejecutan “actos de amenaza o de coerción que violan los límites formales de un orden sociopolítico estabilizado, actos que, sin embargo, los violadores consideran en defensa de este orden contra otras formas de subversión”.<sup>3</sup> En realidad, las “uniones cívicas” siempre actuaron como leales colaboradoras del orden establecido y seguían las pautas de comportamiento del tradicional moderantismo burgués: la defensa del “orden social” y de sus valores tradicionales (religión, patria, propiedad, armonía social...) por medio de una entidad auxiliar que apuntalaba, pero no sustituía, los recursos coercitivos o reformistas del Estado liberal.

Su ideario, escasamente desarrollado, se centró en justificar sus acciones mediante la defensa de los principios clásicos del liberalismo, aunque impregnado de un organicismo de impronta reaccionaria. La identificación de los intereses de las capas burguesas con los del conjunto de la sociedad nacional era un principio ideológico de evidente raigambre liberal, aunque la noción revolucionaria de “pueblo” fuera convenientemente sustituida por la de “cuerpo social”, más acorde con la visión biologicista del orden social cohesivo compartido por estos grupos conservadores. Ante un Estado al que le reprochaban su neutralidad en las luchas sociales, la “burguesía” —construcción sociocultural omnipresente en este tipo de movimientos— recuperó su tradición movilizadora de inicios del siglo anterior para garantizar los principios liberal-capitalistas, pero su acción se identificaba también con la del “cuerpo social” organizado armónicamente que se defendía de una agresión revolucionaria procedente del exterior. En esta “defensa de la sociedad”, el Estado no debía inhibirse, sino aceptar la cooperación en la calle de los “buenos ciudadanos” que garantizaran la defensa de las “libertades básicas” de trabajo o asociación, conjugando medidas represivas, alternativas sociales (catolicismo social, corporativismo...) y decisiones políticas de alcance nacional, como el acoso a las organizaciones obreras, sus sindicatos y sus órganos de difusión. La relativa autonomía de estas iniciativas “cívicas” respecto del Estado no implicaba una divergencia estratégica real, pero sí una concurrencia en el monopolio de la

violencia que llevaría en el futuro a tentativas oficiales de “estatalización” o “militarización”, cuando no de simple disolución de las “guardias burguesas”.

Con la excusa de defender la propiedad y garantizar la prestación de servicios públicos en caso de huelga, las “uniones cívicas”, protegieron actividades de esquirolaje y amarillismo sindical, y se dispusieron no sólo a la defensa de la propiedad, sino incluso a exigir del Estado la restricción de los derechos de huelga o manifestación. La interferencia “cívica” fue especialmente notable en los servicios básicos de la comunidad, ya que, a su juicio, las huelgas en los servicios públicos eran el primer paso en la descomposición social que conduciría irremediabilmente al bolchevismo. Para remediarlo, impulsaron la creación de “servicios auxiliares económicos” y rondas armadas que garantizaron la continuidad de las actividades indispensables para la vida y el trabajo: medicina, transporte, abastecimiento, agua, iluminación, electricidad y gas, basura, información, etc. Por supuesto, estos actos de “civismo” servían para justificar como una acción supuestamente altruista lo que en realidad era un recrudescimiento generalizado de la lucha de clases en el ambiente propicio de los primeros años de posguerra, antes de que apareciesen nuevos y más eficaces métodos de respuesta a la movilización política de las masas obreras, como resultó ser el fascismo.

Además de estas implicaciones de orden interior, las “uniones cívicas” pueden interpretarse como un aspecto más del generalizado despliegue de auténticos “frentes internos” de la contrarrevolución en cada uno de los países frente a la amenaza de la revolución mundial mantenida por el bolchevismo, movimiento político que supeditaba la actuación subversiva de sus secciones nacionales a una estrategia internacional igualmente global. Ello no quiere decir que la “amenaza comunista” cobrara idéntica viabilidad en todas partes. Es cierto que la constitución de partidos comunistas disciplinados y de corte semimilitar era más un indicio de la resistencia de la sociedad burguesa que un síntoma de su fragilidad,<sup>4</sup> pero el “pánico rojo” produjo en las clases conservadoras una verdadera ansiedad que acentuó la psicosis defensiva respecto de un estallido revolucionario que se reputaba como inminente. De este modo, la “oleada revolucionaria” de la inmediata posguerra no fue vista por sus coetáneos como un episodio más de las violentas luchas que desde décadas atrás libraban el capital y el trabajo de forma crónica y localizada, sino que era percibida por amplios grupos de opinión pública como la amenaza de liquidación de toda una cultura o civilización. De ahí que la movilización de recursos antisubversivos no se limitara a las “uniones cívicas” o a las acciones represivas de los “ejércitos

blancos” contra los frecuentes estallidos insurreccionales o contra el naciente foco central de la revolución proletaria, hasta lograr el establecimiento de un precario “cordón sanitario” que aislara al resto de Europa de las nefastas influencias revolucionarias rusas. También se intensificó notablemente la colaboración policial y el intercambio de información entre gobiernos e instituciones, o se incrementó la propaganda anticomunista en todas sus facetas.

Las “uniones cívicas” no agotaron sus objetivos en la defensa de la propiedad capitalista frente a las reivindicaciones obreras, sino que la percepción de una amenaza global contra el sistema movilizó a más amplios sectores de población que los estricta y directamente implicados en los conflictos laborales, hasta impeler posteriormente a iniciativas políticas de carácter autoritario. De ahí que la evidencia de otros apoyos sociales y del asesoramiento propiciado desde diversas instancias de la administración estatal civil y militar abra camino a consideraciones más complejas sobre su origen, desarrollo y consecuencias, hechos condicionados y alentados por la sensación de seguridad pública que podía inspirar esta movilización voluntaria de fuertes contingentes de ciudadanos con diversas extracciones sociales (militares, nobleza titulada o no, alta burguesía industrial y financiera, terratenientes, pequeños y medios comerciantes, funcionarios, profesionales liberales, estudiantes de clase media y alta y obreros no revolucionarios) y de ideología no definida, aunque unidos en el objetivo común del mantenimiento del orden social desde una perspectiva marcadamente conservadora.<sup>5</sup>

## **LOS PRIMEROS PASOS DE LA MOVILIZACIÓN “CÍVICA” EN ESPAÑA: EL DESPLIEGUE DEL SOMATÉN EN BARCELONA**

Ya antes del fin de la Gran Guerra, un sector de las clases acomodadas españolas había dado los primeros pasos hacia una intervención callejera independiente de la autoridad gubernativa, y alentaba una vaga salida autoritaria a la crisis del régimen restauracionista. Resulta natural que los primeros intentos de movilización armada de las clases conservadoras se dieran en las zonas más afectadas por la creciente conflictividad social y por la mayor organización y combatividad del movimiento obrero, especialmente el anarcosindicalista. Barcelona era el terreno propicio para un experimento de tal carácter, por la

organización y el potencial de las asociaciones patronales, por la influencia de la burguesía catalanista sobre las diversas instancias de gobierno, y por la experiencia que podía ofrecer la existencia de una institución de vigilancia pública como el somatén, cuyo nacimiento se perdía en las brumas de la Edad Media y había experimentado durante el siglo XIX un notable proceso de transformación hacia la defensa de la propiedad agraria y del orden sociopolítico moderado.<sup>6</sup> El somatén pasó de ser un método excepcional de defensa territorial a convertirse en una institución permanente de carácter parapolicial, estrechamente sometida a la autoridad castrense y cuidadosamente reglamentada desde las altas esferas. Como institución de prestigio organizada por los propietarios para la defensa armada de sus personas y bienes en el ámbito rural, el somatén no tenía jurisdicción en la ciudad, pero había intervenido excepcionalmente en diversas algaradas urbanas producidas en Barcelona, como la que tuvo lugar el 1 de mayo de 1890. Antes de la huelga metalúrgica de 1902, la burguesía industrial pretendió suplir la ineficiencia de las fuerzas gubernamentales desplegando una organización armada por barrios y calles similar al somatén que garantizara la defensa de la ciudad. Tras su intervención en la represión del paro general de febrero de 1902, el prestigio de la institución creció lo suficiente como para que, tras una espectacular concentración de 18 000 afiliados en Montserrat el 11 de abril de 1904, un decreto del 19 de septiembre de 1905 concediera a los somatenistas el rango de agentes de la autoridad.

La Semana Trágica de julio de 1909, en cuyo transcurso la actuación del somatén de las localidades de la periferia de Barcelona distó mucho de ser brillante, fue el primer toque de atención para los sectores burgueses, hasta entonces fiados en la protección recibida de las fuerzas policiales y el Ejército. La huelga general de agosto de 1917 fue el segundo aldabonazo a su seguridad. Aunque el comité nacional de huelga, travestido en “comité revolucionario” por la prensa derechista, fue detenido el día 14 en Madrid, el paro duró hasta el sábado 18, y se saldó, según el gobierno, con un total de 80 muertos, 150 heridos y unos 2 000 detenidos que pasaron a la jurisdicción militar.<sup>7</sup> El movimiento de agosto de 1917 fue la primera huelga general de alcance auténticamente nacional de la historia de España, y sus secuelas movilizadoras en el campo (“trienio bolchevique” andaluz de 1918-1920) y la ciudad (huelgas de Barcelona durante la primavera de 1919) atizaron el miedo de los sectores conservadores a una revolución obrera, reforzando su voluntad de protagonizar un despliegue preventivo arma en mano. En Barcelona se establecieron una “guardia cívica” y unos “servicios económicos auxiliares” para garantizar la distribución de agua,

luz, transportes, correo, etc., en caso de paro general. También se impulsó una Junta Central para la Defensa del Orden y se procedió a la reorganización del somatén catalán. El 22 de enero de 1919, el comandante general de la institución, Pedro Cavanna, creó y reglamentó provisionalmente el Somatén de Barcelona, orientando sus misiones “para la defensa individual y colectiva de las vidas y haciendas de sus habitantes, contra todo ataque al orden social, para hacer respetar las leyes y autoridades legalmente constituidas”.<sup>8</sup> La creciente ineficacia de la intervención exclusivamente militar para controlar las huelgas — en especial, el uso abusivo del estado de guerra y los ejemplos puntuales de indisciplina entre las tropas— indujo al ejército a patrocinar soluciones alternativas de defensa pública que pudieran volcar en su favor el pulso iniciado con el poder civil. De este modo, el capitán general de Cataluña, Joaquín Miláns del Bosch y Carrió, usó sus atribuciones en plena suspensión de garantías por la gran huelga de La Canadiense, impulsada en febrero-marzo de 1919 por el sindicato anarquista Confederación Nacional del Trabajo (CNT), para levantar la prohibición del despliegue somatenista en la capital catalana.<sup>9</sup>

Sometida a la tutela castrense, la tradicional institución de voluntariado armado rural mudó de objetivos, adaptándolos a los requerimientos de una conflictividad urbana especialmente intensa y multifacética. El somatén barcelonés contó pronto entre sus filas con unos 8 000 voluntarios, dirigidos por el industrial Eusebi Bertrán i Serra y por Josep Bertrán i Musitu (dirigente de la derecha lligaire, exministro y amigo personal del político conservador Antonio Maura), que actuó como cabo del distrito de Barcelona.<sup>10</sup> El somatén se implicó inmediatamente por medio de su Oficina de Relaciones Sociales en pesquisas de tipo documental, colaborando con la Oficina de Información de la Capitanía General de la 4ª Región en la gestión de un fondo archivístico para el control de los sindicalistas de la CNT: el famoso “fichero Lasarte”, creado oficiosamente en la primavera de 1919 por los empresarios somatenistas de Barcelona y su radio.<sup>11</sup>

A inicios de marzo de 1919, una reunión de presidentes de juntas militares aprobó un plan para crear una “organización supletoria del Ejército” compuesta por elementos “de orden” bajo el asesoramiento de oficiales de las fuerzas armadas, que contó con el aval del ministro de la Guerra, el presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y el capitán general de Cataluña. El 25 de marzo el somatén barcelonés salió a la calle por primera vez en misiones de control durante la huelga general declarada en Barcelona como protesta por el mantenimiento en la cárcel de obreros implicados en el anterior conflicto de La Canadiense. Sus asociados patrullaron por las calles ataviados con un brazalete

rojo y armados con vetustos fusiles Remington que habían sido facilitados por el gobernador militar Severiano Martínez Anido, con la bendición del capitán general. En esa ocasión, los somatenistas colaboraron activamente con las tropas y la policía en la vigilancia de las calles más céntricas, efectuando registros domiciliarios, confeccionando listas negras, obligando a abrir tiendas, abasteciendo de víveres a la población, ayudando a la normalización del transporte y deteniendo y agrediendo impune e indiscriminadamente a los sindicalistas e incluso a los súbditos alemanes, sospechosos de connivencia con los huelguistas.<sup>12</sup> Su presencia supuso un gran alivio para la labor represora del ejército, que se encontró con las manos libres para actuar expeditivamente en los barrios obreros de Sants, Poble Nou y Gràcia, donde declaró reos de rebelión militar a los viandantes que portaran armas sin ser somatenistas. El día 26 continuaron las actividades de “normalización” callejera, hasta el completo fracaso del paro planteado por la CNT. A partir de la vuelta al trabajo a mediados de abril, los somatenistas no abandonaron el servicio, sino que institucionalizaron su presencia en los pleitos laborales con la bendición de los dirigentes catalanistas.

El éxito indiscutible obtenido por la primera gran movilización “cívica” de la Barcelona de posguerra se tradujo inmediatamente en la euforia de los sectores conservadores, que se apresuraron a ratificar su confianza en el recién conquistado monopolio de la fuerza incrementando su adhesión al somatén. Aristócratas como el marqués de Camps, Josep Bertrán i Musitu (asesor del Banco Hispano-Colonial), Alfonso Sala Argemí (conde de Egara, miembro de la Unión Monárquica Nacional), el marqués de Marianao (ex alcalde de la ciudad, que sería jefe de somatenes de Barcelona durante el “reinado” de Martínez Anido), el barón de Güell, el conde de Godó o los marqueses de Foronda y Comillas fueron sus dirigentes y corrieron con buena parte de los gastos de lanzamiento. Los líderes de la Lliga tuvieron también un especial protagonismo en esta campaña proselitista. Al propio Cambó, por entonces ministro de Fomento en el “Gobierno Nacional” de Maura, le interesó recalcar que, “para que no hubiese duda alguna sobre cuál era nuestra actitud, yo cogí una mañana el fusil del somatén y me paseé por algunas calles de Barcelona”.<sup>13</sup> Pero a los llamamientos en “defensa de la sociedad” acudieron también empresarios, exmilitares, grandes y pequeños comerciantes, funcionarios y empleados, artesanos, tenderos, pequeños propietarios y rentistas, obreros anticenetistas o apolíticos y capataces de fábrica aliados con los patronos contra la creciente oleada de violencia laboral. Un conglomerado interclasista, aglutinado por los difusos valores de la “ciudadanía” y el anticomunismo.

El 31 de marzo, la agrupación Fomento del Trabajo Nacional, la Cámara Oficial de Industria y otras entidades patronales solicitaron al presidente del Consejo, conde de Romanones, la concesión del fuero militar al somatén, aunque el gobierno liberal, que se veía cada vez más acosado por las presiones militares que determinaron su caída pocos días después, prefirió diferir esta enojosa decisión. Tampoco Maura, encargado a continuación del poder, consintió en dar al somatén un carácter militar ni en generalizar su implantación en todo el país. Con ello, las atribuciones y subordinaciones de esta “guardia cívica” quedaron perfectamente deslindadas y a fines de 1919 el Ministerio de la Guerra dispuso que sólo pudiera ser considerado fuerza armada cuando se declarara el Estado de excepción y si el capitán general así lo sancionaba.

El somatén barcelonés no fue un instrumento de los militares contra la burguesía nacionalista, sino que surgió con el consentimiento de ambas fuerzas para combatir la ofensiva reivindicativa de la clase obrera. Y todo ello sin despertar un excesivo entusiasmo en el poder central, que tras haberse negado por una década a consentir la fundación de un organismo parapolicial independiente de la autoridad gubernativa, veía con preocupación cómo el Ejército asumía ahora la tutela de una institución armada que los sectores catalanistas “de orden” habían creado. Esta colusión entre la burguesía barcelonesa y la corporación militar, en el crispado ambiente de la Barcelona de fines de la década de 1910, acarreó frecuentes conflictos que acentuaron el desprestigio del poder civil. Si la Lliga agitó, en no pocas ocasiones, el espantajo de la anarquía callejera para demostrar el abandono en que el poder central tenía sumida a la ciudad, los altos mandos locales del Ejército tampoco tuvieron reparos en manipular a su antojo los objetivos sociales y políticos del somatén. De modo que éste pasó de ser una fuerza auxiliar antisindicalista diseñada para evitar la excesiva implicación militar en tareas represivas, a constituirse en una especie de “Reichswehr Negra”, una rama civil oficiosa del Ejército susceptible de ser presentada como baza de presión en los frecuentes pulsos entre la Capitanía General de la 4ª Región y el gobierno de Madrid.

Incluso reconociendo su subordinación al Ejército, se percibe con toda claridad que el apoyo ofrecido por la burguesía catalanista resultó decisivo en los primeros pasos de esta institución armada. Pero, por su misma vaguedad programática e indefinición ideológica, el somatén nunca pudo ser considerado como hechura exclusiva de la Lliga, sino que también englobó a alfonsinos de la Unión Monárquica Nacional, españoles radicales nucleados alrededor de la Liga Patriótica Española, obreros católicos, sindicalistas “libreños” e incluso

“ultras” neocatólicos y jaimistas. Según uno de sus dirigentes, Luis de Andrés Morera, para colaborar con el somatén “ni estorban las ideas políticas honradas, ni las ideas religiosas, ni los pensamientos varios son obstáculo para su actuación, ni las diferencias de clase son inconveniente alguno”, puesto que su fin era “la justa defensa de la sociedad, reconocida por el Estado, armando a sus individuos buenos”.<sup>14</sup>

Pronto los efectivos de esta organización de “buenos ciudadanos”, que alcanzó plena legalidad a inicios de 1920, ascendieron a 9 414 hombres armados en la ciudad y otros 3 504 en la campiña circundante.<sup>15</sup> El 18 de septiembre de 1919 el gobernador civil Julio Amado envió un telegrama al ministro de la Gobernación, Manuel Burgos y Mazo, donde le solicitaba poner a sus órdenes la Oficina de Investigación del Somatén de Barcelona, e incrementar sus rondas callejeras como complemento a las que realizaba la Guardia Civil.<sup>16</sup> Durante el cierre patronal de fines de ese año, el somatén se dedicó a provocar de nuevo a los trabajadores, rompiendo sus carnets sindicales.

A pesar de su dependencia de las autoridades militares, y secundariamente de las policiales y de la Guardia Civil, el somatén gozaba de una amplia libertad de actuación en caso de supuestas asonadas revolucionarias. Éstas debían ser contrarrestadas mediante la proclamación fulminante del estado de guerra, momento tras el cual la propia institución consideraba obligada su intervención prácticamente con todas las prerrogativas de un agente de la autoridad. En caso de alteración del orden, los somatenistas podían proceder a hacer detenciones, a la persecución de “delincuentes”, deportación de sospechosos, suspensión de periódicos y publicaciones, prohibición de formar grupos al aire libre y otras limitaciones de las garantías constitucionales consideradas en los estados de prevención, guerra, rebelión y sedición. Gracias a esta labor de vigilancia, la acción del Ejército podía centrarse en la eliminación de los focos subversivos.<sup>17</sup>

Tras unos comienzos en loor de multitudes, el reinado del pistolero sociolaboral a inicios de los años veinte privó al somatén del protagonismo deseado por sus mentores políticos. En la represión antisindical, más insidiosa y expeditiva, que alentaron el gobernador Severiano Martínez Anido y el jefe de policía Miguel Arlegui, no resultaba necesaria la presencia constante en la calle de las masas conservadoras. Con esta reducción progresiva de su carácter de “milicia burguesa” en alerta permanente, el somatén se convirtió en el refugio idóneo para todo tipo de matones y delincuentes a sueldo de la autoridad militar. Durante el mandato de Martínez Anido en el gobierno civil de Barcelona,

miembros del somatén colaboraron para impedir las cotizaciones a la CNT, detuvieron ilegalmente a destacados sindicalistas y colaboraron por acción, omisión o encubrimiento en diversos atentados pistoleros.

Tras la caída en desgracia de Martínez Anido y Arlegui en octubre de 1922, el pacto tácito de mutuo auxilio suscrito entre la autoridad castrense y el somatén se vino momentáneamente abajo. No tiene nada de extraño que, como otras organizaciones y otros sectores sociales de carácter antirrevolucionario, el somatén jugara la carta de Primo de Rivera en contra de un gobierno débil y de un sindicalismo que parecía recobrar su capacidad reivindicativa tras los duros años de semiclandestinidad.

## **LA “DEFENSA SOCIAL CONTRA LA REVOLUCIÓN” EN MADRID Y OTRAS CIUDADES**

Mientras la lucha social en Barcelona derivaba hacia la violencia generalizada, en el resto de España los sectores conservadores aún dudaban entre las medidas sociales reformistas y la defensa a ultranza de sus posiciones. La capital de España se había mantenido hasta 1917 en relativa calma en comparación con la siempre conflictiva ciudad condal. Durante la huelga general de agosto apenas se habían producido movilizaciones ciudadanas de carácter preventivo, pero a fines de año, con la llegada de las noticias procedentes de Rusia, una oleada de terror invadió a la burguesía madrileña, especialmente la devota católica. Aprensión que llegó a su punto álgido en el turbulento año de 1919, después de que la celebración de la jornada del Primero de Mayo tuviera lugar en medio de manifestaciones tumultuarias que la policía fue incapaz de controlar. La crisis de la posguerra produjo una creciente tensión sociolaboral, ejemplificada en el paso del conflicto de tipo antiguo y el motín de subsistencias (como los disturbios de febrero de 1919, con saqueo de tiendas y proclamación del estado de guerra) a la huelga organizada y multitudinaria en la industria y los servicios.

Los elementos clericales fueron, incluso antes que los patronos, los primeros que se alinearon en orden de combate. La idea de una organización armada civil semejante al somatén catalán ya se había planteado en Madrid durante los sucesos del verano de 1909, y madurado tras los disturbios de agosto de 1917. Fue de nuevo el omnipresente marqués de Comillas, tutor de los sindicatos católicos y reorganizador del somatén en Barcelona, quien dispuso su

implantación en Madrid. Apoyado por la jerarquía eclesiástica y como factótum de la Junta Central de Acción Católica, organizó desde esta entidad la “Defensa Ciudadana de la Villa y Corte de Madrid”. Según todos los testimonios, la iniciativa de Comillas tuvo una respuesta aceptable: los aspirantes, en buena parte jóvenes de Acción Católica, militares y guardias civiles retirados, “acudían en grande abundancia”, y se mostraban orgullosos de poder actuar como “policías honorarios” bajo la supervisión y el apoyo del gobierno.<sup>18</sup> Al igual que los miembros de diversas cofradías religiosas y de organizaciones profesionales y empresariales, jóvenes afiliados a partidos ultraconservadores como el jaimismo y el maurismo optaron por echarse de nuevo a la calle en defensa del “orden social”, pasando a militar en las diversas formaciones “cívicas” y paramilitares que se fueron constituyendo en la capital.

La Defensa Ciudadana se inscribió como asociación en los registros de la Dirección General de Seguridad en otoño de 1919.<sup>19</sup> A imagen del somatén barcelonés, esta primera “milicia burguesa” madrileña se dotó de un reglamento y se organizó en rondas volantes y en grupos de 20 o 30 hombres dirigidos por jefes, subjefes y asesores técnicos. La capital quedó dividida en distritos, secciones, zonas o barrios, y éstos en calles, donde se señalaron los puntos (conventos, iglesias, edificios públicos, etc.) a defender por cada unidad. Pero todo este despliegue se realizó sin el apoyo explícito del gobierno. Las armas de fuego, el material de oficina y la impresión del periódico El Somatén corrieron a cuenta del marqués de Comillas, quien fue asesorado en asuntos de organización y disciplina por el general Gallán.

En paralelo a la iniciativa de Comillas y de la Acción Católica, en noviembre de 1919 la Junta Directiva de la Confederación Patronal visitó al ministro de la Gobernación, Manuel Burgos y Mazo, para comunicarle que, en vista de las amenazas recibidas por algunos de sus socios, había resuelto visitar al general Antonio Tovar Marcoleta, ministro de la Guerra, para que autorizara la creación del somatén armado en Madrid.<sup>20</sup> Poco después, una R.O. del Ministerio de la Guerra del 21 de enero de 1920 autorizaba a los capitanes generales para dar vía legal al reglamento y la organización de los Somatenes en las poblaciones que así lo solicitaran, bajo su mando directo y siempre y cuando tuvieran carácter puramente local, no constituyeran unidades similares a las militares, no realizaran ejercicios de tiro ni efectuaran simulacros de combate. Las bases estipulaban una edad mínima de 25 años para los afiliados, los cuales no podían utilizar armamento de guerra, aunque serían considerados como fuerza armada siempre que así lo anunciara el capitán general en el bando declaratorio del

estado de guerra.<sup>21</sup> Con arreglo a esta nueva normativa, la Junta Superior de la Defensa Ciudadana acordó el 26 de abril cambiar su denominación y constituirse oficialmente como Somatén Local de Madrid el 8 de junio, modificando su reglamento y sometiéndolo a la aprobación del capitán general Francisco Aguilera.<sup>22</sup> Como presidente de su Junta Superior fue elegido el general de brigada Luis Elío y Magallón, vizconde de Val de Erro (senador maurista, uno de los dirigentes de la Asociación de Agricultores de España, presidente de la Junta Nacional de Padres de Familia e impulsor de una campaña contra el laicismo en la enseñanza en 1913), y como vicepresidentes 1º y 2º, respectivamente, el marqués de Comillas y el duque de Bailén (este último, presidente de la Asociación General de Ganaderos y socio cualificado de Acción Nobiliaria), primeros nombres de la larga lista de aristócratas y de figuras de la política y los negocios que coparon los cargos directivos de la asociación.<sup>23</sup>

Para una mayor eficacia en la acción preventiva a desarrollar, la capital quedó dividida en 16 distritos con sus respectivos perímetros y relaciones de calles y plazas, que quedaron bajo el control de los correspondientes jefes y subjefes de distrito, zona, grupo y calle. Se preveía la existencia de secciones armadas para la defensa y la custodia de edificios públicos, religiosos o privados, columnas volantes y unidades adscritas a los diferentes servicios públicos. A inicios de 1921 se estableció una cuota mínima de una peseta mensual por cada afiliado.

El ideario que impregnó al Somatén Local de Madrid no por difuso resultaba menos reaccionario, y recuerda en parte las posturas mantenidas por el grupo de la Defensa de la Sociedad medio siglo antes.<sup>24</sup> Su presidente, el vizconde de Val de Erro, cifraba la clave de la “reconstitución nacional” en lo que denominaba “higiene social”, que era concebida como “un ambiente moral de los ciudadanos que apaga, extingue y anula todo egoísmo personal, vivificando, engendrando y alimentando el egoísmo colectivo” que suponía la paz y la armonía social. Esta “higiene” debía ser inculcada desde la infancia por las instituciones de gobierno y por la Iglesia.<sup>25</sup> Otros notables afiliados, como el duque de Medina de las Torres, eran aún más radicales al dividir la sociedad contemporánea en crisis de autoridad por falta de orden religioso y por la intromisión de la “libertad malsana”, en tres sectores: “los rebeldes, los amantes del orden y los indecisos”. El duque afirmaba que la reacomodación social tras la guerra europea “se va haciendo entre enconados rozamientos al grito de viva la huelga y odio a la sociedad, que no otra cosa significa el continuo desplante de que la autoridad es víctima”. El remedio contra esta situación permanente de “huelga, coacción y crimen” era el cumplimiento estricto de las leyes, el trabajo, la prestación por los

ciudadanos de servicios civiles y técnico-sociales, la represión de las “propagandas antisociales” y la “educación moral”:

Si, pues, como ciudadanos nos incumbe la obligación del servicio militar para defender a la Patria de los enemigos exteriores, como miembros de la sociedad civil, condición sine qua non para el bienestar individual y colectivo, a todos nos ha de obligar, con no menos imperio, el servicio civil para mantener la paz, la prosperidad y la vida, y en suma, todos los fundamentos del orden social y el equilibrio económico contra los enemigos internos.

El objetivo último era lograr una organización más eficaz que la de las formaciones obreras para contrarrestar los efectos de una posible huelga general mediante esquirolas avalados por un marchamo de “ciudadanía”.<sup>26</sup>

A pesar de los continuos ataques a que se vio sometida por parte de la prensa obrera, la disminución de la lucha callejera entre 1921 y septiembre de 1923 hizo que la Defensa Ciudadana-Somatén Local apenas se viera obligada a actuar en la calle, y sólo en contadas oportunidades hizo acto de presencia en eventos recreativos y oficiales, como el sepelio de Eduardo Dato. Con todo, en los días del golpe del general Primo de Rivera la entidad sobrepasaba la nada desdeñable cifra de 6 200 afiliados.

Aunque hubo de sufrir un largo y oscuro proceso de gestación que se remonta a la huelga general de 1917, la “guardia cívica” más activa de la capital fue la Unión o Acción Ciudadana.<sup>27</sup> Al parecer, los “cívicos” comenzaron a hacer acto de presencia en Madrid a fines de abril e inicios de mayo de 1919, poniéndose al servicio del ministro de Fomento, Ángel Ossorio y Gallardo, con motivo de la huelga patrocinada por las juntas de Telégrafos y Teléfonos. La Unión Ciudadana, que legalizó su existencia el 12 de octubre de ese año, aunque sin tomar carácter de institución armada, hizo público su primer manifiesto el 7 de noviembre, tras una amplia campaña de propaganda dirigida desde El Debate, La Acción y otros periódicos conservadores. Desde el primer momento, la nueva entidad recalca su carácter de reagrupamiento contrarrevolucionario frente a la amenaza izquierdista, asegurando que sólo intervendría en las huelgas que afectasen a los servicios públicos.<sup>28</sup> Al igual que el Somatén Local, se nutría de

los jóvenes menores de veinte años procedentes de las clases acomodadas, medias y medias altas que militaban en el movimiento maurista, en los movimientos católico-sociales (centurias de activistas de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas: ACN de P) o en simples cofradías religiosas, como la Asociación San Luis Gonzaga, cuyos miembros eran conocidos popularmente como los “Luisés”.

Además de estos “zánganos” o “niños bien engalanados con gabán de trabilla y botines de moda”, como los apostrofaba El Socialista,<sup>29</sup> actuaban en este grupo de defensa “cívica” pequeños y medianos patronos y comerciantes, funcionarios, empleados y profesionales liberales. Es decir, el universo de clase media identificable con la conocida “ciudadanía” maurista, más similar al del somatén barcelonés que al aristocrático somatén madrileño, y tan cercano a la composición y convicciones (antiparlamentarismo, autoritarismo, antimarxismo) de los entonces nacientes movimientos fascistas. La propia organización negaba su carácter de clase y se decía llamada a garantizar la paz pública perturbada por el sindicalismo. En realidad, la Unión Ciudadana defendió sin recato los intereses de la patronal y de los grupos sociales hegemónicos que, además, controlaban la institución.

La primera gran movilización de la Unión Ciudadana tuvo lugar a fines de 1919, con motivo de las huelgas de vendedores de periódicos y conductores de tranvías. La respuesta intransigente de la patronal de Artes Gráficas, capitaneada por el propietario del diario ABC, Torcuato Luca de Tena, encontró el apoyo instantáneo de la Unión Ciudadana, el Centro de Defensa Social, la congregación jesuítica de los Luisés, la ACN de P, grupos de universitarios y obreros católicos, jóvenes mauristas, etc., cuya protección a los vendedores callejeros o su participación directa en el reparto permitió que el 12 de diciembre salieran a la calle ABC y La Acción. El paro de tranviarios patrocinado por la Unión General de Trabajadores (UGT) se desarrolló en circunstancias similares: unos 500 miembros de la Unión Ciudadana protegieron la circulación de los coches, intimidando y entrando en colisión frecuente con los huelguistas. El éxito de esta primera movilización “cívica” en Madrid podía ser la piedra de toque de lo que se pretendía fuera el “apiñamiento abnegado y defensivo” de las fuerzas contrarrevolucionarias (conservadores, tradicionalistas y regionalistas), unión táctica que Maura volvía a preconizar con insistencia por esa época.<sup>30</sup>

Al igual que el somatén, la Unión Ciudadana se ocupó de cubrir los servicios públicos esenciales y de garantizar la defensa de la libertad de trabajo, actuando

como rompehuelgas. No podía ser de otra forma, porque, en realidad, los integrantes de la Unión Ciudadana nunca fueron capaces, por su limitada capacidad coactiva y su escaso talante combativo, de desarrollar acciones multitudinarias al estilo de las squadre d'azione fascistas. Resulta sumamente difícil evaluar la militancia de esta “guardia cívica” madrileña, aunque distaba bastante de los más de 14 000 afiliados que les asignaba La Acción, e incluso de los 8 000 calculados por el diario católico El Debate.<sup>31</sup> Su presencia en las calles se redujo a unas pocas decenas de individuos que patrullaban en pequeños grupos, o bien realizaban acciones en solitario si las circunstancias les resultaban favorables.<sup>32</sup> Su estructura básica se componía de organizaciones “técnico-profesionales” con un cometido definido en caso de huelga. Así, se crearon equipos de electricistas, panaderos y conductores de tranvías, camiones y ferrocarril dirigidos frecuentemente por ingenieros civiles. Cada grupo “técnico-profesional” elegía una Junta Técnica, cuyos componentes pasarían a integrarse en una Junta Central o Directorio, dirigido por Salvador Orduña.<sup>33</sup> Cuando decidían intervenir directamente en algún conflicto, lo hacían en patrullas de ocho o diez, pero si el tumulto se transformaba en un grave problema de orden público, estaban dispuestos a encuadrarse en centurias. Sin embargo, no queda constancia de este tipo de iniciativas, ya que, en algaradas de mayor trascendencia la autoridad gubernativa recurría a las fuerzas del orden o el ejército. Por ello, la Unión Ciudadana mantuvo generalmente su quehacer en los estrictos límites de la lucha laboral o de las alteraciones sociales leves.

Aparte del incuestionable apoyo recibido de las altas jerarquías militares, como Fernando Primo de Rivera o Joaquín Miláns del Bosch, los militantes de la Unión Ciudadana recibían habitualmente adiestramiento con armas de fuego de parte de oficiales del ejército en activo o en la reserva, que cumplían con este servicio a título exclusivamente personal. Como sucedería con el somatén primorriverista, su interés por la educación pre-militar fue muy notable, y postularon la obligatoriedad de la pertenencia al Tiro Nacional, una asociación de acrisolada raigambre patriótica desde varias décadas atrás.<sup>34</sup> A diferencia del estrecho contacto que, por sus mismos estatutos, el somatén local mantenía con las autoridades militares, las relaciones de la Unión Ciudadana se dirigían preferentemente a las autoridades gubernativas. Ello le permitió una mayor libertad de movimientos, no sólo en cuanto a su propia organización y financiación, sino también en sus actuaciones en la calle, que distaron de ser exclusivamente “técnicas” y derivaron pronto hacia misiones parapoliciales.

El ideario de la Unión Ciudadana adoptó principios extraídos del maurismo y del

catolicismo social,<sup>35</sup> especialmente los deseos de armonización entre capital y trabajo. Colaboración que debía coexistir con la defensa a ultranza de los principios del liberalismo económico, aunque considerase al Estado el único intermediario legal en las relaciones obrero-patrono. A ello se añadían ciertas actitudes políticas y vitales a mitad de camino entre el maurismo radical y el squadristo fascista: desprecio hacia la “vieja política” parlamentaria, exaltación de los valores de la juventud (deporte, juegos, aire libre) y un culto de la fuerza y la milicia que, con todo, no llegó a la desmesura de los movimientos que surgirían en la España de los años treinta. Bien es cierto que estos usos “modernos” —primer síntoma de la radical mudanza de costumbres protagonizada por la juventud burguesa y de clase media a fines de la década— quedaban matizados por una visión orgánica de la sociedad valorada desde antiguo por muchos pensadores reaccionarios.<sup>36</sup>

La Unión Ciudadana se reclamaba depositaria de los valores e intereses del “cuerpo social”, representado perfectamente en esta iniciativa supuestamente apolítica y desideologizada de protección de la propiedad, y no aludió en ninguna circunstancia a los intereses de clase subyacentes al fenómeno de las “uniones cívicas”. Todo lo más, se presentaba como una organización diferenciada de las obreras por su ideal patriótico, y fundamentada en sus orígenes sobre el resurgimiento activista de la clase media, “que compone el núcleo principal de la nación, a cuya clase pertenecen los hombres que con su inteligencia encauzan e intensifican la prosperidad de la vida de ella, siendo, además, la que contribuye en mayor escala al sostenimiento de las gabelas del Estado y Municipios”. Esta clase, interpuesta en las luchas constantes entre el proletariado y los sectores pudientes, había creado una milicia propia para garantizar su autoconservación en el seno de una colectividad regida por el orden y el derecho, principios periclitados por “la pusilanimidad colectiva y gubernamental”.<sup>37</sup> Ante la exacerbación de la lucha laboral y la intención de “los conductores de las muchedumbres obreras” de imponer su tiranía apoderándose de la calle e imponiéndose a los poderes públicos, la sociedad en su conjunto

ha reaccionado virilmente contra el imperio del terror. Los ciudadanos se constituyen espontáneamente en defensores del orden y de la libertad. En todas partes surgen organizaciones beneméritas que oponen un valladar al despotismo socialista y sindicalista, arriesgando en el patriótico menester su propia seguridad personal.<sup>38</sup>

El combate se perfilaba, pues, entre una clase insolidaria (el proletariado manipulado por líderes sin escrúpulos) y el resto de la sociedad, o al menos su fracción más consciente.

Representante de unos intereses supuestamente ajenos a una clase concreta, la Unión Ciudadana enmascaró su verdadera identidad reaccionaria con el llamamiento a la “libertad de trabajo” y al orden social deseable, mediante el mantenimiento de los servicios esenciales en caso de huelgas que atentasen contra ese pacto sagrado de convivencia armónica. La huelga se presentó como una deserción social imperdonable. En definitiva, la Unión Ciudadana desplegó un ideario reactivo y débilmente movilizador que buscaba la interlocución con los sectores más conservadores de la sociedad española. Nada que ver con la retórica, los mitos, el ritual y los espacios sociales de nacionalización de las masas que comenzaban a proliferar en otras latitudes de la escena europea de posguerra.

Madrid no se libró tampoco de los cierres patronales y de las agresiones a directores y contratistas, tan habituales en los núcleos industriales de la periferia. De enero a febrero de 1920 se declaró un lock-out patronal en el ramo de la Construcción que contaba con primacía de la CNT. El Sindicato Único cenetista convocó un paro de protesta que afectó a 10 000 trabajadores. En marzo, con motivo de una huelga ferroviaria, la Unión Ciudadana organizó grupos desarmados para asegurar las comunicaciones de las estaciones cercanas a Madrid. Esa primavera se produjo un nuevo conflicto en el ramo de la panadería. El 3 de abril, tras un nuevo cierre, la fábrica de galletas La Fortuna despidió a buena parte de su plantilla y comenzó a trabajar con empleadas procedentes de los sindicatos católicos. En los días siguientes —sobre todo el día 6—, piquetes de parados impidieron el paso de las mujeres al trabajo, de forma que la dirección acordó recurrir a la Unión Ciudadana. Las patrullas “cívicas” mantuvieron diversos altercados con grupos de huelguistas, que en ocasiones degeneraron en refriegas a tiros en los alrededores de la calle de Bailén y la Plaza de España. El conflicto aumentó en violencia por culpa de estos cometidos de “protección”, en uno de los cuales murió el día 9 de abril el ingeniero de minas Ramón Pérez Muñoz, a resultas de un confuso incidente con militantes de la UGT en la cuesta de San Vicente.<sup>39</sup> El suceso abrió en el sindicato socialista una viva polémica sobre la utilización por la patronal y por los obreros madrileños de los usos pistoleros importados desde Barcelona. Mientras El Socialista señalaba

la conveniencia de disolver la Unión Ciudadana por su talante más provocativo que conciliatorio,<sup>40</sup> la opinión conservadora cerró filas alrededor del recién proclamado “mártir de la ciudadanía”. El 15 de abril, la Confederación Patronal Española divulgó un nuevo manifiesto en el que se exigían medidas preventivas y represivas excepcionales para acabar con la “ráfaga de locura roja”.<sup>41</sup>

Los sucesos de La Fortuna dieron a la Unión Ciudadana una notoriedad y un prestigio muy por encima de sus méritos reales. Se produjo una oleada de nuevas inscripciones, pero las protestas de las organizaciones obreras y republicanas, hipersensibilizadas por los abusos del somatén en Barcelona, introdujeron un componente polémico que tomó cuerpo en el agitado debate celebrado en el Congreso el 13 de abril.<sup>42</sup> Aunque la Unión Ciudadana y el ejército volvieron a salir a la calle con ocasión de un nuevo conflicto laboral en noviembre de 1920, la reducción de la conflictividad social en la capital durante 1921 condujo al declive de las “guardias cívicas” locales. Desde entonces, la Unión Ciudadana se limitó a organizar festejos patrióticos en favor de la campaña de Marruecos, a hacer acto de presencia en solemnidades oficiales, como el entierro de Dato el 9 de marzo, e intervenir coyunturalmente como grupo de presión política. En septiembre de 1922, con la expectativa del inminente ascenso al poder del fascismo en Italia, la Unión Ciudadana sugirió de nuevo la formación de un bloque nacional contrarrevolucionario.<sup>43</sup> Pocos días después de la Marcha sobre Roma, Salvador Orduña se apresuró a felicitar a Mussolini y a nombrarle socio de honor de la Unión Ciudadana, no sin recordarle paternalmente que “la actuación de los ‘fascistas’ es análoga a la llevada a cabo por esta entidad, creada por mí en el año 1917”.<sup>44</sup> La anécdota es sintomática de la trayectoria política que, en los años siguientes, se dispusieron a seguir ciertos agrupamientos ultraconservadores de clase media urbana: extasiados por el potencial contrarrevolucionario del fascismo, y dispuestos a considerar su talante anticomunista como su característica o función principal, obviaron la presencia de rasgos menos asumibles para su mentalidad conservadora, como la crítica del liberalismo, el rígido encuadramiento partidista o la esencia de régimen de excepción permanente de carácter totalitario. Sin embargo, la Unión Ciudadana no tuvo ocasión de presenciar este tortuoso tránsito que iba del fascismo-movimiento al fascismo-régimen. Su última actuación se produjo a inicios de noviembre de 1922, durante la huelga general de los funcionarios de Correos. Poco después desapareció ante la indiferencia de las clases que posibilitaron su nacimiento.

Los intentos de organizar grupos de ciudadanos armados se produjeron por otros

lugares de la geografía española más allá de las dos zonas reseñadas, consolidándose incluso en algunos casos, como en Valencia, Alicante, Palma de Mallorca, Málaga, Granada, Santander, San Sebastián y, sobre todo, en la conflictiva Zaragoza, donde surgieron dos organizaciones: el somatén y la Unión Ciudadana.<sup>45</sup> El denominador común de todas esas experiencias fue su coincidencia en el tiempo (hacia 1919) y obedecer a circunstancias y contextos análogos: la agudización de la conflictividad, el refuerzo de la organización obrera, la escasez de policía o guardia civil, los atentados esporádicos y la reacción de las capas sociales afectadas por todos estos fenómenos.

## **OFICIALIZACIÓN Y OCASO DE LA MOVILIZACIÓN “CÍVICA” DURANTE LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA (1923-1930)**

Un Directorio Militar asumió el poder en septiembre de 1923, en pleno declive de la movilización obrera iniciada en 1916. A pesar de la consolidación del orden conservador por medio de la dictadura que preconizaron en su día Juan Donoso Cortés, Juan Bravo Murillo, Antonio Cánovas del Castillo o Juan Vázquez de Mella, el general Miguel Primo de Rivera barajó desde el primer momento la posibilidad de que la seguridad interna pudiese quedar parcialmente garantizada por una milicia nacional inspirada en la organización somatenista catalana, lo que permitiría liberar de parte de las desagradables e impopulares funciones represivas a un Ejército que en ese momento ejercía funciones de gestión en todas las instancias administrativas. Por Real Decreto del 17 de septiembre de 1923 se instituyó el Somatén Nacional a imagen y semejanza del tradicional de Cataluña y de los reorganizados de Barcelona en 1919 y otras ciudades por la R.O. del 21 de enero de 1920.<sup>46</sup> El somatén se organizaría en regiones militares bajo la dirección de comandantes generales que habrían de ser generales con mando de brigada de Infantería, y su adiestramiento quedaría provisionalmente en manos de jefes y oficiales que actuarían como “auxiliares”. A pesar de los nebulosos contornos del proyecto, puede considerarse que el “nuevo” somatén primorriverista coadyuvaría al reforzamiento de los instrumentos de orden público, pero también se concibió como un primer intento movilizador de la Dictadura dirigido a su propia salvaguardia.

La entidad debía estar constituida por “hombres honrados y de buena voluntad,

que en días de peligro para la Patria han de formar un sólido baluarte para la conservación del orden público, y así hemos de mirar con simpatías su rápido desarrollo”.<sup>47</sup> Con un valor, el de la honradez, que, como señaló en su momento José María Jover, es “una norma de moral negativa que sugiere adaptación consuetudinaria a las normas del buen vivir, peculiares al propio grupo social”, y que frecuentemente los grupos poseedores identificaron con la defensa del orden público, de la propiedad y de la moral como garantía de su propia hegemonía, la preservación de las “buenas costumbres” burguesas debía ser el resultado de un arduo trabajo de educación cívica, pero también el fruto de procedimientos ejecutivos más severos, como la sanción normativa e incluso la coerción física.

Corazón, fe, constancia, buena voluntad, honradez, paz, justicia, orden frente al peligro “disolvente y revolucionario”... tales eran algunos de los valores personales recurrentes en la fraseología somatenista. En esa amalgama de principios también figuraban otros con pretensión de doctrina colectiva, como el catolicismo tradicional, el intervencionismo militarista, el corporativismo, un cierto regeneracionismo económico y social de matiz conservador, una concepción orgánica de la sociedad de rancia tradición reaccionaria reactualizada con los conceptos de “solidaridad orgánica” de la sociología positiva eminentemente burguesa, y un autoritarismo primario basado en una defensa sin fisuras de los principios habitualmente anejos al concepto de “orden social”, como el orden público, la ley, la autoridad, el civismo, el nacionalismo, el monarquismo, el anticomunismo, la defensa de la familia y de la propiedad privada, etcétera.

La militancia del Somatén Nacional pasó de 140 000 hombres aproximadamente en abril de 1924 a unos 175 000 en septiembre de ese año, y aumentó a unos 182 000 al año siguiente. En 1927 la cifra volvió a rondar los 175 000, fue aumentando hasta 217 584 en agosto de 1928, y decayó a partir de esa fecha.<sup>48</sup>

Con la prolongación del régimen dictatorial por medio de un Directorio Civil desde fines de 1925 y los planes de reforma constitucional, se truncaron las esperanzas de retorno a la legalidad anterior a 1923 de amplios sectores sociales liberal-conservadores, que comenzaron a desmarcarse del régimen, afectando notablemente el desarrollo del somatén, que comenzó un lento declive, debido a su nunca desmentido espíritu clasista y ultraconservador, con la agravante del oficialismo al haber sido creado y organizado por la autoridad militar. Desaparecida la psicosis de conflictividad prerrevolucionaria que había afectado a Europa en los años anteriores, la opinión pública comenzó a ver con creciente

prevención a esta organización armada que iba acumulando excesivas atribuciones, y cuyas extralimitaciones contribuyeron a la polémica suscitada por la prolongación e intensificación de la intervención militarista en la vida pública. Además, el deterioro de la posición política del Directorio obligó a éste a propiciar una radicalización de sus organizaciones de apoyo: tras las intentonas insurreccionales de Valencia y Ciudad Real en enero de 1929 y ante la creciente agitación estudiantil, el somatén y el partido oficialista Unión Patriótica (UP) comenzaron a ser utilizados en acciones represivas de vigilancia y seguridad. Esto acentuó su impopularidad, no sólo por su absoluta identificación y colaboración con la declinante dictadura, sino por su fugaz salto cualitativo hacia actuaciones de control parapolicial con derivas semitotalitarias. La institución cívica armada no hizo absolutamente nada para impedir la caída de la dictadura en enero de 1930 y de la monarquía en abril de 1931, y resultó fulminantemente disuelta en todo el territorio nacional a excepción de la Cataluña rural por decreto del Gobierno Provisional de la República, el 15 de abril de ese último año.

El Somatén Nacional se puede interpretar como el último eslabón de esa actitud de defensa activa del orden social que fue respaldada desde mediados del siglo XIX por teóricos políticos ubicados entre el moderantismo y el pensamiento tradicional como Balmes, Donoso Cortés o Bravo Murillo. Sus justificaciones más o menos explícitas del estado de excepción como recurso legal válido para la estabilización política de un régimen apoyado por los sectores sociales más conservadores coincidieron con la etapa de consolidación del Estado liberal y la puesta en marcha de sus principales instrumentos de control, vinculados con la implantación de una administración centralizada. Esta organización fue la primera de carácter civil y armado que actuó de forma efectiva en defensa de un régimen dictatorial. Ella la sitúa en el umbral de la radicalización de la derecha, abriendo un interesante debate sobre la existencia o no de una “tentación totalitaria” o fascista durante la dictadura. De las uniones cívicas la separaba su estricto control por el Estado y su carácter de instrumento movilizador de apoyo a un régimen de excepción, pero, como ellas, siguió manteniendo una ideología fundamentalmente conservadora del orden social. Las uniones cívicas y el somatén fueron exponentes fracasados —unas por falta de masas y el otro por no resultar éstas lo suficientemente dinámicas— de una radicalización de la derecha ante las mismas circunstancias que posibilitaron el ascenso del fascismo en Italia.

## **EPÍLOGO: LA RESURRECCIÓN OCASIONAL DE LAS**

## **ACTITUDES DE “DEFENSA ARMADA DE LA SOCIEDAD” EN LA REPÚBLICA Y EL FRANQUISMO**

Las “uniones cívicas” fueron un movimiento autónomo de defensa patronal de escasa entidad real, pero de enorme interés para determinar los antecedentes remotos del fascismo en España mediante la movilización antirrevolucionaria de las capas medias de la población urbana. Si el Somatén Nacional primorriverista parece heredero de la Defensa Ciudadana impulsada por el marqués de Comillas, no parece tan clara la paternidad de la Unión Ciudadana sobre el upetismo, esto es, el partido Unión Patriótica (UP), que fue patrocinado desde Acción Católica y el poder establecido como organización de masas enfocada a apoyar una experiencia dictatorial con claros rasgos conservadores. En cambio, la Unión Ciudadana fue hechura de un conglomerado social muy heterogéneo, pero predominantemente mesocrático, y fue creada espontáneamente para defender intereses exclusivamente sociolaborales, en tanto que su intencionalidad política quedaba situada en un segundo plano. Mientras que la UP alcanzó su mayor difusión e influencia en el ámbito rural controlado por el caciquismo tradicional, la Unión Ciudadana lo logró en áreas urbanas, especialmente en Madrid, donde su movilización fue interpretada desde el sesgo maurista como una de las primeras manifestaciones de autonomía social y moral de la “masa neutra”. Por último, el partido de Primo de Rivera tenía una cobertura de carácter nacional y su cometido era el apoyo pasivo a una experiencia autoritaria que por sí misma garantizaba el orden social. Actitud bien diferente de la incertidumbre defensiva con que la Unión Ciudadana encaró su quehacer movilizador. Pero la composición social era similar en ambas entidades (aunque la media de edad resultaba claramente inferior en los “ciudadanos”), al igual que sus rasgos ideológicos, siempre difusos: patriotismo, ultranacionalismo, religiosidad, ciudadanía, monarquismo, familia, propiedad, autoridad, visión armónica de la sociedad y, sobre todo, su carácter antirrevolucionario. En suma, la Unión Ciudadana estaba más cerca de una milicia de defensa burguesa como el Somatén Nacional que de un partido único como pretendió ser la UP. Los “ciudadanos en armas” de la España de entreguerras nunca dieron el salto hacia posturas totalitarias, pero con sus manifestaciones de extremismo conservador aceleraron la radicalización política de cierta derecha, y fomentaron una polarización ideológica que se mostró en toda su crudeza durante los años treinta.

Los decretos derogatorios de abril de 1931 no sellaron la muerte del somatén. La institución “resucitó” en varias ocasiones en relación con medidas locales de potenciación del orden público, o pervivió clandestinamente en sintonía con la constante voluntad subversiva de la extrema derecha antirrepublicana o como garantía de continuidad de los restos de poder caciquil. Tras el estallido de la Guerra Civil, el proceso contrarrevolucionario que se produjo en la zona controlada por los rebeldes pareció favorecer en un principio la lógica interna y las expectativas estratégicas de las milicias de partido. Pero en vez de alcanzar un decisivo protagonismo en la resolución del conflicto, las formaciones paramilitares de la derecha quedaron sometidas a la disciplina y la organización castrenses, perdiendo de ese modo gran parte de su mordiente subversivo. Mientras que sus hijos se enrolaban en las Banderas de Falange y en los Tercios del Requeté, los antiguos afiliados a las “uniones cívicas” y al somatén de los años veinte, ya hombres maduros, engrosaban en algunas ciudades de la retaguardia las filas de nuevos grupos armados de propietarios y milicias de “segunda línea”, inspirados en su talante y misiones por la versión más moderada de la milicia decimonónica, por la institución rural catalana o por las “guardias cívicas” de la década anterior.<sup>49</sup>

Una vez terminada la contienda, la expansión de la organización armada del partido único Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (FET y de las JONS) quedó definitivamente abortada con la derrota del Eje. En este retraimiento del proceso de fascistización del nuevo Estado se enmarca el Decreto del Ministerio de la Gobernación del 9 de octubre de 1945, por el que se reanudaba la reforma iniciada en el somatén catalán el 21 de enero de 1935, y se ordenaba la extensión de la institución armada a todas las localidades españolas menores de 10 000 habitantes, bajo la dependencia de las autoridades provinciales y con un nuevo reglamento. Pasado el periodo crítico de la oposición guerrillera a la dictadura franquista (el somatén debía ser el “primer escalón” rural en la lucha contra el maquis), el régimen se sintió seguro con el exclusivo recurso a sus medios estatales de coerción, y decidió desestimar en la práctica todo tipo de colaboración civil. El somatén franquista vegetó por espacio de tres décadas hasta su definitiva disolución y desarme en 1978. El somatén actuó de nuevo como entidad armada al servicio de un régimen dictatorial, pero con las mismas limitaciones e ineficacia mostradas durante la primera dictadura, y sin avanzar en el proceso de radicalización violenta que fue proverbial en otros grupos de la derecha social, política y cultural en los turbulentos años veinte y treinta.

## SIGLAS Y REFERENCIAS

■

|                   |  |
|-------------------|--|
| ACN de P          | Asociación Católica Nacional de Propagandistas                                     |
| AGHD              | Archivo General e Histórico de Defensa (Madrid)                                    |
| AHN               | Archivo Histórico Nacional (Madrid)  |
| ASDMAE            | Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri                     |
| CEDA              | Confederación Española de Derechas Autónomas                                       |
| CNT               | Confederación Nacional del Trabajo   |
| FET y de las JONS | Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional y Socialista |
| GAL               | Grupos Antiterroristas de Liberación   |
| JAP               | Juventud de Acción Popular   |
| R.O.              | Real Orden   |
| UGT               | Unión General de Trabajadores  |
| UP                | Unión Patriótica   |

■

### *Libros y artículos*

ANDRÉS MORERA, Luis de

1927 La defensa social contra la revolución. El somatén y sus similares en el extranjero, Madrid, Imprenta Alpha.

BARATECH ALFAROO, Feliciano

1927 Los sindicatos libres de España. Su origen. Su actuación. Su ideario, Barcelona, Talleres Gráficos Cortel.

BAYLE, Constantino, S.J.

1928 El segundo marqués de Comillas. Don Claudio López Bru, Santander, Razón y Fe.

BURGOS Y MAZO, Manuel

1921 Para otras páginas históricas. El verano de 1919 en Gobernación, Cuenca, Imprenta E. Pinós.

CAMBÓ I BATLLE, Francesc

1981 Memòries (1876-1936), Barcelona, Alpha. [Edición castellana en Madrid, Alianza, 1987].

CASAS DE LA VEGA, Rafael

1977 Las milicias nacionales, 2 vols., Madrid, Editora Nacional.

CASTILLO, Juan José

1977 El sindicalismo amarillo en España. Aportación al estudio del catolicismo social español (1912-1923), Madrid, Edicusa.

CATERINA, Luis María

1995 La Liga Patriótica Argentina. Un grupo de presión frente a las convulsiones sociales de la década del 20, Buenos Aires, Corregidor.

CAVANNA, Pedro

1919 Instrucciones y reglamentación para el somatén de la ciudad de Barcelona, Barcelona.

DEVOTO, Fernando J.

2002 Nacionalismo, fascismo y tradicionalismo en la Argentina moderna. Una historia, Buenos Aires, Siglo XXI.

FOIX, Pere

1931 Los archivos del terrorismo blanco. El fichero Lasarte, Barcelona, Ariel.

FONTÁN PALOMO, José

1924 El somatenista español, Barcelona, Imprenta Moderna.

GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo

1991 “La defensa armada del ‘orden social’ durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)”, en José Luis GARCÍA DELGADO (ed.), Españaentredossiglos(1875-1931). Continuidad y cambio. VII Coloquio de Historia Contemporánea de España, Madrid, Siglo XXI.

1999 El máuser y el sufragio. Orden público, subversión y violencia política en la crisis de la Restauración (1917-1931), Madrid, CSIC.

2017 Anatomía de una crisis. 1917 y los españoles, Madrid, Alianza.

GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, y Fernando DEL REY REGUILLO

1995 La defensa armada contra la revolución. Una historia de las “guardias cívicas” en la España del siglo XX, Madrid, CSIC.

LEÓN-IGNACIO, José

1981 Los años del pistolero, Barcelona, Planeta.

LODYGENSKY, Georges

2009 Face au communisme (1905-1950). Quand Genève était le centre du mouvement anticommuniste international, Ginebra, Slatkine Reprints.

MAIER, Charles S.

1989 La refundación de la Europa burguesa. Estabilización en Francia, Alemania e Italia en la década posterior a la I Guerra Mundial, Madrid, Centro de Publicaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

MARTÍ OLIVARES, Luis, y Luis DE ANDRÉS MORERA

1921 Somatén de Barcelona. Conferencia de Lucerna, Barcelona, Imprenta Elseviriana Borrás Mestres y Cía.

MARTÍNEZ SEGARRA, Rosa María

1984 “El Somatén Nacional en la dictadura de Primo de Rivera”, tesis doctoral, Madrid, Universidad Complutense.

MOSSE, George L.

1975 La nazionalizzazione delle masse. Simbolismo politico e movimenti di massa in Germania (1815-1933), Bolonia, Il Mulino.

NADAL, Joaquim María

1965 Memòries. Vuitanta anys de sinceritats i de silencis, Barcelona, Aedos.

PABÓN Y SUÁREZ DE URBINA, Jesús

1952-1969 Cambó, 3 vols., Barcelona, Alpha.

PLA Y ARMENGOL, R.

1930 Impresiones de la Huelga General de Barcelona del 24 de marzo-7 de abril de 1919, Barcelona, s.p.i.

REY REGUILLO, Fernando del

1987 “Ciudadanos honrados y somatenistas. El orden y la subversión en la España de los años veinte”, *Estudios de Historia Social*, 42-43, julio-diciembre.

1989 “Organizaciones patronales y corporativismo en España”, tesis doctoral, Madrid, Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense.

1992 Propietarios y patronos. La política de las organizaciones económicas en la España de la Restauración (1914-1923), Madrid, Ministerio de Trabajo.

ROSAL DÍAZ, Amaro del

1977 *Historia de la ugt de España, 1901-1939*, 2 vols., Barcelona, Grijalbo.

ROSENBAUM, H. John, y Peter C. SEDERBERG

1974 “Vigilantism: An Analysis of Establishment Violence”, *Comparative Politics*, vol. VI, núm. 4, julio.

RUIZ LLANO, Germán

2016 *Álava, una provincia en pie de guerra. Voluntariado y movilización durante la Guerra Civil*, Bilbao, Beta III Milenio.

SOUTHWORTH, Herbert R.

2000 *El lavado de cerebro de Francisco Franco*, Barcelona, Crítica.

### ***Periódicos y revistas***

*El Debate, Madrid, 1917-1920*

*El Socialista, Madrid, 1919-1920*

*El Somatén, Madrid, 1920-1921*

*Gaceta de Madrid, Madrid, 1923*

*Heraldo de Madrid, Madrid, 1934*

*La Acción, Madrid, 1919-1922*

*La Publicidad, Barcelona, 1920*

*Paz y Buena Voluntad, Zaragoza, 1924*

*Paz y Tregua, Barcelona, 1926*

*Revista Católica de Cuestiones Sociales, Madrid, 1920*

*Revista Técnica de la Guardia Civil, Madrid, 1921*

*Unión Patriótica, Madrid, 1928*

Sobre los intentos de coordinación continental de las uniones cívicas europeas, véase MARTÍ OLIVARES y ANDRÉS MORERA, 1921. Sobre la actividad propagandística de la Entente Internacional Anticomunista entre fines de 1924 y 1940, véanse GONZÁLEZ CALLEJA y REY REGUILLO, 1995, pp. 42-53 y 221-234; LODYGENSKY, 2009; SOUTHWORTH, 2000, pp. 205-206 y 223-231.

Para un recorrido sobre los casos nacionales más significativos en ambos continentes, véase GONZÁLEZ CALLEJA y REY REGUILLO, 1995, pp. 20-42. Sobre el caso argentino en particular, véanse CATERINA, 1995, y DEVOTO, 2002, pp. 126-138.

ROSENBAUM y SEDERBERG, 1974, p. 543.

MAIER, 1989, p. 194.

REY REGUILLO, 1987, pp. 97-98.

Sobre la historia del somatén, véase GONZÁLEZ CALLEJA y REY REGUILLO, 1995, pp. 55-69.

Sobre la crisis política de 1917 en España, la obra más reciente es la de GONZÁLEZ CALLEJA, 2017.

CAVANNA, 1919. Sobre el somatén barcelonés y catalán en los años de posguerra, véase GONZÁLEZ CALLEJA y REY REGUILLO, 1995, pp. 76 ss.

PABÓN, 1952-1969, t. 2, pp. 94-95.

FONTÁN, 1924, p. 128.

Véanse FOIX, 1931; GONZÁLEZ CALLEJA, 1999, pp. 80-81.

BARATECH, 1927, p. 59; LEÓN-IGNACIO, 1981, p. 53; PLA Y ARMEN-  
GOL, 1930, pp. 19-25 y 62-63.

Citado por PABÓN, 1952-1969, t. 2, p. 115. Sobre la implicación de la Lliga en la movilización somatenista contra la huelga de marzo, véanse CAMBÓ, 1981, pp. 315-316 (1987, pp. 304-306); NADAL, 1965, pp. 302-305.

ANDRÉS MORERA, 1927, p. 11.

Resulta a todas luces exagerada la cifra de 30 000 somatenistas actuantes en Barcelona durante la huelga de marzo-abril de 1919, dada por el cónsul italiano en telegrama de 8.IV.1919 (ASDMAE, Serie Affari Politici, 1919-1930, Spagna, 1919-1920, caja 1586). La afiliación al somatén catalán pasó de 43 891 personas en 1918 a unas 60 000 en noviembre de 1919, más de 60 000 en 1921 (con 8 000 en Barcelona, agrupadas en 10 distritos), 65 634 en 1922 (con 12 918 en Barcelona) y 65 735 en 1923. Para un detenido examen de la afiliación al somatén en esta época, véase REY REGUILLO, 1987, pp. 106-114; GONZÁLEZ CALLEJA y REY REGUILLO, 1995, pp. 87-89, 303 y 335.

BURGOS Y MAZO, 1921, t. 1, pp. 571-572.

FONTÁN, 1924, pp. 152-162, expone los detalles de un verdadero despliegue de guerra del somatén en previsión de un levantamiento revolucionario en Barcelona.

Carta de Maximiliano Arboleya a Benjamín Ortiz (18.I.1918), en BAYLE, 1928, pp. 131-134.

Sobre esta primera “guardia cívica” madrileña, véase REY REGUILLO, 1992, pp. 652-659.

*La Acción*, 11.XI.1919, p. 6.

Borrador de la R.O. Circular del ministro de la Guerra a los capitanes generales

de las regiones (21.I.1920). Con todo, la R.O. permitía la participación de jefes y oficiales del Ejército “cualquiera que fuese su situación”. Esta normativa se contraponía en diversos puntos con el reglamento del somatén barcelonés. Véase informe del subsecretario del Ministerio de la Guerra (XI.1920), en AGHD, 2ª Sección, 10ª División, leg. 264.

Decreto sobre somatenes y reglamento del Somatén Local de Madrid, aprobado por R.O. de 8.VI.1920, Revista Técnica de la Guardia Civil, núm. 141, XI.1921, pp. 23-26.

Entre los 21 vocales del Somatén de Madrid había 10 nobles (marqueses de la Mina, de la Fuensanta de Palma, de Urquijo, de Zahara y de Castelar; duques de la Vega y del Infantado; condes de Gamazo y de doña Marina, y barón de Satrústegui), y de los jefes de los 12 distritos en que se dividió la capital, ocho eran aristócratas: marqueses de Casa Pacheco, de Villamejor, de Portago, de la Ribera y de Perales; duques de Sotomayor y Nájera, y conde de Casal.

Véase GONZÁLEZ CALLEJA, 1991, pp. 69-71.

Vizconde de Val de Erro, “La higiene social”, El Somatén, núm 4, I.1921, pp. 1-2.

Duque de Medina de las Torres, “La prestación de servicios sociales”, El Somatén, núm. 3, XII.1920, pp. 1-2.

Sobre este grupo “cívico”, véase REY REGUILLO, 1992, pp. 659-669.

*La Acción*, 7.XI.1919, p. 1.

*El Socialista*, 18.XII.1919 y 27.XII.1919, pp. 1 y 10, y 17.IV.1920, p. 1.

Véase el discurso de Maura en el Teatro del Centro el 28.IV.1920, en *La Acción*, 29.IV.1920, pp. 1-2.

*La Acción*, 23.XII.1919, p. 6, y *El Debate*, 27.I.1920, p. 3, al reseñar el acto de jura de bandera de la agrupación. Por su parte, la *Revista Católica de Cuestiones Sociales*, vol. I, 1920, pp. 286-289, da una cifra de 7 000 afiliados (cit. por CASTILLO, 1977, p. 272, que la considera muy exagerada). Sólo unos pocos centenares de “guardias cívicos” actuaron de forma constante en 1919 y 1920, sobre todo una pequeña vanguardia de choque.

*La Acción*, 15.XII.1919, p. 3.

*La Acción*, 7.XI.1919, p. 1, y 15.XII.1919, p. 3.

Sobre las asociaciones de tiro como viveros de patriotismo y ejemplo de “nacionalización de las masas” en Alemania, véase MOSSE, 1975, pp. 213-221.

REY REGUILLO, 1989, p. 534.

En el folleto de Acción Ciudadana, Nuestra Doctrina, fechado en Madrid el 27.IX.1922, la entidad repite el conocido razonamiento fatalista de que “mientras el mundo exista, habrá pobres y ricos”, ya utilizado en los años setenta del siglo anterior por la revista antirrevolucionaria *La Defensa de la Sociedad*.

“Obras de patriotismo. Por el orden el derecho” (Manifiesto de la Junta Directiva de Unión Ciudadana, 5.XI.1919), *La Acción*, 15.XII.1919, p. 3, y “La Unión Ciudadana, contra el matonismo”, *El Debate*, 9.IV.1920, p. 1.

“El régimen del terror. La sociedad se defiende”, *La Acción*, 17.IV.1920, p. 1. Véase también “Frente al sindicalismo revolucionario”, *La Acción*, 21.XII.1919, p. 1.

“Con motivo de un crimen. La libertad de la calle”, *La Acción*, 10.IV.1920, p. 1, y “Los crímenes sociales; un ingeniero asesinado”, *ibid.*, p. 3. Sobre la huelga de “La Fortuna” y sus implicaciones violentas, véase la detallada descripción de REY REGUILLO, 1989, pp. 135-139.

*La Acción*, 13.IV.1920, p. 1.

“Manifiesto de la Federación patronal española”, *La Publicidad*, 18.V.1920, p. 6, citado por REY REGUILLO, 1989, pp. 522-523.

Citado por ROSAL, 1977, t. 1, p. 202.

Circular en *La Acción*, 16.IX.1922, p. 2.

Orduña a Mussolini, 31.X.1922, en ASDMAE, Serie Affari Politici, 1919-1930, Spagna, 1921-1922, caja 1.587.

Véase GONZÁLEZ CALLEJA y REY REGUILLO, 1995, pp. 147-156.

*Gaceta de Madrid*, núm. 261, 18.IX.1923, p. 1130.

Declaraciones de Rufo Martín y Rivera, coronel subinspector del Tercio de la Guardia Civil de Zaragoza, Paz y Buena Voluntad, núm. 6, IX.1924, p. 131.

Datos sobre la militancia somatenista en los cuadros estadísticos de GONZÁLEZ CALLEJA y REY REGUILLO, 1995, pp. 334-343, elaborados a partir de la documentación depositada en AHN, Presidencia, Directorio Militar, leg. 440, caja 1; leg. 441, caja 2; AHN, Gobernación, Serie A, leg. 59 A, exps. 11, 12, 13 y 14; Paz y Tregua, X.1926, p. 14; Unión Patriótica, núms. 47-48, 13.IX.1928, p. 51, y MARTÍNEZ SEGARRA, 1984, pp. 263-275.

Estos grupos de vigilancia de retaguardia adoptaron en ocasiones los evocadores nombres de Milicias Cívicas, Acción Ciudadana o Defensa Ciudadana, como fue el caso de la milicia de segunda línea afincada en la “pacificada” Badajoz. Véanse a este respecto las generalidades que expone CASAS DE LA VEGA, 1977, t. 2, pp. 855-870. Para un estudio de caso mejor fundamentado, véase RUIZ LLANO, 2016.

## LAS DERECHAS EN PORTUGAL DESPUÉS DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL. EL CAMINO DEL AUTORITARISMO

ANTÓNIO COSTA PINTO

*Instituto de Ciencias Sociales-Universidad de Lisboa*

Portugal entró en la “era de las masas” sin el lastre de algunos de los factores de perturbación que presidieron los procesos de crisis y caída de muchos regímenes democráticos en la Europa de entreguerras. Viejo “Estado-nación”, con unas fronteras políticas básicamente inalteradas desde la baja Edad Media y con una marcada continuidad territorial en sus estructuras preestatales, Portugal representaba en vísperas del siglo XX una suerte de encarnación del modelo ideal propugnado por el nacionalismo liberal: “Estado” y “nación” coincidían desde una significativa homogeneidad cultural. Sin minorías nacionales o étnico-culturales en su seno, sin minorías portuguesas en países vecinos y sin diferencias religiosas o lingüístico-culturales —el fenómeno dialectal no pasaba de mera curiosidad circunscrita tan sólo a algunas zonas fronterizas con España—, Portugal tampoco albergaba reivindicaciones territoriales en el espacio europeo. Este tipo de variables históricas y culturales, tan presentes en otros países europeos, brillaban por su ausencia o escasa relevancia en Portugal. La más destacada de sus variables históricas era su naturaleza colonial. De hecho, cabe decir que “la identificación entre imperio colonial y nacionalismo viene a ser en Portugal una especie de equivalente funcional a las controversias en torno al Estado-nación” existentes en las sociedades europeas de la época.<sup>1</sup>

El “parlamentarismo oligárquico” se había consolidado durante la segunda mitad del siglo XIX. A lo largo de varias décadas, pero sobre todo entre 1871 y 1890, el Partido Regenerador y el Partido Progresista formaron por rotación los sucesivos gobiernos y configuraron un sistema bipartidista razonablemente estable. El sistema político funcionaba en gran medida gracias al clientelismo, y la manipulación gubernamental de las elecciones locales y nacionales era una práctica habitual. Aunque con programas políticos ligeramente distintos, los dos partidos “rotativistas” eran en la práctica idénticos. El sistema portugués se

parecía al imperante en otros países: España, Italia o Grecia.

A finales del siglo XIX surgieron dentro de un mismo contexto urbano dos pequeños partidos “ideológicos”, el Partido Socialista y el Partido Republicano. Éste último, por su parte, conseguirá convertirse rápidamente en el “tercer partido” aglutinando a los sectores urbanos de las clases medias y populares. Su ideología se inspiraba básicamente en el modelo de la Tercera República francesa. Sufragio universal masculino, secularización de la educación, autonomía municipal y radical separación entre Iglesia y Estado eran los elementos centrales de la propaganda republicana en la lucha contra la élite de la monarquía constitucional.

A principios del siglo XX, el Partido Republicano lideró la incorporación de las masas a la vida política en un contexto de extrema debilidad de las formas “horizontales” de integración política. Sociedades secretas, grupos de socialistas, estudiantes anarquistas o republicanos radicales se adscribirán durante un tiempo a la bandera republicana, a medida que aumentaba la “indefinición” del programa partidista. El Partido Republicano, pues, contaba con un programa extremadamente flexible, muy moldeable, para capitalizar cuestiones como el nacionalismo, el anticlericalismo, la ampliación de la participación política, el derecho de huelga u otras reivindicaciones del débil movimiento obrero. Poco antes de la Revolución de 1910, el Partido aglutinaba una constelación política que iba desde una facción moderada y electoralista hasta otra jacobina y autoritaria. En esta coalición participaban también organizaciones secretas en las que coincidían republicanos radicales y anarquistas —fue el caso de la Carbonária Portuguesa, que contaba con importantes apoyos populares en Lisboa—, y que se infiltraron en numerosos comités locales del Partido Republicano.

En octubre de 1910 la monarquía constitucional fue depuesta en Lisboa. Dirigieron la revolución elementos republicanos de las fuerzas armadas que contaron con la ayuda decisiva de civiles y de militares —sargentos y cabos sobre todo— pertenecientes a la Carbonária. La mayoría de las unidades militares permaneció neutral. Portugal se convertía en una de las primeras repúblicas europeas de principios del siglo XX.<sup>2</sup>

## **LA PRIMERA REPÚBLICA: PARLAMENTARISMO DE PARTIDO DOMINANTE**

La Constitución de 1911, aprobada por una Asamblea prácticamente formada en su totalidad por miembros del Partido Republicano, estableció un régimen parlamentario. El presidente de la república, elegido por el Parlamento, apenas disponía de poderes; sobre todo, no podía disolver la Cámara.

Las élites republicanas decidieron no adoptar el sufragio universal, argumentando que el caciquismo en las provincias desaconsejaba ampliar la participación política. Las presiones en favor de la adopción del sufragio universal fueron escasas, por no decir inexistentes, en la Asamblea Constituyente (1911). La “presión desde abajo” también fue muy débil, debido a la nula movilización electoral del mundo rural y a la ideología y estrategia contrarias a la participación política de las “minorías activas” de las clases trabajadoras urbanas. Curiosamente, sólo los sectores más conservadores del Partido Republicano abordaron el problema. Las leyes electorales limitaron la representación proporcional a Lisboa (feudo electoral de los republicanos) y a Oporto, manteniendo el régimen mayoritario en el resto del país. La participación política, limitada a los hombres adultos y alfabetizados, era reducida.

La República sustituyó el viejo sistema bipartidista de la monarquía constitucional por un sistema multipartidista de partido dominante. El Partido Republicano fue el primer partido “semide-masas” del sistema liberal. Después de la Revolución de 1910 algunos de sus dirigentes más conservadores lo abandonaron para crear dos nuevos partidos, el Unionista y el Evolucionista, que nunca dejarían de ser pequeños partidos de notables.<sup>3</sup>

El sucesor del Partido Republicano fue el Partido Democrático, a cuyos partidarios se les conoció como “democráticos” y cuya hegemonía electoral se impuso desde el principio. Gracias a su uso del aparato del Estado, se convirtió en el principal “elemento de clientelismo”.<sup>4</sup> Con un sistema electoral de sufragio limitado, supo alcanzar un compromiso entre su electorado urbano y algunos notables de provincia, asegurando su dominio sobre el sistema.

El Partido Democrático fue construido a partir de una base electoral y organizativa sólida y razonablemente estable, y se erigió como el único partido de ámbito nacional. Por su parte, los partidos Unionista y Evolucionista, creados por dirigentes de facciones parlamentarias de centro-derecha que habían abandonado el Partido Republicano, reclamaban, en cuanto partidos “del sistema”, reformas al sistema electoral y a las circunscripciones electorales, y la

moderación en las relaciones Iglesia-Estado; mientras tanto, iban consolidando sus clientelas en las provincias, donde ya tenían “feudos” localizados. Debido a las rivalidades personales entre sus respectivas direcciones, estos partidos fracasaron en todos sus intentos de formar por sí solos una coalición contra los democráticos. Hasta la Gran Guerra no hubo ninguna disidencia de “izquierda” en el Partido Democrático (los dos escaños del Partido Socialista no eran sino una especie de “ofrecimiento” por parte de los democráticos).

Si hasta la dictadura de Sidónio Pais se puede hablar de la existencia de una oposición leal a medias, representada por los partidos republicanos conservadores, en los años veinte, al fracasar todos los intentos de reforma del sistema político y de unificación de las fuerzas conservadoras en un único frente electoral, las élites conservadoras llegarán al convencimiento de que nunca podrían alcanzar el poder por la vía electoral y constitucional.

### ***Una endémica inestabilidad gubernamental***

La estabilidad electoral combinada con la inestabilidad gubernamental caracteriza todo el periodo republicano. Entre 1910 y 1926 Portugal tuvo 41 gobiernos, entre estos, 17 de partido único, 3 militares y 21 de coalición.

El primer gran desafío a la hegemonía del Partido Democrático data de 1915, con un intento por prescindir del parlamento mediante una intervención militar. El gobierno democrático cayó ante un golpe que contó con la complicidad del presidente y de los partidos conservadores. Presionado por las fuerzas armadas, el jefe del Estado designó al general Pimenta de Castro como primer ministro en enero de 1915, al frente de un gobierno con fuerte presencia militar. El nuevo gobierno pretendía suspender el parlamento y modificar las leyes electorales antes de convocar a elecciones, pero a los pocos meses un levantamiento democrático, con el apoyo de algunas unidades militares y de civiles armados, devolvió el poder al Partido. Los incidentes se saldaron con 150 muertos y 300 heridos. En junio de 1915 el Partido Democrático volvió a ganar las elecciones. Desde entonces y hasta el golpe de Sidónio Pais, el Partido Democrático lideró —mientras preparaba la participación en la guerra— varios gobiernos de coalición formados gracias al apoyo o a la neutralidad de los partidos republicanos conservadores.

La inestabilidad gubernamental, endémica durante todo el régimen republicano, alcanzó su punto culminante durante la posguerra. Los gobiernos de coalición,

de iniciativa conservadora o “neutrales” con mayoría parlamentaria democrática, alcanzaron la media más baja de supervivencia: 91 días, frente a la media de 156 de los gobiernos monopartidistas. Hay, sin embargo, dos grandes diferencias entre la inestabilidad gubernamental anterior a la guerra y la de la posguerra: en este segundo periodo la dimensión político-económica adquiere más importancia que la cuestión del “acceso al poder”, y refleja la creciente incidencia de las diferencias socioeconómicas y de los distintos grupos de interés. El estudio de la relación entre la duración de cada gobierno y su respectiva política económica (ya fuera más favorable a la industria, a la agricultura, a los consumidores urbanos, a los pactos sociales, etc.) revela la influencia de los grupos de interés en la formación y caída de los gobiernos, así como la importancia creciente de los círculos extraparlamentarios en la promoción de la inestabilidad gubernamental.

Otros factores políticos de la posguerra fueron los siguientes: una creciente fragmentación del sistema de partidos, con la aparición de disensiones a la izquierda del Partido Democrático; los intentos fallidos de poner en marcha una máquina electoral conservadora basada en los evolucionistas y los unionistas, y la aparición del conglomerado sidonista.

### ***Las divergencias sociopolíticas***

La primera divergencia política abierta por la Revolución de 1910 fue la suscitada por la cuestión religiosa. La propaganda republicana había propugnado la secularización y, en los días posteriores a la Revolución, Lisboa se vio sacudida por un importante movimiento anticlerical. Se cerraron varios conventos, y algunas órdenes religiosas, como la Compañía de Jesús, fueron inmediatamente expulsadas del país.

La nueva legislación no tardó en llegar. El 3 de noviembre se autorizó el divorcio; un mes más tarde se promulgó una nueva ley de matrimonio por la que éste adquiriría una “validez exclusivamente civil”; las manifestaciones religiosas celebradas fuera de las iglesias quedaron sometidas a fuertes restricciones y se abolieron todos los ritos religiosos asociados a instituciones del Estado, como tribunales, universidades o fuerzas armadas. Acusados de distintos delitos de desobediencia, a principios de 1911 ya había cerca de 150 curas encarcelados. El gobierno prohibió la lectura de una carta pastoral en la que la jerarquía eclesiástica expresaba su desacuerdo con la situación. Esta decisión provocó la ruptura de las relaciones con el Vaticano y de los obispos con el Estado

portugués. En 1912 casi todos los obispos portugueses estaban suspendidos.

La secularización se convirtió de inmediato en un elemento central de la vida política portuguesa y lo seguiría siendo, a pesar de algunos intentos de apaciguamiento, hasta 1926. Este contexto secularizador propició la aparición de un nuevo movimiento católico estrechamente ligado a la jerarquía y de tendencia autoritaria. El espacio para un partido de tipo demócrata-cristiano o “popular” fue ocupado por el Partido del Centro Católico, cuyo catolicismo social se deslizará rápidamente hacia un proyecto alternativo de carácter corporativo y autoritario, ya apuntado con ocasión del apoyo que prestó a la dictadura de Sidónio en 1917.

La segunda gran divergencia política la suscitó la llamada “cuestión del régimen”, alimentada por el antirrepublicanismo de un pequeño pero relativamente poderoso núcleo de monárquicos que ya poco tenían que ver con el régimen liberal caído en 1910. En 1911 y 1912 los monárquicos protagonizaron sendas incursiones desde Galicia lideradas por Paiva Couceiro, un antiguo militar cesarista con experiencia en las campañas militares de África. En 1914 un grupo de jóvenes que habían secundado a Couceiro fundó, tras regresar del exilio, al amparo de la amnistía decretada por el gobierno que coincidió con el inicio de la Gran Guerra, el Integralismo Lusitano (IL), movimiento inspirado en los principios maurrasianos de Action française, cuya influencia también alcanzará al incipiente partido católico.

En 1916 el IL se estableció como un movimiento político. Sus objetivos se pueden resumir en la restauración de una monarquía corporativista, antiliberal, descentralizada y tradicional. Los integristas dejaron una marca intelectual profunda en la cultura política portuguesa del siglo XX. Estando profundamente influenciados por el ejemplo establecido por la Action française, lograron sentar las bases de una nueva y duradera marca de nacionalismo reaccionario portugués.

En términos simples, el IL estableció una alternativa política e intelectual coherente basada en una ideología de su propia creación que luego fue codificada en un programa político. En lugar de la idea de la soberanía popular, el IL propagó el concepto de nación tradicionalmente organizada y estructurada jerárquicamente, en la que el principio del sufragio universal sería rechazado en favor del ideal corporativista. El Parlamento sería remplazado por una Asamblea Nacional puramente consultiva en la que estarían representadas las “fuerzas

vivas” de la sociedad portuguesa, la familia tradicional, los ayuntamientos y las asociaciones de profesionales. En lugar del centralismo del Estado liberal, percibido por los integristas como un peligro agudo para la vida local y el principal instigador de la urbanización descontrolada, se introducirían estructuras descentralizadas que permitirían una paz eminentemente agrícola, el cumplimiento de su misión histórica. La representación corporativista también fue vista como el remedio para los males de la economía liberal y la desastrosa agitación de su lucha de clases.

Desde un punto de vista sociológico, el integrismo constituyó una reacción ideológica típica a la modernización. Por eso pudo infiltrarse en los segmentos de la sociedad más amenazados por el proceso de modernización, especialmente después de que la participación de Portugal en la guerra había desestabilizado el frágil régimen republicano.

Su método de intervención política fue en gran parte elitista, ya que el IL reclutó su membresía dentro de una red relativamente pequeña de académicos universitarios y mediante la reorganización de grupos de notables monárquicos provinciales. El vigor ideológico del IL y su capacidad para penetrar círculos intelectuales y grupos de interés también influyeron en el desarrollo y la difusión del fascismo en Portugal. Como escribió Martins, “en el momento en que los modelos fascistas y nazis italianos [y alemanes] asumieron una importancia” histórica mundial, “los más predispuestos a aprender y emularlos se basaron en las enseñanzas y el estilo intelectual del IL”. De hecho, casi todos los intentos de fundar partidos fascistas después de la guerra utilizaron al IL como modelo, de modo que se “adelantó al terreno de otras influencias y paradigmas de la extrema derecha”.<sup>5</sup>

Pero una importante divergencia sociopolítica seguía siendo la separación entre la ciudad y el campo, entre el medio urbano y el rural, tanto en la representación de sus respectivos intereses como en el acceso al Estado y al proceso de decisión. En los años veinte los conflictos económicos entre las élites, especialmente entre los intereses de la “élite tradicional” agraria y la de la industria, se convirtieron en importantes elementos de crisis ante la incapacidad de los gobiernos para gestionarlos.

### ***La participación en la primera Guerra Mundial***

La guerra tuvo un ineludible efecto desestabilizador sobre el frágil edificio

político erigido por la República. Casi todos los republicanos justificaron la eventual participación de Portugal en nombre de la defensa de las colonias africanas. Desde finales del XIX se sabía que Gran Bretaña podría entregar algunas de las colonias portuguesas a Alemania. Para el Partido Democrático, el gran defensor de la intervención militar en el frente europeo, la neutralidad podía poner en peligro el legado colonial portugués mientras que una victoria junto a los aliados sólo podía contribuir a consolidar la posición de Portugal en las negociaciones de paz.

La cuestión de las colonias, sin embargo, no justifica por sí sola la intervención en el frente europeo. De hecho, Gran Bretaña nunca la solicitó y nunca acudió a los términos de su alianza con Portugal. Una intervención limitada en el teatro africano, tal como la defendieron los republicanos conservadores, podría haber sido otra opción posible y razonable, desde el punto de vista tanto interno como exterior. De ahí que pueda pensarse que la estrategia intervencionista del Partido Democrático respondió, además, a unos objetivos políticos de orden interno: asegurar el control del sistema político mediante una movilización nacionalista y patriótica forzando la colaboración de los otros partidos mediante una coalición del tipo Union Sacrée, que legitimara el creciente control represivo sobre la disensión política y permitiera apaciguar las tensiones políticas y sociales. Las expectativas del Partido Democrático se verían, sin embargo, de inmediato defraudadas.

La estrategia intervencionista provocó la división en las fuerzas armadas. Se formó una facción partidaria de la intervención en África y contraria a la intervención en Europa. El gobierno, al desconfiar del Ejército, optó por formar una fuerza especial de intervención (el Cuerpo Expedicionario Portugués) nombrando oficiales leales a la República y movilizándolo oficiales milicianos. En octubre de 1914 grupos de oficiales ocuparon algunos cuarteles declarándose contrarios a la intervención en la guerra. Este movimiento anticipaba los acontecimientos de 1915 —gobierno militar provisional— y de 1917 —el golpe de Sidónio—. No obstante, el gobierno siguió adelante con su decisión de participar. En 1916 y 1917 casi dos tercios del ejército portugués se encontraban fuera del país: 55 000 soldados en Flandes y 45 000 en las colonias; de los primeros, hasta 35 000 murieron, resultaron heridos o fueron hechos prisioneros.<sup>6</sup>

El proyecto intervencionista del Partido Democrático implicaba la participación de los restantes partidos republicanos en una gran coalición, pero si bien el

Partido Evolucionista vaciló en participar, el Partido Unionista se manifestó de entrada contrario a la intervención en el teatro europeo. Ambos acabarían descartando su participación en un gobierno de unidad nacional, ante los primeros efectos sociales y políticos de la intervención: diversos motines en Lisboa, saqueos por la escasez de víveres e intensificación de las huelgas, promovidas por el sindicalismo revolucionario y abiertamente contrarias a la intervención. Ante estos acontecimientos, el 12 de julio de 1917 el gobierno declaró el estado de sitio en Lisboa y en septiembre de ese año reprimió con dureza un inicio de huelga general, encarcelando a numerosos “sindicalistas revolucionarios”.

### ***La dictadura de Sidónio Pais: un interludio autoritario***

Aunque utilizara su pasado militar con fines carismáticos, Sidónio Pais, el jefe del golpe de Estado de diciembre de 1917, era un discreto miembro de la élite republicana conservadora. Profesor de la Universidad de Coimbra, diputado por el Partido Unionista, Sidónio había sido ministro en dos ocasiones y era embajador en Berlín cuando, en 1916, Alemania le declaró la guerra a Portugal.

La rápida victoria del golpe de Sidónio, organizado con el apoyo inicial de los notables republicanos conservadores, se explica por la intensa erosión que sufrió la política intervencionista del Partido Democrático.<sup>7</sup> Algunas de las unidades militares que intervinieron de modo decisivo en el golpe debían salir para el frente europeo. Su ambigüedad y su apuesta por la neutralidad colaborante quedaron aclaradas tras la visita que una delegación de los sindicatos obreros hizo a Sidónio, cuando éste todavía se encontraba en el centro de Lisboa dirigiendo las operaciones, y en la que se comprometieron a apoyarlo a cambio de la liberación de los sindicalistas presos.

La dictadura de Sidónio anticipó algunas de las características de las dictaduras de la posguerra, especialmente las de tipo fascista. Después de algunas dudas, Sidónio exilió a una parte de la élite republicana, suspendió la Constitución de 1911 e intentó institucionalizar una dictadura presidencialista y plebiscitaria. Tras una gira por el país en la que fue proclamado “salvador de la patria” por pequeñas multitudes movilizadas en gran parte por el clero, Sidónio instauró el sufragio universal, se hizo elegir presidente y se reservó el control absoluto del Ejecutivo, del que salieron los partidos republicanos conservadores que se unieron a la oposición. Creó, entonces, un esbozo de partido único, el Partido Nacional Republicano. Ningún otro partido republicano concurrirá a las

elecciones y la represión se desencadenará, tanto sobre los otros partidos como sobre el sindicalismo obrero. Junto a este partido de iniciativa gubernamental tan sólo obtendrán representación parlamentaria los monárquicos y los católicos. Los primeros apoyarán el régimen y volverán a ocupar cargos en distintas instituciones, especialmente en la militar; los segundos también apoyarán a Sidónio hasta el final, al compartir su política de revocar los elementos más radicales de la legislación anticlerical y de restablecer relaciones con el Vaticano.

Otra novedad introducida por el nuevo sistema fue el esbozo de representación corporativa. El sistema bicameral se mantuvo, pero el nuevo Senado contaría con representantes nombrados por las asociaciones patronales, por los sindicatos, por la industria, por las profesiones liberales, etc. Sidónio prescindiría, sin embargo, tanto de este Senado como de la Cámara de Diputados, a la que suspendió por vacaciones, y pasó a gobernar cada vez más confiado en sus recursos carismáticos.

Durante el periodo de escasez provocado por la guerra, el discurso político de Sidónio fue antiplutocrático, e insistió en la lucha contra las oligarquías de los partidos y el mesianismo nacionalista. El dictador logró reunir en un mismo espacio a los monárquicos y a algunos republicanos conservadores. Al mismo tiempo, usó con éxito su carisma para rodearse de un grupo de jóvenes oficiales. Tras su asesinato por un antiguo sindicalista rural, a finales de 1918 estalló una revuelta monárquica en el norte. Los republicanos se movilizaron en las ciudades y varias unidades militares se declararon neutrales, permitiendo así la victoria del Partido Democrático y el regreso a un régimen constitucional.

El régimen sidonista fue, de hecho, incapaz de sobrevivir al asesinato de su jefe y su caída vino a revelar la presencia de un ejército dividido y politizado a causa de la intervención en la guerra. La persistente divergencia sobre la “cuestión del régimen” acabó de pulverizar en 1918 la unidad de las fuerzas conservadoras y casi llevó al país a la guerra civil. Las juntas militares, creadas en distintas ciudades tras el asesinato del dictador, presionaron en varios sentidos al gobierno, y se gestaron pronunciamientos de orientación política muy diversificada. Varios “barones militares” asociados a sectores monárquicos, sidonistas y republicanos se estrenaron en esa coyuntura de crisis ante la opinión pública.

Con la proclamación de la monarquía en Oporto, por iniciativa de la junta militar del norte y la pequeña insurrección en Lisboa, las unidades militares se

dividieron. Muchos oficiales en el frente europeo no aceptaron la estrategia de “abandono” en la guerra por la que optó Sidónio ni se reconocieron en los oficiales monárquicos que se adherieron al régimen. A raíz de una movilización popular en Lisboa, promovida por el Partido Democrático contra la revuelta monárquica, varias unidades distribuyeron armas entre la población y otras se dispusieron a salir hacia el norte. La definitiva apuesta antisidonista del movimiento sindical significó un espaldarazo para la movilización. A finales de enero el gobierno monárquico provisional de Oporto fue derrotado militarmente. En Lisboa, mítines y manifestaciones callejeras forzaron la disolución del parlamento sidonista y de la policía, dominada por los monárquicos. Unos pocos días después los sidonistas renunciaron. Varios elementos republicanos intentaron entonces constituir un partido conservador capaz de afrontar las elecciones como alternativa al Partido Democrático. Una vez más el proyecto fracasó. En las elecciones de 1919 volvió a ganar el Partido Democrático, consiguiendo 53% de los escaños. La Constitución de 1911 fue restablecida.

### ***Crisis final y caída de la Primera República***

La participación de Portugal en la primera Guerra Mundial no provocó daños en la estructura productiva o social comparables con los sufridos por los beligerantes de Europa Central, por lo que tampoco creó condiciones propicias al nacimiento de grupos capaces de formar una primera base para el posterior desarrollo de movimientos fascistas.<sup>8</sup> Portugal pasó, sin embargo, en plena dictadura sidonista, por sus “humillaciones de guerra” y por la destrucción de sus batallones en el frente, y el país puso fin a su intervención en la guerra durante el sidonismo. Los republicanos conseguirían movilizar a muchos veteranos para enfrentarlos contra la dictadura de Sidónio Pais usando el argumento de que habían sido “traicionados” por los monárquicos, que apoyaron a los regimientos que se negaron a ir a Francia. Pero no llegó a formarse un movimiento de veteranos, ya que éstos serían rápidamente absorbidos por la sociedad rural o por la emigración. La vittoria mancata no lo fue tanto en la medida en que Portugal consiguió salvaguardar sus colonias y no tenía pretensiones territoriales en Europa.

La dictadura sidonista y la insurrección que le puso fin permitieron que el primer pacto entre los partidos políticos para la revisión de la Constitución de 1911 confiriera mayor estabilidad al sistema político. Los conservadores apostaron por un modelo presidencialista. Los democráticos aceptaron que el presidente tuviera

el poder de disolver el Parlamento, pero limitaron los poderes de los gobiernos en funciones (1919). La gestión de este poder se revelará compleja y difícil, y dará lugar al establecimiento de una vía directa para presionar extraparlamentariamente al presidente.

El sistema de partidos cambiará de forma notable durante la posguerra: los líderes “históricos” del periodo anterior a 1917 desaparecerán. Afonso Costa, el hombre fuerte del Partido Democrático, no regresó del exilio, y António José de Almeida y Brito Camacho dejaron los partidos Unionista y Evolucionista, respectivamente; el Partido Democrático conoció escisiones a su izquierda y a su derecha; pequeños partidos con fuerte carga ideológica aparecieron tanto en la escena parlamentaria (católicos, “izquierda democrática”, etc.) como en la extraparlamentaria (en 1921, los sidonistas; en 1919 el Partido Comunista, etc.). Pero las principales características de la época anterior a la guerra perduraron: el sufragio no se amplió y el sistema político formal siguió siendo fundamentalmente el mismo.

El sistema de partidos se fue fragmentando. En 1919 los conservadores (los partidos Unionista, Evolucionista y Centrista) se unieron en el nuevo Partido Liberal, creando una incipiente máquina electoral de alternativa frente a los democráticos. En 1921, por primera vez en la historia de la República, el Partido Democrático perdía unas elecciones y veía peligrar su monopolio. Los gobiernos liberales, sin embargo, cayeron ante la insurrección de la Guardia Nacional Republicana, que pretendía provocar la disolución del Parlamento elegido en 1921. Los conservadores volvieron entonces a dividirse en distintos partidos (“Gubernamentales”, Nacionalistas, “Populares”), aumentando las tendencias autoritarias.

A pesar de algunas disensiones (los “reconstituyentes”, a la derecha, en 1920, y la “izquierda democrática”, en 1925), el Partido Democrático sobrevivió como el partido dominante del sistema. Pero su “asimétrica” máquina clientelar sufrió importantes bajas entre los votantes urbanos, al mismo tiempo que la manipulación y la violencia en los actos electorales aumentó considerablemente. La clásica “indefinición” de su política gubernamental se verá reforzada por la aparición, en las elecciones de 1925, de dos tendencias en su seno, una moderada y otra más a la izquierda.

Tras superar la crisis económica y social de la posguerra, las elecciones de 1925 devolvieron el Partido Democrático al gobierno, pero para entonces el escenario

de la batalla política había dejado de estar en el Parlamento, como lo demuestra la representación parlamentaria lograda por una federación de asociaciones patronales (la Unión de los Intereses Económicos, UIE), plataforma abiertamente antidemocrática que usaba las elecciones y el Parlamento como vehículo de expresión.

Los años de 1919 y 1921 habían sido considerados por el Estado y por el patronato de la industria, el comercio y los servicios urbanos como los años de la “amenaza roja”. El periodo áureo de los anarcosindicalistas de la Confederación General de los Trabajadores (CGT), que pasó en esa época por la primera escisión comunista, estuvo marcado por una sucesión de huelgas en distintos sectores, con especial incidencia en la administración pública y el comercio. A medida que decrecían las movilizaciones sindicales aumentó el terrorismo: organizaciones clandestinas, como la Legião Vermelha, recibían toda la atención de los periódicos conservadores. En un esfuerzo sostenido pero fallido de provocar la “integración política” de los socialistas, el Partido Democrático les dio un nuevo impulso, ofreciéndoles su maquinaria electoral y escaños en el Parlamento (en donde de una media de 2 en 1919 pasaron a 8).

Las asociaciones patronales más afectadas por estos movimientos casi exclusivamente urbanos desarrollaron sus federaciones y aumentaron significativamente su intervención política. Pero a finales de 1922 la “amenaza roja” ya se había disipado y los conflictos laborales iban remitiendo.

Un factor decisivo en la convergencia de la nueva extrema derecha de los años veinte fue la “relegación” de la polémica “república-monarquía”. Sobre esta unión incidieron las influencias externas del fascismo italiano y de la dictadura de Primo de Rivera en España, así como la presión ejercida por los jóvenes integristas. Las características de esta nueva extrema derecha ya eran visibles en organizaciones como la Cruzada Nun’Álvares que, tras reorganizarse en los años veinte, integró a sidonistas, católicos, integristas y fascistas.<sup>9</sup>

La característica más importante del ascenso del fascismo en la sociedad portuguesa de posguerra es, por un lado, la recepción de su primer paradigma externo, el fascismo italiano, en contraste con la debilidad y la fragmentación de su expresión nacional.

La extrema derecha fue inicialmente representada por los pequeños partidos sidonistas y los integristas. El primero consistió principalmente en jóvenes

intelectuales republicanos de derecha, oficiales y estudiantes. La creciente participación de los militares en estos grupos se puede ver en el hecho de que del comité central de 33 miembros del Centro Sidónio Pais, 19 eran oficiales del ejército en 1920.<sup>10</sup> Una proporción similar de militares se encontraba en otros pequeños partidos. Los integristas aumentaron su fuerza de manera significativa en las asociaciones de empleadores, en particular las que representaban los intereses de los propietarios rurales y dentro del Ejército. En 1921-1923 varios intentos de crear partidos fascistas no lograron trascender su entorno original de estudiantes e intelectuales, a pesar del apoyo inicial de varias organizaciones de empleadores.

Grupos como el de los integristas tuvieron mayor peso en términos conspirativos y propagandísticos en la defensa de la opción dictatorial que el del Centro Católico, el cual, al estar ligado a la jerarquía de la Iglesia, se mostraba más cauto. Los integristas, que contaban con importantes apoyos dentro de las fuerzas armadas, fueron los responsables de la radicalización antidemocrática de los grupos conspirativos. La presencia de integristas y de católicos en organizaciones como la Cruzada Nun' Álvares y su influencia entre los militares demuestran que un importante sector de la derecha radical civil apoyó el golpe, en la medida en que éste no se quedaría en un simple proyecto de salvaguarda del “orden en las calles y en el gobierno”.

Los partidos republicanos conservadores y las camarillas de notables ligadas a grupos de intereses se habían acostumbrado, desde la década de 1910, a recurrir a las vías extraparlamentarias para afianzar su poder. Aunque después de la guerra hubo gobiernos de coalición e incluso algunos gobiernos conservadores, éstos estuvieron siempre en situación de crisis. La radicalización de los pequeños partidos republicanos conservadores fue un factor clave en la caída de la República, ya que, cuando el Partido Democrático volvió a ganar las elecciones en 1925, se decantaron por la solución militar. Algunas figuras carismáticas surgieron entonces de este espectro de partidos, sumándose al llamamiento de la pequeña y elitista extrema derecha en favor de una intervención militar y de la constitución de grupos organizados en el seno de las fuerzas armadas. Cunha Leal, dirigente del Partido Nacionalista, fue uno de esos líderes que, desde 1923, abogó por la intervención militar y por la negociación post facto de un programa político con las facciones militares. La intervención militar en la política republicana y la presencia de facciones organizadas en las fuerzas armadas no eran fenómenos nuevos. La principal diferencia entre las intervenciones anteriores a la Guerra y el golpe de 1926 reside en la multiplicación de las

“tensiones corporativas” entre el Ejército y el gobierno, y, también, en la creciente “unidad política” de los militares.<sup>11</sup>

Buscar las raíces del golpe de 1926 en un análisis de las conspiraciones inmediatamente anteriores o de las posiciones de los distintos actores militares supone adentrarse en un atolladero événementiel. De hecho, desde 1918 Portugal vivía, como escribió un historiador estadounidense, “en el reino del pronunciamiento”.<sup>12</sup>

La situación cercana a la guerra civil que conoció el país entre diciembre de 1918 y febrero de 1919 tuvo efectos especialmente devastadores sobre el Ejército, al crearse juntas militares por todo el país y al suscitarse de nuevo la “cuestión del régimen” tras proclamarse la monarquía en Oporto. El régimen sidonista consiguió, por su parte, atraer a un creciente número de jóvenes cadetes y de oficiales vinculados a un sector de la derecha radical civil, involucrada en distintas conspiraciones a principios de los años veinte. Durante los últimos años de la República se multiplicaron los polos de tensión entre civiles y militares.

Terminada la Gran Guerra, el Partido Democrático se encontró con un nuevo Ejército. Las fuerzas armadas habían duplicado sus efectivos respecto a los de 1911 y contaban además con mandos que habían adquirido tanto un prestigio en el frente como una nueva dimensión ideológica de corte militarista. El principal problema lo representaban los, en principio provisionales, 2 000 oficiales milicianos. Mientras en el resto de Europa los cuerpos de oficiales se reducían con la desmovilización, el gobierno portugués optó por incorporar definitivamente a los oficiales milicianos. Esta “incorporación” elevó el número de oficiales regulares en 1919 a 4 500 frente a los 2 600 de 1915. Ya fuera porque respondía a una estrategia de “integración”, por el temor a la desmovilización, o porque se tratara de un mecanismo de “apadrinamiento político”, lo cierto es que esta decisión provocó la aparición de una tensión “corporativa” entre el Ejército y los gobiernos republicanos, especialmente patente en el periodo de hiperinflación, cuando, el poder adquisitivo del salario de un capitán, por ejemplo, perdió cerca de 60% respecto al de 1914.

La desconfianza del gobierno en las fuerzas armadas lo llevó a reforzar los efectivos (de 5 000 en 1911 a 11 000 en 1922) y el arsenal de la Guardia Nacional Republicana (GNR), sobre todo entre 1919 y 1921. La GNR se vio “reforzada como defensora urbana del Estado” frente a los trabajadores y el Ejército, “convirtiéndose en un elemento más de la burocracia asociada al

control del gobierno por parte de los democráticos”.<sup>13</sup> Esto alimentará una segunda tensión “corporativa”. Un primer ministro democrático se verá más tarde obligado a reducir los efectivos de la GNR, tanto para desalentar insurrecciones dentro de la fuerza policial como para apaciguar al Ejército.

El 18 de abril de 1925 algunos oficiales realizaron un primer intento organizado de golpe en nombre de las fuerzas armadas. La resistencia de algunas unidades y de la GNR abortó la insurrección. Algunos meses más tarde, un tribunal militar devolvió a los implicados a los cuarteles. El llamamiento a un interregno militar en la política parlamentaria estaba en pleno auge. La principal diferencia entre este primer golpe y el definitivo de 1926 estará en los apoyos que éste fue concitando hasta formar una “coalición antisistema”.

El liberalismo republicano fue derrocado por un ejército dividido y politizado como consecuencia de la intervención en la primera Guerra Mundial. En su seno se sucedían los llamamientos golpistas por parte de distintas facciones organizadas que abarcaban desde los republicanos conservadores hasta los católico-sociales y la extrema derecha integrista y otros apéndices fascistas especialmente influyentes entre los jóvenes oficiales.

Aunque alimentados por grupos conspiratorios, los meandros del golpe eran conocidos por la opinión pública y los partidos. Las divergencias entre los distintos componentes golpistas tuvieron de hecho un efecto más dilatorio que la resistencia del gobierno. El general Gomes da Costa, contactado por uno de los grupos de conspiradores para asumir el liderazgo, negoció en Lisboa el nuevo poder con los republicanos conservadores encabezados por el almirante Cabeçadas. La negociación se demoró algunos días, y mientras tanto, la prensa de Lisboa las describía. La resistencia militar a los golpistas fue escasa y la movilización civil, nula.

Sin duda, la forma más adecuada de estudiar la caída del régimen republicano es analizar las relaciones entre civiles y militares en el contexto de la crisis de legitimidad de la Primera República. El llamamiento por parte de la oposición a los militares fue una constante en la vida política de la posguerra. El sistema político republicano no contó con una “oposición leal”, ya que los actores políticos de la oposición llegaron al convencimiento de que la posibilidad de acceder al poder por la vía electoral era nula. El movimiento que desembocó en el 28 de mayo, considerando la heterogeneidad de los elementos que se movían entre los bastidores de la intervención militar, responde a dos de las

características apuntadas por Juan Linz en su análisis de las causas de la caída de los regímenes liberales. En efecto, se trató de un golpe militar que cooptó a una parte de la élite política del régimen liberal (la cual, igual que muchos de los militares, sólo pretendía restablecer un orden constitucional reformado) para integrar a la “oposición desleal” y excluir del poder al partido dominante. El producto fue una dictadura militar que en sucesivos golpes apartaría paulatinamente parte de su componente republicana y que demostraría ser incapaz de institucionalizarse.

La crisis de la República portuguesa en la posguerra es un ejemplo típico de las dificultades encontradas por el fascismo en sociedades con una “masificación de la política” rudimentaria. Las propias asociaciones de empleadores (que a principios de la década de 1920 habían ofrecido cierto apoyo a los nuevos y tentativos movimientos fascistas) se habían organizado sin la ayuda de mediadores dentro de un movimiento electoral y negociado directamente con los militares y con grupos de presión conservadores.

El carácter de “premasificación” de la representación sociopolítica conservadora y reaccionaria y la persistencia de relaciones clientelistas en el sistema político pueden considerarse como elementos decisivos en el tipo de transición al autoritarismo que tuvo lugar en Portugal durante la década de 1920.

## **DE LA DICTADURA MILITAR AL ESTADO NOVO DE SALAZAR**

La “dictadura sin dictador”, como la calificó un observador de la época, el régimen implantado el 28 de mayo de 1926, carecía de un proyecto alternativo al liberalismo republicano. Fruto de un compromiso transitorio mediado por los militares, en el régimen dictatorial convergieron distintos (y contradictorios) proyectos antes de su definitiva consolidación autoritaria a principios de los años treinta, ya bajo la dirección de António de Oliveira Salazar.

Las tipologías con las que se suele analizar la evolución de los movimientos de derecha durante la posguerra no ayudan a “leer” la vertiginosa sucesión de acontecimientos políticos durante los primeros años de la dictadura militar. Esto se debe en parte a la naturaleza de un sistema político republicano en el que los partidos de derecha nunca llegaron a tener mucho peso. Por otro lado, debido a

la naturaleza militar del régimen aparecieron en escena las tensiones corporativas propias de la institución militar, tensiones que no sólo agravaron muchos de los conflictos, sino que además determinaron la formación de verdaderas facciones políticas en el seno de las fuerzas armadas.

No obstante estas particularidades, pueden identificarse hasta tres corrientes político-ideológicas en la derecha portuguesa que ayudan a analizar las opciones políticas en liza durante los primeros años de la dictadura militar:

La primera fuerza, que definimos como liberalismo conservador, estaba representada por los partidos republicanos conservadores. Éstos apelaron a los militares y apoyaron el golpe con vistas a implantar un “Estado de excepción” que les permitiera reformar la Constitución de 1911 en un sentido presidencialista, limitando el parlamentarismo. Pretendían sobre todo redibujar el sistema de partidos mediante la creación de un gran partido conservador que, con el apoyo del aparato del Estado, pudiera superar, una vez restablecida la legalidad constitucional, al Partido Democrático.

La segunda, que definimos como conservadurismo autoritario, era marcadamente antiliberal. Su propuesta consistía en implantar un régimen autoritario que eliminase el viejo sistema de partidos de la República para crear uno único de vocación “integradora”. Algunos proponían establecer mecanismos de representación corporativa y otros, gobiernos de “técnicos”. Ideo-lógicamente se adscribían tanto al corporativismo católico como a un difuso corporativismo republicano, en el que no faltaba algún revisionismo de corte autoritario. Había aquí católicos, monárquicos y republicanos autoritarios.

Y, por último, la derecha radical, que proponía la ruptura total con el sistema liberal para sustituirlo por un Estado nacionalista basado en el corporativismo integral. La propensión fascista de este sector venía desarrollándose desde la inmediata posguerra. Sus partidarios intentarían crear un partido de masas aprovechando la coyuntura de la dictadura militar basado en modelos carismáticos de legitimidad. Su principal fundamento ideológico era el Integralismo Lusitano, al que añadieron elementos de origen republicano y sidonista.

Sin embargo, la situación creada por los militares provocó un notable cambio en el espectro político, de tal modo que muchas de las actitudes de los actores políticos, especialmente las de los militares, difícilmente encajan en la tipología

establecida: los itinerarios erráticos se multiplicaron.

De entre las diversas fuerzas políticas que mostraron inmediatamente su apoyo a la dictadura y que se constituirán en un contrapeso importante de la derecha radical importa destacar el Centro Católico, estrechamente vinculado a la jerarquía de la Iglesia y a algunos partidos republicanos conservadores. Algunos de éstos, como fue el caso de la Unión Liberal Republicana de Cunha Leal y del Partido Nacionalista, aunque vieron malogrados sus proyectos de manipulación del nuevo poder, se convertirían en importantes apoyos para la élite militar conservadora ante las ofensivas de los radicales de derecha.

Tanto la Iglesia como el partido del Centro Católico apoyaron desde el principio la dictadura militar. Hasta 1928, año de la subida de Salazar al poder, sus exigencias con seguridad fueron lo suficientemente importantes como para que se atendieran, ante el temor de que volviese a dimitir de inmediato, como ya lo había hecho en 1926. Por entonces, el Centro había sido un poderoso grupo de presión que sólo se desvanecería cuando Salazar, una vez consolidado su poder a principios de los años treinta, optara por neutralizarlo. Las posiciones del Centro Católico fueron decisivas para bloquear a la derecha radical en los primeros años del nuevo régimen.

No conviene, por otro lado, subestimar el peso de los republicanos conservadores. Algunas formaciones políticas tenían una notable influencia en el Ejército, especialmente entre algunos generales que llegarían a formar parte del gobierno y que más tarde se opondrán incluso a Salazar. Su importancia quedará reflejada en el compromiso del cual surgió en 1933 el texto constitucional del nuevo régimen.

Aunque muchos republicanos pasaron inmediatamente a la oposición, especialmente los adscritos al Partido Democrático, los pequeños partidos conservadores darían varios ministros a la dictadura y gozarían siempre de gran influencia. A pesar de que perdieron capacidad de intervención directa, su influencia sobre un significativo número de militares siguió siendo importante; el propio presidente, el general Carmona, siempre fue sensible a este sector.

Entre 1926 y 1930 la dictadura militar fracasó en sus sucesivos proyectos de institucionalización y fue objeto de varios intentos de golpe de Estado, tanto desde la oposición prodemocrática (el más fuerte, el del 7 de febrero de 1927), como desde la extrema derecha. Sobre el escenario del poder, republicanos

conservadores, católicos y extrema derecha jugaron su suerte. Esta última lo hizo con el apoyo de jóvenes militares que se constituyeron en una especie de poder paralelo en los cuarteles, poder que redoblaron al ser muchos de ellos nombrados para cargos de la administración local. A nivel gubernamental, sin embargo, un núcleo más cohesionado de generales conservadores, organizados en torno al general Carmona, irá consolidando progresivamente el orden autoritario. Fue en este contexto cuando Salazar, a raíz de una importante crisis financiera, fue nombrado ministro de Finanzas, negociando amplios poderes sobre los otros ministros.

El polo unificador de una corriente de corte fascista dentro de la dictadura militar estuvo en el brevísimo consulado del general Gomes da Costa, inmediatamente después del golpe. Rolão Preto intentó crear, entonces, con la ayuda de jóvenes militares y de otros exponentes de la derecha radical, una milicia de apoyo al nuevo régimen, avalada políticamente por la figura del viejo general.

En junio de 1926 Martinho Nobre de Melo, un antiguo ministro de Sidónio, de formación integrista y dirigente de la Cruzada Nun'Álvares, presentó un programa político sistemático para la nueva dictadura. Las "milicias" nacionalistas debían llegar a ser organizaciones paramilitares de tipo fascista. En julio, el general Gomes da Costa cesó a algunos ministros, acumuló carteras ministeriales y Martinho Nobre de Melo y el integrista João de Almeida llegaron al gobierno, pero dos días después los generales Carmona y Sinel de Cordes encabezaron un golpe: lo obligaron a exiliarse en las Azores, cesaron a los ministros y prohibieron la organización.

Este primer intento de instaurar el fascismo en la Dictadura Militar murió nada más nacer: el golpe exilió al viejo general y neutralizó su remodelación ministerial. Pero en los años siguientes la extrema derecha, estrechamente asociada a los "tenientes" del 28 de mayo, participó en distintos proyectos golpistas antes de fundar, en 1928, una organización más estable: la Liga Nacional 28 de Maio. Tras la caída de Gomes da Costa, el sector más radical de la "familia integrista" apostó por la creación de un partido fascista capaz de controlar la dictadura militar. Rolão Preto retomó entonces el discurso del "sindicalismo nacional".

A finales de los años veinte, el nacionalsindicalismo surgió en Portugal intentando abarcar todo el espectro político de la extrema derecha.<sup>14</sup> El

movimiento contaba con un número significativo de jóvenes oficiales —con influencia en los cuarteles y en la administración local— y con bases locales organizadas como estructuras alternativas al partido gubernamental, cuyo origen se remontaba al periodo republicano; había heredado las pequeñas milicias organizadas apresuradamente por los “barones” militares y tenía capacidad para movilizar a algunos sectores populares y de la pequeña burguesía. Fue entonces cuando Rolão Preto creyó llegada la hora de unificar esos sectores en un partido fascista —la dictadura aún era inestable, aunque ya estuviera dominada por el católico “dictador de las finanzas”, Salazar—.

Pero la alternativa de los fascistas se vería pronto ahogada por los “pactos constitucionales” acordados entre las élites militares y Salazar, quien consiguió reunir a los grupos conservadores en la Unión Nacional y controlarlos, usando la administración y la represión a los núcleos de resistencia fascistas. La tensión entre fascistas y otros grupos de presión autoritarios que dominaban la dictadura fue el reflejo en Portugal de un conflicto que caracterizó a la mayoría de los procesos de transición al autoritarismo con movimientos fascistas débiles. La rápida resolución de ese conflicto en favor del nuevo poder autoritario en Portugal y la consiguiente eliminación de los fascistas puede explicarse con base en los siguientes factores.

En Portugal existían desde la década de 1910 ideologías y movimientos políticos dispuestos a colaborar con los dirigentes militares de la dictadura sin poner en discusión sus funciones, valores y posición en el nuevo régimen. Como ha señalado Juan J. Linz, en una transición en la que los militares asumen un papel central, éstos, aunque sus sectores más jóvenes puedan simpatizar con los fascistas, acaban contando con las élites burocráticas y con los partidos conservadores y no con los fascistas.<sup>15</sup> Esto fue lo que ocurrió con la dictadura militar portuguesa.

Así fue como, desde posiciones de gobierno, un sector de la élite civil, formada en gran parte por profesores universitarios de Derecho y dirigida por el joven ministro de Finanzas António de Oliveira Salazar, fue negociando, no sin tensiones, la “constitucionalización” de la dictadura y la paulatina relegación de los militares. Los fascistas fueron en este proceso una “cantidad despreciable”. La existencia de una derecha autoritaria, anclada en instituciones poderosas como la Iglesia, en el grueso de la jerarquía de las fuerzas armadas y en algunos grupos de interés de los propietarios agrícolas y industriales, dejó sin espacio y opciones a este polo radical y movilizador.

## REFERENCIAS

BERMEO, Nancy

2010 “Interests, inequality, and illusion in the choice for fair elections”,  
Comparative Political Studies, 43, 8-9.

FERREIRA, J.M.

1992 O comportamento político dos militares: forças armadas e regimes  
políticos em Portugal no século xx, Lisboa, Estampa.

KURZMAN, C.

2008 Democracy Denied, 1905-1915, Cambridge, Mass., Harvard University  
Press.

LINZ, J.J.

1980 “Political space and fascism as a late-comer”, en S.U. LARSEN (ed.), Who  
Were the Fascists? Social Roots of European Fascism, Bergen, Universitæts  
Forlaget.

MARTINS, H.

1969 “Portugal”, en S.J. WOOLF (ed.), European Fascism, Nueva York,  
Vintage.

1971 “Portugal”, en M.S. ARCHER y S. GINER (eds.), Contemporary Europe:  
Class, Status and Power, Londres, Weidenfeld and Nicolson.

PINTO, Antonio Costa

2000 “Portugal: Crisis and early authoritarian takeover”, en D. BERG-  
SCHLOSSER y J. MITCHELL (eds.), The Conditions of Democracy in Europe,  
1919-1939, Londres, Macmillan.

2016 Os Camisas Azuis, Porto Alegre, Edipuc.

RAMOS, Rui

2002 A segunda fundação, Lisboa, Estampa.

SAMARA, M.A.

2003 Verdes e vermelhos: Portugal e a guerra no ano de Sidónio Pais, Lisboa, Notícias.

TEIXEIRA, N.S.

1992 “A fome e a saudade: os prisioneiros portugueses na grande guerra”, Penélope, 8.

WHEELER, D.L.

1978 Republican Portugal: A Political History, 1910-1926, Madison, University of Wisconsin Press.

MARTINS, 1971, p. 63.

Para una interpretación de la élite republicana portuguesa como un grupo de “intelectuales que trabajan para la revolución democrática”, véase KURZMAN, 2008.

Para una visión general de la Primera República como un régimen “revolucionario”, véase RAMOS, 2002.

BERMEO, 2010, pp. 1125-1131.

MARTINS, 1969, p. 305.

TEIXEIRA, 1992, pp. 91-114.

SAMARA, 2003.

PINTO, 2000.

PINTO, 2016.

PINTO, 2016, p. 42.

FERREIRA, 1992.

WHEELER, 1978, p. 193.

WHEELER, 1978, p. 185.

Véase PINTO, 2016.

LINZ, 1980, pp. 153-189.

## LOS CONSERVADORES DE ARGENTINA (1916-1930). DE LA ILUSIÓN CON LA DEMOCRACIA A LA DECEPCIÓN CON EL PUEBLO

\*

ERNESTO BOHOSLAVSKY

*Universidad Nacional de General Sarmiento y Conicet, Argentina*

El abogado y dirigente conservador Francisco Uriburu, Panchito, formaba parte de una familia muy acaudalada argentina vinculada a la actividad política. A mediados de 1911 publicó una nota de opinión en La Mañana, diario que dirigía y con el que batallaba en favor de la reforma electoral que promovía el presidente Roque Sáenz Peña. Allí escribió:

Entre los propósitos declarados por el doctor Sáenz Peña en su programa de gobierno, está destinado a ser el más fecundo y benéfico para la vida política de la nación, el de la reforma de la ley electoral que existe, según pueda satisfacer más cumplidamente el legítimo anhelo [...] por el ejercicio de los derechos constitutivos de la soberanía del pueblo.<sup>1</sup>

El compromiso de Uriburu con la reforma electoral se hizo explícito en su posterior paso por la función pública, cuando fue ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires entre 1912 y 1914. Su apoyo a la constitución de un moderno partido de derechas se expresó al participar en la creación del Partido Demócrata Progresista en 1914 y en su involucramiento como dirigente y candidato del partido en esa década y la siguiente. Sin embargo, en 1930 el propio Uriburu publicó otra nota en La Fronda, periódico que por entonces también dirigía. La nota se divulgó dos semanas después de que su primo, el general José Félix Uriburu, liderara el primer golpe de Estado del siglo XX en

Argentina. Su diagnóstico sobre la democracia no podía ser más negativo:

la democracia es el predominio de los mediocres cuando no de los peores. Para que estos peores o más incapaces logren plenamente sus aspiraciones sólo necesitan el voto rodeado de estos tres recaudos: universal, secreto y obligatorio. En otros términos, la funesta ley Sáenz Peña.<sup>2</sup>

¿Qué pasó en esas dos décadas? ¿Qué recorrido hicieron Francisco Uriburu y, con él, el conservadurismo argentino durante las presidencias de la Unión Cívica Radical entre 1916 y 1930? En esos años el conservadurismo erosionó poco a poco sus vínculos ideológicos con el liberalismo y el reformismo y acentuó su carácter más reaccionario. Giró tanto hacia una revisión teórica autoritaria y excluyente del orden político como en impugnaciones concretas contra el gobernante partido radical. A finales de los años veinte arrojaron las críticas extremas de los conservadores a la participación política popular y a la viabilidad de la democracia como principio universal, pero también como norma para la vida política argentina en particular. Esas relecturas conservadoras tenían distintos tonos: podían descansar en la promoción del militarismo, en la restauración de jerarquías sociales supuestamente perdidas, en la reducción del derecho al sufragio según se poseyera cierto nivel de cualificación o de ingresos, en la proclamación de un orden corporativo, re-cristianizado o de corte fascista, o en alguna combinación de todas esas propuestas. En la heterogénea coalición que apoyó el golpe de Estado de 1930 había reaccionarios entusiasmados con un nuevo orden corporativo y católico, convencidos de que la democracia nunca fue viable ni deseable, junto con liberal-conservadores que entendían que la democracia había dejado de ser viable y deseable, como era el caso de Francisco Uriburu.

El proceso está lejos de ser una exclusividad argentina, tal como varios artículos incluidos en este libro pueden atestiguarlo. Lo interesante es conocer cuáles fueron los tonos específicos del proceso por el cual los conservadores rioplatenses plantearon argumentaciones crecientemente antidemocráticas en los años veinte. Historiadores como Olga Echeverría, Christian Buchrucker y Daniel Lvovich<sup>3</sup> han interpretado los años veinte en la Argentina como un laboratorio ideológico del cual terminó emergiendo una derecha radical que en la década

siguiente promovió un orden político autoritario y antiliberal. Un conjunto de “intelectuales autoritarios” como Leopoldo Lugones y Manuel Gálvez elaboró una crítica demoleadora del orden democrático, cuyo final fue celebrado tras el golpe de Estado de septiembre de 1930. Los procesos ideológicos vividos durante los gobiernos radicales entre 1916 y 1930 (crecimiento de la actividad sindical, el desacople de intereses estatales y de la clase dominante, la expansión del miedo rojo, etc.) habrían incubado el posterior nacionalismo autoritario y antiliberal. Fernando Devoto, por el contrario, ha considerado que la radicalidad de los planteamientos de los “nacionalistas” de los años treinta no era tal, sino que sólo expresaba una versión remozada del conservadurismo previo a 1916.<sup>4</sup> Desde su perspectiva, las novedades políticas del nacionalismo de los treinta serían más bien pocas: “es una culminación de un largo proceso iniciado en el otoño del orden conservador. Vuelto hacia el pasado más que hacia el porvenir, a su modo expresará mucho de aquella Argentina que lentamente se desintegraba ante el mundo nuevo”.<sup>5</sup>

Frente a esas interpretaciones, aquí se propone otra: que los procesos ideológicos vividos en los años veinte por facciones del conservadurismo argentino (partidos, intelectuales, periódicos, etc.) pueden entenderse como reacción ante el fracaso de la experiencia de reforma desde arriba del orden político y de la institucionalidad estatal de los primeros 15 años del siglo XX. La sensibilidad reformista que había tenido el conservadurismo a inicios del siglo, después de 1916 dio paso a la deriva antidemocrática de muchos conservadores en los años veinte y estimuló la gestación de una corriente nacionalista y antiliberal que tuvo eclosión en los años treinta. Concretamente, postulo que pueden identificarse dos grandes sensibilidades entre los conservadores: una, hija del reformismo del Centenario, hacía hincapié en la crítica ideológica al radicalismo e insistía en constituir organizaciones partidarias eficaces, masivas y modernas que pudiesen derrotar electoralmente a su adversario; la otra se basaba en la idea de que los radicales y sus votantes eran inferiores, defectuosos en términos raciales y culturales: su convicción de que la república estaba transitando un proceso de decadencia bajo el gobierno radical impulsó la construcción de organizaciones políticas de (y para) las élites que no participaran del juego político democrático, como ligas parapoliciales, guardias blancas y, finalmente, un golpe de Estado. Para mostrar lo dicho, este artículo se divide en tres secciones. La primera ofrece una reconstrucción del periodo que va de 1916 a 1930 y algunas de las más importantes características que tomó el proceso de democratización de la vida política argentina. La segunda se refiere a las prácticas políticas y las lecturas que diversas organizaciones, figuras destacadas y periódicos de la línea

conservadora y reformista formularon de la política nacional en los años veinte. La tercera reconstruye algunas de las voces de tono más reaccionario que se hicieron escuchar, primero, ante los coletazos de la conflictividad sindical producida en la posguerra, y luego ante la reelección del presidente Yrigoyen en 1928. Finalmente, las conclusiones retoman algunas ideas referentes a los impactos de largo plazo producidos por las maneras en las que las derechas argentinas procesaron e interpretaron esa primera experiencia de democracia de masas. Se trata de un tema clásico y central para entender la historia del siglo XX argentino: la incapacidad de la derecha para competir electoralmente, así como la fragilidad de sus convicciones democráticas.

## **ARGENTINA ANTE LA PRIMERA EXPERIENCIA DE LA DEMOCRACIA DE MASAS (1916-1930)**

El régimen oligárquico argentino experimentó una serie de reformas de gran envergadura a inicios del siglo XX. Ese proceso se inició por la convicción de que eran necesarias transformaciones que permitiesen modernizar y fortalecer los vínculos entre el Estado y una sociedad que había vivido un impactante proceso de transformación a causa de la inmigración ultramarina y la acelerada incorporación de las exportaciones agrícolas pampeanas al mercado internacional. El reformismo conservador expresaba la convicción de que se habían logrado satisfacciones socioeconómicas y se abría un tiempo de innovaciones institucionales y morales. Uno de los primeros profesores de sociología de la Universidad de Buenos Aires, Leonardo Maupas, expresó en 1912 que “hemos realizado más o menos bien las aspiraciones sociales fundamentales de seguridad personal y bienestar económico, y empezamos a suspirar por lo superfluo y más elevado”.<sup>6</sup> La literatura ha registrado que, hacia el Centenario, en 1910, distintas voces del reformismo conservador (la prensa, las revistas especializadas como la Revista Argentina de Ciencias Políticas, los líderes partidarios, etc.) se mostraban confiadas respecto de las ventajas y posibilidades que se abrían para la nación y para la convivencia política a partir del proceso de reforma.<sup>7</sup> En un libro publicado hace más de 20 años, Eduardo Zimmermann retrató con precisión algunos de los rasgos ideológicos de ese reformismo conservador que unía las cátedras universitarias con el Museo Social Argentino, el Departamento Nacional de Trabajo y los médicos higienistas.<sup>8</sup>

Hace más de cuarenta años Oscar Cornblit propuso definir a los conservadores

como aquellos que “por un lado expresan los intereses económicos, sociales y políticos de los sectores económicos privilegiados y que por el otro reciben la confianza de éstos”.<sup>9</sup> Por ello conservadurismo no equivale siempre a tradicionalismo, sino que han existido numerosos casos de despliegue selectivo de una agenda de cambios. La fuerza de las iniciativas reformistas le pareció tal al jurista español Adolfo Posada, quien en 1912 sostuvo que en la Argentina había personas conservadoras y con formación (“de mucha lectura”) a las que “no les asusta nada de lo que en todas partes se produce con el nombre de reforma social”.<sup>10</sup> Con esa pincelada, Posada daba cuenta de esa particular criatura que habitaba el cenáculo político y social argentino: los liberal-conservadores. Se trataba de una sensibilidad política que hacía propios los valores republicanos y no renegaba de la reforma siempre que trajera cambios moderados y controlables. El reformismo de los conservadores expresaba una lectura optimista sobre el futuro argentino, al que imaginaban bajo coordenadas comparables a las de los países centrales en materia de institucionalidad estatal. Al igual que en otros países de la región,<sup>11</sup> el sino de la modernización orientó el proceso de introducción de diversas agencias estatales y nuevas formas de legislación que permitieron, si no eliminar, al menos morigerar la dimensión más represiva del régimen. Esa misma preocupación puede adivinarse en voceros del catolicismo social, convencidos de la insuficiencia del recurso represivo para resolver la “cuestión social”. El reformismo conservador argentino partía de la creencia en la capacidad regeneradora de la ley —era clara aquí la presencia del regeneracionismo español y del político conservador Antonio Maura— y en su potencial para alterar de manera significativa y permanente aquellos comportamientos considerados indeseables, contraproducentes o infértiles.<sup>12</sup> Según Zimmermann, un rasgo problemático de estas propuestas reformistas fue un “excesivo voluntarismo” al calcular las posibilidades de transformar el orden político mediante cambios legales.<sup>13</sup>

Los dirigentes del reformismo conservador creían necesario relegitimar el orden político que desde 1890 venía siendo objeto de una intensa crítica política (y motivo para alzamientos armados) por parte del Partido Radical y del Socialista; a su vez, también deseaban aislar esas críticas de las virulentas actividades de las organizaciones sindicales dominadas por facciones anarquistas. Por eso, los grupos que habían gobernado Argentina por más de tres décadas se lanzaron hacia 1910 a un proceso de apertura política expresado en una amplia reforma electoral que recibió el nombre de Ley Sáenz Peña, en referencia al presidente Roque Sáenz Peña, quien la había impulsado.<sup>14</sup> Esa sensibilidad descansaba en valoraciones positivas de la madurez de la ciudadanía argentina, el régimen

democrático y las posibles aportaciones de los partidos políticos para vincularlos, así como en el deseo de prevenir la aparición de conflictos como el de la Revolución mexicana.<sup>15</sup> La ley apuntaba a la creación de partidos políticos orgánicos y disciplinados que pudieran contribuir a la integración pacífica y ordenada de las masas a la vida política y que pusieran a ésta al mismo nivel de modernización que ya había vivido la estructura económica nacional.<sup>16</sup> La nueva legislación debía modificar de arriba abajo las prácticas electorales fraudulentas, violentas y viciadas, y evitar la acusación de que el régimen era un paradójico “gobierno elector” que se encargaba de manufacturar e imponer a sus candidatos.

La particularidad de la reforma electoral argentina no consistió en ampliar el número de los que tenían el derecho a voto; desde bien temprano en el siglo XIX la legislación bonaerense les había reconocido ese derecho a todos los varones mayores de edad, sin distinción por renta o por facultades. Lo innovador de la ley aprobada en 1912 fue que hizo secreto y obligatorio el voto masculino a partir de la incorporación automática de los varones al padrón electoral. Con ello, los votantes tuvieron el derecho y la obligación de sufragar y de hacerlo de forma secreta, evitando la tradicional regla del “voto cantado” o público. La nueva ley, aplicada por primera vez a nivel nacional en 1916, trajo consigo una ampliación del número de votantes efectivos: así, si en 1910 votaron 199 000 personas —3.8% de los 7 000 000 de habitantes—, en la primera elección presidencial bajo la nueva reglamentación de 1916 lo hicieron 745 000 —lo que constituía 8.8% del total de una población en la cual los extranjeros, no habilitados para votar, tenían un peso considerable—. <sup>17</sup> A partir de 1912 todos los partidos políticos, incluida la coalición gobernante de partidos conservadores provinciales, se enfrentaron al desafío de ganar las elecciones con esos padrones súbitamente acrecentados.<sup>18</sup> Debían ganar votos en todos los ámbitos sociales, combinando herramientas de la propaganda de masas con el apronte de las maquinarias electorales y el despliegue de redes territoriales en ámbitos urbanos y rurales. Probablemente los reformistas conservadores no tenían una cabal comprensión de lo que significaba una democracia ni de sus consecuencias: habían imaginado una mera ampliación cuantitativa de los apoyos electorales de “los inferiores” a “los mejores”, antes que una modificación sustancial de la forma de hacer política.

Algunos resultados electorales acompañaron la apuesta reformista. Si 1912 comenzó con derrotas para los conservadores en la provincia de Santa Fe y en la Capital Federal, el cierre fue mejor, puesto que en Córdoba y Tucumán

vencieron y al año siguiente retuvieron las gobernaciones de La Rioja y de la provincia de Buenos Aires (esta última, con abstención del Partido Radical). Pero en 1915 el panorama comenzó a orientarse favorablemente hacia los radicales: ya controlaban las gobernaciones de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, de fuerte peso demográfico. El triunfo conservador posterior en la provincia de Corrientes no consiguió esconder que la balanza a escala nacional se inclinaba hacia sus adversarios. El éxito del plan político asociado a la reforma electoral requería que los diversos partidos conservadores provinciales, que hasta entonces habían controlado el Poder Ejecutivo nacional, depusieran su tradicional faccionalismo y sus prácticas más patrimonialistas y constituyeran un partido político de alcance nacional, con algún tenor ideológico y con un liderazgo más institucionalizado que personalista. Ese partido tomó el nombre de Demócrata Progresista (PDP) y se creó en 1914, con la presencia de numerosas fracciones conservadoras provinciales, pero con la significativa ausencia del Partido Conservador bonaerense, controlado por el exgobernador Marcelino Ugarte y más receloso de las veleidades reformistas.<sup>19</sup> El diario La Mañana mostró su beneplácito por la constitución de ese partido y recordó que debía tratarse de uno conservador que disputara el favor de las urnas:

Constitúyase, en buena hora, un partido conservador. Pero hágase el partido dentro de las únicas normas posibles después de la gran presidencia del doctor Sáenz Peña, que ha abierto un ciclo nuevo en esta historia política, porque después del grado de perfección que hemos alcanzado no es posible que aparentemos desconocer los enunciados elementales de la verdadera democracia”.<sup>20</sup>

La apuesta por el PDP no funcionó, ya que no logró aglutinar a las dispersas fuerzas conservadoras provinciales. Por ello, el triunfo electoral le correspondió en 1916 a Hipólito Yrigoyen, histórico dirigente de la Unión Cívica Radical. Los radicales se mostraron muy hábiles y seductores en la competencia electoral, gracias a una inserción geográfica y social más profunda y coherente que la de sus oponentes conservadores.<sup>21</sup> Las modificaciones en las prácticas electorales en 1916 no fueron completas, por cuanto en las elecciones provinciales se seguían usando las viejas legislaciones. En la provincia de Buenos Aires, el distrito más importante del país, los radicales y conservadores no se

diferenciaban por tener un mayor apego a la pureza electoral.<sup>22</sup> Una vez que los radicales controlaron esa provincia en 1917, comenzaron a usar políticamente a los comisarios y agentes de policía de una manera tan explícita y escandalosa como la de sus pares conservadores.<sup>23</sup> La gran diferencia era que en 1916 y en 1928 el radicalismo yrigoyenista consiguió ganar la elección nacional sin los recursos del Estado, mientras que los conservadores no fueron capaces de hacerlo una vez desalojados del Poder Ejecutivo:

Como el tiempo demostraría, la disposición de los resortes del gobierno —y de los recursos del Estado— eran cruciales para el dominio de la “situación” de la provincia y para el mantenimiento de todo intento de hegemonía, sufragio libre mediante.<sup>24</sup>

Junto con el cambio de autoridades nacionales y provinciales, el país se vio sacudido por la Gran Guerra y la posguerra. Ello significó problemas para exportar por la falta de navíos mercantes y por el impacto de la guerra marítima y la caída de las importaciones de bienes y materias primas, así como de inversiones externas. El fin del conflicto bélico trajo consigo las complicaciones asociadas a la recuperación de la producción agrícola por parte de los países beligerantes y la consiguiente caída de empleo en las pampas.<sup>25</sup> En todo caso, a los problemas económicos de la posguerra se les sumaron los impactos de la Revolución rusa, que tuvo tempranas repercusiones en el Río de la Plata.<sup>26</sup> La intensificación de la conflictividad sindical en Argentina requirió del primer gobierno de Yrigoyen una serie de modalidades de intervención y de regulación de las relaciones entre el capital y el trabajo que éste no siempre fue capaz de ofrecer. Especialmente, el periodo de 1919 a 1922 fue intenso en conflictos laborales. El establecimiento de un régimen democrático implicó que la resolución de los choques entre capital y trabajo tuviera resultados a priori inciertos. El gobierno de Yrigoyen tendió a laudarse en los conflictos laborales, y en algunos casos a favorecer a trabajadores, con el anhelo de desplazar a socialistas y anarquistas de los gremios.<sup>27</sup> Los intereses económicos dominantes de los latifundistas dejaron de ser atendidos como una opción ineludible o excluyente frente a las demandas de otros actores, económicamente menos poderosos pero socialmente más amplios, como los empleados públicos o los cha-careros. Dos conflictos son especialmente recordados en ese marco. Por un

lado, la llamada Semana Trágica de enero de 1919, cuando a algunas huelgas de trabajadores metalúrgicos en la ciudad de Buenos Aires les siguió el despliegue de una vasta represión militar y paramilitar, que incluyó las primeras expresiones de “miedo rojo” —en alusión a la Revolución bolchevique—sazonadas de denuncias antisemitas acerca de la existencia de una conspiración judeo-soviética. Por el otro lado, la Patagonia Trágica, una durísima campaña del 7º Regimiento de caballería contra esquiladores y peones rurales en huelga en el sur del país, que produjo cientos de fusilamientos clandestinos a finales de 1921 e inicios de 1922. Como resultado de ambos episodios se crearon o se ampliaron las organizaciones de guardias blancas conocidas como Liga Patriótica Argentina (LPA), que ejercía la represión a los trabajadores por mano propia.<sup>28</sup>

La unidad que los conservadores no consiguieron para la elección de 1916 tampoco pudieron obtenerla en posteriores comicios: en 1921 las fuerzas conservadoras crearon la “Concentración Nacional de Fuerzas Opositoras” bajo el liderazgo del Partido Demócrata de Córdoba, pero no lograron incorporar al PDP ni a los radicales disidentes, por lo que su derrota en 1922 fue más amplia que en 1916.<sup>29</sup> Sus 200 000 votos no hicieron mella en los 450 000 sufragios del candidato presidencial radical, Marcelo T. de Alvear, quien gobernó el país hasta 1928. Su presidencia estuvo más marcada por los desafíos entre los radicales que por la presión de las fuerzas de derecha. Si bien el radicalismo tenía antes de 1916 una vida interna muy conflictiva, los triunfos electorales posteriores exacerbaron esa tendencia en los ámbitos local, provincial y nacional.<sup>30</sup> Una porción significativa del Partido Radical, cercana al presidente Alvear y de tono más moderado y conciliador, se afirmó como “antipersonalista”, esto es, contraria al liderazgo de Yrigoyen. Las tensiones entre ambas facciones condujeron, finalmente en 1924, a la ruptura del radicalismo. El Partido Radical antipersonalista incluía a distintas corrientes y dirigentes provinciales —muchos de ellos con orientaciones conservadoras y un estilo de liderazgo tan personalista como el del propio Yrigoyen—, como los lencinistas mendocinos, los bloquistas de San Juan, los veristas en Tucumán, los “verdaderos” de La Rioja y los seguidores de Benjamín Villafañe, gobernador de la norteña provincia de Jujuy en 1924.<sup>31</sup> Los antipersonalistas se sumaron en 1927 al frente electoral conservador denominado Confederación de las Derechas, pero no impidieron la consagración plebiscitaria de Yrigoyen como presidente en 1928. Sus 840 000 votos superaron por mucho los 440 000 de la Confederación.

Por entonces, un presidente octogenario mostró incapacidad para gestionar la administración nacional con los reflejos de su anterior gobierno, y sobre todo se

vio forzado a enfrentar los severos efectos de la crisis económica de finales de 1929. Desempleo, caída de divisas y reducción de inversiones y de préstamos externos complicaron sobremanera la economía nacional y terminaron empujando el país a una crisis económica y política severa. Las lecturas de las bancadas opositoras y de la gran prensa se concentraron en indicar que el agravamiento de la crisis obedecía a la desafortunada gestión del Poder Ejecutivo. Fue en ese marco cuando el 6 de septiembre de 1930 el presidente y el vicepresidente fueron obligados a renunciar tras la llegada a la Casa Rosada del general José F. Uriburu al mando de unos pocos jóvenes reclutas del Colegio Militar. El golpe fue convalidado por la Suprema Corte de Justicia y dio paso al inicio de un proceso de restauración de los conservadores en el Poder Ejecutivo nacional. La proscripción de los radicales, la violencia política y el fraude acompañaron el tempo político de los años treinta, marcando un proceso de retroceso de los avances vividos en la ciudadanía desde 1912. ¿Cómo fueron vividos los 14 años de gobiernos radicales por parte de las derechas argentinas?, ¿De qué forma se vieron afectadas las sensibilidades de las élites por la intensificación de la conflictividad laboral, por la pérdida de control del Poder Ejecutivo nacional y por la impotencia electoral frente al yrigoyenismo durante este tiempo?

## **LOS CONSERVADORES: DEL REFORMISMO ENTUSIASTA A LA OPOSICIÓN DESCORAZONADA**

La sacudida de 1916 produjo una derecha fragmentada, paralizada e ineficaz para frenar la iniciativa, el empuje y las pretensiones del presidente Yrigoyen. Muchos conservadores quedaron con la sensación de que su experiencia de reformismo controlado, promovido por ellos, los había conducido al peor de los escenarios posibles: gracias a la Ley Sáenz Peña, en lugar de legitimar su dominación política, terminaron cediendo el control del gobierno nacional —y posteriormente los provinciales— a los radicales.<sup>32</sup> A partir de entonces las voces conservadoras se encontraron con que resonaban en la prensa, en el Congreso —en particular en el Senado— y en algunos gobiernos provinciales: sin embargo, estos dos últimos fueron sistemáticamente atacados por el yrigoyenismo a fuerza de intervenciones federales que le quitaron su base de sustentación. La falta de unidad electoral de los hombres de las derechas no se reflejó en el Congreso, donde mostraron mayor coordinación y coherencia ideológica, pues en 1919

crearon mecanismos de coordinación entre las bancadas conservadoras provinciales.<sup>33</sup>

Los diarios más importantes de la época, *La Nación* y *La Prensa* fueron férreos críticos del yrigoyenismo y voceros del conservadurismo.<sup>34</sup> Ambos medios eran los más prestigiosos en la década de 1920 y su autoridad política sólo se puso en duda durante el primer gobierno peronista, en la década de 1940. Estos órganos eran propiedad de familias patricias, y en sus páginas se reflejaban los intereses de los grupos dominantes ligados a la gran propiedad rural, a las actividades financieras y al comercio exterior. Los dos diarios tenían la capacidad para definir gran parte de la agenda política cotidiana al incidir sobre la opinión pública de sectores altos y medios del país.

Las críticas de los conservadores en el Congreso y la prensa durante la primera presidencia de Yrigoyen se concentraron en dos temas. En primer lugar, las cuestiones referidas a la violación o el forzamiento de reglas constitucionales por parte del presidente. Tal era el caso de las recurrentes intervenciones federales o las ausencias de los ministros en las interpelaciones parlamentarias.<sup>35</sup> Como mostró Maristella Svampa, el gobierno yrigoyenista recibió críticas muy fuertes por parte de los opositores porque usaba un estilo político alejado del tradicional juego oligárquico, solemne y formalizado.<sup>36</sup> De esa opinión participaron tanto los conservadores como los radicales contrarios a Yrigoyen. Fue el caso de Benjamín Villafañe, quien en 1922 publicó un libro cuyo título, *Irigoyen, el último dictador*, no dejaba mucho margen para imaginar su ubicación ideológica.<sup>37</sup> Desde su punto de vista, la Ley Sáenz Peña debía ser defendida pese al hecho de que circunstancialmente permitía la aparición de “consecuencias funestas”:

Desesperados, los ciudadanos que aman a su país ante la calamidad en que se ha traducido su gobierno, llegan hasta renegar de la conquista más trascendental alcanzada por el pueblo argentino en los últimos sesenta años —la ley Sáenz Peña— [...] Debemos defendernos de dos errores que, de arraigarse en la mente popular, podrían tener consecuencias funestas. El pueblo cuando se dictó la ley electoral en vigencia y de tiempo atrás, estaba capacitado para hacer uso de ella. El desastre es consecuencia de varios factores ajenos a su capacidad [...] Se trata simplemente de un percance, del que no están libres en su vida ni las naciones ni los hombres.<sup>38</sup>

El segundo objeto de crítica eran los supuestos vínculos entre el gobierno y la agitación sindical, un tema súbitamente actualizado por causas locales e internacionales. Como se señaló, la política yrigoyenista no era obrerista, pero se apartó del tratamiento exclusivamente policial de los conflictos laborales. Su creencia, de origen krausista, de que el Estado debía promover la armonía entre las clases en lugar de reprimir a los trabajadores<sup>39</sup> y alentar reformas sociales (concretadas o insinuadas en proyectos legislativos), fue percibida luego de la Revolución rusa como “obrerista” por grupos conservadores y sectores de la clase dominante.<sup>40</sup> Éstos eran de la convicción de que el presidente Yrigoyen no era parte del “nosotros” de la élite: sus gestos y actitudes “demagógicas” lo acercaban más a “ellos”.<sup>41</sup> Ese “antibolchevismo sin comunistas”, al decir de Alain Rouquié, suponía que, si el maximalismo había avanzado, era a causa de la tibieza del gobierno yrigoyenista para atender las necesidades de la “defensa social”.<sup>42</sup> Otros iban más lejos y se preguntaban si no había alguna oscura alianza entre los radicales y los “maximalistas” (vocablo con el que se llamaba lo mismo a los anarquistas, a los anarcocomunistas y a los comunistas) destinada a desquiciar las instituciones.<sup>43</sup>

Las élites argentinas, con una sensación de acorralamiento tras la Revolución rusa, comenzaron a ver los conflictos sociales como una escalada que conducía a una debacle social. El “miedo rojo” les hizo mirar de una manera más crítica diversos episodios internacionales y locales. Si hasta la Semana Trágica de 1919 La Nación había caracterizado a los trabajadores urbanos como “simpáticamente socialistas”,<sup>44</sup> los miedos desbocados impulsaron una relectura del vínculo entre conflicto social y régimen político. De igual manera, las interpretaciones locales sobre la Revolución mexicana comenzaron a quedar condicionadas por las cercanías (imaginadas o posibles) con el estallido bolchevique de 1917 y con el surgimiento de una sensibilidad antiimperialista entre intelectuales y universitarios vinculados a la Reforma Universitaria de 1918.<sup>45</sup> La “demagogia radical” era considerada una forma espuria de trasladar el conflicto de clases al sistema político y presionar sobre los procesos de toma de decisiones en el Estado. La Nación creía que la amenaza al orden social e institucional de los argentinos se producía porque el electoralismo hacía que los radicales fueran susceptibles a las presiones de las organizaciones obreras.<sup>46</sup> En el marco de las huelgas patagónicas de 1921 reapareció la idea de que los desórdenes eran resultado de la demagogia radical: “la audacia de los asaltantes no es más que una de las consecuencias del desdén con que se mira a aquellas zonas, quizás

porque en ellas no se vota”.<sup>47</sup>

Según los conservadores, un gobierno preocupado sólo por satisfacer de manera demagógica a las poblaciones urbanas se había desinteresado por las regiones alejadas de la capital, en las que no se votaba. Para ellos, el gobierno de los radicales era de incapaces y advenedizos carentes de otro mérito que la obtención de votos gracias a la dádiva y la coerción. En su interpretación, los conflictos en la Patagonia no habrían ocurrido de no ser por la inacción, la dejadez y la ineptitud del Poder Ejecutivo, que actuó tarde y mal.<sup>48</sup> En definitiva, esas voces conservadoras expresaban la idea de que los radicales eran naturalmente inhábiles o perjudiciales para la función pública: eran malos gobernantes porque carecían del arte y de la experiencia de gobernar, de un linaje de servicio público y de una formación adecuada. Improvisación, electoralismo, demagogia, desprolijidad y cortoplacismo guiaban a los gobiernos radicales. Sin embargo, éstas no fueron las críticas más feroces que el universo conservador hizo llegar: las voces más estridentes e incluso antidemocráticas se intensificaron hacia el final de la década de 1920.

## **DECADENCIA, RACISMO Y ELITISMO**

A diferencia de la crítica política que hacían los diputados del Partido Demócrata de Córdoba o del Conservador bonaerense, hubo otras figuras de las derechas que en los años veinte se lanzaron de lleno a una impugnación cultural de la democracia por creerla una entidad decadente. Sus lecturas racializadas de la vida pública e histórica argentina escapaban al más tradicional conservadurismo-liberal de las élites y evidenciaban el peso creciente de nociones provenientes del catolicismo integrista o del fascismo. Periódicos, escritores, políticos e instituciones religiosas usaron una retórica reaccionaria y contrarrevolucionaria, que percibía a los presidentes radicales —especialmente a Yrigoyen— y a sus votantes como expresión de un problema más cultural que político. Entre estas figuras destacaban el escritor Leopoldo Lugones y el jurista y político Carlos Ibarguren.<sup>49</sup> Entre los periódicos se pueden mencionar *El Pueblo*, *La Fronda* y *La Nueva República*. Sobre el final de los años veinte varios de estos actores se unieron a organizaciones políticas que fomentaban la violencia callejera y la conspiración con militares para acorralar al segundo gobierno de Yrigoyen. Es significativo que varios de los que abrazaron esas caracterizaciones pocos años atrás se habían entusiasmado con el reformismo conservador y habían apostado a

la constitución de un moderno partido de derechas.

*La Fronda fue sistemática y acérrimamente antiyrigoyenista, e hizo gala de un léxico racista para referirse al presidente, su gabinete y sus electores. Su estilo socarrón y cínico la alejaba del público lector menos interesado en la política y lo colocaba en el campo de la prensa explícitamente política y facciosa. Sobrevivió sin publicidad oficial y mantuvo una postura que, como expresó la inteligencia estadounidense, le permitía “play the bulldog in the arena of the Argentina press”.<sup>50</sup> Los redactores ponían el acento racial y socialmente hiriente en el carácter plebeyo, aindiado, animalesco o afrodescendiente (“cacique”, “peludo”, “pardo”, “pardejón”, “plebeyo”, etc.) del presidente. Vayan aquí unas muestras de su lenguaje: “nuestro pardejón es de una pasividad encantadora. Deja que prospere el mal, que cunda el tratamiento salvador”;<sup>51</sup> otra: “el Congreso Nacional, cuya misión es consistir en ser el receptáculo de los odios bastardos del cacique y los desahogos violentos de la tribu ministerial”.<sup>52</sup> Y una más:*

[Yrigoyen simboliza] la subversión de todos los valores, el imperio de la mediocridad y de la mulatez intelectual y la epidemia de charlatanes disfrazados de jacobinos efervescentes, la transformación de la República en una estancia, cuyo capataz mestizo, torvo y de mala entraña [...] Es el tipo inconfundible del caudillejo centroamericano, que ha envilecido y desacreditado la civilización de todo el continente.<sup>53</sup>

Algunas de esas voces de la prensa conservadora fueron especialmente vitriólicas. Con evidente —aunque discutida— influencia de Charles Maurras y la Action française, La Nueva República, cuyo subtítulo era Órgano del nacionalismo argentino, expresó desde 1927 las lecturas más autoritarias de la época.<sup>54</sup> El Pueblo, por su parte, reflejaba las posiciones del episcopado argentino, algunos de cuyos miembros eran accionistas del periódico.<sup>55</sup> Defendía la idea de que Argentina vivía una degradación moral provocada por el alejamiento de las raíces católicas de la nación. Ya a finales de 1921 postulaba que

La república está enferma hace mucho tiempo, porque habiéndose infiltrado el virus de la inmoralidad sus médicos no han querido comprender la excelencia de las inyecciones cristianas, únicas capaces de enriquecer su sangre debilitada, dotándola de nuevos elementos de depuración social.<sup>56</sup>

Estos periódicos y algunos escritores y políticos resentidos con su falta de éxito percibían el triunfo del radicalismo como una expresión específica de una decadencia de más larga trayectoria, de la cual extraían una serie de “lecciones” para la vida política contemporánea. Esa toma de postura era centralmente de crítica a esa supuesta decadencia,<sup>57</sup> por cuanto identificaba en el presente una situación de descomposición respecto de un tiempo áureo pasado. Como mostró Pierre-André Taguieff, todo discurso de rechazo a la decadencia nacional es también un llamado a la acción por cuanto aspira a restaurar a la entidad política y cultural amenazada por el “enemigo interno”.<sup>58</sup> Los conservadores argentinos creían encontrar la decadencia en el abandono de las raíces nacionales y de las jerarquías sociales naturalizadas por parte de un régimen político que igualaba siempre hacia abajo. Las metáforas orgánicas, sanitarias y biologicistas estaban a la orden para describir la putrefacción moral argentina. La crítica a la supuesta decadencia cultural nacional se transmutaba con relativa sencillez en una lectura antidemocrática de la política. Cruda y sinceramente Benigno Ocampo, antiguo secretario del Senado, describió la asunción presidencial de Yrigoyen con símiles que evocaban el dominio de Juan Manuel de Rosas a mediados del siglo XIX en la provincia de Buenos Aires. Según Ocampo, desde 1916 la Casa Rosada estaba tomada por la chusma:

Han desenganchado los caballos y han arrastrado la carroza presidencial vociferando injurias y lanzando vivas. Parecía el carnaval de negros. Hemos calzado el escaquin de baile durante tanto tiempo y ahora dejamos que se nos metan en el salón con botas de potro”.<sup>59</sup>

El diagnóstico sobre la historia y la vida política nacional no podía ser más pesimista. En 1927 La Fronda estableció una correlación directa entre la decadencia moral, el triunfo electoral del radicalismo y el ascenso social de

sectores subalternos. Decadencia y democracia significaban trastocar las jerarquías, vulgarizar lo elevado, confundir las calidades y contaminar lo culto con lo masivo y chabacano.

Nos hemos alejado enormemente de nuestra gentileza tradicional; nuestros valores espirituales han ido alejándose en razón inversa de nuestros progresos materiales.<sup>60</sup>

Nunca la política se vio tan llena de carcoma y putrefacción. El interés individualista sustituye las ideas, los sentimientos, la honradez. La vieja levadura hispánica parece diluirse sin fuerzas. ¿Acaso la culpa de todo esto no es también el aluvión que nos vuelca miles de mercantes sin amor al país, a sus luchas y a sus ideales? ¿No se encontró esa masa con ambiciones del mulataje argentino, del mestizo que en su afán de subir, de ser algo, es capaz de cualquier delito? Ese contubernio casual se hizo peludista, después de la sanción electoral [...] La ola electoralista ha confundido los valores, apagó las luces y produjo un verdadero caos moral. Las jerarquías que representan la cultura y civilización de todo pueblo están rotas [...] La clase que dirigió desde el año 1810 pasa hoy por un inexplicable eclipse. Se han perdido aquellos varones que antes de llegar a las altas posiciones públicas creían vergonzoso presentarse sin haber dejado la huella de sus obras.<sup>61</sup>

Su diagnóstico sobre la cultura, la política y la sociedad argentina venía muy marcado por una crítica a la supuesta decadencia nacional. En 1921 aseguraba que Argentina había devenido en un “país de cafres”<sup>62</sup> o en una “una tierra bárbara, más semejante a una colonia africana que a una democracia americana”.<sup>63</sup> Diversos políticos y periódicos conservadores caracterizaron a los gobiernos de Yrigoyen como “bárbaros” y al servicio de indios y de negros.<sup>64</sup> La centralidad de las críticas ad hominem contra Yrigoyen no debe ocultarnos el hecho de que en ellas el presidente actúa como una metáfora de lo que los conservadores pensaban de la democracia política, la activación política de los sectores populares y la legalidad y legitimidad de los mecanismos político-partidarios para llegar a puestos de poder. La extensión del sufragio, la incorporación de sectores subalternos a la práctica política y la expansión del consumo fueron percibidas como procesos niveladores que borran toda

distinción social. La movilidad social ascendente era considerada un ingreso atropellado, indecoroso e injusto a claustros exclusivos de las élites. Esta mirada antipopular y clasista percibía decadencia en todo lo que el viejo presidente radical tocaba. Y si bien el antiizquierdismo ya había dado sus primeros pasos desde la conformación de la LPA en 1919, vale la pena destacar que los conservadores seguían teniendo como principal adversario ideológico y político al yrigoyenismo, más que a las organizaciones socialistas, comunistas o —las decaídas— anarquistas.

El triunfo electoral de Yrigoyen en 1928 no sorprendió a los conservadores — aliados por entonces a los radicales antipersonalistas— por ser imprevisible, sino por su magnitud.<sup>65</sup> La tercera derrota al hilo en las elecciones presidenciales condujo a un incremento en la amargura de las reflexiones sobre la calidad de la cultura ciudadana argentina y sobre la conveniencia de mantener el régimen electoral impuesto en 1912. Si la apuesta por constituir mayorías electorales había fracasado ante la enorme habilidad y venalidad de los radicales —y también por los faccionalismos de los propios conservadores—, la opción política a seguir sería el armado de minorías decisivas, resueltas y autoseleccionadas. Nada de partido moderno, reformista o de masas: regreso de las jerarquías era la voz de la hora a finales de los años veinte. El ascenso del fascismo en Italia, el éxito de Action française y las dictaduras de Primo de Rivera en España y de Ibáñez en Chile daban cuenta de un panorama internacional bien distinto al del Centenario en 1910, que había estado marcado por el optimismo y el evolucionismo.

La contracara de la impugnación de la decadencia es la identificación del actor encargado de llevar adelante el programa político de restauración. Algo de ello es posible de identificar en la imagen que los redactores de La Nueva República o de La Fronda reservaban para sí y para los votantes del conservadurismo. Las nociones aquí empleadas hacían referencia a la nobleza, el espiritualismo y a la distinción que los caracterizaría. “Hidalgos”, “señores”, “élite” y “minoría” eran los términos con los que se presentaban: “No hemos de hacer patriotismo sino con señores, en el sentido íntimo y moral de esta palabra; con hombres sin calidad, sin valor, sin la aristocracia de las grandes inspiraciones y las nobles realidades tendríamos siempre que luchar con un pueblo miserable”.<sup>66</sup> La noción de élite o de minoría autoseleccionada guiaba la manera en la cual estos hombres imaginaban sus tareas de restauración de las jerarquías. En su periódico, Ernesto Palacio escribió: “La Nueva República representa en el país una minoría. No debemos, ni podemos, ni queremos ser sino una minoría”.<sup>67</sup> Un programa

político basado en la promoción de la calidad sobre el número, de la estética sobre la justicia y de la autoridad frente a la demagogia construía un interlocutor, un lector, igualmente autoritario y excluyente. No es casual que en 1929 y 1930 surgieran las primeras organizaciones de extrema derecha con signos claros de giro hacia el fascismo. La Liga Republicana —luego devenida Liga de Mayo— y la Legión Cívica Argentina se constituyeron en grupos de choque contra el gobierno de Yrigoyen primero y luego de defensa de la dictadura instaurada en 1930.<sup>68</sup> Sus consignas de república sin democracia, su composición social centrada en grupos propietarios y los espacios de sociabilidad compartida con destacados hombres y periódicos del universo de las derechas nos llevan a suponer que se trata, con todo, de una radicalización ideológica de grupos de élite más que de sectores medios desclasados o resentidos por una vittoria mutilata, como la que impulsó a las camisas negras en Italia.

## CONCLUSIONES

Como mostró Olga Echeverría, el caso de Carlos Ibarguren, primo de Francisco y de José Félix Uriburu, ilustra a la perfección el paso que vivieron muchos hombres del reformismo liberal-conservador en Argentina a lo largo de los años veinte.<sup>69</sup> Ibarguren nació en el seno de una familia patricia salteña, muy vinculada al ejercicio de las funciones públicas, el periodismo y la docencia universitaria. Tuvo a inicios del siglo XX especial figuración en el campo del derecho, lo cual le valió su designación como ministro de Justicia e Instrucción Pública en 1912. Fue un entusiasta defensor de la reforma electoral llevada adelante por el gobierno que integraba, así como de una política social más agresiva en materia de seguro social, cuidado de la niñez y refuerzo del mutualismo. Derrotada en las urnas su candidatura a la vicepresidencia por el PDP en 1916, se convirtió en un feroz crítico del gobierno yrigoyenista,

“en un discurso lleno de perplejidad y desprecio que no lograba asimilar que en los pasillos de la Casa Rosada y en la antesala del despacho presidencial las diferencias sociales y culturales no operaban como una barrera de diferenciación y separación entre las clases.<sup>70</sup>

Ese mismo Ibarguren participó en el golpe de Estado de 1930 y fue designado interventor federal en la provincia de Córdoba. Buena parte de su esfuerzo político en ese cargo consistió en promover una nueva constitución de corte corporativo y autoritario que diera por tierra con los partidos políticos y el individualismo liberal. Es cierto que la trayectoria de Ibarguren tiene algo de particular y de intrínsecamente personal, por cuanto su giro ideológico está inextricablemente unido a su sensación de frustración respecto de mandatos familiares (y lo propio puede decirse de su primo Francisco Uriburu). Pero hay elementos que son compartidos con otros actores del conservadurismo argentino, quienes entre 1916 y 1930 asumieron posturas crecientemente defensivas y reactivas, cuando no fascistas.

El tiempo del Centenario los había invitado a proponer y discutir iniciativas tendientes a modernizar las prácticas políticas y electorales, a institucionalizar las relaciones entre capital y trabajo, a mejorar el régimen federal y a enfrentar de manera decisiva los problemas enhebrados detrás de la “cuestión social”. Esas apuestas descansaban en la percepción de que las reformas eran a la vez deseables, necesarias y controlables. Periodistas, intelectuales, políticos y organizaciones que oportunamente participaron del régimen oligárquico alentaron —en algunos casos sólo toleraron— reformas de la legislación laboral, sanitaria y política a inicios del siglo XX. Lo hicieron a partir de la convicción de que ello redundaría en una dominación política y social más consensuada, más “moderna” y, por lo tanto, más estable. Apostaron a una democratización controlada y a una institucionalidad que tratara de manera moderna la cuestión social.

Nada de eso ocurrió por cuanto la apuesta mayor, el control legitimado del Poder Ejecutivo, fue sabotada por el triunfo radical. En 1916 los conservadores se vieron forzados a adoptar de manera imprevista e involuntaria un papel opositor a nivel nacional, aunque lograron controlar o resistir mejor en algunas administraciones provinciales. Por ello, 15 años después varios de los actores que se habían entusiasmado con esas iniciativas reformistas clamaron abiertamente por el final de la experiencia democrática argentina. Las valoraciones que se fueron haciendo cada vez más explícitas sobre el final de la década de 1920 traslucen una antropología negativa respecto del pueblo argentino: las convicciones acerca de que la “demagogia yrigoyenista” podrían subyugarlo ad infinitum conducían prontamente a una crítica de la democracia. Ante sus ojos aparecía un pueblo más incapaz e inmaduro de lo que había sugerido el optimismo de 1910, con el agravante de que parecía más

envalentonado y desafiante a causa de una agitación cuyo origen inevitablemente se ubicaba por fuera de las fronteras nacionales.

La pérdida del Ejecutivo por parte de los representantes de la clase dominante incentivó lecturas de la realidad y la historia nacional en una clave decadentista. La oposición de derecha sostenía que la democracia, al estimular la participación popular y la autonomía cultural de las masas, había vulnerado un orden “natural” al permitir el ingreso a la Casa Rosada de masas (“con botas de potro”) demagógicamente guiadas; sería cuestión de tiempo para que ello terminara por desvirtuar el régimen republicano y le ofreciera un caldo de cultivo al extremismo. Como escribió Sandra McGee Deutsch, los opositores a Yrigoyen “identificaban el aparentemente perpetuo liderazgo yrigoyenista con [...] la dictadura de las masas que indefectiblemente, llevaría al país hacia el comunismo”.<sup>71</sup> Los políticos conservadores se asustaron aún más por el avance del maximalismo sindical que creyeron ver tanto en la Semana Trágica de 1919 como en las huelgas de Santa Cruz de 1921. Su resentimiento antidemocrático de los años veinte testimonia las reacciones a la apertura del horizonte de la utopía socialista en octubre de 1917, al poderío electoral yrigoyenista, a la democracia de masas, a la movilidad social ascendente pero también a la propia frustración de haber alentado reformas políticas e institucionales que terminaron afectando severamente sus intereses.

De allí que a lo largo de los años veinte hubo muchos conservadores que se radicalizaron y en algunos casos abrazaron alguna versión del fascismo, del catolicismo integrista o del autoritarismo moderno de posguerra. Al acentuar la preocupación social por recomponer las jerarquías sociales, echaron mano del racismo y exigieron el despliegue de represión estatal o la efectuaron por mano propia por medio de la LPA. La ampliación de la participación política dejó de ser vista como un propósito loable y pasó a ser entendida como un problema (demagogia, electoralismo, etc.) que debía ser resuelto de alguna manera. Finalmente, la frustración ante sus recurrentes derrotas electorales los empujó en 1930 a resolver manu militari su propia incapacidad para generar hegemonía.

Las opciones políticas que se plantearon implicaban la alteración significativa de la ciudadanía política de iure o de facto. Entre las primeras se contaba la posibilidad de reformar la Constitución, de revertir la Ley Sáenz Peña para instaurar el voto censitario o por jefe de familia, o si no, de construir un orden social y político basado en corporaciones, en la Iglesia, en el fascismo o en la restauración de las jerarquías borradas por las “ambiciones del mulataje

argentino”. El golpe de Estado de 1930 y el principismo excluyente de La Nueva República expresan esas orientaciones ideológicas. Las otras opciones —a posteriori, las más usadas y promovidas en los años treinta— eran un conjunto de prácticas políticas autoritarias, como el fraude, la violencia política y la proscripción de candidatos y partidos opositores, que no fueron acompañadas por una ruptura formal ni constitucional con los principios de la democracia liberal: ni siquiera la proclama del golpe de Estado recurrió a nociones alternativas. En esa década se abrió el tiempo de la restauración conservadora más que del fascismo, que no pasó de ser fuerza ruidosa, pero menos influyente que los conservadores en Argentina.<sup>72</sup> Esas derechas autoritarias, recelosas de la democracia y de las capacidades cívicas y culturales del pueblo argentino terminaron conviviendo con —que no remplazando por falta de consenso— la farsa democrática vivida en el país hasta mediados de los años cuarenta. Los años treinta hicieron evidente para las élites, como mostró Tulio Halperín Donghi, que la democracia era el único juego político legítimo, pero que serían derrotadas si lo jugaban leal o plenamente.<sup>73</sup>

Resulta tentador especular sobre los posibles impactos en el mediano y el largo plazos de este rápido desencanto de la derecha liberal-conservadora con el régimen democrático a lo largo de las presidencias radicales. Es interesante revisar ese asunto por cuanto otros países de la región no tuvieron el mismo derrotero: en Chile, los partidos Liberal y Conservador, y en Uruguay, el Partido Nacional y el coloradismo no batllista no abandonaron el juego democrático pese a sus derrotas reiteradas, aunque es cierto que en su interior aparecieron recurrentemente voces que reclamaban salidas autoritarias.<sup>74</sup> Si entre 1916 y 1930 las derechas en la Argentina se mostraron incapaces de ganarle una elección nacional al radicalismo, luego de ello sólo pudieron hacerlo sirviéndose del fraude a gran escala y de la proscripción.<sup>75</sup> Ello parece haber contribuido a que desde fines de los años veinte la clase dominante buscara vías no democráticas pero sí más eficaces, para asegurar sus intereses directos: el uso de voces eclesiásticas, el fortalecimiento de las mediaciones corporativas en desmedro de las partidarias y la legitimación de recurrentes intervenciones militares para abortar procesos políticos que le desagradaban o incomodaban.

## **SIGLAS Y REFERENCIAS**

■

CE-UTDT Colección Escudé de la Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires

LPA Liga Patriótica Argentina

PDP Partido Demócrata Progresista

## *Libros y artículos*

ANSALDI, Waldo

1994 “La interferencia está en el canal. Mediaciones políticas (partidarias y corporativas) en la construcción de la democracia en Argentina”, Boletín Americanista, 44.

BARRÁN, José Pedro

2004 Los conservadores uruguayos, 1870-1933, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental.

BARTOLUCCI, Mónica, y Miguel Ángel TARONCHER

1994 “Cambios y continuidades en las prácticas político-electoral en la provincia de Buenos Aires: 1913-1922”, en Fernando DEVOTO y Marcela FERRARI (comps.), La construcción de las democracias rioplatenses: proyectos institucionales y prácticas políticas, 1900-1930, Buenos Aires, Biblos.

BISSO, Matías

2011 “Radicales, conservadores y una batalla por la cuestión local. Las elecciones municipales platenses en 1916”, en Marcela FERRARI y Nicolás QUIROGA (eds.), Historias políticas de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires.

BOHOSLAVSKY, Ernesto

2009 El complot patagónico. Nación, conspiracionismo y violencia en el sur de Argentina y Chile (siglos XIX y XX), Buenos Aires, Prometeo Libros.

2011 “El problema del sujeto ausente o por qué Argentina no tuvo un partido de derecha como la gente”, en Ernesto BOHOSLAVSKY (comp.), Las derechas en el Cono Sur, siglo XX. Actas del Taller de discusión, Los Polvorines, Universidad Nacional de General Sarmiento.

BORON, Atilio

2000 “Ruling without a Party. Argentine dominant classes in the Twentieth Century”, en Kevin J. MIDDLEBROOK (ed.), *Conservative Parties, the Right, and Democracy in Latin America*, Baltimore, Johns Hopkins University Press.

BOTANA, Natalio

1998 *El orden conservador. La política argentina entre 1880 y 1916*, Buenos Aires, Sudamericana. [1977.]

BUCHRUCKER, Christian

1987 *Nacionalismo y peronismo: la Argentina en la crisis ideológica mundial (1927-1955)*, Buenos Aires, Sudamericana.

CANCINO, Hugo

2008 “Pensamiento social, Ciencias Sociales y Modernidad en América Latina”, *Sociedad y Discurso*, 13, pp. 46-60.

CASTRO, Martín

2012 *El ocaso de la república oligárquica. Poder, política y reforma electoral, 1898-1912*, Buenos Aires, Edhasa.

CATERINA, Luis María

1995 *La Liga Patriótica Argentina: un grupo de presión frente a las convulsiones sociales de la década del veinte*, Buenos Aires, Corregidor.

CATTARUZZA, Alejandro

2009 *Historia de la Argentina, 1916-1955*, Buenos Aires, Siglo XXI.

CORIA, Juan

1927 “El problema presidencial”, *La Fronda*, 16 de enero, p. 1 (Carta al director).

CORNBLIT, Oscar

1975 “La opción conservadora en la política argentina”, *Desarrollo Económico*,

vol. 14, núm. 56.

CORREA SUTIL, Sofía

2004 Con las riendas del poder. La derecha chilena en el siglo XX, Santiago de Chile, Sudamericana.

DEVOTO, Fernando

1996 “De nuevo el acontecimiento: Roque Sáenz Peña, la reforma electoral y el momento político de 1912”, Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, núm. 16.

2002 Nacionalismo, fascismo y tradicionalismo en la Argentina moderna. Una historia, Buenos Aires, Siglo XXI.

ECHEVERRÍA, Olga

2009 Las voces del miedo. Los intelectuales autoritarios argentinos en las primeras décadas del siglo XX, Rosario, Prohistoria.

ECHEVERRÍA, Olga, y Laura REALI

2016 “Encuentros y disidencias políticas, ideológicas e historiográficas en los revisionismos rioplatenses (décadas de 1930 y 1940)”, en João Fábio BERTONHA y Ernesto BOHOSLAVSKY (eds.), Circule por la derecha. Percepciones, redes y contactos entre las derechas sudamericanas, 1917-1973, Los Polvorines, Universidad Nacional de General Sarmiento.

FALCÓN, Ricardo

2000 “Políticas laborales y relación Estado-sindicatos en el gobierno de Hipólito Yrigoyen (1916-1922)”, en Juan SURIANO (ed.), La cuestión social en Argentina, 1870-1943, Buenos Aires, La Colmena.

FERRARI, Marcela

1994 “Persistencias y transformaciones en las redes de fidelidad política a través de los resultados electorales en la provincia de Buenos Aires, 1914-1921”, en Fernando DEVOTO y Marcela FERRARI (comps.), La construcción de las

democracias rioplatenses: proyectos institucionales y prácticas políticas, 1900-1930, Buenos Aires, Biblos.

HALPERÍN DONGHI, Tulio

1999 Vida y muerte de la República verdadera (1910-1930), Buenos Aires, Ariel (Biblioteca del Pensamiento argentino, t. IV).

2003 La Argentina y la tormenta del mundo. Ideas e ideologías entre 1930 y 1945, Buenos Aires, Siglo XXI.

HORA, Roy

2001 “Autonomistas, Radicales y Mitristas: el orden oligárquico en la provincia de Buenos Aires (1880-1912)”, Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, núm. 23.

KLEIN, Marcus

2000 “A comparative analysis of fascist movements in Argentina, Brazil, and Chile between the Great Depression and the Second World War”, tesis de doctorado, University of London.

2002 “The Legión Cívica Argentina and the radicalization of Argentine nacionalismo during the Década Infame”, Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, vol. 13, núm. 2.

KOZEL, Andrés

2008 La Argentina como desilusión: contribución a la historia de la idea del fracaso argentino (1890-1955), México, Nostromo Ediciones–UNAM.

Liga Patriótica Argentina

1922 El culto de la Patagonia. Sucesos de Santa Cruz, Buenos Aires, Cúneo.

LVOVICH, Daniel

1999 “La imagen del enemigo y sus transformaciones en La Nueva República (1928-1931)”, Entrepasados, núm. 17.

2003 Nacionalismo y antisemitismo en la Argentina, Buenos Aires, Ediciones B.

MALAMUD, Carlos

1995 “El Partido Demócrata Progresista: un intento fallido de construir un partido nacional liberal-conservador”, *Desarrollo Económico*, vol. 35, núm. 138.

MCGEE DEUTSCH, Sandra

1999 *Las Derechas. The Extreme Right in Argentina, Brazil, and Chile, 1890-1939*, Stanford, Stanford University Press.

2001 “La derecha y los primeros gobiernos radicales”, en Sandra MCGEE DEUTSCH y Ronald DOLKART (eds.), *La derecha argentina. Nacionalistas, neoliberales, militares y clericales*, Buenos Aires, Javier Vergara Editor.

MELÓN PIRRO, Julio César

1994 “La Ley Sáenz Peña de Ugarte, o el éxito de la reforma conservadora en la provincia de Buenos Aires”, en Fernando DEVOTO y Marcela FERRARI (comps.), *La construcción de las democracias rioplatenses: proyectos institucionales y prácticas políticas, 1900-1930*, Buenos Aires, Biblos.

MIDDLEBROOK, Kevin J.

2000 “Introduction: Conservative parties, elite representation, and democracy in Latin America”, en Kevin J. MIDDLEBROOK (ed.), *Conservative Parties, the Right, and Democracy in Latin America*, Baltimore, Johns Hopkins University Press.

NÁLLIM, Jorge

2009 “An unbroken loyalty in turbulent times: La prensa and liberalism in Argentina, 1930-1946”, *Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe*, vol. 20, núm. 2.

PADOAN, Marcelo

2002 *Jesús, el templo y los viles mercaderes*, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes.

PALACIO, Juan Manuel

2000 “La antesala de lo peor: la economía argentina entre 1914 y 1930, en Ricardo FALCÓN (dir.), Democracia, conflicto social y renovación de ideas (1916-1930), Buenos Aires, Sudamericana.

PERSELLO, Ana Virginia

2004 El Partido Radical. Gobierno y oposición, 1916-1943, Buenos Aires, Siglo XXI Editores.

2011 “Los opositores radicales a Yrigoyen”, PolHis, año 4, núm. 7.

PITTALUGA, Roberto

2015 Soviets en Buenos Aires. La izquierda de la Argentina ante la revolución en Rusia, Buenos Aires, Prometeo Libros.

ROLDÁN, Darío

2006 Crear la democracia. La Revista Argentina de Ciencias Políticas y el debate en torno de la República Verdadera, Buenos Aires, FCE.

ROUQUIÉ, Alain

1981 Poder militar y sociedad política en la Argentina, vol. 1, Buenos Aires, Emecé.

SIDICARO, Ricardo

1993 La política mirada desde arriba: las ideas del diario La Nación, 1909-1989, Buenos Aires, Sudamericana.

SURIANO, Juan

2000 “Introducción: una aproximación a la definición de la cuestión social en Argentina”, en Juan SURIANO (ed.), La cuestión social en Argentina, 1870-1943, Buenos Aires, La Colmena.

SVAMPA, Maristella

1994 El dilema argentino: civilización o barbarie. De Sarmiento al revisionismo peronista, Buenos Aires, El Cielo por Asalto.

TAGUIEFF, Pierre-André

1992 “El nacionalismo de los ‘nacionalistas’. El problema para la historia de las ideas políticas en Francia”, en Pierre-André TAGUIEFF y Delannoï GIL (eds.), Teorías del nacionalismo, Barcelona, Paidós.

TATO, María Inés

2001 “Crónica de un desencanto: una mirada conservadora de la democratización de la política, 1911-1930”, Estudios Sociales, vol. XI, núm. 20.

2004 Viento de fronda: liberalismo, conservadurismo y democracia en la Argentina, 1911-1932, Buenos Aires, Siglo XXI.

TERÁN, Oscar

2000 “El lamento de Cané”, en Vida intelectual en el Buenos Aires fin de siglo (1880-1910). Derivas de la “cultura científica”, Buenos Aires, FCE.

VIDAL, Gardenia

1994 “Los partidos políticos y el fenómeno clientelístico luego de la aplicación de la Ley Sáenz Peña: la Unión Cívica Radical de la provincia de Córdoba, 1912-1930”, en Fernando DEVOTO y Marcela FERRARI (comps.). La construcción de las democracias rioplatenses: proyectos institucionales y prácticas políticas, 1900-1930, Buenos Aires, Biblos.

VILLAFANE, Benjamín

2007 “Yrigoyen, el último dictador”, en Tulio HALPERÍN DONGHI, Vida y muerte de la república verdadera, Buenos Aires, Emecé (Biblioteca del Pensamiento Argentina, tomo IV). [1922.]

YANKELEVICH, Pablo

2003 La Revolución mexicana en América Latina. Intereses políticos e itinerarios intelectuales, México, Instituto Mora.

ZANATTA, Loris

1996 Del Estado liberal a la nación católica: Iglesia y Ejército en los orígenes del peronismo, 1930-1943, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes.

ZIMMERMANN, Eduardo

1994 “Reforma política y reforma social: tres propuestas de comienzos de siglo”, en Fernando DEVOTO y Marcela FERRARI (comps.), La construcción de las democracias rioplatenses: proyectos institucionales y prácticas políticas, 1900-1930, Buenos Aires, Biblos.

1995 Los liberales reformistas. La cuestión social en la Argentina 1890-1916, Buenos Aires, Sudamericana–Universidad de San Andrés.

### ***Periódicos y revistas***

*El Pueblo, Buenos Aires, 1921*

*La Fronda, Buenos Aires, 1919-1930*

*La Nación, Buenos Aires, 1916-1930*

*La Prensa, Buenos Aires, 1916-1930*

\* El autor agradece los comentarios formulados por Pablo Yankelevich, Clara Lida y David Jorge a la versión presentada en el Encuentro, así como las generosas sugerencias bibliográficas y documentales de Guadalupe Ballester, Matías Bisso, Martín Castro, Olga Echeverría, Ezequiel Grisendi y Daniel Lvovich.

“El problema electoral”, La Mañana, 11.VII.1911, citado en TATO, 2004, p. 17.

“Mínimum de parlamento”, La Fronda, 23.IX.1930, citado en TATO, 2004, p. 157. Del capítulo 1 de este mismo libro proviene la información sobre la biografía política de Uriburu.

ECHEVERRÍA, 2009; LVOVICH, 2003; BUCHRUCKER, 1987.

DEVOTO, 2002, pp. XI y XXVI.

DEVOTO, 2002, p. 279.

ZIMMERMANN, 1995, p. 71.

ROLDÁN, 2006.

ZIMMERMANN, 1995.

CORNBLIT, 1975, p. 600.

ZIMMERMANN, 1995, p. 71.

CANCINO, 2008, p. 60.

TATO, 2004, p. 30.

ZIMMERMANN, 1994, p. 25.

DEVOTO, 1996. HALPERÍN DONGHI, 1999, pp. 21-55, hace referencia al hecho de que, mientras estas reformas se producían, simultáneamente en Europa ocurría una expansión de lecturas más bien sombrías sobre las ventajas y la legitimidad del orden liberal-democrático y la idea de un ciudadano racional.

YANKELEVICH, 2003, pp. 125-139.

La caracterización clásica del andamiaje electoral y político de ese régimen la hace BOTANA, 1998. Para una lectura más actualizada y menos estructural del periodo, véanse CASTRO, 2012, y HORA, 2001.

CATTARUZZA, 2009, cap. 1.

FERRARI, 1994, p. 138.

MALAMUD, 1995, pp. 289-308. Ugarte boicoteó las candidaturas del PDP en Mendoza, Tucumán y la capital para mantener su lugar central en esa área del espectro ideológico. TATO, 2004, pp. 46 y 58.

“Reincidiendo”, La mañana, 29.X.1914, citado en TATO, 2004, p. 43.

PERSELLO, 2004, pp. 27-128. Asimismo, también supieron sumar líderes locales del conservadurismo que no querían apostar al perdedor. Ya antes de 1916 dirigentes radicales de la provincia de Córdoba habían comenzado a invitar —o, al menos, a aceptar— a figuras provenientes del conservadurismo capaces de brindarles una mejor actuación electoral gracias a sus viejas y criticadas prácticas. VIDAL, 1994, pp. 189-217; TATO, 2004, p. 58.

BARTOLUCCI y TARONCHER, 1994, p. 183; FERRARI, 1994, pp. 141-155; CATTARUZZA, 2009, pp. 48-50.

MELÓN PIRRO, 1994, pp. 108 y 124; BARTOLUCCI y TARONCHER: 1994, p. 171.

MELÓN PIRRO, 1994, p. 124.

PALACIO, 2000, pp. 101-150.

PITTALUGA, 2015.

SURIANO, 2000, p. 18; FALCÓN: 2000, p. 117.

Como bien explica MCGEE DEUTSCH, antes 1916 las clases altas no habían necesitado actores políticos o paramilitares que velaran por sus intereses directos en las calles. MCGEE DEUTSCH, 2001, p. 73. En particular, en el caso de Santa Cruz, la LPA tuvo un papel destacado en la asistencia y el acompañamiento a las tropas del Ejército que reprimieron a los huelguistas. Liga Patriótica Argentina, 1922; CATERINA, 1995, p. 180; BOHOSLAVSKY, 2009, cap. 3.

CATTARUZZA, 2009, p. 55; TATO, 2004, p. 60.

CATTARUZZA, 2009, p. 47.

PERSELLO, 2011, p. 128.

BISSO, 2011.

CATTARUZZA, 2009, p. 48; TATO, 2004, p. 106.

Sobre La Nación, véase SIDICARO, 1993. Sobre La Prensa, véase NÁLLIM, 2009. Hacia 1910 La Prensa tenía un tiraje de 160 000 ejemplares diarios, y La

Nación, de 100 000, según TATO, 2004, p. 21. Los agregados de la embajada estadounidense dan cuenta del peso de La Nación en la política de principios de la década de 1920: “Be considered as reliable in its information, and it is extremely rare that it prints anything which is not the fact. Its political opinions, more frequently against the Government than with it, are expressed with moderation and culture, and have naturally great weight; it is really the only paper any Government takes into consideration”, Informe de G. Wilson Rae, 22.V.1921, “Newspapers”, en Colección Escudé de la Universidad Torcuato Di Tella (CE-UTDT), microfilm “U.S. Military Intelligence Reports. Argentina 1918-1941”, University Publications of America, Frederick, Maryland, 1984, Rollo 328, p. 126.

Según la Constitución nacional, la intervención federal era potestad del Congreso mientras estuviera en sesiones ordinarias: Yrigoyen recurrentemente esperaba a que el Congreso entrara en receso para decretar intervenciones (firmó 15 entre 1916 y 1922, y otras dos entre 1928 y 1930). En 1922 todas las provincias habían sido intervenidas —algunas hasta tres veces—, salvo Santa Fe.

SVAMPA, 1994, p. 153.

Villafañe fue uno de los dirigentes políticos que luego de pasar por el conservadurismo y el radicalismo antipersonalista terminó por abandonar la creencia en el sufragio universal a lo largo de la década de 1920. Se adhirió en 1930 al golpe de Estado que depuso a Yrigoyen y participó en las organizaciones paramilitares Legión de Mayo y Legión Cívica Argentina. PERSELLO, 2011, p. 130.

VILLAFAÑE, 2007.

PADOAN, 2002.

BUCHRUCKER, 1987, p. 34.

*La Mañana usó el argumento de que muchos dirigentes radicales provenían de estratos sociales de menores ingresos que los de la élite desplazada para desprestigiar al nuevo gobierno. Lo propio puede decirse respecto de que los méritos de esos nuevos gobernantes habían sido obtenidos en los comités y en la calle, y no en la sociabilidad patricia. TATO, 2004, p. 71.*

LVOVICH, 2003, p. 138; ROUQUIÉ, 1981, t. 1, pp. 207-214.

CATTARUZZA, 2009, p. 52.

SIDICARO, 1993, p. 78.

YANKELEVICH, 2003, pp. 125-139.

SIDICARO, 1993, p. 78.

*La Nación*, 19.XII.1921, p. 4.

“Autoridades cuyo origen es el favor político, compuestas de gente que va a esas regiones en busca de la prosperidad milagrosa; justicia y policía que no inspiran ni respeto ni temor, porque su condición es el abuso y la arbitrariedad, todo eso engendra, por lógica consecuencia, la anarquía, que sólo se logró dominar cuando su violencia llegó a constituir una alarma para el país entero [...] largo abandono, debido exclusivamente a la dejadez oficial”. *La Nación*, 14.XII.1921, p. 4; 28.XI.1921, p. 4, y 18.XII.1921, p. 5. *La Prensa*, 27.I.1922.

ECHEVERRÍA, 2009, pp. 29-94 y 159-192. A ellos podríamos sumar las figuras vinculadas a los Cursos de Cultura Católica, inaugurados en 1922, y los involucrados en la revista *Criterio* al final de la década.

CE-UTDT, Microfilm “U.S. Military Intelligence Reports, Argentina 1918-1941”, University Publications of America, Frederick, Maryland, 1984, Rollo 328, fotograma 128. El diario era dirigido, como se mencionó, por Francisco Uriburu, quien utilizó su fortuna y recursos familiares para sostener la iniciativa periodística sin publicidad oficial.

“Mal crónico”, *La Fronda*, 12.XII.1921, p. 1.

“El único responsable”, *La Fronda*, 21.XII.1921, p. 1.

Juan CORIA, “El problema presidencial”, *La Fronda*, 16.I.1927, p. 1. (Carta al director).

Iniciativa editorial y política puesta en marcha entre 1927 y 1931 por Ernesto Palacio, Juan Carulla y los hermanos Julio y Rodolfo Irazusta, todos los cuales serían figuras relevantes del catolicismo y del movimiento “nacionalista” argentino de los años treinta. DEVOTO, 2002, p. 199; LVOVICH, 2003, pp. 237-266; 1999; TATO, 2001, p. 145; 2004, p. 99.

Fue fundado a principios del siglo XX por el padre Grote y hacia fines de la década de 1920 se había constituido en el portavoz del catolicismo argentino, junto con la revista Criterio. ZANATTA, 1996, p. 22.

*El Pueblo*, 18.XII.1921, p. 3.

La decadencia no debe entenderse como descripción certera de la realidad, sino como una tematización recurrente de la derecha. En el caso argentino, aparece ya tempranamente denunciada a finales del siglo XIX, según mostró Oscar Terán, en una serie de novelas y relatos producidos por integrantes de la élite. Se trata de un país que acaba de surgir, que prácticamente carece de historia, pero que, sin embargo, ya consigue tener alguna fisonomía degenerada. TERÁN, 2000. Sobre la larga tradición de identificación de una decadencia nacional en la Argentina, véase KOZEL, 2008.

TAGUIEFF, 1992, pp. 14 ss.

Citado en SVAMPA, 1994, p. 152.

“El relajamiento de nuestras costumbres”, *La Fronda*, 21.III.1927, p. 1. (Editorial).

“Hidalguía”, *La Fronda*, 27.I.1927, p. 1.

*La Fronda*, 26.XII.1921, p. 1.

*La Fronda*, 18.X.1921, p. 1. *La asimilación con África fue un tópico recurrente. En 1927 señalaron que los caudillos radicales “día a día ofrecen el triste espectáculo de los jefes de tribus bárbaras del África central”. “Los delitos del caudillismo”, La Fronda, 19.I.1927, p. 1.*

SVAMPA, 1994, p. 153.

CATTARUZZA, 2009, p. 59.

“Lucro”, *La Fronda*, 28.I.1927, p. 1. Una semana después anunció que se estaba produciendo “una reacción popular ardorosa, como si despertara en las fibras del pueblo el heredado sentimiento de honor e hidalguía en el que se amasó”, “El manifiesto anunciado”, *La Fronda*, 8.II.1927, p. 1. Al año siguiente se conciben a sí mismos como “cristianos en las catacumbas”, “últimos representantes de la

tradición política argentina” y “expuestos a las pedreras de los ilotas sublevados”, TATO, 2004, p. 162.

Ernesto PALACIO, “Escándalo”, La Nueva República, 28.VI.1930, p. 1, citado en LVOVICH, 2003, p. 245.

KLEIN, 2002.

La información que sigue proviene del cap. 3 de ECHEVERRÍA, 2009. Para una comparación de las ideas y la trayectoria de Ibarguren y del uruguayo Luis Alberto de Herrera, véase ECHEVERRÍA y REALI, 2016, pp. 65-92.

ECHEVERRÍA, 2009, p. 77.

MCGEE DEUTSCH, 2001, p. 92.

KLEIN, 2000; 2002; MCGEE DEUTSCH, 1999.

HALPERÍN DONGHI, 2003.

BARRÁN, 2004, pp. 103-118; CORREA SUTIL, 2004, pp. 41-49.

ANSALDI, 1994; BOHOSLAVSKY, 2011; BORON, 2000; MIDDLEBROOK, 2000.

# LAS DERECHAS EMPRESARIALES EN ARGENTINA ANTE LA MILITANCIA OBRERA: LA ASOCIACIÓN DEL TRABAJO (1918-1930)

NORBERTO O. FERRERAS

*Universidade Federal Fluminense/CNPq, Brasil*

## **INTRODUCCIÓN**

En este artículo analizamos la actuación de la Asociación del Trabajo (AT) desde su fundación en 1918 hasta el final de la década de 1920, y sus esfuerzos por controlar el proceso productivo y la organización obrera en Argentina. Antes que programática, esta asociación fue pragmática en la representación de los intereses empresariales. La AT enfatizaba la defensa de la propiedad privada y para esto se valía de valores aristocráticos y nacionalistas. En este estudio presentaremos los elementos que dieron forma a la AT, así como sus acciones para lograr no sólo el control social, sino también del proceso productivo, afirmando la primacía del empresario sobre el obrero. El objetivo de esta institución fue evitar la organización obrera, manteniendo la tasa de explotación e inhibiendo la legislación de las relaciones laborales. La AT tuvo que lidiar con un movimiento obrero en ascenso y un Estado sin una línea ideológica clara en relación con la cuestión social.

En este contexto sobresalió su secretario general Atilio Dell’Oro Maini, quien asumió este cargo después de tener una destacada actuación como presidente de la organización estudiantil católica Comité Pro Defensa de la Democracia, activa en la lucha contra la Reforma Universitaria de 1918. Egresado de la carrera de Derecho ese mismo año, inmediatamente se le contrató como asesor letrado de la Bolsa de Comercio y de la recién fundada AT, cuyos documentos, textos y proclamas se encargó de redactar, lo que le permitió rápidamente alcanzar en ella una posición preponderante. Es preciso mencionar que Dell’Oro Maini estaba

vinculado al pensamiento social católico de Jacques Maritain desde 1917, cuando fue creado el Ateneo Social de la Juventud (posteriormente Ateneo de la Juventud). De hecho, su ascendente trayectoria se confunde con la de la propia AT, pues nada de lo que realizó esa asociación en la década siguiente le fue ajeno y su salida coincidió con el ocaso de ella. Asimismo, continuaba como un hombre del catolicismo argentino, ya que en 1922 participó en la creación de los Cursos de Cultura Católica junto con Tomás Casares y monseñor Gustavo Franceschi, al que los nacionalistas definían como “socialista” debido a su preocupación por la cuestión social.

Si bien la trayectoria de Dell’Oro Maini no es el eje de este artículo, es importante mencionar que su presencia en la AT fue decisiva para superar los frustrados intentos anteriores de organizar asociaciones empresariales que lidiaban con la cuestión obrera. Fuese por la exagerada presencia de la Iglesia o por la dificultad para reclutar trabajadores, ninguno de estos intentos previos había conseguido el éxito que obtendría la AT bajo su influencia. La coyuntura política obligó a los patrones a buscar nuevas metodologías de movilización y convencimiento de los trabajadores y demostrar que el “trabajo libre”, como se llamaba a los trabajadores no sindicalizados o contrarios a la organización, era beneficioso para todas las partes, principalmente en momentos de desagregación del mercado de trabajo o en las periódicas crisis que atravesaba. Dell’Oro Maini fue el autor de esta obra.

## **EL NACIONALISMO Y EL MUNDO DEL TRABAJO EN ARGENTINA**

La AT se fundó en un momento clave de la década de 1910, lo que le permitió afirmarse como la organizadora de la política empresarial argentina en relación con la cuestión obrera. Sus primeros años coincidieron con el aumento de la actividad del movimiento obrero después de la Gran Guerra, que se organizaba para obtener nuevos derechos o para recuperar los niveles de vida y salarios anteriores a la contienda bélica. La evolución de las huelgas en ese periodo nos permite tener una dimensión del crecimiento de la organización obrera. En 1915, al inicio de la guerra y con la disminución del comercio internacional y de las tasas de empleo, se produjeron 65 huelgas con 12 077 huelguistas. En 1919, con la recuperación económica, la situación cambió radicalmente y se contabilizaron 308 967 trabajadores involucrados en 367 huelgas. El promedio de trabajadores

por huelga saltó de 185.8 a 841.9, mostrando una fuerte ofensiva por mejores salarios y condiciones de trabajo.<sup>1</sup>

La reacción empresarial contra este activismo consistió en retomar las tradiciones conservadoras argentinas de criminalización del sindicalismo. El patrón de acción había sido provisto por la Ley de Residencia de 1902 junto con la Ley de Defensa Social de 1910, acompañadas por la represión a las protestas. El repertorio era la represión, el encarcelamiento y la deportación. La derecha se volvía cada vez más autoritaria y refractaria al avance del movimiento obrero. El pensamiento social argentino que venía desarrollándose desde la segunda mitad del siglo XIX reforzaba la posición dominante de la aristocracia criolla y admitía como propios a los empresarios inmigrantes que aceptaban el statu quo. Dicho pensamiento social se fue volviendo nacionalista y xenófobo con el crecimiento de la movilización obrera y el desafío representado por la Unión Cívica Radical (UCR).<sup>2</sup> Es importante destacar que la derecha argentina no tuvo un patrón único de pensamiento: sus influencias variaron de momento a momento, pasando de una corriente teórica a otra. Podríamos decir que lo que importaba era mantener el orden, la jerarquía y la homogeneidad cultural antes que la imposición de una idea en particular.<sup>3</sup>

El temor o la desconfianza al inmigrante que se extendía entre las clases medias y empresarias se complementaba con la desconfianza y el temor a los trabajadores, principalmente si estaban organizados. El pensamiento de la derecha argentina de ese periodo reunía los diferentes miedos y prejuicios europeos y los aumentaba concentrándolos en el extranjero y el sindicalista. Después de la Revolución rusa se sumarían el miedo al comunista y al judío, denominado “ruso”.<sup>4</sup>

La cuestión obrera estaba siendo tratada desde el momento de su emergencia. A la represión policial se le sumó la propuesta de una Ley Nacional del Trabajo (1904), la designación presidencial de Juan Bialet Massé para realizar un informe sobre la situación de los trabajadores en la Argentina (1904) y la creación en 1907 del Departamento Nacional del Trabajo (DNT). El DNT fue central en el cambio de perspectiva, ya que desarrolló una serie de estudios locales, compiló legislación internacional, acompañó la organización del movimiento obrero y reunió a funcionarios con interés y sensibilidad por el tema.<sup>5</sup>

Pero estas medidas no fueron suficientes para los empresarios, que se sentían

amenazados por la militancia obrera. Los unió el temor al obrero, al agitador y al extranjero, tanto cuanto la defensa de sus intereses y el control del proceso productivo. El sector patronal entendía que el movimiento obrero se aliaba al Estado en contra de sus intereses y que precisaba una organización defensiva. Si bien existían organizaciones que unían al sector empresarial, tenían sus objetivos organizados por sector productivo, lo que fragmentaba su actuación y sus posiciones.

La AT fue creada en un momento liminar de la relación entre el capital y el trabajo en Argentina: los primeros años de la primera presidencia de Yrigoyen (1916-1922). Éstos mostraron el aumento de la movilización obrera y la consecuente respuesta empresarial. La AT surgió en esta coyuntura de falta de liderazgo unificado del empresariado que no vislumbraba una forma de combatir a la débil, informal y frágil alianza que conformaron trabajadores y Estado. El empresariado comprendió que era necesario un grupo que actuara más allá de los intereses sectoriales en cuestiones básicas, como represión de huelgas y protestas; que colocara una cuña entre las partes y alejara al gobierno de Yrigoyen de los trabajadores.

Joel Horowitz definió la política de Yrigoyen en su relación con el movimiento obrero como obrerista, por los acuerdos del Estado con un sector del movimiento obrero, los sindicalistas revolucionarios de la Federación Obrera Regional Argentina del IX Congreso (FORA IX). La FORA había sido fundada en 1901 como Federación Obrera Argentina y fue la organizadora en 1902, en ocasión de la primera huelga general. Esta federación unía diversos grupos obreros, especialmente anarquistas, pero en 1915 se dividió en dos sectores: la FORA del V congreso (anarquista) y la del IX congreso, dominada por los sindicalistas revolucionarios, con un sector de los trabajadores socialistas y sindicatos independientes. La FORA IX contaba con el principal sindicato del periodo, la Federación de Obreros Marítimos (FOM), que tenía una base disciplinada y organizada, lo que le permitía conseguir espectaculares victorias ante los grandes empresarios del transporte marítimo y fluvial.

La capacidad de organización y movilización de la FOM le permitió ese acercamiento al gobierno de Hipólito Yrigoyen. Inicialmente era una alianza que favorecía a las dos partes: Yrigoyen llegaba a un sector de la sociedad en el que era bienvenido, pero en el cual no contaba con los mediadores adecuados. La FOM se favorecía por un cierto apoyo del Estado en momentos críticos. El vínculo informal entre el sindicalismo revolucionario e Yrigoyen tenía un efecto

positivo para ambos lados, a pesar de ser una alianza frágil que podía ser interrumpida en cualquier momento, como ocurrió con los conflictos portuarios de 1921.<sup>6</sup> Los sectores propietarios desconfiaban de esta alianza así como de las intenciones de Yrigoyen.

Con el surgimiento de los primeros conflictos obreros, los empresarios constituyeron sus propias fuerzas defensivas. Las principales formas de combatir a los sindicatos fueron la organización de grupos de choque para disuadir a los huelguistas por medio de la violencia y la contratación de trabajadores denominados “libres” para sustituir a los huelguistas en el sector más sensible de la economía argentina de gran escala: la importación y la exportación. Esta práctica venía desde 1892, cuando se crearon los Círculos Católicos de Obreros para controlar y disciplinar la mano de obra.<sup>7</sup>

Pero estas tentativas no fueron suficientes para disciplinar la militancia obrera. Ante las dificultades económicas provocadas por la Gran Guerra y los conflictos laborales, se crearon instituciones que reunían a las cámaras empresarias, empresas, empresarios, inversores, etc.<sup>8</sup> En 1916 se fundó la Confederación Argentina para el Comercio, la Industria y la Producción (CACIP), y en mayo de 1918 la Asociación Nacional del Trabajo, que rápidamente cambiaría su nombre a Asociación del Trabajo, debido a la gran presencia de empresarios extranjeros entre sus miembros. Estas dos instituciones pretendían unificar las demandas empresariales y presentar sus posiciones en común. La CACIP fue un grupo de presión que reflexionaba sobre las características de la economía argentina en las conferencias económicas nacionales realizadas en 1919, 1923 y 1928. La AT, por el contrario, asumió otro perfil, vinculado con el control de la mano de obra y la represión de los conflictos sindicales. Entre sus fundadores estaban las principales corporaciones sectoriales: la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (fundada en 1854), la Sociedad Rural Argentina (en 1866) y la Cámara de Armadores. La Unión Industrial Argentina (UIA, creada en 1887) no se incorporó orgánicamente a sus filas, aunque sí algunas cámaras empresariales asociadas.<sup>9</sup> El primer presidente de la AT fue Pedro Christophersen, quien era el presidente de la Bolsa de Comercio, y rápidamente dejó su lugar a Joaquín de Anchorena, presidente de la Sociedad Rural. Es evidente que la mayoría de los miembros fundadores de la AT estaba vinculada con la economía agroexportadora. Pero, además, también estaba clara la preocupación empresarial por controlar el proceso productivo.

El contexto de su surgimiento condicionó sus acciones posteriores. Al ser creada durante un conflicto entre trabajadores marítimos y empresarios del sector exportador, la AT definió como su tarea principal retomar el control de la producción organizando grupos de trabajadores libres para sustituir a los huelguistas de Bunge y Born y a los estibadores y marítimos. Se esperaba que estos trabajadores fueran más eficientes que los que antes habían enviado la Sociedad Protectora del Trabajo Libre y los Círculos Católicos.<sup>10</sup>

Si bien la contratación de trabajadores libres integraba el repertorio de acción empresarial, la originalidad de la AT en este aspecto apareció en la deflagración de la Semana Trágica en 1919.<sup>11</sup> La innovación de la AT estuvo en la organización de grupos parapoliciales para reprimir obreros, que actuaron junto con agentes del Estado como la policía y el ejército.<sup>12</sup> Después de la represión algunos miembros de la AT crearon el grupo Defensores del Orden, germen de la Liga Patriótica.

Aun cuando la AT se mostró capaz de actuar en una coyuntura tan difícil como la Semana Trágica, sus dirigentes prefirieron dividir las tareas. La AT y la Liga compartían posicionamientos ideológicos semejantes, como el nacionalismo, el antisemitismo, el antisindicalismo, la xenofobia, la voluntad de control del sistema productivo, el antiyrigoyenismo y el elitismo. Como mostraremos más adelante, la opción por la violencia represiva fue complementada con la planeación de acciones pedagógicas y sociales que enfatizaban la necesidad de la docilidad de los sectores populares. Lentamente, ambas formaciones separaron sus esferas de influencia y acabaron disputando el control de los trabajadores. La Liga apelaba al nacionalismo militante y la AT al antisindicalismo.

## **LA ASOCIACIÓN DEL TRABAJO Y LA CUESTIÓN OBRERA**

Hay dos aspectos importantes en la forma de actuar de la AT: el uso de la violencia y las propuestas sociales. Con la violencia nos referimos a las acciones represivas contra los obreros sindicalizados que podríamos resumir en la organización de trabajadores “libres” para reprimir las huelgas y de grupos de choque para desbaratar piquetes e intimidar a los militantes sindicales. La segunda faceta que discutiremos la constituyen las propuestas sociales y el

sustento ideológico de la AT, que daban legitimidad a su accionar. Estas dos caras coinciden con dos momentos clave de la trayectoria de la AT: hasta 1922 primó la violencia, pero a partir de ese momento la AT pasó a actuar cada vez más como un think tank sobre la cuestión social, posicionándose como un órgano de consulta y de propuestas destinadas a controlar el proceso productivo y el mercado de trabajo, sin abandonar totalmente las acciones represivas.

La violencia de la AT, como su forma de intervención pública principal, fue cediendo durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear (1922-1928), a medida que éste abandonaba el obrerismo de Yrigoyen. El alvearismo negoció con algunos grandes sindicatos, como la recién creada Unión Ferroviaria y la para entonces alicaída FOM, con el objetivo de garantizar una baja conflictividad. Los conflictos disminuyeron con la recuperación de la economía y de los salarios reales y se descomprimió la situación social.<sup>13</sup>

A partir de 1922 también las relaciones entre la Liga y la AT se modificaron. La AT pasó a enfatizar un perfil técnico y la Liga una posición doctrinaria; la primera representaba al sector empresarial que deseaba la pax laboral. Entre el pragmatismo y el dogmatismo los empresarios eran menos afectos a dar poder a las fuerzas represivas que a su vez justificasen la violencia obrera. La negociación y el convencimiento, por las vías de la reafirmación de la hegemonía empresarial, eran más importantes que transformar al obrero en un baluarte de la nación, como pretendía el fascismo italiano. Aquí analizaremos estas dos facetas y etapas de la AT.

### ***La violencia***

Hasta 1922 la marca principal de la AT fueron las acciones violentas destinadas a inhibir la organización obrera. En gran medida esto se debió al momento de su creación durante las huelgas portuarias de 1918, un poco antes de la Semana Trágica, durante la cual se constituyó como la principal organización represiva de la sociedad civil. En esos años la AT compartió actividades, miembros y hasta espacio físico con la Liga Patriótica, a tal punto que algunos historiadores las vieron como entidades hermanas o a la AT como una segunda línea de la Liga. En la división de tareas iniciales entre ambas organizaciones, la Asociación se encargaba de controlar el activismo obrero, y la Liga se dedicaba a la persecución ideológica de los inmigrantes refractarios a incorporar los valores identificados con la argentinidad. A lo largo de su trayectoria, cuando utilizó la violencia no se apartó del repertorio de acciones utilizadas por otros grupos:

violencia antisindical y organización de trabajadores que actuaran como rompehuelgas. El diferencial de la AT fue su capacidad de movilizar recursos humanos y económicos para ejecutar estas políticas.

En gran medida la AT surgió para combatir la militancia de la FOM, columna vertebral de la FORA IX, que destacaba por su organización, disciplina y eficiencia para movilizar a otros sindicatos y trabajadores y por conseguir la intervención estatal para mejorar su situación en los conflictos.<sup>14</sup> La FOM conseguía acuerdos con el gobierno de Yrigoyen, lo que potenciaba su capacidad de articular sus reivindicaciones valiéndose de la huelga y la negociación. La alianza con Yrigoyen se consolidó en la huelga marítima de 1916, que estableció los parámetros del conflicto entre el capital y el trabajo en los años siguientes. Los empresarios entendieron que sería difícil enfrentar una huelga con el Estado del lado de los obreros.<sup>15</sup> Sin embargo, la FOM sólo contaba con Yrigoyen. La justicia era favorable a los empresarios y era permisiva con su violencia intimidatoria; por su parte, los organismos de represión desacataban discretamente las decisiones del Ejecutivo, relajando los controles o permitiendo la violencia patronal.<sup>16</sup>

La creación de la AT era parte de la reorganización de la derecha argentina. La derecha moderada, que había aprobado la expansión del voto popular en 1912, había sido barrida junto con el consenso burgués del escenario político en la coyuntura de posguerra. Al orden conservador lo sucedió la alianza social y política construida por Yrigoyen, que tuvo una política errática en materia obrera. La AT se concentró inicialmente en el control del proceso productivo, antes que en el control social.

La prioridad por el control del proceso productivo llevó a un gran conflicto entre la AT y la FOM en el puerto de Buenos Aires en 1921. La FOM defendía el closed shop y la AT la “libertad de trabajo”.<sup>17</sup> La huelga de mayo de 1921 fue la batalla que dio la victoria definitiva a la AT sobre la FOM.<sup>18</sup> La ofensiva de los trabajadores marítimos se inició en febrero de 1921 y participaron otros grupos como los transportistas de carros, los cargadores de mercaderías, los trabajadores en los molinos, entre otros. La participación fue desigual, porque hubo grupos de trabajadores que presentaron sus propias reivindicaciones, y los anarquistas y los comunistas pretendían ir más allá de la pauta establecida por la FOM. También había grupos remisos a volver a la confrontación.

La AT consiguió movilizar a sus afiliados de diversas ramas de la producción,

realizar multitudinarias manifestaciones y conseguir el apoyo del Estado para su causa. Después de tres meses de conflictos, en mayo de 1921 se produjeron enfrentamientos armados entre trabajadores y guardias de la AT en los que fallecieron dos obreros y un pistolero de la AT, que era también guardaespaldas de Joaquín de Anchorena. El entierro de este guardia se transformó en un gran acto que contó con Manuel Carlés como orador principal.<sup>19</sup>

A esta altura la FOM no estaba en condiciones de continuar la disputa sin el apoyo del Ejecutivo, y la AT tenía en su favor la prensa y la capacidad económica para continuar el conflicto. Yrigoyen estaba presionado y necesitaba una solución rápida que evitara mayores desgastes, por lo que permitió la represión que garantizara las actividades portuarias. Para el 29 de mayo la AT, que contaba con 1 400 “trabajadores libres”, controlaba la situación. La FOM había sido derrotada y ya no representaba una amenaza. Los trabajadores tuvieron que aceptar las nuevas condiciones sin poder reaccionar ante la falta de apoyo del Estado; el costo económico y humano para la organización sindical fue elevado.<sup>20</sup>

Esta disputa fue la victoria decisiva de la AT y le permitió pasar a una nueva fase: la batalla cultural por la hegemonía del mundo del trabajo. La AT destacó que sus acciones eran una lucha por la libertad de trabajo contra el closed shop y le dio un tono positivo a su acción, lo que le permitió ganar el apoyo de una parte de la sociedad y mostrar a los patrones que era posible vencer los conflictos con los obreros. Se proponía desarticular definitivamente la resistencia obrera para conformar un nuevo proletariado integrado por ciudadanos.

La victoria fue mayor de lo esperado, a tal punto que los propios dirigentes de la AT no tenían claridad sobre cuál debía ser su lugar en la pax laboral que se avecinaba.<sup>21</sup> Para la AT el triunfo se debió a la capacidad de mantener el frente patronal unido, a diferencia de lo que había ocurrido entre los obreros. Esta nueva situación le permitió indicar a diputados y senadores que debían dejar de lado el tratamiento de leyes vinculadas a la expansión de los derechos obreros, como jubilaciones, trabajo nocturno u otros. Para la AT era prioritario evitar los temas que pudiese utilizar el movimiento obrero para retomar la agitación.<sup>22</sup>

Después de esta victoria los dirigentes de la AT avanzaron en la represión de los focos de conflictos existentes. Fueron parte de la segunda fase de la represión a las huelgas patagónicas —conocida como la Patagonia Trágica— y del Litoral del Noroeste, con epicentro en la empresa maderera La Forestal, de capitales

británicos. Era evidente que el panorama sindical había cambiado radicalmente al finalizar el primer gobierno de Yrigoyen. La AT era dueña de la situación y la FOM estaba exhausta. Este cambio en la correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo abrió una nueva etapa para la AT, lo que no implicó rupturas absolutas, sino que mudó el énfasis sobre las cuestiones y su tratamiento, sin perder sus objetivos: el control del proceso productivo.

### *Las posiciones sociales e ideológicas*

Los estudios sobre la AT se han centrado en sus prácticas y acciones dejando de lado sus ideas y propuestas. Esta faceta estuvo presente en su creación y a lo largo de la década de 1920, e incluía, por ejemplo, la necesidad de acciones para afirmar la hegemonía patronal ante lo que era visto como una ofensiva obrera y revolucionaria. Hay también otros aspectos interesantes de la AT que merecen ser destacados y que están vinculados con el abordaje técnico y normativo de la cuestión obrera. Algunas de esas propuestas fueron originales, otras eran reelaboraciones de iniciativas de orígenes diversos. Debemos recordar que el objetivo principal de la AT era inhibir la regulación en las relaciones entre el capital y el trabajo, para afirmar el dominio del proceso productivo por parte del patrón. Eran cuestionados todos los cambios en la legislación laboral que limitasen el poder empresarial. En este sentido debe leerse su rechazo a las normativas laborales elaboradas por el Estado.

Una serie de iniciativas pensadas para construir una hegemonía de largo plazo acompañó la acción represiva de la AT. Por ello, pasaron a producir datos y análisis propios sobre el trabajo en Argentina que les permitieron tener políticas propias y establecer contactos internacionales a fin de ampliar su comprensión de la militancia obrera.

La elaboración de esta estrategia se debió a su secretario general Atilio Dell'Oro Maini, mencionado al inicio, quien fue uno de los miembros fundadores de la AT y de la Liga Patriótica. En 1918 era un joven abogado que actuaba en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y un miembro activo de organizaciones católicas.<sup>23</sup> Fue un entusiasta de las acciones represivas, aunque no dejó de elaborar propuestas para afirmar el control patronal por la vía de la aceptación del trabajador. Él fue quien elaboró la gran mayoría de las iniciativas de la Asociación. Si bien los principales temas que abordó fueron la inmigración y el trabajo marítimo, también intervino en los diferentes debates sobre la regulación del trabajo; como secretario general de la AT fue central en la política patronal,

tanto que con su salida en 1930 la Asociación languideció irremediablemente.<sup>24</sup>

Una de las acciones sociales alentadas por la AT fue la organización del “trabajo libre”, es decir, regular una oferta de trabajo constante que no respondiese a los sindicatos. Para esto se recurrió a las formas de reclutamiento de trabajadores anteriormente implementadas por los Círculos Católicos de Obreros y por otras asociaciones de trabajo libre: se contrataba a trabajadores migrantes sin vínculos con el movimiento obrero, generalmente recién llegados del interior o del exterior, para desafiar el closed shop marítimo. El pico de la demanda de estos trabajadores coincidía con los conflictos laborales. Tener trabajadores prontos para intervenir o de fácil movilización les permitía actuar rápidamente y desgastar a los sindicalizados, aun cuando no consiguieran ni la cantidad ni la calidad necesarias de trabajadores.

La segunda forma de combatir el trabajo sindicalizado y de organizar el flujo propio de trabajadores sin intervención sindical fue por medio de la organización de una “bolsa de trabajo”. Ésta consistía en publicar la lista de los trabajadores que pedían empleo en la AT. La bolsa debe verse como propaganda del libre mercado de trabajo, porque la lista de trabajadores en general no atendía las necesidades de los socios. En la información de la bolsa de trabajo, publicada en el Boletín de Servicios de la AT, la mayor cantidad de trabajadores inscritos era del sector de servicios, pero la demanda principal era de peones. La intención de la bolsa de trabajo era mantener un grupo de trabajadores pronto y dispuesto a quebrar nuevas huelgas, aunque no tuviera experiencia laboral. Esta mano de obra podía utilizarse durante el periodo necesario como una ayuda para empresas menores en momentos de conflictos, y dependía de la demanda estacional de mano de obra.<sup>25</sup>

La falta de “trabajadores libres” que pudiesen suplir la demanda de trabajo fue una constante del periodo, y en ningún momento la AT alcanzó un flujo adecuado de inscritos, pero no dejaba de publicitar este servicio porque era central en la estrategia de cohesión empresarial. Así, era frecuente ver anuncios como este:

A los Centros y Casas Afiliadas [...]

Se hace presente a las casas afiliadas que cuando se encuentren abocadas a un

conflicto huelguístico de cualquier naturaleza que sea pueden concurrir a esta Asociación del Trabajo en demanda de elementos de movilidad y transporte en la seguridad de que los conseguirán inmediatamente. No importa que los servicios sean requeridos en plena huelga.

La Asociación del Trabajo dispone del personal libre, apto y competente, que se necesita para salvar cualquier género de obstáculos. Quedan enterados nuestros afiliados [...].<sup>26</sup>

Además de la bolsa de trabajo, la AT reclutaba “trabajadores libres”. En este caso era necesario tomar una serie de recaudos. En principio mantenía a los trabajadores bajo observación y control. Para que aceptasen trabajar como libres les ofrecía beneficios como alojamiento e instrucción, pero también adoctrinamiento antisindical. Algunos trabajarían voluntariamente según los principios de esta institución, otros llegaban por los beneficios ofrecidos. Para la AT, la bolsa de trabajo era una forma de ordenar el mercado de trabajo, ya que el closed shop impedía que los obreros ajenos al medio pudieran acceder a un puesto. Era una respuesta a la acción de los sindicatos que con su intervención alteraban el dinámico mercado de trabajo, marcado por la alta rotación entre los empleos.<sup>27</sup>

Otra de las iniciativas sociales de la AT fue la creación de la Casa Obrera. Allí se realizaban campañas de vacunación y se ofrecían atención médica y consultorio jurídico gratuitos, oficina de inmigración, alojamiento, servicios higiénicos, baños, conferencias y proyecciones cinematográficas a los trabajadores reclutados por la bolsa de trabajo. La alimentación era subsidiada y se servían desayunos, almuerzos y cenas para centenares de obreros; muchos de ellos tenían así un lugar para pernoctar próximo al lugar de trabajo, dado que la Casa Obrera estaba localizada en la calle San Juan 142, cerca del Puerto Nuevo, del Riachuelo y de importantes industrias. Los obreros hospedados podían recibir los domingos a sus familias, a los niños se les regalaban chocolatines y se disputaban peleas de boxeo entre los presentes, mostrando lo importante de crear un ambiente familiar y de armonía entre los trabajadores y los patrones. Era prioritario aislar a los trabajadores libres de las influencias de los sindicalizados o de grupos políticos.<sup>28</sup>

Desde el punto de vista ideológico, la AT dio la batalla cultural para afirmar la

supremacía patronal sin tener que recurrir constantemente a la violencia, y así se distinguió de otras iniciativas patronales. Después del periodo fundacional y violento, la AT apostó por una posición profesional y técnica, menos doctrinaria y más eficiente en la aceptación de la hegemonía del capital sobre el trabajo. La AT elaboró un discurso profesional pro-positivo antes que defensivo, porque pretendía ser un agente del progreso económico y, como tal, estaba decidida a actuar en un mundo en el que las relaciones capitalistas de producción estuviesen cada vez más consolidadas. La mejor forma de adquirir conocimientos y elaborar propuestas era por la vía de la información obtenida de las experiencias de países con importantes movimientos obreros, lo que le abría las puertas a la modernidad técnica que se constituía en la primera posguerra.

Los cambios que se produjeron en la AT a partir de 1922 tuvieron que ver con la coyuntura política, social y económica de la Argentina, pero también con la profesionalización técnica de la propia AT. Ante la disminución de la movilización obrera, pasó a actuar como lobista de los intereses patronales ante el Estado y como agente de servicios sociales para los obreros, financiados por los patrones. La AT surgió para controlar y reprimir la organización obrera, pero también actuaba defendiendo los intereses patronales en el tratamiento de las cuestiones obreras. El cambio en la coyuntura política llevó a la AT a reforzar sus acciones pedagógicas ante el Estado, los patrones y los obreros.

Éste es el momento de la construcción de estándares técnicos en organismos internacionales con los que la AT mantenía vínculos estrechos. Sus miembros se integraron en diferentes redes internacionales del empresariado que surgieron en el periodo de entreguerras. Con la OIT, por ejemplo, la AT construyó un vínculo privilegiado. De las 12 conferencias internacionales del trabajo que tuvieron lugar en este periodo, la AT tuvo representación oficial en cuatro; la Unión Industrial Argentina en tres, y a las cinco restantes Argentina no envió delegados. Los delegados de la AT fueron activos en los temas que les interesaban, como la cuestión del trabajo marítimo, rural, portuario, etc.<sup>29</sup> Otros ámbitos por los cuales circularon los miembros de la AT fueron la Organización Internacional de los Patronos Industriales y la Conferencia de la International Law Association. De esa forma los parámetros técnicos sustituyeron paulatinamente a la doctrina social de la Iglesia.

A partir de la participación en reuniones internacionales y de intervenir en el debate sobre la cuestión laboral, Dell'Oro Maini elaboró varios estudios sobre las condiciones de trabajo y la producción en Argentina considerando diversos

temas centrales y coyunturales, pero siempre con el fin de definir la línea de pensamiento y acción de la AT. Sus informes trataron el trabajo portuario y marítimo, las cajas de jubilación, la jornada laboral de ocho horas, la semana inglesa, la organización patronal, la intervención del Estado en el ámbito productivo, entre otros. También trajo debates y estadísticas internacionales que facilitaron la toma de decisiones de la AT.

Como los afiliados tenían sus propias posiciones ideológicas, la AT pasó a tener objetivos técnicos y las propuestas debían encaminarse en este sentido. Las discusiones que tenían lugar en Europa y Estados Unidos sobre el capitalismo industrial y el trabajo agrícola y marítimo eran vistas como parámetros para la reorganización de las relaciones entre el capital y el trabajo en Argentina. Como la regulación de las relaciones laborales se imponía a escala internacional, la AT buscó vincularse con organizaciones patronales internacionales que reforzaran la situación de la patronal, viabilizando propuestas que le fueran favorables e impidiendo las iniciativas que ellos entendían como perjudiciales para sus intereses.

Junto con una postura técnica que legitimaba ideológicamente sus intereses inmediatos, también pasó a actuar como lobista ante un Estado y un Congreso sensibles a sus posiciones. Organizar lock-outs tenía costos políticos y legales, lo que dificultaba protestar ante las propuestas de aprobación de medidas favorables a los obreros, en parte porque no todos los empresarios se verían perjudicados por igual. En este caso se presentaban dos caminos: argumentar en forma contraria, dando explicaciones y datos a los legisladores favorables a la AT, o realizar un lobby institucional. El Boletín de Servicios nos muestra las posiciones ante determinados temas y también nos informa acerca de las presiones ejercidas sobre los miembros del Poder Ejecutivo, diputados y senadores. Las iniciativas que causaron mayor rechazo por parte de la AT fueron la Ley de Pago en Moneda Nacional, que prohibía el pago en especie o vales; la ley de ocho horas de trabajo, contestada principalmente por el sector agrario; la Ley de Trabajo a Domicilio, que afectaba a la industria textil; la Ley de Accidentes de Trabajo y la Ley de Creación de Cajas de Jubilaciones, que también recibió la reprobación de los trabajadores.<sup>30</sup>

Este giro técnico de la AT se relacionó con el surgimiento del fascismo, que le permitió a la Liga Patriótica ocupar sólidamente el espectro de la derecha radical. Si en el inicio de su actuación la Liga tuvo una acción ideológica y doctrinaria, desde la elección de Alvear pasó también a cuestionar a aquellos que

no parecían comprometidos con la causa nacionalista, como la AT. La Liga dejó de ser un grupo meramente represivo para proponer la integración en un mismo cuerpo a trabajadores y empresarios, en un modelo similar al de la Action française o al del fascismo italiano. Desde su fundación organizó congresos para los trabajadores a fin de desarrollar una tarea de adoctrinamiento. La Liga entendía que los trabajadores eran parte de la nación y debían ser tratados con justicia, siempre que aceptasen una función subalterna.

Esta posición contrariaba la política de la AT, que pretendía garantizar la pax laboral, mantener la tasa de ganancia y el control del proceso productivo. La AT dejó de lado el nacionalismo invirtiendo en estos tres puntos. El nacionalismo ideológico de la AT había sido fundamental para encuadrar a los trabajadores contrarios a los intereses nacionales en el momento fundacional. La conciliación de intereses para fortalecer la nación que hacía la Liga chocaba con el paternalismo de la AT, que no tenía interés en reforzar el Estado.

El nacionalismo fue un punto de conflicto y tensión entre ambas instituciones después de un primer periodo de coexistencia armónica. Para 1926 las posiciones estaban definidas como muestra el discurso de Manuel Carlés en el Séptimo Congreso Nacionalista:

Son artificiales aquí los sindicatos de resistencia que obstaculizan la industria hasta el punto de amenazarla con odio; y son igualmente artificiales las asociaciones de patrones que, afanándose por ganar inmoderadamente, consideran el trabajo como una mercancía y a los trabajadores como herramientas a las que se usa y de las que se abusa para obtenerles el máximo de rendimiento. En esta situación, el espectáculo de esa lucha artificial es a base de rencor, que trae como consecuencia el uso de armas de guerra en forma de huelgas, sabotajes, boicots y atentados, por una parte, mientras la otra emplea los cierres o lock-outs con espíritu de prepotencia, tan terco como el que anima al adversario.<sup>31</sup>

El integrista de la Liga chocaba con el paternalismo de la AT. El paternalismo se basaba en la dominación del patrón por medio de la construcción de consensos que implicaba el reconocimiento del obrero como central en el

proceso productivo y, por tanto, otorgaba beneficios no salariales (vivienda, alimentación, vestimenta, etc.). Se buscaba aislar a los trabajadores de las influencias externas, tanto del Estado como de los sindicatos.<sup>32</sup>

Las disputas entre la Liga y la AT, que podríamos personificar en un conflicto ideológico entre Carlés y Dell'Oro Maini, estaban en sintonía con los conflictos franceses entre Maritain y Maurras. O sería mejor decir que el conflicto entre el nacionalismo integrista de la Action française de Maurras y la defensa de la conciliación social de Maritain fue leído a partir de las diferencias que se manifestaban en Argentina. Si Dell'Oro Marini era un divulgador de las posiciones de Maritain, la Liga Patriótica adoptaba los principios del integrismo maurrasiano, que prevalecían por sobre la doctrina corporativista italiana. La AT fue profesionalizando sus posiciones y abandonó poco a poco la persecución del inmigrante, y, principalmente, su antisemitismo, aunque siguiera siendo antiyrigoyenista.<sup>33</sup>

El fascismo italiano también tuvo su impacto en la AT. La forma de posicionarse ante este movimiento puede ser comprendida como una especie de termómetro de sus cambios. En los primeros años el fascismo fue considerado como una posibilidad para el control del movimiento de las masas obreras. Recordemos que la represión de la Semana Trágica es anterior a la organización de los Fasci di combattimento (23 de marzo de 1919) y a la creación del Partito Nazionale Fascista (en noviembre de 1921); en esos primeros momentos hay un cierto interés en Italia por la represión al movimiento obrero. El Boletín de Servicios de abril de 1921 justifica el fascismo como un contraterrorismo que utilizaba las tácticas del adversario siguiendo la ley del Talión, y si bien había sido eficiente en el control del comunismo, la AT no consideraba que pudiera ser la forma principal de relación con el movimiento obrero.<sup>34</sup>

El fascismo desapareció del Boletín de Servicios entre 1922 y 1926, en gran medida porque la AT se informaba sobre la situación del empresariado italiano por medio de la Confederazione Generale dell'Industria Italiana (CGII). Entre 1924 y 1925 el fascismo lideró huelgas destinadas a disciplinar a los empresarios, lo que generó aprehensión en la patronal internacional, incluida la argentina. La CGII se tornó favorable al fascismo después de su llegada al poder y con el control del movimiento obrero, pero institucionalmente la AT no definía una posición en cuanto al fascismo. Éste sólo volvió a cobrar importancia para la AT en 1927, cuando fue publicada la Carta del Lavoro. La misma fue reproducida íntegramente, aunque sin comentarios, en el Boletín de febrero de

1928. El lector podía interesarse, por ejemplo, por la importancia que el Estado fascista daba a la empresa privada, que era la siguiente:

VII. El Estado corporativo considera la iniciativa privada en el campo de la producción como el medio más eficaz y más útil para el interés de la Nación. Siendo la organización privada de la producción una función de interés nacional, el organizador de la empresa es responsable frente al Estado de la orientación de la producción.<sup>35</sup>

Un mes después el Boletín publicó una nota de Giuseppe Bottai, subsecretario del ministro de Corporaciones italiano, en la que explicaba el control del proceso productivo. Bottai informaba que si bien la Carta no estaba totalmente implementada, lo importante era que en el sistema productivo italiano había “una nueva disciplina” fruto de la “autoridad” y de la “colaboración”; por tanto, los trabajadores debían aceptar una función subalterna dentro del sistema productivo controlado por los patrones, porque lo que primaba eran las necesidades del Estado italiano.<sup>36</sup> La presencia del Estado en las relaciones laborales no era bien vista por el liberalismo presente en la AT, pero los tiempos estaban cambiando.

El recobrado interés por el fascismo coincidía con los cambios políticos de Argentina. Los empresarios no veían el fascismo como un dogma a ser seguido, aunque determinados aspectos de la experiencia fascista podían contribuir a mejorar las condiciones políticas y sociales de Argentina. En abril de 1928 se celebraron las elecciones en las que Yrigoyen era el candidato con mayores oportunidades de vencer. La presentación del fascismo estaba relacionada con la eterna acechanza: el yrigoyenismo y la reconstrucción de su alianza con los trabajadores.<sup>37</sup> En 1928 la pax laboral estaba en riesgo. La opción de la UCR Anti-personalista, llamada así por ser contraria a Yrigoyen, fue conformar una alianza con partidos conservadores del interior de Argentina conocida como Confederación de las Derechas. La fórmula presidencial propuesta fue Leopoldo Melo y Vicente Gallo, ambos radicales y miembros de la Liga Patriótica, lo cual mostraba la radicalización existente y que la Liga Patriótica pasaba a ocupar todo el espectro de la derecha política.

Pero esto no implicaba el control del sistema político. Antes de las elecciones

Marcelo Torcuato de Alvear tuvo un importante gesto en favor de Yrigoyen al devolver a la FOM parte de los derechos perdidos en los años anteriores. Esta acción reforzó la influencia del viejo caudillo entre los obreros en la misma medida en que aumentaba el recelo conservador. La eterna acechanza volvía al ruedo y los patrones entendían que era para enfrentarlos. Yrigoyen venció en las elecciones y la derecha empresarial se posicionó en favor del golpe.

## CONCLUSIONES

En principio es importante saber que para 1928, momento en que se manifestó el ocaso de la AT, ésta había ganado en creatividad, iniciativas y reflexiones técnicas, pero había perdido peso político y capacidad de movilización de recursos humanos y económicos. La Liga los estaba capitalizando y se fortalecería todavía más a finales del gobierno de Yrigoyen y en los primeros momentos tras el golpe de 1930. Sin embargo, la AT dejó un importante legado para las organizaciones empresariales posteriores. Como vimos un poco rápidamente, disponía de un cuadro técnico y político de primer orden que marcaría con su presencia los distintos momentos en que la derecha autoritaria tuvo presencia en los 40 años siguientes. Atilio Dell'Oro Maini fue el motor de la AT en los más de 10 años que estuvo vinculado a la misma. La transformación de la AT de una asociación preparada para la represión a una institución técnica se debió a su actuación.

A lo largo de este artículo mostramos la forma en que se constituyó la AT, el surgimiento de su media hermana la Liga Patriótica y la separación de las dos a lo largo de la década de 1920. No podemos dejar de apuntar que la coyuntura política nacional e internacional condicionó las trayectorias divergentes de ambas agrupaciones, pero justamente esta divergencia nos revela las posibilidades existentes para la consolidación de “un espacio de derecha” en la Argentina de la década de 1920. No toda experiencia de la derecha argentina debe reducirse a la actuación de la esfera política formal, como el surgimiento de la Confederación de las Derechas, ni se debe pensar que la derecha nacionalista impuso su hegemonía al conjunto. La AT muestra que había otras posiciones posibles, sin contar que no exploramos los matices de la derecha confesional. La AT intentó constituirse en un think tank del empresariado, divulgar iniciativas empresariales en otros países y presentar posibilidades de acción en relación con el movimiento obrero. También fue un ejemplo de organización de actividades y

llevó adelante iniciativas tendientes al control del sindicalismo que oscilaban entre la represión y la cooptación de los trabajadores aislados de los sindicatos.

Los dos grandes momentos de la AT coinciden con la preponderancia de un tipo de actuación. Ante el conflicto social tuvo dos actitudes diferentes: entre 1918 y 1922 priorizó la violencia como forma de intervención. Si la movilización era importante y contaba con el apoyo del Estado, la AT mostró su capacidad para movilizar recursos económicos y humanos destinados a imponer su voluntad por la vía de la represión. A partir de 1922, con la elección de Alvear como presidente de Argentina y tras despejar el peligro de una acción conjunta entre el Estado y el movimiento obrero, la AT pasó a una etapa reflexiva y de organización de un complicado sistema de control social sin represión. En algunos casos sus propuestas eran experimentales, en otros se basaban en elementos técnicos elaborados por instituciones internacionales y también en experiencias consagradas en otras latitudes, principalmente en el paternalismo empresarial francés.

La AT muestra caminos alternativos que desafían el sentido común de la hegemonía fascista o corporativa de la década de 1920. El conflicto social podía ser importante para imponer alternativas políticas, pero su continuidad en el tiempo, con la pérdida de capital humano y de bienes materiales, no podía ser interesante para el empresariado en el largo plazo.

## **REFERENCIAS**

ADELMAN, Jeremy

1993 “State and labour in Argentina: The port workers of Buenos Aires, 1910-21”, *Journal of Latin American Studies*, vol. 25, núm. 1.

Asociación del Trabajo

1921 Estatutos de la Asociación del Trabajo, Buenos Aires, Asociación del Trabajo.

CARUSO, Laura

2016 Embarcados. Los trabajadores marítimos y la vida a bordo: sindicato,

empresas y Estado en el puerto de Buenos Aires, 1889-1921, Buenos Aires, Imago Mundi.

CATERINA, Luis María

1995 La Liga Patriótica Argentina. Un grupo de presión frente a las convulsiones sociales de la década del veinte, Buenos Aires, Corregidor.

CORTÉS CONDE, Roberto

1997 La economía argentina en el largo plazo (siglos XIX y XX), Buenos Aires, Sudamericana.

DEVOTO, Fernando

2005 “Atilio Dell’Oro Maini. Los avatares de una generación de intelectuales católicos, del centenario a la década de 1930”, Prismas. Revista de Historia Intelectual, núm. 9.

FERRERAS, Norberto O.

2001 “No país da cocanha: aspectos do modo de vida dos trabalhadores de Buenos Aires (1880-1920)”, tesis de doctorado, Campinas, Unicamp.

2017 “Trabajo esclavo contemporáneo y trabajo forzado. Las políticas de la OIT y el Brasil en diálogo y conflicto, 1930-1990”, en Laura CARUSO y Andrés STAGNARO (eds.), Una historia regional de la oit. Aportes sobre regulación y legislación del trabajo latinoamericano, La Plata, UNLP.

GACON, Stéphane, y François JARRIGE

2014 “Les trois âges du paternalisme. Cantines et alimentation ouvrière au Creusot (1860-1960)”, Le Mouvement Social, núm. 247-2, París, Association Le Mouvement Social.

GODIO, Julio

2000 Historia del movimiento obrero argentino, 1870-2000, t. I, La época de las corrientes sindicales fundadoras (1870-1943), Buenos Aires, Corregidor.

HOROWITZ, Joel

2015 El radicalismo y el movimiento popular (1916-1930), Buenos Aires, Edhasa.

MAROTTA, Sebastián

1975 El movimiento sindical argentino: su génesis y desarrollo, 1887-1914, vol. II, Buenos Aires, Libera.

MCGEE DEUTSCH, Sandra

1986 Counterrevolution in Argentina, 1900-1932. The Argentine Patriotic League, Lincoln, University of Nebraska Press.

2005 Las derechas. La extrema derecha en la Argentina, el Brasil y Chile, 1890-1939, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes.

NOIRIEL, Gérard

1988 “Du ‘patronage’ au ‘paternalisme’: la restructuration des formes de domination de la main-d’œuvre ouvrière dans l’industrie métallurgique française”, Le Mouvement Social, núm. 144, julio-septiembre, Paternalismes d’Hier et d’Aujourd’hui, París, Association Le Mouvement Social.

OSPITAL, Silvia

1994 Inmigración y nacionalismo: La Liga Patriótica y la Asociación del Trabajo (1910-1930), Buenos Aires, CEAL.

PERROT, Michel

1979 “The Three Ages of Industrial Discipline in Nineteenth-Century France”, en John MERRIMAN (ed.), Consciousness and Class Experience in Nineteenth-Century Europe, Nueva York, Holmes and Meier.

RAPALO, María Ester

2012 Patronos y obreros. La ofensiva de la clase propietaria, 1918-1930, Buenos Aires, Siglo XXI.

ROCK, David

1993 “Antecedents of the Argentine Right”, en Sandra MCGEE DEUTSCH y Ronald H. DOLKART (eds.), *The Argentine Right: Its History and Intellectual Origins, 1910 to the Present*, Wilmington, Scholarly Resources Inc.

RUBINZAL, Mariela

2012 *El nacionalismo frente a la cuestión social en Argentina (1930-1943). Discursos, representaciones y prácticas de las Derechas sobre el mundo del trabajo*, La Plata, Universidad Nacional de La Plata.

ZIMMERMANN, Eduardo

1995 *Los liberales reformistas. La cuestión social en la Argentina (1890-1916)*, Buenos Aires, Sudamericana.

### ***Periódicos y revistas***

*Boletín de Servicios de la Asociación del Trabajo, Buenos Aires, 1921-1928*

*Boletín del Departamento Nacional del Trabajo, Buenos Aires, 1919*

*Estatutos de la Asociación del Trabajo, Buenos Aires, 1921*

Los datos sobre las huelgas y los huelguistas, siempre incompletos y sujetos a revisiones, provienen de distintas fuentes, principalmente del Boletín del Departamento Nacional del Trabajo, y están compilados en FERRE-RAS, 2001, pp. 133-134. Después de este conflicto redistributivo en el que vencieron los patrones, la recuperación económica permitió el crecimiento de los salarios, que llegaron a un pico máximo en 1929, para luego hundirse en la década de 1930; véase CORTÉS CONDE, 1997, p. 220.

Véanse MCGEE DEUTSCH, 2005, pp. 55-57; RUBINZAL, 2012, pp. 16-25.

Véase ROCK, 1993, p. 12.

El miedo al comunismo era más el miedo a una posibilidad que a una realidad; el

comunismo argentino no tendría influencia política hasta la década de 1930. La formación del antisemitismo y su asociación con la militancia obrera es tratada en MCGEE DEUTSCH, 1986, cap. 2.

Un análisis pionero en ZIMMERMANN, 1995.

Véase el capítulo “Las limitaciones del obrerismo” en HOROWITZ, 2015.<sup>7</sup> RAPALO, 2012, pp. 28 ss.

Denominadas corporación de corporaciones por OSPITAL, 1994, p. 29.

La UIA se adhirió moral, pero no orgánicamente. Además de estas tres organizaciones estaban el Centro de Exportadores de Cereales, el Centro de Importadores y Anexos, el Centro de Nación Transatlántica, el Centro de Cabotaje Argentino, la Cámara Gremial de Molineros, el Centro de Propietarios de Carros, la Cámara Gremial de Cereales, el Centro de Barraqueros y el Mercado Central de Frutos. Junto con estos centros patronales también había empresas como la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad y nueve compañías ferroviarias. Véase Asociación del Trabajo, 1921, pp. 12-14.

Sobre el conflicto de Bunge y Born y sus antecedentes, véase RAPALO, 2012, pp. 50 ss.

Se denominó Semana Trágica a una huelga acompañada de protestas populares y a su posterior represión. Los sucesos de la Semana Trágica tuvieron lugar entre el 7 y el 14 de enero de 1919, y enfrentaron a los trabajadores de Buenos Aires con fuerzas policiales y parapoliciales. Durante los conflictos, militantes anarquistas y personas de religión judaica fueron perseguidos y responsabilizados por los eventos de estos días.

Para la descripción y los datos sobre la creación de la Liga Patriótica, véanse CATERINA, 1995, pp. 31-35; MCGEE DEUTSCH, 1986, cap. 3.

Horowitz muestra la pax laboral del gobierno Alvear, aun con el final de la política obrerista de Yrigoyen, véase HOROWITZ, 2015, cap. 6.

Sobre la FOM, véase CARUSO, 2016, caps. 4 y 5.

Sobre la alianza entre la FOM y el Estado desde la huelga de 1916 véase ADELMAN, 1993, pp. 84-89.

Por ejemplo, en 1922 la AT agradecía al Juez de Oro por exculpar a un tal Salomón, uno de sus pistoleros, quien había participado en el asesinato de un huelguista. Véase “La defensa de la libertad de trabajo”, Boletín de Servicios de la Asociación del Trabajo (bsat), año III, núm. 48, 20.I.1922.

Véase “El conflicto portuario. La lucha por la libertad de trabajo”, bsat, núm. 32, 20.V.1921, p. 258.

Véase MAROTTA, 1975 pp. 17-43.

Véase “En memoria del obrero Elías”, bsat, núm. 57, 5.VI.1922, p. 226.

La huelga ha sido analizada por RAPALO, 2012, pp. 126-138, ADELMAN, 1993, pp 89-99, y CARUSO, 2016, pp. 237-244.

Véase “¿Qué se puede hacer?”, bsat, núm. 64, 20.IX.1922, p. 409.

Véase “Cómo se asegura la tranquilidad en el puerto”, bsat, núm. 69, 20.XI.1922, p. 529, y “El año Social”, bsat, núm. 68, 20.XII.1922, p. 577.

Dell’Oro Maini fue un militante católico desde su periodo como estudiante en el Colegio El Salvador y en la Universidad de Buenos Aires. El vínculo de Dell’Oro Maini con las organizaciones católicas en su juventud fue analizado por DEVOTO, 2005.

En la década de 1930 la AT recibía consultas y comunicaciones de la OIT sobre la situación de los trabajadores en Argentina, pero sus respuestas eran simples o basadas en fuentes externas. Véase OIT, “Relations with the Asociación del Trabajo”, 1936, Documento RL 2-2-2.

Véase “Servicios de la Asociación del Trabajo” y “Agradecimientos por los servicios prestados por la Asociación del Trabajo”, bsat, núm. 30, 20.IV.1921, p. 176 (ambas).

Véase “A los Centros y Casas Afiliadas a la Asociación del Trabajo”, bsat, núm. 31, 5.V.1921, p. 204.

Véase “El problema de la colocación de los obreros”, bsat, núm. 55, 5.V.1922, p. 179, y “Crónica de la Asociación del Trabajo. Cómo se desempeñan los obreros libres”, bsat, núm. 69, 5.XII.1922, pp. 557-558.

Véase “Un llamado a los patrones” e “Invitación a todas las firmas afiliadas a la Asociación del Trabajo”, bsat, núm. 50, 2.II.1922, pp. 33 y 35; “Consultorio médico gratuito de la Asociación del Trabajo”, bsat, núm. 57, 5.VI.1922, p. 226; “La Casa del Obrero. Inauguración del local de la Asociación del Trabajo. Brillante éxito de la ceremonia”, bsat, núm. 58, 20.VI.1922, pp. 251-256; “Varios: En el local obrero de la Asociación del Trabajo”, bsat, núm. 62, 20.VIII.1922, p. 369; “El mejoramiento obrero. Los problemas de la salud”, bsat, núm. 66, 20.XII.1922, p. 473, y “El local obrero de la Asociación del Trabajo”, bsat, núm. 69, 5.XII.1922, p. 558.

Atilio Dell’Oro Maini participó de las Conferencias de 1920, 1925 y 1926, y Lorenzo Amaya fue el delegado de los patrones en 1928. Véase DELL’ORO MAINI, “La acción patronal. Organización Internacional de los Patronos Industriales”, bsat, núm. 31, 5.V.1921, pp. 208-240. “La 31 Conferencia de la International Law Association. Cuestiones de carácter social tratadas en la reunión de Buenos Aires”, bsat, núm. 63, Bs.As., 5.IX.1922, p. 380.

Sobre estas leyes, véanse FERRERAS, 2017; HOROWITZ, 2015, cap. 4; RAPALO, 2012, cap. 5.

Véase Manuel CARLÉS, “Discurso de apertura del Séptimo Congreso Nacionalista”, en OSPITAL, 1994, p. 130. Las cursivas son mías.

El paternalismo no fue una ideología explicitada, sino que ha sido definida por observadores sociales del momento, y los historiadores reflexionan sobre ella desde hace tiempo. En Francia el paternalismo fue fundamental para organizar la mano de obra en la disputa con el movimiento obrero. En este sentido entiendo que es importante considerar los aportes realizados por los siguientes autores: PERROT, 1979; NOIRIEL, 1988; GACON y JARRIGE, 2014.

Charles Maurras (1868-1952), fundador e ideólogo de la Action française, monarquista e integrista. Jacques Maritain (1882-1973), también miembro de la Action française y partidario de la doctrina social de la Iglesia.

Véase “La quincena social. Internacionales. La lección de la violencia”, bsat, núm. 30, 20.IV.1921, p. 196, y “La crisis social italiana”, bsat, núm. 32, 20.V.1921.

“La Carta del Trabajo en Italia”, bsat, núm. 193, 5.II.1928.

Giuseppe BOTTAI, “La disciplina de la producción en el Estado fascista”, bsat, núm. 195, 5.III.1928. Un año después Bottai sería nombrado ministro de las Corporaciones.

Véase “La eterna acechanza”, bsat, núm. 195, 20.I.1928.

## LAS DERECHAS URUGUAYAS EN LOS AÑOS VEINTE

\*

MAGDALENA BROQUETAS SAN MARTÍN

*Universidad de la República, Uruguay*

El radicalismo de la reforma social, económica y moral concretada en Uruguay durante las presidencias de José Batlle y Ordóñez (1903-1907 y 1911-1915) alimentó la primera reacción organizada de las derechas en el siglo XX. Afectado en sus intereses de clase y cuestionado en sus valores morales, el conglomerado de derechas, integrado por diversas facciones partidarias, asociaciones gremiales rurales, grupos económicos y la Iglesia católica, logró derrotar al batllismo en las primeras elecciones con sufragio universal masculino y secreto realizadas el 30 de julio de 1916.<sup>1</sup> Desde entonces, el freno al programa reformista coincidió con la organización de un nuevo orden democrático, liberal en lo político y conservador en lo social, vigente durante los tres lustros siguientes.

La aparentemente contradictoria conformación de una derecha democrática será el punto de partida de este artículo, donde se examinarán algunos de los rasgos sobresalientes del ideario y la praxis de las derechas en Uruguay en los largos años veinte, que cronológicamente anticipan el comienzo del freno a las reformas de 1916 y encuentran un cierre en el golpe de Estado de 1933. Éste fue también el periodo de consolidación de un corpus laico de ideas conservadoras que, a pesar de presentar numerosas coincidencias con las posiciones de la jerarquía católica en materia social y política, no invocaba justificaciones religiosas.

El empleo de la categoría “derechas” conlleva, al menos, un desafío conceptual y otro metodológico. Esto es: ¿a qué grupos sociales nos referimos cuando hablamos de las “derechas” a comienzos del siglo XX y cómo identificar rasgos que, a pesar de su diversidad, permitan ubicarlos en un campo ideológico

común? En relación con la denominación, uno de los principales obstáculos deriva de la arraigada tradición historiográfica uruguaya, que ha respetado la autopercepción de los sujetos estudiados, por lo general reacios a identificarse como “de derecha” y proclives a resaltar su conservadurismo social.

Reproduciendo esta tendencia global, en la década de 1980 la historiografía uruguaya fue prolífera en el estudio de los “sectores conservadores”<sup>2</sup> e incluso alcanzó cierto consenso en torno a la idea de una “república conservadora” en alusión al periodo que abarca este artículo.<sup>3</sup> Ese universo “conservador” está compuesto por partidos políticos, grupos de presión empresariales y patronales, y jerarquías de la Iglesia católica y del Ejército, con lo cual conforma un mapa de actores sociales de procedencia e ideología diversas y con distinto grado de interrelación. Sin embargo, el manto del “conservadurismo” no siempre ha permitido apreciar la complejidad y las contradicciones que atravesaron a ese colectivo.<sup>4</sup>

Este artículo, basado en la lectura crítica de la bibliografía disponible, apunta a describir la heterogeneidad que caracterizó el campo de las derechas, para lo cual analiza en particular el papel de los partidos políticos y las corporaciones empresariales en la paradójica instauración de un orden democrático y su posterior supresión. A fin de comprender las posiciones de coyuntura (¡y los cambios drásticos!) de los grupos estudiados se partió de los siguientes interrogantes: ¿cuáles fueron los canales de expresión de las derechas y qué vínculos mantuvieron con el sistema de partidos?, ¿cómo se posicionaron ante el principio de igualdad universal y la noción de democracia?, ¿de qué manera entendieron el papel del Estado en la economía y cuán proclives fueron —o en qué medida justificaron— el empleo de la violencia represiva?

El texto se divide en cuatro partes. En el primer apartado se ofrece una brevísima caracterización histórica de la sociedad uruguaya y su sistema político en las dos primeras décadas del siglo XX. La conformación de una derecha democrática como una opción circunstancial, originada en el temor a la profundización del programa reformista, es analizada en el segundo apartado. La tercera parte aborda el freno que estos sectores pusieron a las transformaciones incentivadas por el primer batllismo y el periodo de hegemonía de una derecha moderada. Por último, se esboza la coyuntura que posibilitó el ascenso de una derecha reaccionaria y algunos de los hitos principales en el camino al golpe de Estado de 1933.

## **SOCIEDAD Y SISTEMA POLÍTICO A COMIENZOS DEL**

## SIGLO XX

En la primera década del siglo XX Uruguay contaba con una población de aproximadamente un millón de habitantes y había experimentado transformaciones demográficas que le conferían características de una sociedad moderna.<sup>5</sup> La población se había triplicado entre 1880 y 1908, debido al crecimiento en la esperanza de vida, el descenso en la tasa de mortalidad, la estabilidad en la tasa de fecundidad y la llegada masiva durante la segunda mitad del siglo XIX de inmigrantes, fundamentalmente procedentes de Europa. Entre ellos predominaron los italianos y españoles y, en menor medida, franceses, alemanes, ingleses y suizos.

El fenómeno migratorio también tuvo una expresión dentro de las fronteras nacionales. Las transformaciones productivas que habían tenido lugar en el medio rural en el último cuarto del siglo XIX (entre las que sobresalen el alambrado de los campos, la mestización de la ganadería y la incorporación de maquinaria agrícola) redundaron en una alta tasa de desocupación de la población rural, que protagonizó un proceso de migración interna hacia las urbes y en particular hacia la capital. Por esa razón, en los primeros años del siglo XX la mayoría de la población se concentraba en la capital, Montevideo, donde funcionaban las principales instituciones administrativas, educativas y políticas del país. A comienzos del siglo XX transitaba su última etapa el proceso de laicización de la administración pública, iniciado a mediados del siglo XIX.

En lo referente al mundo del trabajo, en los primeros años del siglo se había conformado un incipiente proletariado industrial y empezaba a aumentar la burocracia estatal, algo que se transformaría en una tendencia de larga duración en las décadas siguientes. Sin exagerar el igualitarismo de la sociedad uruguaya de esta época —téngase presente que más de la mitad de la población pertenecía a sectores medios o populares integrados por obreros fabriles, empleados públicos no calificados y dueños de pequeños comercios—, es posible afirmar que presentaba rasgos de movilidad social propiciados por el impulso a la educación pública en todos sus niveles. Entre 1900 y 1930 se produjo un aumento considerable de los alumnos matriculados en las tres ramas de la enseñanza, lo cual redujo considerablemente la tasa de analfabetismo. El papel de la escuela pública, laica, gratuita y obligatoria, que procuraba matizar las diferencias de clase y de género, fue clave en los intentos por eliminar las

profundas desigualdades culturales que separaban a Montevideo de los demás departamentos del país.

Varios autores han destacado la existencia desde el siglo XIX de un “nacionalismo débil” que alejaba a Uruguay de la situación de los países vecinos, en los que tanto la Iglesia como el Ejército y la oligarquía agroexportadora —todos ellos baluartes del conservadurismo— tenían mayor peso relativo. Por diversos factores, entre los que sobresalen su condición de frontera regional, el tamaño y la enorme incidencia de la inmigración que hacía de Uruguay un país abierto a la hibridación identitaria, estaríamos ante un escenario de escaso vigor de la herencia colonial en términos políticos y culturales, y de débil implantación capitalista. Como se ha sostenido, esta flaqueza de la triple constelación de poder es un dato clave para entender las características de las derechas uruguayas finiseculares y su proyección en las primeras décadas del siglo XX.<sup>6</sup>

A diferencia de lo ocurrido en la mayoría de los países latinoamericanos, las viejas divisas partidarias decimonónicas no desaparecieron a comienzos del siglo XX, sino que se reconvirtieron, dando origen a un sistema de partidos moderno y estable. El Partido Blanco (luego llamado Nacional) y el Colorado se identificaban con una tradición política que, como han señalado Caetano y Rilla, se combinó con “una gran aptitud para ‘llenarse de vino nuevo’, para acoger e integrar en su seno contenidos y significaciones propias de cada etapa superviniente”.<sup>7</sup> Asimismo, las dos colectividades constituyeron un bipartidismo aparente que escondía una gran heterogeneidad interna. La histórica división entre nacionalistas<sup>8</sup> y colorados tenía una carga mucho más emocional que ideológica, puesto que en ambos partidos convivían sectores o agrupaciones políticas que cubrían la totalidad del espectro ideológico, en ocasiones con diferencias irreconciliables en varios órdenes. Por su estructura policlasista, concitaban el apoyo de diversos sectores sociales, tanto urbanos como rurales.

En 1910 la aprobación de una ley que regulaba los comicios supuso un hito en la organización de una nueva y compleja ingeniería electoral, porque estableció, entre otras cosas, el voto simultáneo a un partido (denominado “lema”) y a una de las listas de candidatos (conocidas como “sublemas”), que reflejaban las distintas corrientes internas de las agrupaciones políticas. La disposición surgió para evitar la disgregación de los dos grandes partidos, pero acabó fomentando su fraccionamiento. Como se verá en este artículo, la Constitución que entró en vigencia en 1919 favoreció aún más la multiplicación de listas electorales dentro

de un mismo partido y fortaleció el papel de las minorías, algo que fue decisivo en los años veinte.

En esta sociedad —y dentro de un Partido Colorado que acumulaba más de cuatro décadas de experiencia en el gobierno— surgió el movimiento reformista, indisociable de la figura de José Batlle y Ordóñez.<sup>9</sup> Como han señalado José Pedro Barrán y Benjamín Nahum, el batllismo “había nacido en el poder, en cuna de oro”, y esa peculiar característica explica, en buena medida, tanto su impulso como su freno.<sup>10</sup>

La llegada de Batlle a la presidencia de la República en 1903 y 1911 debe entenderse en el marco de esta sociedad sin una oligarquía política y sin un Ejército poderoso, carente de contrastes sociales extremos y con un sistema político que para el Novecientos ya presentaba una peculiar y relativa autonomía respecto a los sectores hegemónicos.<sup>11</sup> A comienzos de siglo, Batlle era un dirigente colorado secundario —hijo de un expresidente y director de un diario de reciente aparición— que concitaba algo de simpatía entre las clases populares montevidéanas debido al apoyo otorgado desde el periódico *El Día* a las primeras huelgas obreras en 1895 y 1896. Durante la crisis económica de 1890 se había enfrentado a banqueros y miembros del alto comercio. Por su parte, los terratenientes veían en el político colorado a alguien demasiado proclive a la guerra civil, contexto en el que la violación de la propiedad y la alteración del orden eran corrientes. En 1903 y 1911 accedió a la presidencia de la República por medio de elecciones con régimen indirecto y con un cuerpo cívico muy restringido. Sus triunfos han sido interpretados como el resultado de hábiles manejos políticos tendientes a obtener el voto de los diputados y senadores de los dos grandes partidos políticos.<sup>12</sup>

Desde comienzos del siglo XX se fue consolidando una corriente reformista dentro del Partido Colorado y en torno a la figura de Batlle, que se caracterizó por su heterogeneidad ideológica, la proliferación de tendencias centrífugas —muchas de las cuales acabarían en rupturas y en la creación de nuevas agrupaciones— y la oscilación entre la moderación y el radicalismo en función de la correlación de fuerzas que primó en cada coyuntura. Este artículo pone el foco en esa heterogeneidad, en las escisiones a la derecha del batllismo y en las alianzas intra y suprapartidarias que posibilitaron la formación de frentes políticos y sociales de derecha.

## **LA CONVERSIÓN DE LAS DERECHAS A LA DEMOCRACIA**

## POLÍTICA

Entre 1911 y 1913, durante la segunda presidencia de Batlle, se radicalizó el impulso reformista que había despuntado durante su primer mandato.<sup>13</sup> Se intensificaba así un programa de gobierno que cuestionaba desde sus cimientos el orden conservador. La profunda crisis económica de fines del siglo XIX había favorecido el desarrollo de un modelo alternativo al agroexportador, que colocaba al Estado en el centro de la vida económica, donde desempeñaba una función clave en la regulación de las tensiones entre trabajadores y patrones. En esta dirección, el batllismo impulsó nacionalizaciones y estatizaciones de algunos de los principales servicios públicos que se encontraban en manos extranjeras —en su mayoría británicas—, y fomentó la industria manufacturera.

La modificación de las formas de explotación rural era, en el ideario reformista, otro de los resortes fundamentales para un desarrollo nacional alternativo. Si bien existió una brecha significativa entre los proyectos presentados o las ideas esbozadas y los finalmente aprobados y aplicados, fueron varias las iniciativas para combatir el latifundio, promover la expansión de medianos y pequeños productores rurales y aumentar los ingresos fiscales con gravámenes a los sectores de mayor riqueza.<sup>14</sup> El complemento de estos proyectos fue el impulso dado a la legislación social para consolidar o generalizar derechos como la regulación de la jornada laboral, el salario mínimo o las pensiones a la vejez. A su vez, las dos administraciones de Batlle y Ordóñez fueron periodos de tolerancia hacia la protesta obrera que, por norma general, fue escasamente reprimida.

En paralelo a esta dimensión material, el reformismo batllista también cuestionó el esquema de valores de las clases altas, alterando los cimientos sobre los que se levantaba una manera de ver el mundo y comprender las relaciones sociales. En particular, se propició un nuevo impulso anticlerical que se expresó en la supresión de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas y la aprobación de las leyes de divorcio, entre otras propuestas tendientes a favorecer la emancipación de las mujeres.<sup>15</sup>

En 1913 Batlle expuso su proyecto de reforma política basado en un gobierno colegiado que garantizaría la permanencia y la profundización de las transformaciones realizadas.<sup>16</sup> Su actitud generó la primera escisión de derecha

dentro del partido, que derivó en la formación del Partido Colorado General Fructuoso Rivera, liderado por el senador colorado Pedro Manini Ríos. En los años siguientes, el riverismo —como se conoció popularmente a este sector— fue ensanchando su marco de alianzas tanto dentro como fuera del Partido Colorado.

El otro gran opositor al reformismo fue el Partido Nacional, adversario histórico de un Partido Colorado que ejercía el gobierno de manera ininterrumpida desde hacía cuatro décadas. Cuando Batlle divulgó su proyecto de reforma política, los nacionalistas reeditaron demandas de larga data en favor del voto secreto, la concreción de garantías para el sufragio y la representación proporcional. Si bien detrás de la oposición nacionalista a la reforma estaba la voluntad de frenar el programa de transformaciones del batllismo, no menos relevante era su deseo de contrarrestar la modalidad de “gobierno de partido” con la ampliación de la representación de las minorías en el Parlamento y en diversos puestos de la administración pública. El pequeño partido católico Unión Cívica, creado en 1911, también se alineó entre los opositores al batllismo.<sup>17</sup>

Como resultado de esta superposición de intereses, hacia mediados de la década de 1910 la oposición al gobierno colegiado que impulsaba el batllismo encontró unidos al Partido Nacional, a la fracción riverista del Partido Colorado y a la Unión Cívica, y contó con el apoyo explícito de grupos de presión, entre los que sobresalió la recién creada Federación Rural. Una mirada atenta advierte en este proceso un conglomerado opositor de intereses sectoriales o de clase por encima de —y en diálogo con— las diferencias político-partidarias. En el terreno social los sectores agroexportadores lideraron la oposición al batllismo, que también concitó, en menor medida, la participación de comerciantes, banqueros e industriales que veían sus intereses económicos perjudicados por la voracidad reformista. José Pedro Barrán sostiene que los conservadores no sintieron un temor extremo ante el batllismo (aunque sí frente a su ala radical), pero lo juzgaron “inquietante”.<sup>18</sup> Esa “inquietud” —término muy extendido entre quienes gestaron la primera reacción— se debía fundamentalmente a su condición de propietarios y capitalistas, afectados por el avance de la legislación social, las nacionalizaciones llevadas adelante por el gobierno, los intentos de reforma fiscal y el temor a la pérdida de privilegios.

El imaginario conservador —y en esto no se reconocen grandes diferencias entre el corpus católico y el laico— rechazó la “moral corruptora” del batllismo por entender que fomentaba el hedonismo, el individualismo y la disolución de lazos

familiares. Se percibía el principio universal de igualdad —piedra angular de la democracia social batllista— como un artificio para negar la natural e incuestionable desigualdad originaria que regía el ordenamiento de las sociedades humanas. “Mesocrático”, “vulgar” y “antiheroico” fueron algunos de los adjetivos con que los sectores conservadores caracterizaron al batllismo y su programa de igualación social y defensa de las clases medias.<sup>19</sup>

En el plano de las representaciones, se revitalizó la antinomia campo-ciudad que, sin ser del todo novedosa, adquirió centralidad en las autoidentificaciones de los derechistas. Para sus detractores, el batllismo se identificaba con la ciudad y una serie de rasgos negativos que ella connotaba. La ciudad era, desde esta perspectiva, el escenario de los políticos profesionales que monopolizaban el manejo de los asuntos públicos y hacían crecer la burocracia y la corrupción. El espacio de la ciudad simbolizaba el artificio, el crecimiento fallido y la degeneración moral. En el discurso de las derechas el batllismo era el vocero ideológico y el representante de los intereses de las “clases parasitarias”. La antítesis era el campo, que encarnaba el lugar donde se producía la verdadera riqueza nacional. En la mirada de estos sectores, el mundo rural era idealizado como un ámbito impermeable a los comportamientos viles de la ciudad, que representaba lo tradicional y autóctono y ofrecía un modelo perfecto de organización social. Desde la literatura, la tribuna política y el activismo patronal fueron varias las voces que se alzaron en defensa de la estancia como célula social básica en la que convivirían, con armonía y paternalismo, estancieros y peones.<sup>20</sup>

La defensa de la igualdad social y de oportunidades o la masificación de la política no formaban parte del bagaje ideológico de las clases altas, que acabaron acompañando los reclamos democratizadores encabezados por el Partido Nacional. Su actitud debe interpretarse como una concesión hecha para detener a un enemigo común. En este sentido, resulta sugerente la tesis de Barrán según la cual “los partidos condujeron a las ‘clases conservadoras’ tanto o más que éstas a ellos”.<sup>21</sup>

Gerardo Caetano subraya que la aparición en 1915 de grupos de presión de signo conservador fue síntoma y factor de aceleración de un proceso de modernización del sistema político que comenzaba a transitar su etapa de consolidación.<sup>22</sup> Con sus miembros integrados a los dos grandes partidos —incluso en las cúpulas dirigentes—, la Federación Rural, fundada en diciembre de 1915, pasó a incidir en el Parlamento y en todos los ámbitos de la administración pública.<sup>23</sup> Pero

también otros grupos oligárquicos comenzaron a tener una presencia significativa y adoptaron el modus operandi de los ganaderos, caracterizado por la política de presión extrapartidaria. Entre ellos, la Liga de Defensa Comercial, creada en 1914, fue la organización de mayor peso en un sector con actividades e intereses muy heterogéneos.<sup>24</sup>

En los comicios para la Convención Nacional Constituyente celebrados el 30 de julio de 1916 la oposición política logró sus demandas. Fueron los primeros con voto secreto y universal masculino, en los que los analfabetos estaban habilitados para su ejercicio y en los que se implementaban fórmulas de reparto proporcional de los escaños. Los resultados de estas elecciones muestran que la propuesta batllista fue rechazada no sólo por las clases altas sino también por sectores medios y populares urbanos y rurales, puesto que sin su voto habría sido imposible alcanzar los guarismos efectivamente obtenidos.<sup>25</sup> Barrán y Nahum explican el comportamiento electoral de estos sectores aludiendo a la fuerza emocional del Partido Nacional, que contaba con una base popular significativa en el medio rural, y al temor que generaba el batllismo y sus excesos en sectores medios y bajos de mentalidad conservadora. Las oscilaciones del reformismo en relación con la representación de las minorías y las garantías para el sufragio secreto constituyen otro de los factores invocados cuando se analizan los resultados electorales de 1916.<sup>26</sup>

Como corolario de este proceso, la Constitución de 1917, que entró en vigor en 1919, fue el resultado de un pacto entre batllistas y nacionalistas. Con la reforma constitucional se consagraban los principios que habían movilizado a la oposición: el voto secreto, la ampliación de la ciudadanía a todos los varones (con la única excepción de los soldados de línea) y la representación proporcional. Se asistía, también, a un hito en el proceso de secularización con la separación definitiva de la Iglesia y el Estado. Aunque la propuesta de un colegiado tal como la había concebido Batlle quedó sepultada con la victoria de la coalición opositora, la nueva carta constitucional estableció un Poder Ejecutivo bicéfalo, integrado por un presidente (que tendría bajo su dependencia los ministerios de Gobierno, Guerra y Marina y Relaciones Exteriores) y un Consejo Nacional de Administración (CNA, dedicado a la política económica, la educativa, la industria, la obra pública y el trabajo). La nueva Constitución supuso la instauración definitiva de la coparticipación en todos los ámbitos de gobierno. El CNA se integraría con nueve miembros, seis por la mayoría y tres por la minoría. La creación de consejos autónomos para administrar el dominio industrial del Estado preveía mecanismos de coparticipación de los partidos. En

un sistema de constantes consultas electorales para renovar parcialmente las ramas de los poderes Ejecutivo y Legislativo, las minorías adquirieron un protagonismo novedoso y decisivo que fue característico de la vida política de los años veinte.<sup>27</sup>

## **EL “ALTO” A LAS REFORMAS Y LA HEGEMONÍA DE LA DERECHA MODERADA, 1916-1925**

La elección de la Convención Nacional Constituyente de 1916, realizada con una oposición fortalecida en el marco de un novedoso y muy activo conservadurismo de presión, significó un freno para las ambiciones de Batlle y sus seguidores. La coalición triunfante celebró la inmediata y contundente declaración ante la Convención Nacional Colorada de Feliciano Viera, sucesor de Batlle en la presidencia de la República en 1915. En lo que se conoció como el “alto de Viera”, el mandatario anunció un freno a las reformas legislativas y un cambio en la orientación de la política económica. Las consecuencias fueron inmediatas. Se detuvo, por ejemplo, la consideración parlamentaria de algunos proyectos de ley, como el que proponía un salario mínimo para el peón rural o la participación de los obreros y empleados en las utilidades de las empresas estatales. La suspensión de la política de estatizaciones y nacionalizaciones y el recrudecimiento de la represión gubernamental ante nuevos brotes de agitación sindical fueron otras claras señales de que los vientos habían cambiado su rumbo.<sup>28</sup>

El “alto” del presidente Viera fue también la antesala de una novedosa y cordial relación entre las agrupaciones patronales y el gobierno, que, por primera vez en una década, acercaban posiciones y empezaban a manejar un lenguaje en común. En ese contexto se realizaron varias visitas de organizaciones empresariales al presidente, agasajos y conferencias en los que el primer mandatario tuvo un lugar protagónico. La embestida de estos sectores para derogar —aunque sin éxito— la ley de la jornada laboral de ocho horas ilustra los niveles de optimismo alcanzados por la “euforia conservadora” que siguió al anuncio del “alto”.

En este periodo se recrudeció la acción de los grupos de presión que seguían el modelo de injerencia política de la pujante Federación Rural. Entre 1918 y 1919 las asociaciones de comerciantes lograron modificar el texto original del

proyecto que creaba una Junta Nacional de Subsistencias, montaron verdaderas campañas contra leyes sociales como la que establecía el descanso laboral obligatorio o la de salario mínimo y presionaron activamente en favor de la represión del movimiento obrero.

En la esfera industrial, la principal entidad patronal fue la Cámara de Industrias, bastante más cercana al oficialismo que a las asociaciones gremiales de otros sectores. Al igual que los comerciantes, los industriales permanecieron al margen de la acción electoral, pero mantuvieron actitudes más oscilantes en relación con las políticas del gobierno: a la vez que celebraban las políticas proteccionistas que los favorecían, reprobaban la legislación laboral y los proyectos estatizadores con los que el gobierno aspiraba a nivelar las desventajas de otros sectores. No obstante, lo realmente novedoso fue la sucesión de manifestaciones conjuntas de diversas asociaciones empresariales, que demostraban así una original acción de “corporativismo organizado”.<sup>29</sup>

Después del debut triunfal del frente antibatllista de 1916, algunos de los principales representantes de asociaciones empresariales comenzaron a plantearse la idea de un partido político propio. Fue en este contexto cuando cobró fuerza, sobre todo entre los integrantes de la Federación Rural, la iniciativa de crear un partido de derecha (“conservador”, en la terminología de sus impulsores) con hombres que representaran los intereses de los sectores económicos afectados por el reformismo y de conducta íntegra, por oposición a lo que se veía como un turbio manejo de los políticos profesionales en los asuntos públicos.<sup>30</sup> La idea acabó siendo un parteaguas dentro del universo conservador, donde varios de sus miembros defendían la naturaleza estrictamente corporativa de su acción política. Después del fracaso electoral de la Unión Democrática en 1919, la idea del “partido conservador” perdió adeptos y promotores. La vía extrapartidaria y la representación de las clases altas por medio de los sectores de derecha de los dos principales partidos parecían ofrecer más y mejores resultados a la hora de proteger los intereses de estos grupos.<sup>31</sup> En consecuencia, adoptaron una conducta que no alteraba el equilibrio bipartidista, permitiéndoles ejercer presión desde fuera y en todo el espectro político partidario.

El peso relativo de la inmigración y las características de un modelo de desarrollo económico que dependía de factores externos explican, en parte, que tanto las derechas como las incipientes izquierdas hayan mirado más allá de las fronteras nacionales a la hora de buscar referencias y tendencias, y, quizá con

mayor intensidad, alimentar sus temores. Hacia 1917, coincidiendo con el ingreso de Estados Unidos a la primera Guerra Mundial, cobraba fuerza la posibilidad de una crisis económica de posguerra. De manera simultánea, la Revolución rusa se transformaba en una referencia para fuerzas políticas y sociales de izquierda en todo el mundo. Sus detractores la demonizaron —por lo general sobredimensionando su influencia— y temieron que el modelo soviético se expandiera en las distintas realidades locales.

En Uruguay y en Argentina, entre 1917 y 1919 la agitación sindical fue otro de los factores de preocupación de las derechas, que observaban estos acontecimientos como la antesala de movimientos revolucionarios más profundos. En 1918 agrupaciones patronales y líderes políticos aplaudieron las acciones de la policía para dismantelar en Montevideo una huelga de trabajadores portuarios que finalizó con heridos y muertos. Los sectores empresariales amenazaron con un boicot patronal y confeccionaron listas negras. La represión contra manifestaciones sindicales fue una constante del gobierno de Feliciano Viera, y marcó un quiebre con el estilo hasta entonces más tolerante y dialogador en las relaciones con el movimiento obrero.<sup>32</sup>

También en el Partido Nacional se consolidaban algunas transformaciones gestadas tiempo atrás. Ganaba peso el liderazgo de Luis Alberto de Herrera a expensas del grupo que había hegemonizado la agrupación partidaria desde fines del siglo XIX, vinculado al capital bancario y comercial y a la prestación de servicios de asesoría legal y contable a empresas extranjeras. Con el ascenso de Herrera como nuevo caudillo partidario, el sector agropecuario pasó a tener un vocero y representante directo de sus intereses.

El freno a las reformas del presidente Viera generó nuevas divisiones dentro del heterogéneo sector batllista. A partir de la puesta en vigor de la nueva Constitución, experimentó una fase de estancamiento y pérdida de su caudal electoral y no logró recuperar las mayorías coloradas que le habían permitido avanzar con su programa de reformas. A fines de 1918 se formalizó la ruptura entre Batlle y el presidente Viera, quien desde 1915 venía siendo la voz de los grupos moderados y proclives a un apaciguamiento de la maquinaria reformista. El vierismo se sumaba así al espacio antibatllista del Partido Colorado, inaugurado en 1913 con la escisión del riverismo.<sup>33</sup> Entre 1916 y 1925 el batllismo quedó en minoría en todos los ámbitos de gobierno y prácticamente atado de manos en su proyecto reformista. Para este sector, el rearmado del mapa político en la segunda mitad de la década de 1910 fue también el inicio de casi

dos decenios de una dinámica de acuerdos y pactos dentro de su cada vez más desmembrado partido, pero también por fuera, en general con el sector contrario a Herrera en el Partido Nacional. El mantenimiento de la unidad partidaria como garantía para evitar el triunfo nacionalista fue el Leitmotiv del batllismo originario —aunque quizá sea más correcto decir que ésa era la voluntad del propio Batlle—, incluso cuando esto supuso una dinámica de acuerdos y pactos con los adversarios colorados. Por este motivo, la historiografía también ha bautizado los años veinte como los de la “república del compromiso”.<sup>34</sup>

Esta mecánica de constantes acuerdos intrapartidarios —alimentada por la alta frecuencia electoral establecida en la nueva Constitución— benefició a los otros sectores colorados, cuya fortaleza no radicaba en el caudal de votos sino en sus posibilidades de concretar alianzas. Hasta mediados de la década de 1920 el vierismo tuvo una representación que sobrepasaba con creces su magro caudal electoral, ubicado apenas por encima de 6% de los votos. Sin embargo, como resultado de los compromisos dentro de su partido y con el nacionalismo, tuvo mayoría en el CNA y en el Parlamento, y monopolizó los ministerios vinculados a esta rama del Ejecutivo y los puestos más importantes de la administración pública. La minuciosa reconstrucción de Gerardo Caetano comprueba que entre 1916 y 1925 el vierismo bloqueó con enorme eficacia al batllismo. En lo que refiere al vigor de la reacción, esta década se caracterizó por un conservadurismo moderado, puesto que se logró detener las reformas pero no se dio cabida a los (frecuentes) pedidos de retroceso.<sup>35</sup>

La democratización de la vida política consagrada a partir de la Constitución de 1919 avanzó a mediados de los años veinte, cuando se concretaron nuevas reformas en la legislación electoral. Las novedades apuntaban a reforzar las garantías para el sufragio (creación de un nuevo Registro Cívico y de la Corte Electoral, con participación de los dos partidos históricos), pero también a garantizar la alternancia en el gobierno de los partidos Nacional y Colorado.

Durante la primera mitad de la década de 1920 se produjo una renovación del personal político que otorgó notorio predominio a varios representantes de la dirigencia empresarial. También tuvieron lugar transformaciones en el perfil del Estado, que dejó de tener la base popular y el carácter interventor del primer batllismo para adquirir un contorno predominantemente administrador. El nuevo ordenamiento constitucional instituyó una coparticipación en la conducción del gobierno de los dos partidos tradicionales y las corporaciones representativas de las clases altas. Los vínculos de carácter más informal forjados durante la década

anterior se institucionalizaron mediante la creación de diversos organismos paraestatales de asesoramiento y planificación en materia económica, en los que participaban representantes del gobierno junto a delegados de las cámaras empresariales.<sup>36</sup>

Como consecuencia de las frecuentes instancias electorales, con las consiguientes renovaciones parciales de la rama colegiada del Poder Ejecutivo y del Parlamento, a partir de 1925 se produjeron nuevos cambios en el mapa de las derechas. En el elenco de gobierno fue perdiendo peso la representación de conservadores moderados en desmedro de una fracción más radical, en la que prevalecían ganaderos dirigentes de la Federación Rural. Por otra parte, en la segunda mitad de la década la tendencia a la fragmentación del Partido Colorado y del Partido Nacional se profundizó y de forma paralela hubo un crecimiento exponencial del electorado.

En 1925 y 1927 el batllismo sufrió otras dos escisiones a la derecha. La primera fue la formalización de la separación del núcleo vierista que, pese a transitar una fase de decadencia que pronto se revelaría irreversible, fundó el Partido Colorado Radical, posibilitando con su apoyo electoral en 1926 el triunfo del Partido Nacional en la presidencia del CNA, que fue ocupada por Luis Alberto de Herrera.<sup>37</sup> El vierismo acabó por desintegrarse poco después de la muerte de su líder a fines de 1927. El otro desgajamiento, conocido como sosismo, estuvo liderado por Julio María Sosa, fundador en 1927 del Partido Colorado por la Tradición, una de las agrupaciones más entusiastas en la recepción del corporativismo de cuño fascista.<sup>38</sup> Tampoco la agrupación impulsada por Sosa representó una alternativa duradera dentro del Partido Colorado. Aunque no tuvieron mayor proyección, estas escisiones golpearon al batllismo. Solo el riverismo se consolidó y fortaleció ante las disputas dentro del coloradismo. En relación con los desgajamientos a la derecha vale la pena destacar que en adelante, hasta los años sesenta, dentro del Partido Colorado siempre habrá conglomerados o frentes antibatllistas.

Dentro del Partido Nacional —que había dejado de ser el partido del llano y ya acumulaba años en la coparticipación gubernamental— se consolidó definitivamente la hegemonía del sector herrerista,<sup>39</sup> cuyo líder logró combinar con éxito su faceta de representante y vocero de los estancieros con una imagen que arraigaba en las masas del medio rural.<sup>40</sup> Su permanencia en el gobierno dependía del sostenimiento de las alianzas con los grupos colorados antibatllistas.<sup>41</sup>

Desde el freno que supusieron las elecciones de 1916 hasta mediados de los años veinte el campo de las derechas estuvo hegemonizado por una vertiente moderada. Esta moderación se expresó en la ambigüedad que caracterizó su vínculo con el reformismo, que osciló entre la aceptación de algunos de sus postulados básicos y el rechazo a lo que se entendía como “excesos” del ala radical del batllismo. En este sentido fue una corriente pragmática y conciliadora. A modo de ejemplo, nótese que los representantes de esta tendencia apoyaron algunas de las reformas sociales del batllismo —como la ley de ocho horas y otras iniciativas legales que entendían como preventivas o de contención de conflictos mayores— procurando alcanzar cierta armonía social, pero al mismo tiempo se manifestaron en contra de la voracidad impositiva del reformismo y defendieron la importancia del capital extranjero en la dinamización de la economía nacional. Los moderados se mostraban favorables a la acción mediadora del Estado, siempre y cuando éste se limitara a administrar intereses por naturaleza enfrentados, procurando no lesionar especialmente a ningún sector. En esta defensa de un Estado administrador, los conservadores moderados reivindicaban con firmeza la permanencia del bipartidismo y la acción de los grupos de presión empresariales.

En materia de procedencia social y origen político e ideológico, entre los “moderados” figuraban numerosos industriales, dirigentes de empresas con inversiones en áreas diversas, tecnócratas y algunos individuos que, proviniendo de las clases medias, tenían ya un largo itinerario en la administración pública, donde estrecharon vínculos con sectores empresariales.<sup>42</sup> Políticamente, muchos de ellos procedían del ala menos radical del reformismo y en los años veinte algunos engrosaron el vierismo y otros permanecieron en el sector más conservador del batllismo. En menor medida, el conservadurismo moderado estuvo integrado por dirigentes colorados independientes y del Partido Nacional contrarios al liderazgo de Luis Alberto de Herrera en su partido. Aunque sin peso relevante, esta tendencia se nutrió también de hombres independientes y del pequeño partido católico Unión Cívica.

## **EL ASCENSO DE LA DERECHA REACCIONARIA Y EL CAMINO AL GOLPE: 1928-1933**

Superada la crisis económica de la inmediata posguerra, hasta finales de los años veinte la economía uruguaya tuvo bajos niveles de crecimiento. Sin embargo, los

cambios en esta área en el ámbito mundial y el ascenso de Estados Unidos como nueva potencia hegemónica afectaron las bases del modelo de inserción internacional que Uruguay, igual que otros países latinoamericanos, ensayaba desde el último cuarto del siglo XIX. Los precios de las principales exportaciones —correspondientes al sector agropecuario y en alza hasta el final de la primera Guerra Mundial— descendieron y, a la vez, se incrementaron el volumen y el monto de las importaciones de bienes de consumo.<sup>43</sup>

Los sectores agroexportadores seguían con preocupación esta tendencia cuando, a partir de 1928, el ala radical del batllismo obtuvo margen de acción en la rama colegiada del Poder Ejecutivo y en algunas carteras ministeriales clave para el diseño de la política económica. Con este nuevo escenario el reformismo dio la batalla por un “segundo impulso”.<sup>44</sup> El grupo de jóvenes batllistas que encabezó la segunda embestida de reformas cuestionó la concentración de tierras en manos de los estancieros y la todavía prominente presencia del capital extranjero en resortes fundamentales de la economía nacional. Entre las propuestas más controversiales figuraba la que facultaba al Estado para comprar y arrendar tierras, junto a la largamente debatida iniciativa de apertura de un frigorífico nacional y la creación de una refinería de petróleo con participación estatal. En particular, este último proyecto —que apuntaba a recortar el predominio de los trusts petroleros estadounidenses en el país— reavivó la movilización concertada de asociaciones empresariales y derechas partidarias.

En agosto de 1929, con el voto en contra de los consejeros nacionalistas, el CNA aprobó el proyecto elaborado por el ministro de Industrias Edmundo Castillo para construir una refinería de petróleo con participación estatal. Aunque resultó vetado por el presidente Juan Campisteguy —colorado y aliado de los sectores antirreformistas—, el proyecto fue el disparador de una nueva iniciativa de los grupos de presión empresarial, que manejaban desde tiempo atrás la posibilidad de crear un organismo que funcionara como núcleo de todas las corporaciones patronales. Finalmente, luego de numerosos episodios de movilización política, en septiembre de 1929 se institucionalizó la creación de un Comité de Vigilancia Económica, que sería la nueva herramienta para combatir el renacer del “inquietismo”, término con el que los contemporáneos detractores solían referirse al batllismo. Bajo el liderazgo de la Federación Rural, el Comité se levantaba contra el “fanatismo reformista”, que impulsaba una catarata de proyectos para “repartir lo que no existe”:

leyes de salario mínimo para que por la magia de su imperio, el trabajo tenga una retribución superior [...] a sus mismos rendimientos [...] leyes para disolver la herencia, que disuelven también los principios que organizan y protegen el hogar; leyes para imponer la división de la tierra y lanzar al país por el abismo de su desvalorización violenta; y todo ello con la pretensión de crear otra vida al amparo de ese programa de muerte; de cambiar de un día para el otro las formas de producción, de propiciar organismos creadores de riqueza; de sacar del incógnito, de la penumbra ensayista, la luz del nuevo día.<sup>45</sup>

La segunda embestida conservadora incluyó la lucha contra la “inmigración indeseable”, y cuestionaba así la arraigada política cosmopolita y de puertas abiertas que caracterizaba a Uruguay hasta ese momento. Al mismo tiempo, en 1929 se crearon las Vanguardias de la Patria, organizaciones paramilitares semejantes a las juventudes fascistas europeas, con fuertes connivencias con oficiales del Ejército.

En las elecciones nacionales del 30 de noviembre de 1930 —un año después de la muerte de José Batlle y Ordóñez— la presidencia de la República recayó en Gabriel Terra, un político colorado de larga trayectoria en la administración pública que ideológicamente se ubicaba en el ala derecha del batllismo. El escenario político se encontraba dividido entre un CNA con mayoría batllista, un Senado con mayoría nacionalista y una Cámara de Representantes sin posibilidades de desempate.

Un año de nuevos virajes fue 1931. La crisis económica que golpeaba a toda América Latina se instaló también en Uruguay. Los consejeros batllistas enfrentaron la situación con propuestas de corte estatista e intervencionista. Por ley se otorgó al banco estatal la centralización y distribución de divisas, lo cual indignó a los sectores exportadores y agravó las ya rípidas relaciones con Gran Bretaña, hasta entonces el más importante comprador de carne uruguaya. Ese año el reformismo logró nuevos avances. Un acuerdo con el sector nacionalista contrario al herrerismo —desde entonces denominado “nacionalismo independiente”— posibilitó la sanción de dos importantes propuestas batllistas: la consolidación del monopolio estatal en la telefonía y la ley de creación de un nuevo ente público que tendría el monopolio del alcohol y el carburante nacional, y de la importación y refinación de petróleo crudo. La ley de creación de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland<sup>46</sup> (ANCAP),

más radical que la vetada en 1929, fue furibundamente criticada por los grupos empresariales, el herrerismo y los sectores de la derecha colorada antibatllista, que incrementaron aún más su encono cuando el nuevo ente adjudicó la provisión de gasolina y queroseno a una empresa petrolera estatal soviética, ganadora de la licitación pública.

Como han señalado Gerardo Caetano y Raúl Jacob, la movilización de los grupos patronales y empresariales ante la política económica del CNA rebasó las características de una protesta, transformándose en una decidida campaña golpista.<sup>47</sup> Bajo la consigna de “rodear” a Terra, grupos de presión y de derechas partidarias, liderados por Luis Alberto de Herrera y Pedro Manini Ríos, concentraron sus fuerzas en alejar al presidente del reformismo y ganarlo para su causa. La estrategia consistió en profundizar la prédica de desprestigio hacia el colegiado y el ordenamiento constitucional vigente —tildado de lento, costoso, electoralista y burocratizado— y bregar por la existencia de un presidente fuerte, con plenos poderes. Si la primera reacción había apuntado a limitar al reformismo, esta nueva campaña, transcurrida en un contexto latinoamericano de rupturas institucionales y coqueteos con los fascismos, no admitía matices: el reformismo tenía que ser arrancado de raíz.

El presidente Terra, mostrando una hábil faceta negociadora, fue complaciente con los reclamos de la alianza conformada por las asociaciones patronales y los sectores de derecha de los dos grandes partidos, y apoyó iniciativas como la de represión a la “inmigración indeseable” y la vigilancia ante posibles complots comunistas. Reeditando la tónica suprapartidaria y el papel preponderante de los grupos de presión empresarial, esta ofensiva ambientó y propició la creación del terrismo, un movimiento novedoso y singular para la historia de las derechas uruguayas.

La encrucijada política se resolvió el 31 de marzo de 1933 por medio de un (auto)golpe de Estado, largamente anunciado y esperado. Alentado por la alianza entre las agrupaciones patronales, el herrerismo y el coloradismo no batllista, el presidente Terra —con el apoyo del cuerpo de bomberos y policías y el consentimiento pasivo del Ejército— disolvió el CNA y el Parlamento y anunció el inicio de una “revolución” del orden legal que eliminaría el reformismo de la institucionalidad republicana. La ruptura democrática y el comienzo de la “Revolución de marzo” fue una victoria de la comunión de derechas partidarias y gremiales que se aprestaban a inaugurar la que sería su mejor década.

Retomando la caracterización sociopolítica que permitió identificar hasta mediados de la década de 1920 el predominio de una corriente moderada, cabe señalar que en el proceso que desembocó en el golpe de Estado de 1933 fue adquiriendo cada vez mayor hegemonía en el campo de las derechas un sector reaccionario en el que predominaron los ganaderos y representantes de la banca y el alto comercio.<sup>48</sup> En su mayoría, todos ellos se identificaron políticamente con el herrerismo y el riverismo. A diferencia de los “moderados” de la primera época, para los miembros de esta corriente cualquier esfuerzo nivelador del reformismo debía ser radicalmente combatido, puesto que, según entendían, venía a violentar un orden social concebido como orgánico e imperfecto, en el que la desigualdad entre las clases sociales y en la distribución de la riqueza era vista como natural, aceptable e incorregible.

Los reaccionarios de esta segunda época fueron antiestadistas rabiosos y censuraron cualquier intento intervencionista en el medio rural. Su antirreformismo los ubica en la tradición del ruralismo conservador, forjado en la segunda mitad del siglo XIX y atravesado por una desconfianza de base hacia los políticos y el electoralismo, por lo general asociados con el ejercicio corrupto del poder. Este grupo reivindicaba postulados muy arraigados en las clases altas rurales, como la idea de que el campo era la verdadera usina generadora de riqueza nacional, y los estancieros, quienes, por riqueza y lugar social, debían conducir al país y amortiguar las diferencias sociales con una actitud paternalista y solidaria, pero jamás clasista. No fue, por lo tanto, una corriente en la que predominara el respeto a la institucionalidad democrática, como quedó demostrado en el protagonismo que tuvieron en la campaña golpista desde comienzos de los años treinta.

A pesar de la notoria diversidad de esta derecha política, social y económica, unánimemente sus integrantes se identificaron como par antitético al reformismo. Fue allí donde vieron a la izquierda más temible. El miedo al retorno del ala radical del batllismo inspiró, sin duda, la mayoría de sus reacciones y previsiones, en las que, en menor medida, influyeron también la alarma generada por la agitación sindical y los movimientos y partidos de izquierda de inspiración anarquista, socialista y comunista.

La característica sobresaliente de los tres lustros analizados fue la acción mancomunada de partidos políticos y grupos de presión para constreñir y en ocasiones detener el reformismo. En ese contexto tuvieron lugar dos reacciones que, vistas en conjunto, corroboran esta dimensión pragmática que caracterizó la

praxis de las derechas: lejos de ser una convicción, la apelación a los principios democráticos se mostró como un recurso de conveniencia. Los dos hitos, 1916 y 1933, dejaron al descubierto una faceta fundamentalmente reactiva. Esto no significa que las derechas carecieran de proyectos alternativos de radical revisión del orden establecido, sino que los sectores que los tenían fueron realmente minoritarios.

Cabe, por último, destacar que la interrupción de la legalidad democrática fue interpretada y ejecutada en términos de “ajuste” y no de ruptura, lo cual no sólo configuró un escenario original en un panorama regional y latinoamericano signado por golpes de Estado y propuestas de cambio radical, sino que también consolidó un particular vínculo entre derechas y legalidad que se reeditaría en otros momentos del siglo XX.

## REFERENCIAS

ALDRIGHI, Clara

2000 “La ideología antisemita en Uruguay. Su contexto católico y conservador (1870-1940)”, en Clara ALDRIGHI, María CAMOU, Miguel FELDMAN, Gabriel ABEND y Teresa PORZECANSKI, Antisemitismo en Uruguay. Raíces, discursos e imágenes (1870-1940), Montevideo, Trilce.

BARRÁN, José Pedro

2004 Los conservadores uruguayos (1870-1933), Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental.

BARRÁN, José Pedro, y Benjamín NAHUM

1979 Batlle, los estancieros y el imperio británico, t. I, El Uruguay del Novecientos, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental.

1981 Batlle, los estancieros y el imperio británico, t. II, Un diálogo difícil, 1903-1910, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental.

1987 Batlle, los estancieros y el imperio británico, t. VIII, La derrota del batllismo, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental.

2002 “El problema nacional y el Estado: un marco histórico”, en José Pedro BARRÁN y Benjamín NAHUM, Historia política e historia económica, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental.

BERTINO, Magdalena, Reto BERTONI, Héctor TAJAM y Jaime YAFFÉ

2005 La economía del primer batllismo y los años veinte. Auge y crisis del modelo agroexportador (1911-1930), Montevideo, Instituto de Economía–Facultad de Ciencias Económicas y de Administración–Editorial Fin de Siglo.

CAETANO, Gerardo

1982 “Los vaivenes de la estrategia conservadora. La Unión democrática de 1919”, Cuadernos del Claeh, núm. 23, julio-septiembre.

1983 “Las fuerzas conservadoras en el camino de la dictadura. El golpe de Estado de Terra”, Cuadernos del Claeh, núm. 28, octubre-diciembre.

1987 “Las resonancias del primer fascismo en el Uruguay (1922-1929/30)”, Revista de la Biblioteca Nacional, mayo.

1992 La República conservadora. 1916-1929, t. I, El alto a las reformas, Montevideo, Fin de Siglo.

1993 La República conservadora. 1916-1929, t. II, La guerra de posiciones, Montevideo, Fin de Siglo.

2011 La República batllista, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental.

2016 “Algunas pistas para el estudio de las derechas rioplatenses”, en Ernesto BOHOSLAVSKY, Magdalena BROQUETAS y Olga ECHEVERRÍA, Las derechas en el Cono Sur, siglo XX. Actas del Séptimo Taller de Discusión, Buenos Aires, Universidad Nacional de General Sarmiento. Consultado en <[www.ungs.edu.ar/derechas](http://www.ungs.edu.ar/derechas)>.

CAETANO, Gerardo, y Jorge BALBIS

1981 “Los sectores conservadores ante el modelo batllista. La coyuntura de 1916”, Cuadernos del Claeh, núm. 18, abril-junio.

CAETANO, Gerardo, y Roger GEYMONAT

1997 La secularización uruguaya, 1859-1919, Montevideo, Santillana.

CAETANO, Gerardo, y Raúl JACOB

1989 El nacimiento del terrismo, t. I, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental.

1990 El nacimiento del terrismo, t. II, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental.

1991 El nacimiento del terrismo, t. III, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental.

CAETANO, Gerardo, y José Pedro RILLA

1985 “El sistema de partidos: raíces y permanencias”, en Gerardo CAETANO, José RILLA, Pablo MIERES y Carlos ZUBILLAGA, De la tradición a la crisis. Pasado y presente de nuestro sistema de partidos, Montevideo, ClaeH–Ediciones de la Banda Oriental.

CHERONI, Alción

1986 El pensamiento conservador en el Uruguay, Montevideo, ClaeH.

CUADRO, Inés

2007 “Partidos, elecciones y democracia política”, en Ana FREGA, Ana María RODRÍGUEZ AYÇAGUER, Esther RUIZ, Rodolfo PORRINI, Ariadna ISLAS, Daniele BONFANTI, Magdalena BROQUETAS e Inés CUADRO, Historia del Uruguay en el siglo XX (1890-2005), Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental.

2018 Feminismos y política en el Uruguay del Novecientos. Internacionalismo, culturas políticas e identidades de género (1906-1932), Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental.

DUFFAU, Nicolás, y Adela PELLEGRINO

2016 “Población y sociedad”, en Gerardo CAETANO, Historia contemporánea del Uruguay, t. II, Reforma social y democracia de partidos, 1880-1930, Montevideo, Fundación Mapfre–Editorial Planeta.

ECHEVERRÍA, Olga

2016 “Los estudios sobre las derechas argentinas y rioplatenses del siglo XX. Balances, preguntas y perspectivas de análisis”, en Ernesto BOHOSLAVSKY, Magdalena BROQUETAS y Olga ECHEVERRÍA (eds.), Las derechas en el Cono Sur, siglo XX. Actas del Séptimo Taller de Discusión, Buenos Aires, Universidad Nacional de General Sarmiento. Consultado en <[www.ungs.edu.ar/derechas](http://www.ungs.edu.ar/derechas)>.

FINCH, Henry

1987 La economía política del Uruguay contemporáneo, 1870-2000, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental.

FREGA, Ana

1987 El pluralismo uruguayo, 1919-1933. Cambios sociales y política, Montevideo, ClaeH.

2007 “La formulación de un modelo 1890-1918”, en Ana FREGA et al., Historia del Uruguay en el siglo XX (1890-2005), Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental.

JACOB, Raúl

1982 “Del reformismo y sus impulsos (1929-1933)”, Seminario Modernización y sistema político en el Río de la Plata (1875-1933), Montevideo, Ciedur.

LVOVICH, Daniel

2016 “La Semana Trágica en clave transnacional. Influencias, repercusiones y circulaciones entre Argentina, Brasil, Chile y Uruguay (1918-1919)”, en João Fábio BERTONHA y Ernesto BOHOSLAVSKY, Circule por la derecha. Percepciones, redes y contactos entre las derechas sudamericanas, 1917-1973, Buenos Aires, UNGS.

REAL DE AZÚA, Carlos

1964 El impulso y su freno. Tres décadas de batllismo y las raíces de la crisis uruguaya, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental.

1988 Partidos, política y poder en Uruguay (1971-coyuntura y pronóstico), Montevideo, Universidad de la República.

REALI, Laura

2016 Herrera. La revolución del orden. Discursos y prácticas políticas (1897-1929), Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental.

RILLA, José

1992 La mala cara del reformismo. Impuestos, Estado y política en Uruguay, 1903-1916, Montevideo, Editorial Arca.

RODRÍGUEZ AYÇAGUER, Ana María

(2007) “La República del compromiso, 1919-1933”, en Ana FREGA et al., Historia del Uruguay en el siglo XX (1890-2005), Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental.

VANGER, Milton I.

2012 José Batlle y Ordóñez. La elección de 1926. El fin de la edad dorada del Colegiado, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental.

\* Agradezco los comentarios y las sugerencias de Gerardo Caetano, Nicolás Duffau e Inés Cuadro a una primera versión de este texto, que también contó con la lectura atenta y entusiasta de Luis Broquetas. También los oportunos señalamientos de Clara Lida y Ernesto Bohoslavsky, y los comentarios de Eugenia Allier durante la discusión de la ponencia que sirvió de base para este artículo.

La historiografía suele adoptar esta terminología (“periodo batllista” o “primer batllismo”) para referirse al tramo comprendido entre 1903 y 1933, signado por

la modernización del sistema político, así como por el impulso y el freno de un programa de reformas económicas, sociales y morales promovidas desde el Estado. A su vez, el término batllismo alude al movimiento formado en torno al político colorado José Batlle y Ordóñez. Como se verá en este artículo, se trató de un grupo heterogéneo que cobijó expresiones ideológicas muy variadas.

Desde 1980 Gerardo Caetano inauguró y abonó, con una vasta obra, un campo de trabajo dedicado específicamente a las derechas uruguayas en el primer tercio del siglo XX. Enfocado en las derechas político-partidarias y en las asociaciones empresariales —aunque sin soslayar la gestación de motines dentro del Ejército —, este primer corpus de textos de Caetano adopta fundamentalmente la perspectiva del “conservadurismo”. CAETANO y BALBIS, 1981; CAETANO, 1982; 1983; 1987; 1992; 1993. En un texto más reciente, Caetano propuso una caracterización de dos “familias ideológicas” que se consolidan en el Novecientos: el republicanismo solidarista y el liberalismo individualista o conservador. CAETANO, 2011. Desde ángulos y preocupaciones diferentes, los trabajos de Alción Cheroni, Clara Aldrighi, José Pedro Barrán y Laura Reali también se inscribieron en la línea de “los conservadores” o del “pensamiento conservador”. CHERONI, 1986; ALDRIGHI, 2000, pp. 129-224; BARRÁN, 2004; REALI, 2016.

Gerardo Caetano caracterizó a los conservadores como aquellos “sectores de la sociedad interesados en defender y conservar determinados privilegios que sentían vulnerados y amenazados”. Sus textos matizaron la idea de una “república conservadora” que se forma y consolida entre los dos embates antirreformistas de 1916 y 1929. A diferencia de la historiografía argentina, en la que la expresión alude al periodo anterior (1880-1916) y a los intentos de la oligarquía por impedir la concreción de un orden democrático, en Uruguay estos mismos grupos sociales protagonizaron una aparente contradicción: en aras de conservar el orden social sacudido desde el gobierno, contribuyeron a democratizar la vida política.

Recientemente, la consolidación de un campo regional de estudios históricos sobre las derechas ha propiciado una reconsideración del llamado periodo batllista con nuevas preguntas y claves interpretativas y, sobre todo, con una mirada crítica hacia las categorías de análisis que guiaron las investigaciones anteriores. En este contexto, se ha puesto el énfasis en la necesidad de revisar las escalas geográficas de análisis y de reparar en la circulación de ideas, individuos y textos por medio de itinerarios regionales que no siempre reproducían la lógica

de la recepción del centro hacia la periferia. Como resultado de estas inquietudes renovadas, algunos autores resaltan la necesidad de estudiar tanto las redes políticas y de sociabilidad como los vínculos y circuitos transfronterizos. LVOVICH, 2016; CAETANO, 2016.

DUFFAU y PELLEGRINO, 2016, pp. 187-235.

CAETANO, 2016, pp. 141-142; BARRÁN, 2004; REAL DE AZÚA, 1988.

CAETANO y RILLA, 1985, p. 24.

Los términos “nacionalistas” y “nacionalismo” aluden a los integrantes y a la corriente de ideas del Partido Nacional, históricamente también conocido como Partido Blanco.

La categoría “reformismo” fue acuñada por Barrán y Nahum para aludir a esta “tendencia a promover el cambio más o menos radical de los modelos económicos, sociales y mentales dominantes, sin recurrir a la violencia”. BARRÁN y NAHUM, 1981, p. 13.

BARRÁN y NAHUM, 1979, p. 268. La alusión a los límites del proyecto batllista remite al ensayo de Carlos Real de Azúa, quien tuvo una visión crítica del tipo de modernización ocurrida en Uruguay y sus persistentes legados. REAL DE AZÚA, 1964.

De acuerdo con esta tesis, el sistema político uruguayo se representaba a sí mismo, lo que equivale a afirmar que, a pesar de que no se desligaba totalmente de los sectores hegemónicos, tampoco era el portavoz ni la herramienta de los sectores propietarios que mantenían el control de la economía. Véanse BARRÁN y NAHUM, 2002, pp. 51-71; FINCH, 2005, pp. 24-29.

Respecto de las elecciones de 1903, Barrán y Nahum sostienen que “Batlle conquistó la adhesión de los diputados y senadores colorados, y de ocho nacionalistas capitaneados por Eduardo Acevedo Díaz, en medio de cabildeos y maniobras muy sutiles, dignas de un político renacentista italiano [...] Batlle logró el voto de los diputados y senadores en conversaciones privadas llenas de promesas, entretelones típicos del elenco político tradicional que venía rigiendo al país desde 1865”. BARRÁN y NAHUM, 1979, p. 218.

Una buena síntesis de las principales transformaciones en los tres primeros

lustros del siglo XX puede encontrarse en FREGA, 2007, pp. 17-50.

En esta área se amplió el crédito y se realizaron varios intentos para tecnificar la explotación agropecuaria. Se elaboraron proyectos tendientes a fomentar la actividad agrícola, y se buscó, sin éxito, incrementar la contribución inmobiliaria que pagaban los latifundios. Sobre la política impositiva del batllismo y sus frenos, véase RILLA, 1992.

Sobre la posición de Batlle ante la “cuestión femenina” y el desarrollo del “feminismo de la compensación”, véase CUADRO, 2018.

En sus “Apuntes” Batlle presentó la idea de un Poder Ejecutivo colegiado, cada uno de cuyos nueve miembros se renovaría anualmente. De esta manera se garantizaba que la oposición sólo alcanzara la mayoría si ganaba las elecciones por cinco años consecutivos.

Véase el apartado correspondiente a este periodo en CAETANO y GEYMONAT, 1997, pp. 87-112.

BARRÁN, 2004, p. 108.

BARRÁN, 2004, pp. 103-112.

Entre los representantes más destacados de estas ideas sobre el lugar social de los estancieros se encuentran José Irureta Goyena, Luis Alberto de Herrera y Carlos Reyles. Barrán ha reparado en que la obra literaria de Carlos Reyles representa la más acabada legitimación filosófica del poder de los estancieros. BARRÁN, 2004, pp. 97-102. Sobre este aspecto, véase también el capítulo III de Laura Reali sobre Herrera y la tradición ruralista uruguaya de carácter conservador; REALI, 2016, pp. 165-175.

BARRÁN, 2004, p. 113.

CAETANO, 1992, pp. 22-23.

CAETANO, 1992, pp. 95 ss.

La Liga de Defensa Comercial publicaba La Defensa Comercial, un diario que se transformó en un vocero destacado de los sectores antirreformistas. En el periodo también tuvieron actividad otros gremios del sector comercial, como la

Cámara Nacional de Comercio, la Cámara Mercantil de Productos del País y el Centro de Almaceneros Minoristas. CAETANO, 1992, pp. 100-102.

Las adhesiones se dividieron de la siguiente manera: batllismo, 40.52%; nacionalismo, 46.08%; coloradismo antioficialista, 10.95%; cívicos, 1.09%, y socialistas 1.36%, BARRÁN y NAHUM, 1987, p 129.

Para las interpretaciones de los resultados electorales del 30 de julio de 1916, véase BARRÁN y NAHUM, 1987, capítulos 2 y 3.

Sobre el escenario político abierto a partir de la constitución de 1919, véase FREGA, 1987.

CAETANO, 1992, p. 81.

CAETANO, 1992, p. 104.

En 1917 se produjo el intento frustrado de creación de un Partido Democrático del Comercio y de la Industria. En 1919 se organizó, y formó parte de los comicios la Unión Democrática. No deja de ser curiosa esta animadversión hacia los políticos profesionales si se advierte que algunos de los más conspicuos líderes gremiales también integraban o habían formado parte de los dos grandes partidos, Nacional y Colorado. Luis Alberto de Herrera y Pedro Manini Ríos eran dos de los representantes más notorios de esta aparente contradicción.

Sobre los intentos de creación de un partido de derecha, véase CAETANO, 1982; 1992, t. I, pp. 121-180.

CAETANO, 1993, t. II, pp. 83-94.

En las elecciones nacionales de 1919 la candidatura de Baltasar Brum logró el consenso de batllistas y vieristas. Brum, un político de 35 años y destacada trayectoria, había sido ministro de Relaciones Exteriores —posición desde la cual se adhirió a la política aliadófila durante la primera Guerra Mundial— e integrante de la comisión electoral que logró el pacto constitucional con el nacionalismo. El riverismo se mantuvo neutral en el apoyo a Brum, lo que no significaba quedar aislado, puesto que sus votos eran fundamentales para garantizar el triunfo del Partido Colorado. CAETANO, 1992, pp. 109-110.

RODRÍGUEZ AYÇAGUER, 2007, pp. 51-84.

CAETANO, 1993, pp. 11-90.

Por ejemplo, se creó la Comisión Nacional de Defensa de la Producción (1922) y la Comisión Nacional de la Industria y el Comercio (1924). Seguían predominando, no obstante, los mecanismos más informales de asociación. Sobre las novedosas relaciones entre Estado y empresarios, véase CAETANO, 1993, pp. 29-45.

VANGER, 2012.

Se registraron apoyos e interés hacia los fascismos en ámbitos muy diversos: cámaras empresariales, herrerismo, riverismo y dentro del Ejército. En todos los casos se trató más de simpatías que de adhesión incondicional. CAETANO, 1987.

En adelante el término herrerismo referirá al sector del Partido Nacional liderado por Luis Alberto de Herrera.

CAETANO, 1993, p. 85.

La presidencia del colorado independiente José Serrato fue posible por el apoyo herrerista a su candidatura. Algo similar ocurriría con la candidatura de Juan Campisteguy, presidente de la República entre 1927 y 1930.

CAETANO, 1993, t. II, pp. 187-197.

BERTINO, BERTONI, TAJAM y YAFFÉ, 2005.

La expresión corresponde a JACOB, 1982.

Tomado de la Revista de la Federación Rural, V.1929, citado en CAETANO, 1983, p. 48.

El término alude al cemento Pórtland, material de construcción con un color semejante al de la piedra de las canteras inglesas de Portland.

CAETANO y JACOB, 1989; 1990; 1991.

CAETANO, 1993, pp. 197-217.

LA DERECHA RADICAL BRASILEÑA ENTRE EL TRADICIONALISMO,  
LAS LIGAS NACIONALISTAS Y LA SEDUCCIÓN DEL FASCISMO (1917-  
1932)

JOÃO FÁBIO BERTONHA

*Universidade Estadual de Maringá e Investigador CNPq, Brasil*

## **INTRODUCCIÓN**

Si observamos la historia de la extrema derecha (o derecha radical) en Occidente entre las dos guerras mundiales, es fácil percibir que su expansión por el mundo tuvo “olas” bien definidas. Al final de la primera Guerra Mundial (especialmente entre 1917 y 1921), en varios países se formó un gran número de ligas paramilitares y grupos nacionalistas para contener la agitación obrera. En la mayoría de los casos eran grupos conservadores o reaccionarios que se disolvieron o perdieron importancia en la década de 1920. La primera “ola” realmente fascista surgió a principios de los años veinte motivada por la crisis económica y social inmediatamente posterior a la primera Guerra Mundial, y por el ejemplo de Mussolini en Italia. En ese periodo, por toda Europa y América surgieron pequeños partidos fascistas, la mayoría de los cuales desapareció con el paso de los años. Esa primera “ola” fascista también tuvo poca repercusión en Brasil: las ligas nacionalistas brasileñas perdieron peso tan rápidamente que sabemos muy poco de ellas y de los pequeños movimientos afines que hubo en el país en la década de 1920 y a inicios de la siguiente.

A principios del decenio de 1930, tras el golpe al sistema capitalista generado por la crisis de 1929 y el descubrimiento de que el fascismo no era un fenómeno restringido a Italia (debido al creciente poder del nazismo y la ascensión de Hitler al gobierno alemán después), surgió una nueva “ola” de partidos fascistas por Europa, América y Australia, muchos de los cuales recuperaron y reciclaron

a los hombres y las ideas de la década anterior. La Ação Integralista Brasileira (fundada en 1932) está claramente comprendida aquí, puesto que superó y absorbió a los pequeños grupos de inspiración fascista surgidos en Brasil en la década anterior.

El objetivo de este texto es, justamente, estudiar mejor los 15 años comprendidos entre 1917 y 1932, para entender los vínculos de los diversos movimientos y grupos de extrema derecha con el fascismo institucionalizado que surgió en 1932. ¿Cómo y por qué la élite dominante coqueteó con el fascismo y el autoritarismo? ¿Por qué regresó al patrón más conservador e incluso liberal de los años anteriores? ¿Cuáles fueron las similitudes y las diferencias de esos pequeños partidos fascistas de los años veinte con la Ação Integralista Brasileira? ¿Cómo y en qué medida esto preanunció o creó las bases para la institucionalización fascista de la década siguiente? Ésas son algunas de las cuestiones que aquí se pretende abordar.

Para dar cuenta de estos objetivos, el texto se divide en secciones bien definidas. En primer lugar, haré un esbozo sobre la historia de la derecha radical brasileña en los tiempos de agitación social entre 1917 y mediados de la década de 1920. El periodo de reflujo de la extrema derecha —grosso modo, entre mediados de los años veinte y 1930— es el foco de la siguiente sección. Por último, se da importancia al crucial periodo de 1930 a 1932, cuando se lanzaron las bases para que la extrema derecha se consolidara y se convirtiera posteriormente en una opción política real.

En términos teóricos es fundamental para los objetivos del texto la definición de derecha e izquierda, y, especialmente, de derecha radical o extrema derecha. Para ello, sigo los presupuestos teóricos de Norberto Bobbio.<sup>1</sup> Por extrema derecha o derecha radical entiendo a un grupo particular dentro del campo de la derecha que no se contenta con el mantenimiento del orden social —como los conservadores— y que tampoco intenta restaurar un pasado mítico —como los reaccionarios—, sino que busca, al menos en teoría, crear algo nuevo y destruir la democracia liberal. En ese sentido, considero que los fascistas pertenecen a la derecha radical, aunque ésta no se limita a ellos.<sup>2</sup>

Vale la pena mencionar que las reflexiones aquí incluidas tienen una continuidad con otros textos en los que he abordado la cuestión de la extrema derecha en Brasil en comparación con otros países y movimientos. Remito a ellos para profundizaciones y también para referencias bibliográficas adicionales a las que

citaré aquí.<sup>3</sup>

## **LA GUERRA MUNDIAL, LA AGITACIÓN OBRERA Y LA BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS NACIONALISTAS (1914-1919)**

Después del final de la Monarquía en 1889 se inició la llamada República Velha o república oligárquica. En ese régimen, la derecha tradicional —conservadora, expresión de los grandes propietarios de tierras— comandaba la vida política y económica brasileña. Los partidos políticos eran provinciales y había poca participación popular en el sistema electoral. Distintos actores sociales, especialmente el movimiento obrero, cuestionaron el sistema en varios momentos, pero se mantuvo estable, en general, hasta 1930. Durante la primera Guerra Mundial, no obstante, ciertos aspectos y problemas de ese sistema político y económico empezaron a hacerse evidentes.

Brasil participó de forma marginal en la primera Guerra Mundial. Neutral en los primeros años de conflicto, le declaró la guerra a Alemania en 1917 y envió una división naval para patrullar el océano Atlántico al año siguiente. Una participación limitada, acorde con el reducido estatus internacional que tenía el país entonces. De cualquier forma, la guerra trajo consecuencias de peso para la sociedad brasileña. Dadas la imposibilidad de los beligerantes de continuar comprando el mayor producto de exportación nacional de aquellos años —el café— y la escasez de capitales en el mercado internacional, la economía agroexportadora entró en crisis. Debido a la necesidad de sustituir las importaciones bloqueadas por la guerra, hubo un brote industrial en el país, con un consiguiente aumento en el número de obreros. Éstos, al sufrir los efectos de la fuerte inflación y la crisis habitacional, hicieron una huelga general en 1917. A pesar de que fue controlada, la huelga asustó a los patrones, y, como se verá a continuación, tuvo un papel importante en el proceso de renovación de la derecha radical.

El mayor impacto de la guerra ocurrió en el campo político y de las ideas. Desde finales del siglo XIX sectores de la intelectualidad y de la clase política brasileñas criticaban la subordinación del país al capitalismo extranjero, temían la agitación obrera y defendían la existencia de un Estado fuerte como alternativa al precario sistema liberal instalado durante la República Vieja. Pero

fue a partir de la eclosión de la guerra en Europa, y, especialmente, después de la entrada de Brasil en el conflicto, cuando el tema del nacionalismo invadió la agenda nacional. Claramente, Brasil no estaba preparado en términos materiales ni de cohesión nacional para participar en un conflicto de esta magnitud, y el debate subsiguiente —que abarcó todo el espectro político, de izquierda a derecha, de liberales democráticos a autoritarios— giró en torno a cómo el país podría fortalecerse y sobrevivir en el ámbito internacional.

El temor a la sublevación obrera, tan presente en esos años, también fue un elemento de suma importancia para explicar el ascenso de los nacionalistas, que pensaban resolver este problema por medio del combate al movimiento sindical y su incorporación al “cuerpo” nacional. El movimiento obrero organizado era, en realidad, débil en el Brasil de la República Vieja, tanto por el origen extranjero de la mayoría de los trabajadores (portugueses, españoles e italianos, en gran parte) como por la inflexibilidad del sistema político y la fuerte represión. Sin embargo, huelgas y movimientos liderados por obreros se volvieron comunes en las grandes ciudades brasileñas a inicios del siglo XX, lo que empezó a asustar a las élites conservadoras. En 1917 la agitación obrera alcanzó su cima, con huelgas y manifestaciones en São Paulo, Rio de Janeiro y otras ciudades.

En ese escenario surgieron diversas ligas nacionalistas que deseaban repensar Brasil y combatir la agitación obrera.<sup>4</sup> La primera fue la Liga da Defesa Nacional (LDN), fundada en 1916 por el poeta Olavo Bilac. La LDN propuso el fortalecimiento de la nacionalidad brasileña por medio del servicio militar universal y el patriotismo. Gracias al Ejército, la nación sería regenerada y se formarían buenos ciudadanos. La postura era antiliberal, defensora de la jerarquía y de la familia, y enemiga del movimiento obrero en ascenso.<sup>5</sup> La LDN ganó el apoyo de militares, empresarios y sectores de la clase media, así como de miembros del gobierno. Algunas de sus iniciativas, como el servicio militar por sorteo y la creación de los Tiros de Guerra (unidades militares de segunda línea que existen aún hoy, destinadas más a formar “buenos brasileños” que al entrenamiento militar propiamente dicho), fueron aprobadas. El apoyo a la LDN no fue, sin embargo, universal, ni siquiera entre los que se decían nacionalistas. Alberto Torres, importante pensador nacionalista del periodo, por ejemplo, no la apoyó, pues creía que los problemas nacionales no se resolverían con el servicio militar, sino con reformas administrativas, prudencia fiscal y nacionalismo económico.

Otro grupo nacionalista con base en Rio de Janeiro se organizó alrededor de la revista *Brazileia*. Revista Mensal de Propaganda Nacionalista y de su director, Álvaro Bomílcar. Este grupo creía que los males de Brasil provenían de la colonización portuguesa, y propuso la nacionalización de las instituciones brasileñas. El conservadurismo católico también estaba presente en sus páginas. En 1919 surgió la revista *Propaganda Nativista*, que defendía un nacionalismo económico, quería a los extranjeros fuera de la política y promovía el catolicismo social. Inspirada en Alberto Torres, apuntaba a crear una tecnocracia de los más cualificados.

En São Paulo surgió otro grupo de fundamental importancia. Desde el inicio del siglo, un núcleo reformista se había formado dentro del Partido Republicano Paulista. Liderado por Júlio de Mesquita Filho (director del diario *O Estado de São Paulo*), congregaba a intelectuales favorables a la educación de las masas con un sentido nacionalista. Estos hombres, reunidos en la Liga Nacionalista surgida en la capital paulista en 1916, defendían una solución brasileña para los problemas de Brasil, y una juventud vigorosa y nacionalista. Su ambición era tener un país por encima de las divisiones de clase, estatales y de los intereses privados que fuera capaz de superar la dependencia del exterior y la debilidad nacional. El mismo grupo publicó la famosa *Revista do Brasil* para defender sus ideas.<sup>6</sup>

La experiencia de las ligas brasileñas —así como la de la huelga general—, en realidad, es cercana a la de otros países: la revolución bolchevique en Rusia, la ocupación de las fábricas en Italia, el red scare en Estados Unidos, las repúblicas soviéticas en Baviera y Hungría, la Semana Trágica en Argentina, la huelga general en Suiza y tantos otros acontecimientos se originaron del mismo caldo cultural y social que agitó a Occidente en la fase final de la primera Guerra Mundial hasta, grosso modo, 1920-1921. Como respuesta a ello, algunos Estados atendieron, al menos parcialmente, las reivindicaciones obreras. Sin embargo, en general lo que ocurrió fue un aumento de la represión. Los Estados reorganizaron sustancialmente sus aparatos represivos, como lo muestran la potenciación del FBI en Estados Unidos y del MI5 británico y la fundación y el crecimiento de varias policías políticas en América Latina. También se instalaron dictaduras como la fascista en Italia. La proliferación de grupos nacionalistas o paramilitares de derecha también fue relativamente común. En algunos países, como en Francia o en Chile, las ligas sólo existieron y asumieron nuevas funciones en esos años. En otros, como en Alemania o en Hungría, grupos paramilitares de derecha fueron instrumentos para la derrota de la revolución. En

realidad, en ese contexto, “nacionalismo” se interpretaba, en buena medida, como “contrarrevolución”.

El caso brasileño tiene, sin embargo, algunas especificidades. Las ligas surgieron directamente del impacto de la guerra y de la movilización obrera, y desaparecieron casi inmediatamente después de su reflujo, al contrario de lo que ocurrió en Francia, Argentina y otros lugares. Parte del ideario de las ligas en Brasil aún pertenecía al filón liberal-democrático, puesto que proponía una profundización de la democracia más que su eliminación. En Brasil, además, las ligas no tuvieron un papel significativo en la represión a los obreros ni se organizaron como fuerzas paramilitares sino ocasionalmente, como durante la revolución de 1924 en São Paulo. En efecto, la élite tradicional mantuvo el control de la situación y fue capaz de sofocar el movimiento obrero sin necesidad de aplicar reformas sociales o políticas de monta ni de apelar a la derecha radical. Esto no significa, sin embargo, que esa experiencia no haya dejado frutos para las décadas siguientes.

## **EL REFLUJO Y LA REORGANIZACIÓN INTELECTUAL (1920-1930)**

Después de la experiencia de las ligas, el tema del nacionalismo tomó una fuerza aún más acentuada en el debate político e intelectual brasileño. Rediscutir la nación, sus debilidades y sus dificultades era un interés común. Las cuestiones —la incorporación de los obreros y de los inmigrantes en el cuerpo nacional, la construcción de un Estado y de una economía modernos, la reestructuración del sistema político, la creación de una nueva cultura nacional— venían, como ya se ha señalado, de décadas anteriores. La experiencia de la guerra mundial y de las huelgas de 1917, la fundación en 1922 del Partido Comunista Brasileiro (siempre pequeño, pero cuya simple existencia fue capaz de asustar a las élites) y la creciente inserción del país en la modernidad capitalista en la década de 1920 sólo aceleraron y amplificaron ese debate.

En ese sentido, el tema del nacionalismo se convirtió en el centro de numerosas discusiones, aunque, por supuesto, sin respuestas únicas. Intelectuales y políticos de derecha y de izquierda, conservadores y revolucionarios, liberales y autoritarios, todos debatieron intensamente qué significaba ser brasileño y cómo renovar la sociedad y el Estado frente al mundo moderno. No fue por azar que

entonces el nacionalismo entrara con fuerza en el campo literario con el modernismo, y que surgieran colecciones explicativas acerca de Brasil, como la *Coleção Azul*.<sup>7</sup>

En el campo de la derecha los debates fueron intensos, especialmente sobre el papel de la democracia y del catolicismo en la reorganización del Estado. De esta forma, mientras remanentes de la Liga Nacionalista de Julio de Mesquita se incorporaron al progresista Partido Democrático a partir de 1926, intelectuales autoritarios como Oliveira Vianna y Francisco Campos ya emergían como defensores del Estado autoritario y laico. No sorprende que ambos —y varios otros— hayan tenido un papel fundamental en el Estado Novo varguista años después. Los grupos monarquistas, militares o de otras vertientes de la derecha también continuaron existiendo.

El rasgo más común de la derecha radical en la década de 1920 fue la combinación del nacionalismo con el catolicismo conservador. Recuperando temas y discusiones previos y con el apoyo decisivo de la Iglesia católica, intelectuales como Jackson de Figueiredo, Alcibíades Declamare, Afonso Celso y otros fundaron nuevos espacios intelectuales y políticos para la defensa de esa perspectiva. En ese contexto se insertan la revista *Gil Blas*, publicada en Rio de Janeiro entre 1919 y 1923, y la *Ação Social Nacionalista*, creada en 1920 y que duró hasta 1924. De especial importancia fueron la revista *A Ordem* y el *Centro Dom Vital*, los cuales tuvieron la influencia de la *Action française* y de Charles Maurras.

Estos grupos radicalizaron la crítica al orden liberal y la necesidad de combatir a la izquierda y, en algunos casos, se aproximaron al antisemitismo. La mayoría manifestó cierta simpatía por los autoritarismos europeos y, en particular, por Mussolini. Sin embargo, no podríamos llamarlos fascistas, pues, como bien ha recordado Bolívar Lamounier,<sup>8</sup> esa derecha todavía circunscribía sus propuestas dentro de una perspectiva autoritaria, sin los ingredientes básicos de la ideología fascista. El fascismo, en realidad, seguía siendo un elemento ausente en el debate político brasileño. Las fuerzas de la derecha tendían a ver el fascismo italiano con inmensa simpatía y Mussolini era saludado especialmente como el “salvador de Italia”. Sin embargo, hasta la firma del Tratado de Letrán en 1929 había cierta desconfianza frente a él, especialmente por parte de los católicos. Y, por encima de todo, el fascismo era visto como una experiencia típica de Italia que podía ser una fuente de inspiración, pero no un modelo a copiar. De esa forma, los movimientos y partidos explícitamente fascistas que surgieron bajo la

inspiración italiana a partir de 1922 —como la Legião Cruzeiro do Sul o el Partido Fascista Brasileiro— fueron muy marginales. El fascismo en el Brasil de los años veinte era un tema de interés y una fuente inagotable de debates, pero su manifestación práctica estaba restringida a las colectividades italianas instaladas en Brasil, como ya expuse en otros textos.<sup>9</sup>

En la década de 1920 la derecha radical tuvo un espacio reducido en el debate nacional. A pesar de que el tema del nacionalismo estaba a la orden del día, el peso de la derecha radical estaba constreñido al debate intelectual, normalmente en espacios mantenidos y financiados por la Iglesia católica. El fascismo, a su vez, era, a lo sumo, el sueño de unos pocos intelectuales encantados con la experiencia de Mussolini. En esos años la élite tradicional brasileña mantenía el control del sistema político y social, y no ofrecía margen para cuestionamientos efectivos a la situación. La crisis económica de 1929 y la revolución de 1930 alteraron ese escenario y abrieron espacio para proyectos poco viables políticamente hasta entonces. El fascismo fue uno de ellos.

## **EL VACÍO DE PODER Y LA SEDUCCIÓN DEL FASCISMO (1930-1932)**

En 1930 un movimiento armado puso fin a la república oligárquica y Getúlio Vargas asumió el poder, primero provisionalmente, y, después de 1934, como presidente constitucional. A partir de ese momento hubo un periodo de recomposición e indefinición política en el país que duró, como mínimo, hasta 1937, con la instauración del Estado Novo varguista. Su fase crucial, sin embargo, fueron los años iniciales, entre 1930 y 1932, cuando se volvieron intensos los conflictos entre los militares tenentistas (que en las décadas anteriores habían lanzado propuestas de reorganización nacional) y las oligarquías, entre las oligarquías vencedoras y las perdedoras, entre los nuevos y los viejos dueños del poder. Proyectos antes marginales parecían tener oportunidad de éxito, ya fuera influyendo en el nuevo presidente, Getúlio Vargas, ya fuera por la movilización directa de grupos y partidos.

Además, la expansión creciente de movimientos fascistas en Europa y América dejaba claro que el fascismo no estaba inevitablemente restringido a Italia. El ascenso de Hitler en Alemania, especialmente, era la prueba final de que el fascismo era una solución que podía aplicarse a todos los países de Occidente. El

escenario nacional e internacional parecía abrir nuevas posibilidades para los fascistas, no sólo en Brasil. En varios países europeos y americanos el ejemplo alemán sirvió de catalizador para la formación y el fortalecimiento de movimientos o partidos fascistas, como la British Union of Fascists (BUF) o el nacionalsocialismo chileno. En Brasil, sin embargo, esta nueva fase fue particularmente fecunda en términos de difusión y fortalecimiento del fascismo.

A principios de los años treinta comenzó una nueva “ola” de movimientos fascistas en Brasil. Algunos de ellos fueron de poco peso, como el Partido Fascista Brasileiro y el Partido Nacional Fascista/Ação Social Brasileira, fundado por J. Fabrino en Rio Grande do Sul en 1931, y que duró poco tiempo. Fabrino, en realidad, es un símbolo de la seducción y de los límites del fascismo en Brasil. Las informaciones sobre él son escasas y contradictorias, pero hay señales de que, a principios de los años veinte él ya era un entusiasta del fascismo italiano y de que había intentado crear un partido fascista en Brasil, sin éxito. En 1931, como se indicó, se proclamó jefe del efímero Partido Nacional Fascista y fue redactor de una revista llamada Granada, francamente fascista, que se publicó entre 1932 y 1933, además de defender abiertamente el fascismo en diarios y otras publicaciones.<sup>10</sup> Es simbólico el hecho de que se haya entusiasmado con reanudar sus esfuerzos de institucionalización del fascismo justamente en ese momento.

Otras iniciativas pueden mencionarse: Olbiano de Mello, por ejemplo, era un intelectual de Minas Gerais que se había convertido al fascismo ya a finales de la década de 1920, pero sólo en 1931 se entusiasmó con fundar un partido fascista llamado Partido Nacional Sindicalista, que no tuvo gran éxito.<sup>11</sup> Y en el estado de Ceará surgió la importante Legião Cearense do Trabalho, de Severino Sombra, con bases fuertemente obreras y católicas, pero que flirteó con el fascismo.<sup>12</sup>

Aún más relevantes para comprender ese periodo crítico de 1930 a 1932 son los clubes y legiones revolucionarias que surgieron poco después de la Revolución de 1930. Según la historiografía,<sup>13</sup> varias legiones surgieron en 1930, y fue Oswaldo Aranha (importante político de Rio Grande do Sul en la década de 1930, muy cercano a Getúlio Vargas) quien, preocupado por el supuesto giro “liberal” de Vargas, decidió crear un movimiento a fin de agruparlas, para lo cual inició discusiones en marzo y abril de 1931. Según Peter Flynn,<sup>14</sup> la propuesta de Aranha era crear un movimiento bajo líneas fascistas, con un Gran Consejo y otras instituciones cercanas al original italiano. Hay registros de que en las

reuniones se discutían la teoría fascista y diversos proyectos para elaborar un “fascismo brasileño”. Al final, el proyecto no prosperó y el propio Aranha dejó de apoyar estas iniciativas. Los clubes 3 de Octubre (fecha de inicio de la Revolución de 1930), nacidos en febrero de 1931, a pesar de tener cercanía con las legiones, se concentraban en un trabajo de reflexión y de influencia sobre el gobierno de Vargas, dado que no pretendían ser un movimiento de masas. Antes que fascistas, según el texto de Michael Conniff,<sup>15</sup> siempre expresaban otro tipo de nacionalismo reformista no del todo coherente, originario de fuentes diversas (pero especialmente tenentistas), que se cerró en 1934.

Según Vavy Pacheco Borges,<sup>16</sup> a principios de la década de 1930 había temores de que muchos antiguos tenentes o miembros de estas nuevas legiones y clubes pudieran convertirse en fascistas plenos. Probablemente en el caso de la legión de São Paulo esto no correspondía a la realidad, pues sus ideales estaban más a la izquierda, pero, en otros estados casi sucedió. En el estado de Minas Gerais, por ejemplo, la legión liderada por Francisco Campos y Gustavo Capanema se acercó casi completamente a un ideal fascista, incluyendo la estética. Según la prensa de la época, ellos habrían pensado incluso en promover una “Marcha sobre Belo Horizonte”, siguiendo los moldes de la de Roma. Los escuadristas utilizaban estandartes e himnos semejantes a los fascistas, y dispersaban por la fuerza, por ejemplo, actos del Partido Republicano Mineiro, dominante en Minas Gerais, al que consideraban un remanente del sistema político anterior.<sup>17</sup>

La ideología de esos clubes y legiones tenía origen en el movimiento de los jóvenes militares y el tenentismo, pero no en el fascismo.<sup>18</sup> Sin embargo, el flirteo de varias de esas legiones y clubes con el fascismo, cada vez más explícito, indica claramente que esta ideología se convertía cada vez más en una referencia clave para buena parte de la derecha radical. No sólo se organizaban movimientos y partidos abiertamente fascistas, sino que además la inspiración y el ejemplo del fascismo seducían en mayor medida a otros grupos, entre los cuales estaban los católicos y los autoritarios modernizadores (que tanto influyeron en el Estado Novo varguista y que deseaban la modernización del Estado a partir de una dictadura).

## **LA AIB (1932): ¿FUSIÓN Y CONFLUENCIA DE LA DERECHA RADICAL PREVIA?**

El 24 de febrero de 1932 fue fundada la Sociedade de Estudos Políticos (SEP), y el 7 de octubre del mismo año, la Ação Integralista Brasileira (AIB), que fue el más importante partido fascista fuera del continente europeo. Esto puede confirmarse tanto por su popularidad —con cientos de miles de adeptos, un número muy superior al de todos los otros movimientos y partidos fascistas en las Américas e, incluso, de algunos de la propia Europa— como por haber tenido perspectivas reales de conquista del poder. Uno de los objetivos de este artículo es saber si la AIB representó o no la fusión o la amalgama en un único movimiento de las varias fuerzas fascistas brasileñas que se manifestaban desde la década de 1920 y que, como se ha visto, estaban en plena rearticulación entre 1930 y 1932.

En un primer momento, la AIB consiguió reunir a intelectuales de derecha de São Paulo y de Rio de Janeiro, monarquistas de la Ação Imperial Patrianovista<sup>19</sup> y tradicionalistas católicos. También fueron cooptados Olbiano de Mello, en Minas Gerais, y Severino Sombra, en Ceará. Las disidencias, sin embargo, pronto surgieron. Los patrianovistas cuestionaban el carácter republicano y no exclusivamente católico del grupo, y por ello dejaron la AIB en noviembre de 1932. Los patrianovistas, en realidad, muestran que era posible acercarse al fascismo sin, conceptualmente, formar parte de él. Si se buscara a los verdaderos reaccionarios de Brasil de los años 1930, es posible que los mejores candidatos fueran justamente los patrianovistas. Próximos a los integralistas de Portugal y a la Action française, no defendían simplemente el retorno del rey y de la realeza, sino una monarquía corporativa, católica y autoritaria que rescatara a la nación de los riesgos de la desintegración social, del liberalismo y del comunismo. Compartían con la AIB el mismo diagnóstico sobre los problemas nacionales y parte de las soluciones —incluyendo la simpatía por el fascismo europeo—, lo que permitía a los dos movimientos convivir, pero no fusionarse.

Una parte sustancial de la derecha autoritaria laica tampoco se adhirió a la AIB y prefirió articularse alrededor de Getúlio Vargas. Ésta fue la opción individual de intelectuales como Oliveira Vianna y Francisco Campos, y de varias instituciones. Un grupo fundamental fue la Associação de Amigos de Alberto Torres, fundada en Rio de Janeiro en 1932. Incluía a intelectuales importantes como Oliveira Vianna y Belisario Penna, y tuvo fuerte influencia en el gobierno varguista. También el grupo denominado Bandeira, creado en São Paulo en 1936, tuvo puntos de convergencia y divergencia con la AIB; defendía un gobierno fuerte, tradición, disciplina, jerarquía y nacionalismo. Sin embargo, sus líderes descartaron la solución fascista, mantenían vínculos con los liberales de

São Paulo y con Vargas y criticaban a la AIB porque, a sus ojos, sus propuestas eran centralistas, antiindividualistas, antiamericanas, racistas y anticristianas.

En resumen, resulta evidente que no todos los que defendían el autoritarismo (sea en la derecha radical, sea en la conservadora) convergieron en el movimiento integralista. Divergencias políticas e ideológicas —especialmente frente a la cuestión del catolicismo y del fascismo— mantuvieron a la derecha defensora de la modernización conservadora y a parte de la derecha católica fuera del proyecto de la AIB. La derecha nacional (tradicional o radical) convergía en su evaluación de que la crisis brasileña e internacional era un reflejo del colapso del liberalismo y en su diagnóstico de que se necesitaba una propuesta autoritaria para solucionarla. La gran cuestión era cómo se configuraría ese nuevo “Estado fuerte”. La AIB reunió centralmente a aquellos que defendían que ese “Estado fuerte” debería ser corporativista y fascista.

Este punto merece un poco de atención. En aquellos años toda la derecha brasileña —y mundial— estaba preocupada por la agitación social, el impacto económico de la crisis internacional, el potencial ascenso del comunismo, etc. La AIB, sin embargo, iba más allá de una simple reacción conservadora contra el movimiento obrero y la izquierda, y proponía alternativas como el corporativismo, el remplazo del sistema liberal por el modelo fascista, etc. Su enemigo no era, pues, sólo la izquierda, sino también el liberalismo y el regionalismo, o sea, el poder excesivo de los estados brasileños, lo que también se identificaba como resultado de los excesos del liberalismo. Es importante señalar, además, que, incluso dentro de la AIB, no hubo completa uniformidad ideológica y política. Las corrientes con un sesgo más obrero o católico tuvieron que adaptarse a la orientación general del líder de la AIB, Plínio Salgado, o salir del movimiento cuando sus propuestas no fueron tomadas en cuenta. Esto sucedió con los patrianovistas o con las corrientes de Severino Sombra y de Jehová Motta, ambos oriundos de la Legião Cearense do Trabalho.

En realidad, si analizamos con cuidado la trayectoria de la derecha radical brasileña entre los años 1910 y 1920 y la de la AIB a partir de 1932, no se percibe un proceso de acumulación de fuerzas. La AIB representa más una ruptura, un salto cualitativo en la organización política, que el resultado de un lento trabajo de preparación política e ideológica. La fermentación política y de ideas en los años 1910-1920 proporcionó un cuerpo común de preocupaciones y una red de contactos de fundamental importancia para que la AIB pudiera surgir en 1932. Sin embargo, es poco probable que sin la ruptura institucional vivida

por el país a principios de la década de 1930 la AIB hubiera surgido con tanta fuerza.

Para reforzar la hipótesis de que la AIB representa más una ruptura que el resultado de una acumulación de fuerzas, baste recordar que trajo un elemento nuevo para el universo de la derecha brasileña: la movilización popular. Mientras que la derecha tradicional prefería concentrarse en las élites, los llamados integralistas movilizaron a varios grupos que no se sentían representados en la política tradicional. Entre ellos, los hijos de inmigrantes (especialmente alemanes e italianos) deseosos de afirmarse como brasileños, las mujeres y los negros. La clase media también se convirtió en un objetivo privilegiado de la AIB y proporcionó una parte sustancial de los efectivos del movimiento. Asimismo, se hicieron llamamientos a los obreros, aunque con resultados menos significativos.<sup>20</sup>

De la misma manera, a diferencia de la derecha tradicional, la AIB consideró al catolicismo como un elemento fundamental en la construcción del nuevo orden, pero no su centro. Y, al mismo tiempo que seguían viendo a las fuerzas armadas como garantes del orden establecido, crearon una fuerza militar paralela —las milicias— que, a pesar de ser poco eficiente, representaba una competencia que desagradó a los militares. La preferencia del alto mando militar por la dictadura de Vargas y no por la AIB en 1937 se explica por ese fenómeno y por el temor militar a que la ideologización promovida por la AIB generara divisiones en sus filas.

Sin embargo, la AIB fue la organización que logró agrupar a la mayor parte de las fuerzas de la derecha radical y darles una expresión política. Desde 1932, por primera vez, parte sustancial de la derecha radical brasileña estaba reunida en torno a un proyecto y a un líder. Y era un proyecto fascista de un líder que pretendía reproducir en Brasil los éxitos de Mussolini en Italia: Plínio Salgado.<sup>21</sup>

## CONCLUSIONES

Este artículo presenta la trayectoria de la derecha radical brasileña, especialmente la fascista, entre el final de la primera Guerra Mundial y 1932. En cierto sentido, no fue una trayectoria excepcional. Como en varios otros países de Europa y de América, la derecha radical ocupaba inicialmente, con algunas

excepciones (como Francia), una posición marginal en los sistemas políticos. Hubo un brote reaccionario justo después de la primera Guerra Mundial y de la Revolución rusa, cuando también es identificable una primera aunque minoritaria “ola” fascista. Hay un reflujo de la derecha radical en los años veinte y hasta la crisis de 1929 y el ascenso del nazismo al poder. A partir de entonces todas las derechas se fortalecieron y el autoritarismo de derecha se volvió común en buena parte de Europa y de América. En esa nueva fase la derecha radical se fortaleció, especialmente en su vertiente fascista, hasta su reflujo a partir de 1945.

El caso brasileño, a pesar de no ser excepcional, tiene algunas especificidades que hemos analizado. En primer lugar, resulta evidente la particular debilidad de la derecha radical brasileña hasta 1932. En un sistema político monárquico hasta 1889 y republicano y oligárquico hasta 1930, la derecha radical brasileña tenía aún menos espacio que en otros países. A finales de la década de 1910 el sistema político brasileño, además, fue capaz de contener la agitación social con represión oficial, sin necesidad de recurrir —a no ser mínimamente— a las ligas nacionalistas o a los movimientos contrarrevolucionarios de masas. En los años veinte, la derecha radical brasileña retrocedió nuevamente, incluso más que en otros países como Argentina, Chile y Francia.

El interrogante es cómo en la década de 1930 una derecha radical comparativamente débil fue capaz de transmutarse en el más importante movimiento fascista fuera del continente europeo. Las hipótesis para explicar este proceso remiten a tres órdenes: estructural, coyuntural y ocasional. Estructuralmente, siguiendo la teoría de S.U. Larsen,<sup>22</sup> la hipótesis es que Brasil fue un terreno especialmente fértil para el desarrollo de un movimiento fascista debido a su modernidad y liberalismo incompletos. La propuesta es que el fascismo tiene más condiciones de desarrollarse en países modernizados en términos económicos y sociales que carecen de instituciones democráticas consolidadas, como ocurría

con el Brasil de los años treinta. Los países económicamente avanzados y políticamente democráticos ofrecen menos espacio para el fascismo. Sin embargo, ese cuadro se repitió en otros casos, y la modernidad incompleta nacional no explica por sí sola la especial fuerza del fascismo en Brasil en la década de 1930.

Otra hipótesis es de alcance coyuntural y se relaciona con la profunda crisis

sistémica vivida por la sociedad y el Estado brasileños a partir de 1930. En un cuadro de crisis económica profunda y de reorganización del sistema político, se habría abierto un espacio inédito para la derecha radical, que supo aprovechar el momento. Con el paso del tiempo, las fuerzas conservadoras y de la derecha tradicional se reorganizaron y consiguieron anular el desafío de la franja radical mediante el golpe varguista de 1937. Esta hipótesis explica el ascenso de la derecha fascista y su anulación posterior. Después de un periodo de dudas e indecisión en el que la derecha radical pudo adquirir fuerzas, la derecha tradicional se reorganizó y reasumió el mando del Estado. Su preferencia fue por una dictadura de tonos modernizantes (en el sentido de privilegiar la industrialización y buscar la incorporación al Estado de las masas populares y obreras); era menos movilizadora que la propuesta de la AIB. Esto preservaba, incluso, la coherencia interna y la unidad de las élites económicas, de las Fuerzas Armadas y de la Iglesia, algo que las propuestas movilizadoras del movimiento de Plínio Salgado podrían amenazar. En resumen, el periodo en que la AIB adquirió relevancia habría sido sólo un paréntesis generado por una crisis sistémica, pero que fue cerrado por la recomposición de las élites. Esta hipótesis, sin embargo, implica dos requisitos de difícil comprobación. En primer lugar, que la crisis brasileña fuera mayor que en otros países y, en segundo lugar, que la intensidad de la crisis llevara a la intensidad de la respuesta, siendo el fascismo la respuesta máxima. La crisis sistémica también ocurrió (y los golpes de Estado que siguieron lo comprueban) en buena parte de Europa y de América Latina, y no siempre el fascismo tuvo un desarrollo tan espectacular como en Brasil.

La explicación ocasional identificará en los hechos inmediatos la respuesta a nuestra cuestión. En Brasil, por motivos ocasionales o hasta fortuitos, Plínio Salgado fue un líder capaz de reunir a las fuerzas dispersas de la derecha radical y fundir la mayoría de ellas en una propuesta fascista, lo que no sucedió, por ejemplo, en Argentina. Una derecha comparativamente débil se convirtió en una propuesta real de poder porque los acontecimientos y la acción humana permitieron su surgimiento. Podríamos incluso pensar que fue esa mayor capacidad de aglutinación de la derecha fascista en la década de 1930 en Brasil lo que, paradójicamente, disminuyó sus posibilidades políticas en las décadas posteriores, conforme lo he desarrollado en otros espacios.<sup>23</sup>

Es probable que la explicación más plausible sea una combinación de las tres propuestas. Sin un contexto estructural de fondo y una profunda crisis coyuntural, la derecha radical posiblemente habría continuado en las periferias del poder. Por otro lado, un liderazgo unificado fue un factor crucial para la

viabilidad de un proyecto político, como la muerte de Uriburu en Argentina parece indicar. Un liderazgo unificado, sin embargo, no significaba mucho si las condiciones estructurales y coyunturales no eran favorables, como lo indican los ejemplos de Adrien Arcand en Canadá, Oswald Mosley en el Reino Unido, Vidkun Quisling en Noruega y tantos otros candidatos a Duce y Führer en aquellos años. Establecer los parámetros de combinación entre esas variables no es tarea realmente fácil para los historiadores de cada país, y para el caso brasileño la cuestión todavía está abierta.

Lo que es evidente, sin embargo, es la continuidad entre los distintos periodos. Aunque la AIB fuera más una ruptura y un salto cualitativo frente al periodo anterior que el resultado de un proceso de continua acumulación de fuerzas, los puentes entre las décadas de 1910 y 1930 son visibles. Sin la elaboración teórica y política de la derecha radical en los periodos de reflujo, no habría tenido la densidad política e ideológica para convertirse en una alternativa viable en las ventanas de oportunidad abiertas por la estructura o la coyuntura. La historiografía brasileña dedicó mucha más atención a la AIB que a las décadas de 1910 y 1920. Algo natural, pues fue en los años treinta cuando la derecha fascista se convirtió en un actor político relevante en el país. Sin embargo, no habría adquirido esa relevancia sin lo sucedido antes y sin que las tradiciones autoritarias y conservadoras de la sociedad brasileña le dieran cierta viabilidad. Los acontecimientos recientes en Brasil indican cómo esa continuidad dentro de periodos históricos largos merece ser vista con más atención, pues fantasmas del pasado pueden resurgir, pero sólo lo hacen si permanecieron hibernando, al menos parcialmente, en los momentos menos propicios.

## **SIGLAS Y REFERENCIAS**

AIB Ação Integralista Brasileira

LDN Liga da Defesa Nacional

SEP Sociedade de Estudos Políticos

ARAÚJO, Célia Cerqueira de

1991 “A ideologia integralista de Olbiano de Mello. Estudo sobre o pensamento

político de Olbiano de Mello nas décadas de 1920 e 1930”, tesis de maestría (historia), Pontificia Universidade Católica de São Paulo.

BERTONHA, João Fábio

1999 Sob a sombra de Mussolini: os italianos de São Paulo e a luta contra o fascismo, 1919-1945, São Paulo, Annablume.

2001 O fascismo e os imigrantes italianos no Brasil, Porto Alegre, Edipucrs.

2008 Sobre a direita: estudos sobre o fascismo, o nazismo e o integralismo, Maringá, Eduem.

2012 “A direita radical brasileira no século XX: do monarquismo e das ligas nacionalistas ao fascismo e à ditadura militar (1889-2011)”, Studia Historica. Historia Contemporânea, núm. 30.

2013 “Los fascismos en América Latina. Ecos europeos y valores nacionales en una perspectiva comparada”, en João Fábio BERTONHA y Franco SAVARINO, El fascismo en Brasil y América Latina. Ecos europeos y desarrollos autóctonos, México, INAH.

2014 Integralismo. Problemas, perspectivas e questões historio-gráficas, Maringá, Eduem.

2015 “Sobre fascismos e ditaduras: a herança fascista na formação dos regimes militares do Brasil, Argentina e Chile”, Revista de História Comparada, vol. 9, núm. 1.

2016 O Integralismo e sua história: memória, fontes, historiografia, Salvador, Editora PontoCom.

2018 Plínio Salgado. Biografia política (1895-1975), São Paulo, Edusp.

BOBBIO, Norberto

1995 Direita e esquerda. Razões e significados de uma distinção política, São Paulo, Editora da Unesp.

BORGES, Vavy Pacheco

1992 Tenentismo e revolução brasileira, São Paulo, Brasiliense.

BROXSON, Elmer

1972 “Plinio Salgado and the Brazilian Integralism, 1932-1938”, tesis de doctorado (historia), The Catholic University of America, Washington, D.C.

CARONE, Edgar

1969 “Coleção Azul: crítica pequeno burguesa da crise brasileira depois de 1930”, Revista Brasileira de Estudos Políticos, núm. 25-26.

COHEN, Ilka

1997 “Para onde vamos? Alternativas políticas no Brasil (1930-1937)”, tesis de doctorado (historia), Universidade de São Paulo.

CONNIFF, Michael

1979 “Os tenentes no poder: uma nova perspectiva da Revolução de 30”, en Eurico DE LIMA FIGUEIREDO (ed.), Os militares e a Revolução de 1930, Rio de Janeiro, Paz e Terra.

CORDEIRO JÚNIOR, Raimundo Barroso

1992 “A Legião do Trabalho: política e imaginário no Integralismo cearense, 1931-1937”, tesis de maestría (sociologia), Universidade Federal do Ceará.

DRUMMOND, José Augusto

1986 O movimento tenentista: a intervenção política dos jovens oficiais (1922-1935), Rio de Janeiro, Graal.

FLYNN, Peter

1979 “A Legião Revolucionária e a Revolução de 30”, en Eurico DE LIMA FIGUEIREDO (eds.), Os militares e a Revolução de 1930, Rio de Janeiro, Paz e Terra.

LAMOUNIER, Bolívar

1977 “Formação de um pensamento político autoritário na primeira República”, en Bóris FAUSTO (ed.), O Brasil Republicano, Rio de Janeiro, Difel.

LARSEN, Stein Ugelvik (ed.)

2001 Fascism Outside Europe. The European Impulse Against Domestic Conditions in the Diffusion of Global Fascism, Nueva York, Columbia University Press.

LUCA, Tânia Regina de

1999 A Revista do Brasil: um diagnóstico para a (N)ação, São Paulo, Editora da Unesp.

LVOVICH, Daniel

2016 “La Semana Trágica en clave transnacional. Influencias, repercusiones y circulaciones entre Argentina, Brasil, Chile y Uruguay (1918-1919)”, en João Fábio BERTONHA y Ernesto BOHOSLAVSKY (eds.), Circule por la derecha. Percepciones, redes y contactos entre las derechas sudamericanas, 1917-1973, Los Polvorines, Universidad Nacional de General Sarmiento.

MALATIAN, Teresa

2002 Império e Missão. Um novo monarquismo brasileiro, Rio de Janeiro, Companhia Editora Nacional.

MCGEE DEUTSCH, Sandra

1999 Las Derechas. The extreme right in Argentina, Brazil and Chile, 1890-1939, Stanford, Stanford University Press.

OLIVEIRA, Tiago Siqueira de

2012 “A Liga da Defesa Nacional: um projeto de modernização para o Brasil”, tesis de maestría (historia), Universidade Estadual Paulista.

PARENTE, Josênio

1986 Anauê: os Camisas verdes no poder, Fortaleza, Editora da Universidade

Federal do Ceará.

SCHWARTZMAN, Simon

1984 Tempos de Capanema, Rio de Janeiro–São Paulo, Paz e Terra–Edusp.

BOBBIO, 1995.

Para el debate sobre la conceptualización de las varias “derechas”, véase un buen resumen en MCGEE DEUTSCH, 1999.

Véase, especialmente. BERTONHA, 2012; 2013; 2014; 2016.

Gran parte de lo siguiente se basa en MCGEE DEUTSCH, 1999. Véase, para una discusión más enfocada en América del Sur, LVOVICH, 2016.

OLIVEIRA, 2012.

LUCA, 1999.

CARONE, 1969.

LAMOUNIER, 1977.

BERTONHA, 1999; 2001; 2008.

COHEN, 1997, pp. 145-147.

ARAÚJO, 1991.

CORDEIRO JÚNIOR, 1992; PARENTE, 1986.

BROXSON, 1972, pp. 37-41; DRUMMOND, 1986, pp. 216-218;  
FIGUEIREDO, 1979.

FLYNN, 1979.

CONNIFF, 1979.

BORGES, 1992.

FLYNN, 1979, pp. 113-129; SCHWARTZMAN, 1984.

DRUMMOND, 1986, pp. 237-238.

Sobre este grupo, véase MALATIAN, 2002.

Para detalles sobre la inserción social de los integristas, la cuestión de los inmigrantes y de los negros, véase BERTONHA, 2014.

Sobre Plínio Salgado y su trayectoria como uno de los principales líderes de la derecha radical brasileña en todo el siglo XX, véase BERTONHA, 2018.

LARSEN, 2001.

BERTONHA, 2015.

## LA DERECHA CONSERVADORA Y LIBERAL CHILENA FRENTE AL ASEDIO DEL COMUNISMO Y DE LA DERECHA RADICAL (1918-1932)

VERÓNICA VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE

*Universidad Diego Portales, Chile*

Una de las tesis más influyentes sobre el siglo XX ha sido aquella que lo define como una confrontación entre socialismo y capitalismo enmarcada por la Revolución bolchevique. Aunque ha sido criticada por su carácter eurocéntrico,<sup>1</sup> lo que a esta comunicación importa es que revela de modo determinante el desafío que el comunismo representó para el capitalismo y la democracia liberal. Otros sostienen que ese papel lo desempeñó el nazismo, pues los nazis estaban decididos a destruir por la fuerza el orden demoliberal.<sup>2</sup> Como fuere, el asedio a la democracia liberal provenía de izquierdas y derechas radicales, las cuales buscaban hacerse cargo de los nuevos desafíos que la irrupción de las masas, el desarrollo y el orden social imponían.

Chile no escapó a ese reto, pues a fines de siglo XIX surgió un activo y desafiante movimiento obrero asentado en el ideario anarquista o socialista que lideró numerosas movilizaciones en áreas productivas estratégicas, desestabilizando las bases económicas del poder oligárquico. Igualmente, para el centenario de la Independencia hicieron su aparición las primeras expresiones denominadas como derecha radical, algunas de las cuales se expandieron al cobijo de la crisis de posguerra.<sup>3</sup>

La historiadora Sandra McGee Deutsch definió la derecha radical como aquella que rechazaba el igualitarismo, las izquierdas y los cambios que percibía como amenazas, para lo cual utilizaba medios ajenos a las prácticas electorales y apelaba a sectores sociales no elitistas. Estaba compuesta por una base social variable, en la cual era posible distinguir a intelectuales, pero también a exponentes populares, a diferencia de los conservadores, defensores del orden existente y generalmente aliados de la Iglesia y las fuerzas armadas. En momentos de crisis, esta derecha moderada se acercaba a la radical, adoptando

rasgos de su ideología y práctica.<sup>4</sup>

Este artículo caracteriza los desafíos de la naciente izquierda chilena —Partido Comunista, anarquistas y socialistas— y de la denominada derecha radical —Tradición, Entusiasmo y Abnegación (TEA), Ligas Patrióticas, Legión Cívica, guardias cívicas—, y la respuesta de conservadores y liberales. En la primera sección abordaremos el reto desde la izquierda; en la segunda, los métodos derechistas para combatirla, y en la tercera, el surgimiento de agrupaciones denominadas como derecha radical y su relación con la derecha institucional.

Nuestra hipótesis sostiene que, en el caso de Chile, el principal desafío no provino de una derecha radical, sino del mundo obrero comunista, socialista y anarquista. La derecha enfrentó a esta fuerza desde la institucionalidad mediante una redefinición de las libertades individuales y sociales que, a su entender, permitían el crecimiento de la izquierda. Para esta ofensiva se apoyaron en las fuerzas armadas, con quienes compartían un profundo anticomunismo, y con quienes combinaron métodos para combatir a su enemigo común. Por otra parte, las agrupaciones que han sido asociadas a una derecha radical eran, en realidad, sus precursoras, sin que sus rasgos xenofóbicos, racistas, antisocialistas y su valorización de la violencia política constituyeran un programa político, sino expresiones coyunturales. Ellas no lograron arraigo social, pues la izquierda retuvo al mundo obrero y se amplió a los sectores medios, impidiendo un flujo hacia tales grupos, y porque conservadores y liberales mantuvieron sus bases de poder, limitando sus potencialidades políticas.

## **RETO NÚMERO 1: UNA TORMENTA ESTALLÓ A LA IZQUIERDA**

Como en otras partes del continente americano, a inicios del siglo XX aparecieron en Chile núcleos obreros en zonas económicas cruciales para la conexión externa: el norte salitrero, las carboníferas, la ganadería patagónica y los puertos. Desde la década de 1890 el movimiento obrero protagonizó huelgas, protestas y movilizaciones exigiendo mejoras sociales (vivienda, alimentación) y laborales (salarios, jornadas, derecho a huelga, sindicación y condiciones físicas de trabajo) inspirado en el anarquismo y el socialismo. La denominada “cuestión social” inundó la discusión política, pues la presión obrera no cesó desde comienzos de siglo. La respuesta de los grupos dirigentes osciló entre reconocer

la necesidad de debatir acerca de leyes sociales que solucionaran los problemas más acuciantes de las masas populares y la represión violenta, utilizando el poder militar. Entre 1903 y 1907 las masacres obreras se sucedieron.<sup>5</sup>

Esta cuestión social reflejaba la emergente irrupción de los nuevos grupos sociales, quienes no sólo denunciaron al orden oligárquico como excluyente, desigual e inoperante, sino que además articularon un programa alternativo al sustentado en el liberalismo y el capitalismo de las élites. Anarquistas y socialistas apostaban por la lucha contra el capital y la religión, vistos como pilares de la opresión burguesa. Los anarquistas proponían el enfrentamiento directo con los patrones, utilizando la violencia política y desechando el espacio institucional oligárquico, mientras los socialistas, con Luis Emilio Recabarren y el POS (Partido Obrero Socialista, posteriormente PC) a la cabeza,<sup>6</sup> sostenían que la lucha de los trabajadores no debía remitirse sólo al conflicto capital-trabajo en la base, sino también disputar el poder político a la oligarquía mediante la conformación de un partido de los trabajadores, con una propuesta alternativa, a fin de copar espacios de la institucionalidad política oligárquica, municipios y Parlamento para abrirle las puertas al socialismo. Igual que los anarquistas, entendían que el sindicato no debía ser un mero agente para reivindicaciones inmediatas, sino más bien un instrumento para abolir el salario y avanzar hacia la nueva sociedad. Pero el POS planteaba que el problema era social y político:

los sindicatos [...] sin diferencia de ideas políticas, quieren decir claramente que cada obrero, conservando sus afecciones políticas a los partidos de la clase burguesa y capitalista o sin rumbos al respecto, se refugia en el sindicato solo para mejorar sus condiciones económicas [...] es el más grave error [...] el único tipo de sindicato capaz de socializar los instrumentos del trabajo y la sociedad toda es el “sindicato político y cooperativo”.<sup>7</sup>

En ese sentido, la lucha debía darse por medio del sindicato revolucionario, las cooperativas de consumo y producción, y el partido, en este caso, el POS, es decir, desde fuera y desde dentro del orden oligárquico.

En este contexto la idea de legislar sobre materias sociolaborales se abrió paso

dentro de la oligarquía, pero hasta 1918 ésta no la sintió urgente. La falta de respuesta, la Revolución bolchevique y el fin de la guerra en Europa incidieron en la reactivación de las huelgas (ciclos en 1918-1919, 1921-1923 y 1925), el incremento de la sindicalización, el fortalecimiento de órganos ácratas y la “izquierdización” de la Federación Obrera de Chile (FOCH), controlada por el POS desde 1919, la que asumió la lucha por el socialismo. Los trabajadores organizados lograron paralizar importantes sectores productivos y el comercio con Europa en momentos de grave crisis para el erario nacional. Las huelgas se extendieron por el país: Tarapacá, Antofagasta, Copiapó, Valparaíso, Santiago, Concepción, Punta Arenas, organizadas desde la FOCH y los gremios anarquistas.<sup>8</sup> Desde 1920 el POS, también, comenzó a agitar al campesinado de los latifundios, controlados por los terratenientes, un mundo hasta entonces intocado.

Esta ofensiva obrera exhibió otro importante cambio: la amenaza de represión no los intimidó. Hasta entonces, las masacres lograban detener la movilización, pero tras el fin de la primera Guerra dejaron de ser efectivas. El periodo de 1918-1919 estuvo plagado de masacres en el norte salitrero, la región carbonífera, la Patagonia magallánica, Santiago y Valparaíso, sin que el movimiento retrocediera. Aunque la demanda por leyes sociales se impuso en la agenda política y copó la campaña presidencial de 1920 y el gobierno de Arturo Alessandri (1920-1924), no se legisló, lo que acentuó la organización y las protestas. El uso de la violencia estatal se mantuvo, produciéndose dos masacres importantes en las salitreras, 1921 y 1925, pero los trabajadores siguieron a la ofensiva, sin replegarse.<sup>9</sup>

Fue en este ciclo iniciado en 1918 y mediados de la década de 1920 cuando la subversión y la “amenaza roja” adquirieron para conservadores y liberales forma nítida. Y, por eso, sólo entonces comenzó realmente el debate sobre las leyes sociales, proceso en el que se delinearon izquierdas y derechas.

Considerando el impacto de las paralizaciones laborales, conservadores y liberales concentraron la discusión en las huelgas, definiendo su naturaleza y límites. A su juicio, las huelgas debían tener un carácter estrictamente gremial, ajeno a lo político, y rechazaban las de solidaridad. De allí que la evaluación del portavoz de los conservadores fuera que “aún no se ha abierto paso en el ánimo de los obreros [...] el verdadero concepto de lo que debe ser una huelga”.<sup>10</sup> Asimismo, plantearon la necesidad de excluir de ese derecho a los trabajadores de servicios públicos: empleados fiscales, municipales, tranviarios, ferroviarios,

precisamente por el efecto social del paro. Este rechazo a la naturaleza de la movilización obrera condujo a una evaluación negativa de las organizaciones laborales que hacían posible las paralizaciones por solidaridad, la FOCH y los gremios asociados a los Industrial Workers of the World (IWW) fundados en Chile en 1918, como portavoces del creciente poder sindical, y que debilitaban las tendencias mutualistas.<sup>11</sup> Los conservadores no rechazaban la existencia de entidades que agruparan a los trabajadores para sus demandas laborales, siempre que se atuvieran al “camino del orden, la concordia, la Constitución y leyes de la República”,<sup>12</sup> es decir, el orden existente. Para esta derecha “la huelga [era] un procedimiento extremísimo para la consecución de mejoras determinadas; pero, la censuramos cuando la promueve una intención diversa”.<sup>13</sup>

La importancia de las paralizaciones en el conflicto llevó a conservadores y liberales a establecer una diferencia entre masa y agitadores, es decir, entre trabajadores vistos como pacíficos y centrados en sus intereses económicos y los dirigentes, quienes “fomentan el odio de clases, estimulando las huelgas y le otorgan un sello exaltado”, sentenciaba el líder de la prensa liberal.<sup>14</sup> A partir de este diagnóstico y, siguiendo el ejemplo argentino, aprobaron una Ley de Residencia (12 de diciembre de 1918), como un recurso de aplicación inmediata para expulsar del territorio nacional a los cabecillas no chilenos, atribuyéndoles la responsabilidad de las paralizaciones. Según el ministro del Interior de la época: “Yo no comprendo esta ley como de persecución de ideas [...] esta es una ley de defensa en contra de aquellos que vienen a predicar [...] la subversión”.<sup>15</sup>

La Ley de Residencia prohibió la entrada a los extranjeros que practicaran o enseñaran la alteración del orden social o político por medio de la violencia, de aquellos que propagaran “doctrinas incompatibles con la unidad o individualidad de la nación; de los que provocan manifestaciones contrarias al orden establecido, y de los que se dedican a tráficis ilícitos que pugnan con las buenas costumbres o el orden público”.<sup>16</sup> Los extranjeros a los que apuntaba esta ley eran dirigentes políticos y sindicales europeos (alemanes, españoles, rusos) y algunos argentinos, calificados de “maximalistas”. En Chile esta ley no fue muy útil, porque la mayoría de los dirigentes calificados de “agitadores” eran chilenos, de modo que la expulsión de algunos españoles o la prohibición del ingreso de rusos no afectó el desarrollo del movimiento obrero y de la izquierda, que siguieron fortaleciéndose.

Este crecimiento se relacionó también con la institucionalización del POS. Para la elección parlamentaria de marzo de 1921, un acuerdo electoral entre la

coalición del presidente Alessandri y el POS derivó en la elección de Recabarren a diputado, algo inaceptable para los conservadores: “No terminaremos sin llamar la atención al hecho grave de que en el nuevo Congreso hayan entrado [...] el partido del agitador obrero”;<sup>17</sup> “Recabarren [...] es defendido por el fuero parlamentario, es defendido desde el alcázar de la autoridad, desde esa vieja Moneda”,<sup>18</sup> pues “antes, para ser candidato del gobierno y contar con su concurso, se requería ser partidario de la autoridad. Ahora, la mejor plataforma para un candidato gobiernista, es presentarse como subversivo”.<sup>19</sup> En las parlamentarias de 1921 dos integrantes del POS fueron elegidos diputados; un año más tarde el POS se transformó en Partido Comunista; en 1925 incrementó su bancada parlamentaria a siete diputados y dos senadores, y sus parlamentarios podían actuar en todos los espacios, amparados legalmente. El partido extendió su influencia en los sindicatos, fortaleció su prensa, a la vez que mantenía la presión desde la calle. Aun cuando nueve parlamentarios no amenazaban el control oligárquico,<sup>20</sup> su elección legalizó el despliegue público de la izquierda, lo cual revistió un cambio determinante en la cultura política. En efecto, en la elección presidencial de octubre de 1925 el mundo obrero levantó su propia candidatura, la del médico José Santos Salas, quien obtuvo un tercio de los votos.

La incorporación de los comunistas al sistema fue muy importante, porque derribó la barrera de exclusión política impuesta hasta entonces a los obreros. El Estado oligárquico era excluyente y seguía una secuencia en esa exclusión: política, administrativa y legal.<sup>21</sup> Los comunistas comenzaron a desmontarla al sentarse en el Congreso y levantar un proyecto alternativo, sin subordinarse a los intereses oligárquicos. Ello fue un factor clave en el agudo anticomunismo derechista y en el carácter del conflicto. El desafío obrero salió del ámbito social para introducirse en el político-institucional oligárquico en pos de su transformación. Los comunistas presionaron por institucionalizar el conflicto, siendo legalmente imposible impedir que difundieran su doctrina en el espacio público, en el marco de la radicalización del movimiento obrero y de una crisis política que no encontraba vías de solución. La institucionalización comunista produjo dos efectos importantes: convirtió a los trabajadores y al comunismo en la principal amenaza al orden existente, e indujo a la derecha a combatirlo desde la legalidad, reponiendo su exclusión.

## **“LAS RIENDAS DEL PODER”<sup>22</sup>**

Los partidos Conservador y Liberal eran la expresión política de la oligarquía, de origen colonial, nacidos en el siglo XIX. Hasta comienzos del XX, la pugna laico-clerical definía el espectro partidario: los conservadores, defensores de los intereses de la Iglesia, un partido confesional, más vinculado al poder del latifundio, aunque no exclusivamente, de grandes terratenientes; los liberales, de tendencias secularizadoras, más ligados a los intereses urbanos, y los radicales, clase alta regional, ligados a intereses mineros y sectores medios urbanos, un partido militantemente anticlerical. Conservadores y radicales representaban los polos del sistema, y los liberales, el centro.<sup>23</sup>

A pesar de sus distintos sistemas de pensamiento, conservadores y liberales no representaban una supuesta aristocracia y una burguesía contrapuesta. Ambos eran parte de la oligarquía, tenían una común visión de mundo respecto del orden natural, la desigualdad humana, las jerarquías sociales y la defensa de la institucionalidad creada en el siglo XIX, unida también por lazos familiares, matrimoniales y comercial-financieros. Concordaban en temas clave como el respeto al derecho de propiedad privada, la apertura económica al mercado externo, la existencia del latifundio y un sistema político excluyente. Constituían una élite homogénea, sin diferencia de origen social, pues todos pertenecían a ese estrato por nacimiento, riqueza y poder político. De modo que, a pesar de su heterogeneidad interna, su visión era la misma, la de la clase alta.<sup>24</sup> Esta comunidad valórica y de intereses explica el consenso en torno a cómo enfrentar el problema obrero.

Hasta 1918 y la irrupción del conflicto obrero, no existían diferencias programáticas, sino de poder, las que se expresaban en dos coaliciones partidarias: la Unión Nacional, formada por los partidos Conservador, como eje, y Liberal Balmacedista; y la Alianza Liberal, conformada por el partido Liberal Doctrinario, el Radical y el Demócrata, más secularizador y anticlerical. La escisión fue provocada por la candidatura presidencial del liberal doctrinario Arturo Alessandri Palma en 1920, que promovió la incorporación de las demandas obreras y la sindicalización. Aunque las leyes sociales también estaban en el programa de la Unión Nacional, la diferencia estribó en el estilo político utilizado por Alessandri, quien movilizó a los obreros empleando un discurso que relevaba al pueblo, “mi querida chusma”, y que parecía amenazar el poder oligárquico de la Unión, “quiero ser una amenaza a los espíritus reaccionarios”, realizando giras por el país y arengando a las masas. A ojos de los unionistas, Alessandri insubordinaba al pueblo, al movilizarlo, modificando un modelo de participación política centrado en las élites donde algunos

trabajadores votaban, cohechados, y los campesinos respondían a los intereses de sus patrones. Hasta entonces aproximadamente 10% de la población participaba en las elecciones, y la movilización alessandrista buscaba quebrar el poder de la maquinaria unionista incorporando al pueblo a la “gran política”.<sup>25</sup> Tras una agria disputa, Alessandri ganó la elección presidencial, pero todo su plan de reforma social quedó empantanado por la oposición férrea de la Unión Nacional, que dominaba el Congreso y que exigía reponer la disciplina a un movimiento obrero autonomizado y subversivo, y respetar el orden parlamentario, frente a los arrebatos presidencialistas de Alessandri.

Sin posibilidad de acuerdo, y tras cuatro años de lucha política, tanto Alessandri como la derecha recurrieron a las fuerzas armadas, aunque con objetivos distintos: Alessandri movilizó a la oficialidad joven del ejército (mayores, capitanes y tenientes), en su gran mayoría de clase media, partidaria de las reformas sociales, muchos pertenecientes a la masonería, mientras conservadores y liberales conspiraron con el generalato del Ejército y de la Armada —también miembros de la oligarquía—promoviendo una intervención destinada a reponer el carácter plenamente oligárquico-parlamentario del sistema e imponer la disciplina social, entendida como la desmovilización de los trabajadores. Esta última conspiración triunfó en el golpe de septiembre de 1924, que destituyó a Alessandri. La ofensiva oligárquica fue abortada por la oficialidad joven, que lideró un segundo golpe militar en enero de 1925, decidida a impulsar las reformas que el país requería. Este segundo golpe levantó el liderazgo del entonces mayor Carlos Ibáñez.

Desde septiembre de 1924 y hasta 1932, el sistema político chileno estuvo bajo tutela militar: juntas militares entre septiembre de 1924 y marzo de 1925; tutela sobre los presidentes Alessandri (quien regresó en marzo y hasta noviembre de 1925) y Emiliano Figueroa (diciembre 1925-febrero 1927), y dictadura cívico-militar ibañista (1927-1931). El golpe de 1925 mostró unas fuerzas armadas independientes del poder oligárquico, con el cual, sin embargo, había puntos de encuentro que hicieron posible su unidad para enfrentar al movimiento obrero. La oficialidad joven criticaba la estrategia oligárquica de economía abierta, que acentuaba la dependencia; la irresolución del conflicto social, que las utilizaba para la represión, y la inoperancia del parlamentarismo. Para 1920 era uno de los principales bastiones del reformismo estatista: industrialización, leyes sociales y presidencialismo.<sup>26</sup> Aunque conservadores y liberales rechazaban el intervencionismo económico, la tutela del Estado en materia social-sindical y el presidencialismo coincidían en el anticomunismo y el rechazo a un movimiento

obrero autónomo con aspiraciones revolucionarias, y desarrollaron respuestas similares. La documentación del Ministerio del Interior contiene informes de los prefectos militares en la frontera respecto al ingreso de “maximalistas” extranjeros, compartiendo el imperativo de su expulsión: “vapor alemán Lucio Woermann [...] vienen algunos de ideas anárquicas, bolshevikis [sic], etc. He ordenado sea prohibido desembarco gente, poniendo guardia a bordo”.<sup>27</sup> Igualmente, coincidían en la distinción entre masa y agitadores y la responsabilidad de estos últimos, como se explicitaba en la revista *La Bandera*, dirigida a los suboficiales del ejército: “aquellos que, explotando la ingenuidad del obrero trabajador, predicán la rebelión en vez del respeto al orden, que ha sido siempre fuente de prosperidad y progreso”.<sup>28</sup> Los militares concordaban con conservadores y liberales en el rechazo al reconocimiento legal de las federaciones obreras: “Conviene [...] restringir estos permisos y si es posible revisar todos los dudosos, pues al amparo del reconocimiento oficial, se cometen muchos abusos por parte de esas instituciones y federaciones”.<sup>29</sup> Estas coincidencias condujeron a la derecha a apoyar la represión anticomunista de la dictadura de Ibáñez (1927-1931): el apresamiento masivo de dirigentes y trabajadores, así como la reclusión de sus líderes y de los anarquistas, propinándole golpes decisivos al sindicalismo revolucionario. Una isla del archipiélago Juan Fernández estaba reservada, según los militares, para “aquellos elementos que son un peligro para la tranquilidad social y también los agitadores incorregibles”,<sup>30</sup> apreciación en la que concordaban los liberales: “haberse comprobado las acusaciones que se hacían en su contra como propagadores del comunismo e ideas revolucionarias, turbando de este modo la tranquilidad del país”.<sup>31</sup>

Sin embargo, contrariando a la derecha, el ibañismo aplicó las leyes sociales y legitimó el sindicalismo legal, fuertemente controlado por el Estado, a la vez que la Dirección del Trabajo aseguró el cumplimiento de las leyes laborales contra la resistencia empresarial y oligárquica. La dictadura puso los pilares del intervencionismo económico del Estado, en tanto coordinador de las fuerzas productivas y agente crediticio, sin amenazar el latifundio ni la propiedad privada y auspiciando el desarrollo del empresariado y de la industria.<sup>32</sup> Los conservadores rechazaban la autonomía militar y la imposición de la Constitución de 1925, pues aún validaban la de 1833 y el parlamentarismo, aunque entendían la necesidad de un gobierno fuerte, pero con acción fiscalizadora del Parlamento. Entre 1926-1930, dirigido por Arturo Lyon Peña, el partido tuvo una posición conciliadora con el régimen ibañista por su énfasis en el orden —ausencia de huelgas— y el apoyo a la iniciativa privada, pero

Rafael Luis Gumucio lideraba la corriente civilista dentro del partido defendiendo el poder del Legislativo, la libertad de expresión para la derecha y el radicalismo, con lo que resistía la transformación del Ejército en fuerza política.

La derecha tradicional se apoyó en el poder militar para neutralizar la ofensiva obrera, pero no pudo evitar la transformación del Estado y desarrolló una relación ambivalente con las fuerzas armadas, que asumieron e impusieron la transformación estatal, además de que la obligaron a aceptar el nuevo estatismo económico y social. Sin embargo, la derecha logró imprimir su sello al nuevo orden político utilizando como una de sus principales armas la ley, a fin de reponer la exclusión legal de los sectores populares y sus portavoces izquierdistas. Su instrumento sería el Estado de Derecho. Este proceso supuso cierta amalgama entre los anticomunismos católico y liberal —que defendían la civilización cristiana occidental, la propiedad privada y las libertades—, y el anticomunismo nacionalista de los militares —defensor de cierta idea de nación y de los nacionales; dotado de nociones orgánicas, verticalistas y autoritarias de la sociedad, y que rechazaba las tesis igualitaristas del socialismo y el vínculo de éste con el comunismo internacional, que lo transformaba en una ideología foránea, por lo que debía ser extirpado— en contra del comunismo ateo, definido como estatista y dictatorial.<sup>33</sup>

Conservadores, liberales y fuerzas armadas concordaban en que el fortalecimiento del poder obrero reflejaba el avance de la subversión, mote asignado a toda propuesta anticapitalista y de alteración de las jerarquías sociales y políticas. El diagnóstico derechista del ciclo huelguístico de 1918-1925 fue que la legitimidad de las huelgas (su carácter gremial) era distorsionada por los “agitadores”, sus federaciones, la prensa obrera y sus organizaciones políticas: POS/PC y anarquistas, lo que facilitaba su expansión.<sup>34</sup> Concluyeron que ello se debía a las libertades de reunión y de opinión, garantizadas constitucionalmente, por donde se filtraba la subversión, porque con “las disposiciones constitucionales y legales vigentes, no puede decretar la prohibición solicitada”.<sup>35</sup> La legalidad existente —pensada para las élites— permitía el uso amplio del espacio público y la libertad de expresión, pero fue usada por el movimiento obrero para la difusión doctrinaria y el fortalecimiento de sus organizaciones. Por ello, la mirada derechista se dirigió al Estado de Derecho; como lo explicitaba el diagnóstico conservador “el comunismo anárquico” crecía “amparado por nuestra libérrima Constitución”.<sup>36</sup>

Algo similar ocurrió con la libertad de opinión, pues “no podemos aceptar el hecho de que en un mitin de obreros hayan podido expresar públicamente sus ideas personas que no eran obreros, ni reflejaban el pensamiento general, sin que nadie los haya desautorizado”.<sup>37</sup> Muchos empresarios hacían la conexión entre subversión y libertades constitucionales: “pocos individuos agitadores de profesión, van de bodega en bodega y de trabajo en trabajo sembrando la semilla de la discordia, amparados en la libertad de pensar y de expresar sus ideas”.<sup>38</sup> Sin una norma constitucional que pudiera limitar el derecho a expresar ideas y opiniones, las autoridades decretaron la clausura de imprentas y periódicos, con el argumento de que la Constitución aseguraba la libertad de publicar opiniones diversas, pero

si se incita por medio de la imprenta a la destrucción del Estado o de la propiedad particular [...] contra la ley y orden público y la [...] instigación al saqueo [...] no son manifestaciones de opinión sino la perpetración de delitos previstos y penados en nuestra legislación penal.<sup>39</sup>

Por ello, el primer instrumento para neutralizar el desafío obrero fue la propia legalidad oligárquica. La derecha había conminado a Alessandri a usar los artículos sobre seguridad interior del Estado consignados en el Código Penal contra ácratas, comunistas y huelguistas, infructuosamente. Ocurrido el golpe en septiembre de 1924, la Junta Militar dictó el Decreto-Ley 15 sobre “Seguridad interior del Estado”, que sancionó a quienes se alzaran en armas contra el gobierno constituido para provocar una guerra civil, cambiar la Constitución o su forma de gobierno, con pena de reclusión, confinamiento o extrañamiento mayor.<sup>40</sup> Tras el golpe de enero de 1925, se dictó además el DL 425, sobre “Abusos de publicidad”, que definió como delito de sedición toda provocación para que las Fuerzas Armadas violaran sus deberes militares, la pronunciación de cantos sediciosos en lugares públicos o las ofensas a la moral.<sup>41</sup> Ambos decretos-ley coartaron la libertad de opinión y de reunión al posibilitar su tipificación como delitos, con penas de cárcel, confinamiento o extrañamiento. Si la izquierda buscaba institucionalizarse, la institucionalidad debía encogerse. Desde 1927 la aplicación de las sanciones establecidas en estos decretos fue reiterada.

La represión y el sindicalismo legal lograron quebrar al movimiento obrero: el anarcosindicalismo y los gremios mutualistas fueron atraídos por la legislación social ibañista, mientras el PC fue debilitado y rotos sus vínculos con la base obrera. Simultáneamente, la seguridad interior del Estado surgió como dispositivo legal para castigar y excluir políticamente. Ésa fue la herencia dejada por la dictadura cuando cayó a mediados de 1931, en medio de la Depresión y la cesantía masiva.

El nuevo gobierno civil —Manuel Trucco— se posicionó con un discurso de respeto a las libertades civiles, conculcadas por la dictadura, el cual chocó con la crisis económica y social derivada de la Depresión, la reactivación obrera y el resurgimiento del PC. Un motín protagonizado por la marinería que ocurrió apenas asumido el gobierno agudizó los anticomunismos, posibilitando la consolidación de los dispositivos represivos creados en los años anteriores, de orden legal y de seguridad, que coartaban los derechos y apuntaban a la exclusión y la sanción legal de la izquierda. El gobierno responsabilizó al PC de la insurrección, pues temía que los amotinados dirigieran la escuadra a la zona salitrera y sublevaran a sus trabajadores: “No hay menor duda [de] que Tarapacá y Antofagasta se plegarán a la marinería tan pronto estén en contacto y entonces todo quedará en poder de los revolucionarios”.<sup>42</sup> Tal situación indujo a las nuevas autoridades civiles a legitimar los dispositivos legales de seguridad existentes y perfeccionarlos, lo cual se materializó en un nuevo proyecto de ley de seguridad interior del Estado, que fue presentado al Congreso por el radical Manuel Trucco y el conservador Horacio Walker. La iniciativa pretendía prevenir esos delitos —a diferencia de los decretos previos que castigaban hechos— penalizando las doctrinas utópicas y la expresión de opiniones consideradas atentatorias para la estabilidad institucional. El proyecto sancionaba la incitación a la subversión de palabra o por escrito, y a quienes quisieran cambiar el régimen político: “detener el avance de la propaganda y actividades cada día en aumento, encaminadas a socavar y destruir nuestras instituciones políticas fundamentales”.<sup>43</sup> La iniciativa legal buscaba evitar que la libertad fuera usada “como instrumento para incitar al atropello [...] de las garantías constitucionales”.<sup>44</sup> Consideró la huelga como delito político castigando a quienes “estorbaran o impidieran [...] por medios violentos el ejercicio del derecho al trabajo o la asistencia a los establecimientos de enseñanza, la libertad de pensamiento”.<sup>45</sup> Este derrotero legal continuó en 1932 con el DL 50, que definió enemigos de la República.

La impronta oligárquica de excluir legalmente fue asumida también por las

fuerzas armadas. Para 1932, el edificio institucional estaba pletórico de decretos-ley que prohibían o sancionaban las huelgas y que permitían calificar de delito el derecho a la reunión y la opinión —en prensa escrita, radio o cine—coartándola y permitiendo la exclusión legal de izquierdistas, dirigentes obreros y de su prensa.

Esta vía legalista para excluir la subversión se complementó con las perspectivas castrenses. Tras el golpe de 1924 se centralizaron las distintas policías: comunales, carabineros (una rama del Ejército) y las fiscales, que resguardaban las ciudades, y en 1927, bajo Ibáñez, nació el Cuerpo de Carabineros, dependiente del Ministerio del Interior, que se encargaba del orden interno y alejaba a los militares de esas tareas. Simultáneamente, en 1925 la Dirección General de Policías había creado una Oficina Central de Informaciones con la función de registrar a las sociedades obreras; contaba con una sección de prensa y un archivo de todos los diarios y revistas que se publicaran en el país, y llevaba el registro de sus propietarios, especificando las tendencias políticas y económicas de dichas publicaciones. Con Ibáñez en el poder, esta entidad se dedicó a la investigación de delitos, la confección de estadísticas y la información político-social, además de que se creó una escuela de agentes. En marzo de 1928 se creó la Policía de Investigaciones Internacional, Política y Social e Informaciones, que tenía bajo su responsabilidad aspectos de seguridad interna y externa, espionaje en tiempos de paz y de conflicto, y control de extranjeros que infringieran la Ley de Residencia. Para aquello tenía a su cargo la vigilancia de fronteras, puertos y ferrocarriles. En lo que respecta a lo interno, su función era vigilar a partidos políticos y organizaciones sindicales y mutualistas para detectar militantes de ideas “subversivas” y actividad política. En 1929 el jefe de Investigaciones logró la supresión del servicio secreto del Estado Mayor del Ejército, que hacía tareas de vigilancia política, con lo que la monopolizó. En octubre de 1929 se denominó Servicio de Investigaciones.<sup>46</sup> Una vez caída la dictadura ibañista en 1931, estos organismos fueron mantenidos, legitimados y utilizados contra la izquierda por las autoridades civiles liberales, conservadoras y radicales de derecha. Por tanto, aunque comunistas y socialistas tuvieron representación parlamentaria desde fines de 1932, ella estuvo permanentemente limitada por los decretos del periodo anterior, que bloqueaban su acción política. La legalidad de seguridad era una mixtura derechista-castrense.

La institucionalidad surgida de 1924-1931 no representaba el ideal derechista —libremercadista, parlamentarista y políticamente excluyente— pero mantenía su

poder social —latifundio— y político, y acrecentaba el económico con las nuevas funciones crediticias y coordinadoras del Estado en pro de los privados. Aunque reconocía derechos a los trabajadores urbanos, el Estado mantenía estrecha vigilancia y control sobre sus organizaciones y su prensa. Sobre todo, la derecha conservadora-liberal podía contar con un nuevo edificio legal que permitía excluir y penalizar libertades garantizadas constitucionalmente para actuar contra los definidos como subversivos o agitadores.

## **RETO NÚMERO 2: UNA SOMBRA SE MOVIÓ A LA DERECHA**

Como señalamos, nuestra hipótesis es que las agrupaciones calificadas como derecha radical en este periodo fueron sólo sus precursoras, pues su xenofobia, racismo, antisocialismo y valorización de la violencia política no constituían un programa político, sino expresiones coyunturales, no permanentes, las más de las veces manipuladas por las autoridades gubernamentales y la derecha histórica, sin que tampoco disputaran a la izquierda sus bases sociales, proposición que desarrollaremos en este apartado.

Las primeras agrupaciones que en Chile se consideran expresiones de la derecha radical se vincularon a los problemas fronterizos del país, que se reactivaron para el Centenario y en el marco de la posguerra. No surgieron por razones estrictamente político-programáticas, sino en relación con los conflictos limítrofes con Perú y Bolivia.

Las Ligas Patrióticas surgieron en 1911 en el marco del conflicto por Tacna y Arica entre Chile y Perú, provincias que, según el Tratado de Paz de 1883, decidirían su nacionalidad por medio de un plebiscito, el cual fue postergado numerosas veces, lo que provocó tensiones entre quienes consideraban las provincias como chilenas. Para el Centenario las tensiones recrudecieron. Sectores partidarios de la incorporación definitiva al territorio nacional en Tarapacá denunciaron la existencia de prensa peruana, de escuelas que entonaban un himno distinto y enseñaban otra historia y de la competencia laboral que representaban los trabajadores peruanos. Parecía que los chilenos “no estuvieran en su país, sino [en] algo así como [una] colonia”.<sup>47</sup>

En mayo de 1911 el senador liberal balmacedista por Tarapacá, Anselmo

Blanlot, promovió movilizaciones nacionalistas en Iquique con la anuencia de las autoridades locales, del mismo partido. Estos desfiles derivaron en ataques a residentes y propietarios peruanos, tolerados por la policía, dependiente del municipio. En estas movilizaciones y ataques participaron empleados municipales y de la Intendencia, comerciantes e incluso trabajadores pampinos.<sup>48</sup>

De los sectores anexionistas surgieron las Ligas Patrióticas en Iquique, Pisagua y los pueblos de la pampa, siendo su objetivo “desperuanizar Tarapacá” y exigir la anexión de Tacna y Arica.<sup>49</sup> Su duración fue breve, precisamente por la violencia utilizada y el carácter coyuntural del problema. Pasada la crisis diplomática, el gobierno se esforzó por estabilizar la situación y el retorno de los expulsados, lo que se logró desde 1913, pero teniendo como condición implícita que Tacna y Arica permanecerían bajo dominio de Chile.

El conflicto reapareció al final de la primera Guerra ante la reformulación de las relaciones internacionales auspiciada por el presidente Woodrow Wilson. Perú exigió la devolución de las tres provincias ocupadas por Chile, instando a Bolivia para que reclamara la devolución de Antofagasta. Tal demanda caía en un ambiente muy tensionado por la crisis económica provocada por el fin de la guerra en Europa (noviembre de 1918) y el cierre de un gran porcentaje de las oficinas salitreras, lo que afectaba al conjunto de la economía nacional. Focos de convulsión social estallaron a lo largo del país. Las Ligas reaparecieron.

La Liga Patriótica de Iquique reapareció luego del desfile patriótico de noviembre de 1918, al que asistieron unas 8 000 personas, funcionarios de la municipalidad, jefes y empleados de la administración regional, profesionales, representantes del alto comercio y de la industria y “una multitud popular”. En el acto, el diputado liberal balmacedista Anselmo Blanlot, invitó a jurar por la defensa del país: “¿Juráis luchar hasta conseguir la incorporación inmediata de Tacna y Arica al territorio nacional? ¡Sí, juramos!”.<sup>50</sup> En ese mismo mes nació la Liga Patriótica en Pisagua con el fin de recuperar las “cautivas”, y hubo ataques a personas y propiedades peruanas; manifestaciones similares ocurrieron en la pampa, zona obrera. Según la información del intendente, a comienzos de diciembre de 1918: “situación alarmante. Todo negocio de peruanos ha sido asaltado anoche [...] Se han producido desórdenes mano armada”.<sup>51</sup> De acuerdo con el testimonio de un comunista, la Liga en Iquique iba protegida por una guardia formada por policías y soldados.<sup>52</sup>

A mediados de diciembre de 1918 la Cancillería chilena logró rebatir los

argumentos peruanos y el Tratado de Ancón fue reconocido. Es sintomático que desde entonces las autoridades acentuaron sus “recomendaciones” de evitar desmanes y actos “incivilizados”; la diplomacia seguiría llevando el problema fronterizo. La calma debía volver a los espíritus.

Como ha argumentado McGee Deutsch, las Ligas recurrieron a métodos no institucionales, en este caso la violencia, la cual estuvo acompañada de racismo, toda vez que los peruanos fueron rebajados considerando cuestiones raciales, lo que reafirmó los sentidos de superioridad de la raza chilena: “¡Abajo los cholos, muere cholo! Y a balazos con todo”.<sup>53</sup> Este racismo, no obstante, era un rasgo de larga data en Chile, ya observable en la década de 1830, cuando la Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana (1837-1839), y en parte se justificó por la necesidad de “liberar” a Perú de Andrés de Santa Cruz y “ayudar” al pueblo peruano a estabilizar sus instituciones, siguiendo el ejemplo de Chile. Este sentido de superioridad no radicaba solamente en los dirigentes, sino que estaba también presente entre la tropa, que solía descalificar a la población peruana y boliviana por motivos raciales.<sup>54</sup> Según nuestro criterio, fue ese racismo histórico el que las Ligas movilizaron, lo que explica la participación de trabajadores en los desfiles y ataques, incluso de líderes identificados como “subversivos”. De acuerdo con el prefecto de Pisagua, durante los asaltos de noviembre las turbas estaban encabezadas por trabajadores incluidos en las listas negras de las casas embarcadoras: “eran encabezados [...] por [...] personas que lograron ser conocidas en el tumulto [...] Atilio Castillo y Juan Ponce [...] elemento perturbador”.<sup>55</sup>

Sin embargo, el nacionalismo chovinista peonal convivía con importantes grados de clasismo y el sentimiento de ser explotados, por lo que protagonizaba también numerosos paros, protestas y violencias contra las empresas. Los pampinos oscilaban entre el nacionalismo militarista y la solidaridad obrera. Por ello, la xenofobia y el racismo podían ser movilizados, especialmente para defender un territorio ganado “con su sangre”, pero posiblemente no como programa político permanente. El racismo en Chile tenía su origen en la Colonia, cuando la posición social se relacionaba con lo étnico, y lo blanco representaba la civilización y la superioridad. Pero no se alimentaba de la diferencia cotidiana, pues no fue un país de gran migración, por lo cual lo diferente no alcanzaba la visibilidad necesaria para fenómenos de ese tipo.<sup>56</sup> Por eso, a mi entender, a pesar del racismo extendido en Chile, latente, éste no alcanzó categoría política, y los grupos que posteriormente incorporaron antisemitismo en sus planteamientos nunca consiguieron arraigo, a diferencia de lo ocurrido en otros

países.<sup>57</sup>

Por otra parte, el auge de estas Ligas acompañó la crisis diplomática, los días y semanas en que Perú obligó internacionalmente a Chile a responder por la ocupación, sin haber realizado el plebiscito. Lograr legitimidad interna para la causa chilena y usarla para las negociaciones externas era un interés del gobierno, como también había ocurrido para la crisis del Centenario, y lo ilustra que el fundador de la Liga en Iquique fuera un liberal, miembro de la coalición de gobierno. En algún sentido, estas expresiones puntuales de xenofobia y racismo limitaron las posibilidades políticas de una adhesión permanente a las Ligas.

No obstante, las movilizaciones impulsaron cierto movimiento político cuando la marea xenofóbica de mayor violencia tendía lentamente a replegarse. El 5 de enero de 1919 nació el periódico La Liga Patriótica, publicado en Iquique. Días más tarde, El Eco Patrio, El Roto Chileno y El Chancay. El propósito de esta prensa era la desperuanización regional como un programa de acción política. Recordando la labor de las Ligas siete años antes, el periódico de ese nombre recordaba: “La obra de la Liga de Tarapacá interesa a todo Chile, porque a la nación entera afecta la decadencia o la prosperidad del nacionalismo tarapaqueño. Lo que se dijo entonces tiene hoy la misma actualidad, después de 8 años”. Por su parte, El Eco Patrio se autoidentificaba como “Periódico bisemanal de propaganda patriótica, destinado a contrarrestar la campaña de desprestigio contra Chile, desarrollada por la prensa del Perú y por los peruanos residentes en Tarapacá”.<sup>58</sup> Tal realidad era la que impelía a la acción en contra de los nacionales de ese país: “Vencer o morir! [...] Nuestra obra ha empezado y no descansaremos en nuestras aspiraciones de justo patriotismo hasta no conseguir la completa desperuanización de nuestro territorio. ¡Así será por la razón o la fuerza!”.<sup>59</sup>

Su prensa denunció la presencia de peruanos en distintas áreas de la provincia, con el objetivo de amedrentarlos persiguiendo su salida “voluntaria”, o de identificarlos para facilitar la acción de los más agresivos. En todos los periódicos existía una sección para ello: “Se nos denuncia que en la calle 18 de septiembre entre Tarapacá y Thomson vive un individuo llamado Agustín Pérez, que por ser peruano insolente debe irse de Iquique”.<sup>60</sup> La expulsión de nacionales de ese país no sólo debía hacerse por razones de soberanía, sino también porque el progreso de la provincia requería la homogeneidad racial. En ese sentido, por medio del racismo, las Ligas maduraron un imaginario de lo chileno y de lo

peruano, acentuando las diferencias entre “nosotros” y “ellos”.

Asimismo, las Ligas mostraron valorar la violencia como forma de acción política, en desmedro del diálogo y la negociación, pues para sus militantes la diplomacia y los tratados habían sido ineficaces para afirmar la soberanía chilena en la región y terminar con la “amenaza” peruana, lo que legitimaba la violencia, pero no dieron lugar a grupos de choque permanentes, sino temporales, promovidos por las autoridades.

Sin embargo, había en las Ligas una noción, posiblemente embrionaria, de la “necesidad” de contar con una “preparación” en el ejercicio de la violencia más profesionalizada, como se deduce de la fuerte campaña desarrollada para incitar a la población a ingresar en los Clubs de Tiro: “Insistimos en que los comités patrióticos de todos los pueblos deben iniciar la fundación de clubes de tiro al blanco. Todos los ciudadanos deben concurrir a los Clubs de Tiro, si aman a su patria, porque allí se aprende a defenderla y se retempla el patriotismo, porque se ve en cada chileno un defensor seguro de la tranquilidad del hogar nacional, de la paz de la República”.<sup>61</sup> Resulta muy revelador este llamado, pues desde los primeros años del siglo XX hubo una fuerte presión mediática y del Estado por consolidar el recién aprobado Servicio Militar Obligatorio (SMO), como la forma institucional y patriótica de preparación militarizada de la población, bajo estricta supervisión del Ejército. Las Ligas, en cambio, no intercedieron en favor del SMO, sino de una forma alternativa de militarización por medio de los Clubs de Tiro.

En suma, hubo tendencia a dar a estas organizaciones un sesgo militarizado que no alcanzó a madurar del todo. La mayoría de las personas que denunciaban a peruanos o que participaban en los ataques lo hacían más bien de forma matonesca, como era característico en la región. Estas prácticas de tiro más estructuradas no parecen haber dado vida a verdaderos cuerpos de choque.

En medio de la crisis económica de posguerra, las Ligas defendieron a los trabajadores nacionales, denunciando los abusos cometidos por los jefes, especialmente en las oficinas salitreras. Su prensa recogía los reclamos de los obreros en materia de alimentación, incumplimiento de la ley de accidentes del trabajo, descuento de días trabajados e injusticias cometidas por la policía, dentro de la idea de superioridad chilena: “De nadie es ignorada la energía del trabajador chileno. La prueba es que para la ejecución de todas las grandes obras de América, se ha buscado siempre a nuestros connacionales [...] siempre los

más esforzados”.<sup>62</sup>

No obstante, éste fue el periodo de expansión del socialismo y el anarquismo internacionalista, que no fue amenazado en potencialidad política por el chovinismo de las Ligas. A nuestro entender, ello se debió al peso del problema fronterizo, el cual no podía ser manipulado durante mucho tiempo por las autoridades, limitando sus posibilidades políticas. Los grupos xenófobos alcanzaron alta visibilidad, no así influencia político-ideológica. La cabeza de la estrategia opositora siguió en manos de la derecha institucional y desde la institucionalidad. El apoyo a las Ligas, como el que dio el senador Blanlot, fue coyuntural, no programático, pues servía a otros objetivos gubernamentales.<sup>63</sup>

Con todo, hubo expresiones antisocialistas. En diciembre de 1918 hubo dos asaltos a la imprenta del diario del POS para destruir las máquinas y empastelar los tipos. Sin embargo, según las memorias de un militante presente en ese momento, no fueron las Ligas Patrióticas: “no eran civiles ni espontáneos miembros de alguna ‘liga patriótica’: una fila de militares de caballería mandados por un oficial custodiaban la entrada de la imprenta [...] Cerca de allí, a no más de doscientos metros, el intendente interino Rubén Morales, esperaba el resultado de las ‘operaciones’ acompañado del jefe militar, el famoso ‘Macho’ Parada”.<sup>64</sup> En enero de 1919, en Antofagasta, la Liga Patriótica se declaró expresamente antisocialista y vinculó el nacionalismo al antisocialismo, pues acusó al POS de estar “vendido al oro peruano”. Igualmente, apareció una Liga en Punta Arenas contra la movilización obrera magallánica, también en la coyuntura de 1919-1921. A pesar de la virulencia de esta Liga, como las otras, desapareció, y la izquierda siguió afianzándose.

Desde nuestro punto de vista, la derecha institucional nunca apostó por este tipo de organizaciones; las promovió o las utilizó en determinados momentos, pero sin potenciarlas, pues su apuesta era luchar “con las riendas del poder”: su base económico-social, el poder político y un Estado que debía seguir siendo extensión de sus intereses. Esta disposición instrumental respecto de ese tipo de agrupaciones —extrainstitucionales— puede observarse durante su enfrentamiento con Alessandri en 1924, cuando nuevamente promovió grupos que recibían alguna preparación militar organizados en torno a un jefe, como la Legión Cívica de Chile, denominada como “resguardadora del orden”.<sup>65</sup> Parecido fue el caso de la TEA, nacida en mayo de 1924 y vitoreada por la prensa conservadora, que la calificó como movimiento de sana reacción. Al parecer este grupo fue preparatorio del golpe que conservadores y liberales

fraguaban con la Armada y que mencionamos antes, por lo que reivindicaba el derecho a la rebelión y la violencia política: “Solo nos quedan nuestros propios recursos: nuestros cerebros y nuestros puños [...] es necesario reaccionar enérgicamente [...] A la audacia debemos oponer la audacia, a la fuerza, la fuerza”.<sup>66</sup> Según la escasa información existente, actuarían como fuerza de apoyo al golpe militar que se preparaba para noviembre y que estalló dos meses antes. La TEA fue dirigida por el general Juan de Dios Vial Guzmán y el abogado Óscar Dávila Izquierdo, quienes impartían a sus miembros, aparentemente, alguna instrucción, pero parecen no haber tenido más proyección.

La Legión Cívica y la TEA respondían al conflicto sociopolítico y eran profundamente contrarias al comunismo “anárquico/maximalista”, calificativo otorgado al desafiante movimiento obrero, a anarquistas y comunistas, por lo cual se acercarían a una derecha radical, no así, sin embargo, en materia de clase, ya que su base era de élite, vinculada a los conservadores.

Tras los golpes militares de 1924 y 1925, y bajo la dictadura de Ibáñez, estas agrupaciones desaparecieron, porque, como explicamos, las fuerzas armadas controlaron el proceso político y asumieron institucionalmente la lucha anticomunista. El aparato estatal fue reorganizado para neutralizar y derrotar a la izquierda y el movimiento obrero, sin que esa tarea fuera asumida por una eventual derecha radical, como en otras experiencias. Las fuerzas armadas ibañistas arrebataron a estas agrupaciones la posibilidad de disputar a la izquierda los intereses obreros, adjudicarse tareas represivas y hacer del racismo una bandera de lucha.

El anticomunismo resurgió con la caída de Ibáñez, al producirse la rebelión de la marinería a comienzos de septiembre de 1931, y un asalto a un cuartel del Ejército en Copiapó durante la noche de Pascua, ambos con alguna participación comunista. “Guardias cívicas” anticomunistas y antimilitaristas surgieron en Santiago, Coquimbo, Copiapó y Vallenar, constituidas por capas medias altas, especialmente por profesionales (médicos, abogados, ingenieros, dentistas), comerciantes y militares en retiro, que se definían por su defensa de la Constitución ante posibles golpes militares y acciones comunistas. Ante el alzamiento de la marinería, la Intendencia de Santiago, apoyada por militares en retiro y profesionales, creó la Guardia Cívica Única, pues “la invasión de cuervos [...] confundieron los ideales de la revolución [...] con los mezquinos, desquiciadores y engañosos mal llamados ideales del comunismo”.<sup>67</sup> En el caso

del asalto al regimiento, se organizó una guardia cívica que asesinó a un número indeterminado de comunistas: “estaban encargados de lanzar bombas de dinamita para hacer saltar las murallas”.<sup>68</sup> Estas guardias cívicas, sin embargo, no superaron el anticomunismo y antiobrerismo fáctico, fueron incapaces de atraer a amplios segmentos sociales, y tuvieron una vida muy acotada.<sup>69</sup>

El impacto económico de la Depresión, sin embargo, podía haber ofrecido otra alternativa a una derecha radical, considerando los altos niveles de cesantía, hambre y miseria, la crisis del PC y que el gobierno civil de la época (el radical Juan Esteban Montero, sostenido por conservadores y liberales) replegó el brazo social del Estado, dejando a las masas en el desamparo. Sin embargo, la respuesta no provino de la derecha radical, sino de la izquierda, esta vez de los nacientes grupos socialistas, antisoviéticos: Nueva Acción Pública (NAP), Orden Socialista, Partido Socialista Marxista y Partido Socialista Unificado. El socialismo de 1931-1932 provenía de profesionales, antiguos dirigentes obreros, no comunistas, exácratas; algunos de ideario marxista, otros corporativistas, y hacían del intervencionismo estatal su principal recurso para el bienestar de los pobres. De todos estos grupos, el más importante, por su proyección, fue la NAP, dirigida por el gran maestro de la masonería Eugenio Matte Hurtado. Estos grupos socialistas se aliaron a las fuerzas armadas, las cuales acusaban al gobierno de Montero de intentar involucionar el proceso desarrollado por Ibáñez. El 4 de junio de 1932 una alianza entre los socialistas, el Ejército y la Fuerza Aérea dio un golpe de Estado y anunció la primera República Socialista de Chile, cuyo líder fue el coronel de la Fuerza Aérea, Marmaduke Grove, participante de los golpes militares de 1924-1925. El papel histórico de la República Socialista fue reponer y ampliar el intervencionismo económico y social del Estado.

Durante la República Socialista se abrieron “ollas del pobre”, para alimentar a los cesantes y sus familias, y se obligó a las casas de empeño a devolver los artículos de trabajo a los empeñantes. Se trataba de “Alimentar al pueblo, Vestir al pueblo y Domiciliar al pueblo”. El gobierno socialista buscó normar las tareas bancarias para democratizar el crédito, neutralizando el acaparamiento y la especulación y protegiendo al pequeño comercio; abordó el problema de la propiedad agraria, iniciando planes de colonización; inició el estudio de una ley de control de precios, contra la especulación, para asegurar el consumo popular, y creó los ministerios del Trabajo y de Salubridad, para atender el alicaído estado de salud y nutricional de la población.<sup>70</sup> Era un socialismo con una visión benefactora del Estado, que, más que amenazar al capital, buscaba distribuir con

mayor equidad y neutralizar el poder discrecional del empresariado. Fue esta izquierda la que atrajo a las bases sociales populares, desempleadas, y no una derecha radical. El socialismo del 4 de junio recuperó el valor de la fraternidad, en lugar de la confrontación revolucionaria, y recogió las demandas y los anhelos más sentidos de las masas populares y cada vez más también de las capas medias, así como el nacionalismo antiimperialista. Un golpe anticomunista derrocó a la República Socialista el 16 de junio de 1932, pero dejó un recuerdo imborrable entre obreros y segmentos medios, que hicieron del estatismo social su bandera de lucha.

En medio de estos meses críticos nació la primera derecha radical chilena, el Movimiento Nacional Socialista (MNS), inspirado en el nazismo. Sus dirigentes eran parte de la oligarquía o de capas medias altas: hijos de profesionales, empresarios y comerciantes, en su gran mayoría alemanes: contaban con algunos elementos populares, que no aminoraban su sello social. Doctrinariamente, se adscribían al fascismo, aunque se denominaban nacistas, para diferenciarse de su referente alemán, y resaltaban su valorización de la historia nacional decimonónica. Eran antiliberales, anticomunistas, propiciaban el nacionalismo económico y valorizaban la violencia política, materializada en las “Tropas nacistas de asalto”, uniformadas.<sup>71</sup>

Esta derecha radical, sin embargo, no pudo competir con la izquierda, para entonces (1932) conformada por los comunistas y los socialistas, en lo cual la República Socialista tuvo un papel crucial. Grove, su líder, obtuvo la segunda votación en la elección presidencial de 1932 (17%), frente a Arturo Alessandri, apoyado por los liberales y radicales, con 54%, mientras el candidato conservador obtuvo 13%. Los partidos Comunista y Socialista ingresaron al sistema político, conformando su ala izquierda y enfrentando a la derecha liberal-conservadora dentro del sistema, donde se disputaría el conflicto social. La derecha radical no tendría futuro.

## **CONCLUSIONES**

Este artículo se propuso demostrar que los desafíos antioligárquicos, provenientes de izquierdas y derechas radicales en la primera posguerra, pudieron ser sorteados por conservadores y liberales, quienes mantuvieron las “riendas del poder”. De ambos desafíos, el que fue considerado realmente una

amenaza fue el izquierdista. La naturaleza de dicha amenaza se relacionó con su carácter alternativo-proyectual, anticapitalista, su impacto sobre grupos obreros en zonas económicas estratégicas, el referente soviético del comunismo y la inserción de la amenaza en el seno del sistema político. Fue desde allí donde se potenció el crecimiento del comunismo, al cobijo de las leyes sociales que le permitieron impulsar la sindicalización, crecer en distintos espacios, fortalecer su prensa y desafiar el poder oligárquico. Posteriormente, el Partido Socialista hizo la misma evaluación y se integró al sistema político, haciendo del estatismo social y económico su principal bandera. La izquierda luchó por la institucionalización y la disputa estatal. Las agrupaciones precursoras de la derecha radical, en cambio, se mantuvieron siempre en los márgenes de la política, ligada su existencia a tensiones diplomáticas coyunturales, sin capacidad de transformar su chovinismo, xenofobia y violencia en un programa político. Su defensa de los trabajadores, siguiendo criterios nacionalistas, no logró sustraerlos del influjo de los comunistas y ácratas. Las Ligas Patrióticas atrajeron a sectores por fuera de las élites, capas medias y obreros, pero sólo coyunturalmente, pues movilizaban tendencias culturales históricas, pero que no ocupaban un lugar crucial en el conflicto político del país en ese momento, que era la transformación del Estado y el papel de los obreros.

La derecha histórica defendió el orden excluyente usando sus armas convencionales y, posteriormente, apoyándose en las Fuerzas Armadas. Aunque no pudo evitar la transformación estatal y la del sistema de partidos, con la inclusión de una izquierda marxista, logró incorporar al edificio legal la limitación de las garantías constitucionales por donde, entendía, se filtraba la subversión. Las leyes de seguridad interior del Estado, que permitían suspender los derechos de reunión y de expresión, fueron sus armas para neutralizar el crecimiento de la izquierda y reprimirla. El Estado de Derecho debía asegurar su control político. Las fuerzas armadas tomaron esas ideas y las hicieron realidad en los decretos-ley de seguridad interior. A ello agregaron la reorganización policial y de investigaciones para vigilar y reprimir las amenazas. El aparato estatal salió revestido de normativas que permitían suspender las garantías constitucionales de la izquierda. El énfasis en la legalidad demuestra que el papel político de las Fuerzas Armadas no era visto como permanente. Ellas tampoco amenazaron sus bases materiales de poder, sino que las acrecentaron. Las riendas del poder siguieron en sus manos, tanto las económicas como las políticas y legales. El carácter del Estado habría que disputarlo.

La relación de conservadores y liberales con las agrupaciones radicales de

derecha fue instrumental, y las potenció y movilizó en momentos específicos. No obstante, sus principales armas de lucha fueron la legalidad y el aparato represivo diseñado por las Fuerzas Armadas durante la dictadura ibañista. En tanto ésta consolidó la presencia obrera en el sistema político, la derecha histórica se aprestó a bloquear el horizonte socialista al que miraba la izquierda desde dentro del sistema.

## **SIGLAS Y REFERENCIAS**

■

|       |   |
|-------|---|
| AMRE  | Archivo Ministerio de Relaciones Exteriores   |
| ARNAD | Archivo Nacional de la Administración         |
| ART   | Archivo Regional de Tarapacá                  |
| BN    | Biblioteca Nacional                           |
| BSCD  | Boletín de Sesiones de la Cámara de Diputados |
| BSCS  | Boletín de Sesiones de la Cámara de Senadores |
| FMI   | Fondo Ministerio del Interior                 |
| FOCH  | Federación Obrera de Chile                    |
| Itar  | Intendencia de Tarapacá                       |
| PC    | Partido Comunista                             |
| POS   | Partido Obrero Socialista                     |
| PS    | Partido Socialista                            |

■

ACEVEDO, Nicolás

2017 Un fantasma recorre el campo. Comunismo y politización campesina en Chile (1935-1948), Valparaíso, América en Movimiento.

ALLIENDE GONZÁLEZ, Jorge

1990 El Jefe. La vida de Jorge González von Marées, Santiago de Chile, Los Castaños.

ANDERSON, Benedict

1993 Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y difusión del nacionalismo, México, FCE.

BICHENO, Hugh

1972 “Anti-parliamentary Themes in Chilean History”, Government and Opposition, vol. 7, núm. 3.

BOHOSLAVSKY, Ernesto

2009 El complot patagónico: nación, conspiracionismo y violencia en el sur de Chile y Argentina (siglos XIX y XX), Buenos Aires, Prometeo.

BOHOSLAVSKY, Ernesto, y Alberto HARAMBOUR

2007 “El miedo rojo más austral del mundo. Clase dominante local y Estado nacional frente a los trabajadores en la Patagonia argentino-chilena (1917-1922)”, en Enrique MASES y Lisandro GALLUCCI (eds.), Historia de los trabajadores en la Patagonia, Neuquén, Universidad Nacional de Comahue.

CASALS, Marcelo

2016 La creación de la amenaza roja. Del surgimiento del anticomunismo en Chile a la “campana del terror” de 1964, Santiago, Lom.

CID, Gabriel

2011 La Guerra contra la Confederación: imaginario nacionalista y memoria colectiva en el siglo XIX chileno, Santiago de Chile, Universidad Diego Portales.

CORREA, Sofía

2005 Con las riendas del poder, Santiago de Chile, Sudamericana.

CORVALÁN MÁRQUEZ, Luis

2009 Nacionalismo y autoritarismo en el siglo XX chileno, Santiago de Chile, Universidad Católica Silva Henríquez.

2015 “Identidad, ideología y política en el Movimiento Nacional Socialista de Chile, 1932-1938”, Izquierdas, núm. 25.

CRAIB, Raymond

2017 Santiago subversivo 1920. Anarquistas, universitarios y la muerte de José Domingo Gómez Rojas, Santiago, Lom.

DESHAZO, Peter

2007 Trabajadores urbanos y sindicatos en Chile, 1902-1927, Santiago de Chile, Dirección de Bibliotecas y Museos.

FERNÁNDEZ DARRAZ, Enrique

2003 Estado y sociedad en Chile, 1891-1931, Santiago, Lom.

GARCÉS, Mario

1991 Crisis social y mítines populares en el 1900, Santiago de Chile, Documentas.

GODOY, Eduardo

2014 La huelga del mono. Los anarquistas y las movilizaciones contra el retrato obligatorio (Valparaíso, 1913), Santiago de Chile, Quimantú.

GONZÁLEZ, Sergio

2004 El dios cautivo. Las ligas patrióticas en la chilenización compulsiva de Tarapacá (1910-1922), Santiago, Lom.

GONZÁLEZ, Sergio, Sandra MCGEE DEUTSCH y Carlos MALDONADO

1993 “Las ligas patrióticas”, Revista de Ciencias Sociales, vol. 2, núm. 2.

GREZ, Sergio

2007 Los anarquistas y el movimiento obrero. La alborada de la ‘idea’ en Chile, 1893-1915, Santiago de Chile, Lom.

2011 Historia del comunismo en Chile, Santiago de Chile, Lom.

HENRÍQUEZ, Rodrigo

2014 En estado sólido: políticas y politización en la construcción estatal, 1920-1950, Santiago de Chile, Universidad Católica.

HOBSBAWM, Eric J.

1995 Historia del siglo XX, Barcelona, Crítica.

KLEIN, Marcus

2008 La matanza del Seguro Obrero, Santiago de Chile, Globo.

LAFERTTE, Elias

1971 Vida de un comunista, Santiago de Chile, Austral.

LAGOS MIERES, Manuel

2012 Subversivos. Las maquinaciones del poder. “República” de Chile, 1920, Santiago de Chile, Quimantú.

LIRA, Elizabeth, y Brian LOVEMAN

2002 Arquitectura política y seguridad interior del Estado, 1811-1990, Santiago de Chile, Dirección de Bibliotecas y Museos.

MALDONADO, Carlos

1988 La Milicia Republicana. Historia de un ejército civil en Chile, Santiago de Chile, Nipaco.

MAZOWER, Mark

2001 La Europa negra. Desde la gran depresión a la caída del comunismo, Barcelona, Ediciones B.

MCGEE DEUTSCH, Sandra

2005 Las derechas. La extrema derecha en Argentina, Brasil y Chile, 1890-1939, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes.

MELLADO, Vicente

2013 “Del Consejo Federal al Sindicato legal. La FOCH y el inicio de la transición a un sistema moderno de relaciones industriales (1919-1927)”, tesis de licenciatura (historia), Universidad de Chile.

NUNN, Frederick

1970 Chilean Politics. The Honorable Mission of the Armed Forces, Albuquerque, University of New Mexico Press.

PINTO VALLEJOS, Julio

1998 Trabajos y rebeldías en la pampa salitrera, Santiago de Chile, Universidad de Santiago de Chile.

2013 Luis Emilio Recabarren. Una biografía histórica, Santiago, Lom.

PINTO VALLEJOS, Julio, y Verónica VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE

1994 “Peones chilenos en tierras bolivianas: la presencia laboral chilena en Antofagasta, 1840-1879”, Población y Sociedad, núm. 2.

PINTO VALLEJOS, Julio, y Verónica VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE

2001 ¿Revolución proletaria o ‘Querida chusma’? Socialismo y alessandrismo

en la pugna por la politización pampina (1911-1932), Santiago, Lom.

2009 ¿Chilenos todos? La construcción social de la nación (1810-1840), Santiago de Chile, Lom.

PLAZA, Camilo

2018 “El Servicio de Investigaciones y la policía política (1933-1973)”, manuscrito inédito.

RAMÍREZ NECOCHEA, Hernán

1978 “El fascismo en la evolución política de Chile hasta 1970”, Araucaria de Chile, núm. 1.

ROJAS, Jorge

1993 Los sindicatos y la dictadura de Ibáñez (1927-1931), Santiago de Chile, Lom.

SANTIBÁÑEZ, Camilo

2016 “Huelgas y lockout portuarios por la ‘redondilla’: los conflictos por el control de la contratación en los muelles chilenos (1917-1923)”, tesis de maestría (historia), Universidad de Santiago de Chile.

SCULLY, Timothy

1992 Los partidos de centro y la evolución política chilena, Santiago de Chile, Cieplán.

TRAVERSO, Enzo

2012 La historia como campo de batalla. Interpretar las violencias del siglo XX, Buenos Aires, FCE.

VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE, Verónica

1992 La Milicia Republicana. Los civiles en armas (1932-1936), Santiago, Dirección de Biblioteca, Archivos y Museos.

1999a “Yo, el León de Tarapacá. Arturo Alessandri Palma (1915-1932)”, Historia, núm. 32.

1999b “El ocaso del salitre. Navidad en Copiapó y Vallenar, 1931”, Boletín de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, núm. 19.

2001 “Democracia y Estado”, en Mario GARCÉS et al. (eds.), Memorias para un nuevo siglo, Santiago de Chile, Lom.

2003 “Por los fueros de la patria ¿qué patria? Los trabajadores pampinos en la época del Centenario”, Si Somos Americanos, núm. 5.

2016 “Subversión y coerción. Izquierdas y derechas en los inicios de la democracia chilena del siglo XX”, Otros Tempos, vol. 13, núm. 21.

2017a Subversión, coerción y consenso. Creando el Chile del siglo XX (1918-1938), Santiago de Chile, Lom.

2017b “Los tengo plenamente identificados. Seguridad interior y control social en Chile, 1918-1925”, Historia, vol. 50, núm. I.

VALENZUELA, Mauricio

2016 La generación fusilada. Memorias del naciismo chileno, 1932-1938, Santiago de Chile, Editorial Universitaria.

VARAS, Augusto, Fernando BUSTAMANTE y Felipe AGÜERO

1980 Chile, democracia, fuerzas armadas, Santiago de Chile, Lom.

HOBBSAWM, 1995; TRAVERSO, 2012.

MAZOWER, 2001, pp. 12-13.

MALDONADO, 1988; VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE, 2003.

MCGEE DEUTSCH, 2005, pp. 23-24.

GARCÉS, 1991.

GREZ, 2007; PINTO VALLEJOS, 2013.

PINTO VALLEJOS, 2013, pp. 163 y 165; GREZ, 2011.

DESHAZO, 2007.

VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE, 2017a; BOHOSLAVSKY y HARAMBOUR, 2007, pp. 201-220.

BN, El Diario Ilustrado, 20.IV.1918, p. 3.

MELLADO, 2013.

BN, El Diario Ilustrado, 3.VIII.1920, p. 4.

BN, El Diario Ilustrado, 4.VIII.1920, p. 3.

BN, El Mercurio, 5.XII.1919, p. 3.

BN, bscd, 26.XI.1918, p. 703; El Diario Ilustrado, 27.XI.1918, p. 4; VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE, 2017b.

*Ley No. 3446 de Residencia, 12.XII.1918. Consultado el 10.III.2016, en <[www.Leychile.Cl/Navegar?Idnorma=23974](http://www.Leychile.Cl/Navegar?Idnorma=23974)>.*

BN, El Diario Ilustrado, 10.III.1921, p. 3.

BN, El Diario Ilustrado, 13.III.1921, p. 3.

BN, El Diario Ilustrado, 8.III.1921, p. 3.

Los conservadores obtuvieron 19.8% de los votos, y los liberales, 32.4 por ciento.

FERNÁNDEZ DARRAZ, 2003.

CORREA, 2005.

SCULLY, 1992.

CORREA, 2005, cap. 1.

VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE, 1999a; PINTO y VALDIVIA, 2001.

VARAS, BUSTAMANTE y AGÜERO, 1980; VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE, 2001.

ARNAD, FMI, “Ministro del Interior a Ministro de Relaciones Exteriores”, 17.IX.1920, vol. 5407, Oficios, 1920.

BN, La Bandera, año III, núm. 3, 15.III.1923, p. 85.

ARNAD, AMG, “Auditor a Ministerio del Interior”, 7.I.1922, vol. 4520, Comunicaciones 1916-1924.

ARNAD, FMI, “Cuerpo de Carabineros a Ministerio del Interior”, 3. III.1927, vol. 6782, Providencias, 1927.

BN, El Mercurio (Valparaíso), 14.III.1927, p. 1.

ROJAS, 1993.

CASALS, 2016.

VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE, 2017b.

ARNAD, FMI, “Ministro del Interior a Intendente de Tarapacá”, 19. II.1919, vol. 5222, Providencias, 1919.

BN, El Diario Ilustrado, 2.III.1921, p. 3.

BN, La Bandera, núm. 3, 15.VI.1921, pp. 54 ss.

“Carta recibida de nuestro delegado en Iquique, 19 de marzo 1921”, Boletín Mensual de la Asociación de Productores de Salitre, 1921, citado por SANTIBÁÑEZ, 2016, p. 7.

BN, Gaceta de los Tribunales, Sentencia núm. 151, contra Celedonio Arenas, 1919, pp. 680-682.

Decreto-Ley 15, 17.IX.1924. Consultado en noviembre de 2014, en <[www.Leychile.Cl/Navegar?Idnorma=5654](http://www.Leychile.Cl/Navegar?Idnorma=5654)>.

Decreto-Ley 425, 26.III.1925. Consultado en noviembre de 2014, en <[www.Leychile.cl/Navegar?Idnorma=6073](http://www.Leychile.cl/Navegar?Idnorma=6073)>.

ARNAD, FMI, “Ministro de Guerra a General Vignola”, 2.IX.1931, vol. 945, Providencias, 1931, p. 18.

*bscs*, 10.XI.1931, p. 660.

*bscs*, 10.XI.1931.

*bscd*, 25.XI.1931, p. 1957.

PLAZA, 2018.

BN, El Puerto de Pisagua, 6.II.1910.

VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE, 2003.

BN, El Puerto de Pisagua, 4.VI.1911.

AMRE, Fondo Perú, “Carta del Intendente a Ministro de Relaciones Exteriores”, 4.XI.1918, vol. 384.

AMRE, Fondo Perú, Telegrama de Pisagua a Banco Chile, 2.II.1918, vol. 384; *El Nacional*, 7.XI.1918.

LAFERTTE, 1971, p. 136.

GONZÁLEZ, 2004, p. 93.

PINTO VALLEJOS y VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE, 2009; PINTO VALLEJOS y VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE, 1994, pp. 103-132; CID, 2011.

ART, Itar, “Prefecto de Pisagua”, 22.XI.1918, Itar, Huelgas, 1917-1921.

ANDERSON, 1993.

VALDIVIA, 1995.

*El Eco Patrio*, Iquique, 22.I.1919.

Chancay, 1.I.1919.

*El Eco Patrio*, 22.I.1919.

Liga Patriótica, 23.II.1919.

Liga Patriótica, 25.II.1919.

LAGOS MIERES, 2012; CRAIB, 2017.

LAFERTTE, 1971, pp. 137-139; BN, *El Socialista*, Antofagasta, 23.I.1919.

BN, *Justicia*, 8.I.1924, p. 1.

BN, *El Diario Ilustrado*, 14.V.1924, p. 3.

Diputado Conservador Manuel Cruchaga, bscd, 8.XI.1931.

*El Eco del Huasco, Vallenar*, 9.I.1932.

VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE, 1992; 1999b; MALDONADO, 1988.

VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE, 2017a, cap. V; HENRÍQUEZ, 2014, pp. 12-14 y 23.

CORVALÁN MÁRQUEZ, 2015; 2009; VALENZUELA, 2017; KLEIN, 2008.

## LAS DERECHAS EN COLOMBIA DURANTE LA DÉCADA DE 1920

RICARDO ARIAS TRUJILLO

*Universidad de los Andes, Bogotá*

### **INTRODUCCIÓN**

A comienzos del siglo XX la situación de la sociedad colombiana dejaba poco espacio para el optimismo. Después de varios gobiernos liberales que habían intentado establecer un rígido federalismo y severas políticas anticlericales en la segunda mitad del siglo XIX, el Partido Conservador retomó el poder y en la Constitución de 1886 selló las bases de un Estado de corte centralista, estrechamente asociado con la Iglesia católica y encargado de defender “el orden”, alterado por la “anarquía liberal”.

Los debates entre los dos partidos en torno al modelo de nación se habían trasladado al campo de batalla en no pocas ocasiones. La última de las contiendas decimonónicas, la Guerra de los Mil Días (1899-1902), además de numerosas víctimas, había dejado en ruinas y golpeado moralmente al país, por la pérdida de Panamá. Para el Centenario, los ánimos no eran los mejores: a diferencia de los fastos con que en otros sitios se conmemoró el primer siglo de vida independiente, las celebraciones en Colombia fueron modestas.

Así pues, si el pasado no ofrecía mayores motivos para regocijarse, el futuro próximo tampoco parecía muy halagüeño. Sin embargo, en medio de la desazón generalizada, empezaron a darse ciertas circunstancias que le permitieron al país superar, por unas cuantas décadas, los tradicionales enfrentamientos bipartidistas, mientras se sentaron las bases para un significativo desarrollo económico, aunque no exento de altibajos. Desde comienzos del siglo XX, conscientes de la necesidad de encauzar al país por derroteros propicios a la reconciliación y al anhelado progreso, ilustres miembros de los dos partidos

tradicionales —el Liberal y el Conservador— lideraron una iniciativa tendiente a reunir a quienes estuviesen dispuestos a trabajar conjuntamente en un nuevo movimiento político. El republicanismo, como fue llamado, en su mayoría estaba constituido por hombres de una generación que había conocido los estragos de las últimas guerras civiles y que, entonces, quería dejar atrás las “pasiones sectarias” para asegurar el desarrollo. Con esa consigna, la Unión Republicana llegó al poder en 1910.

El nuevo jefe de Estado, Carlos E. Restrepo, como muchos de sus aliados, condenaba la instrumentalización política de la religión en la que incurrieron tanto sus copartidarios conservadores como los liberales; además, acusaba a unos y a otros de no prestar atención a los nuevos desafíos. Ante la incapacidad de las agrupaciones tradicionales para superar las rencillas en torno a la Iglesia, Restrepo creía que surgirían partidos “modernos”, conscientes, ellos sí, de los graves problemas que aquejaban al país: “Los partidos del porvenir se situarán en el terreno puramente social y en el económico, que es donde hoy están peleando sus batallas los pueblos civilizados”.<sup>1</sup>

Estos propósitos, compartidos igualmente por algunos liberales, permiten observar las reorientaciones programáticas que se estaban gestando en ciertos círculos, en un contexto que ofrecía nuevas expectativas políticas y económicas. De esta manera, así como la despolitización del clero parecía ser la respuesta de los republicanos y de ciertos liberales al problema religioso, la cuestión social empezaba a despuntar en el panorama de las preocupaciones de esos mismos sectores. Según ambos, el futuro de la nación dependía de la forma en que se encararan esos dos desafíos, pues las guerras religiosas eran tan nocivas para el bienestar y el progreso del país como la temida lucha de clases, que podía estallar en un futuro no muy lejano si los dirigentes no adoptaban las medidas sociales necesarias.

Sin embargo, importantes sectores del conservadurismo, partido ampliamente mayoritario, se oponían al republicanismo; por un lado, les incomodaba la postura del jefe de Estado ante los asuntos religiosos, y, por otro, la participación liberal en el gobierno. El republicanismo perdió paulatinamente el apoyo bipartidista, y para las elecciones de 1914 cayó derrotado. En adelante, los sectores más radicales de la derecha —fervorosos defensores del catolicismo, reacios al liberalismo y, con mayor razón, a la izquierda— dominarían la escena política hasta 1930, cuando los liberales al fin retomaron el poder.

Si bien el conservadurismo reaccionario logró imponerse en los años veinte, los republicanos conservadores continuaron luchando por defender lo que ellos consideraban característico de su partido, a saber, los valores asociados a la tolerancia, al civismo e, incluso, a la laicidad. En estas páginas estudiaremos esas dos facetas en una década en la que, como en otros lugares del mundo, las derechas se radicalizaron ante un panorama marcado por las crecientes tensiones sociales, por el auge del comunismo, por el debilitamiento progresivo de la democracia liberal y, al final, por la Gran Depresión, pues, con ello, se multiplicaron las voces que exigían “mano firme” y “moralidad” para evitar el caos. A fin de analizar este proceso en Colombia, tomaremos a Los Leopardos, un pequeño pero influyente grupo encabezado por cuatro jóvenes adeptos al catolicismo integral que se autoproclamaban adalides de la “nueva derecha”, la cual, en realidad, era una extrema derecha. En muy buena medida este grupo representaba los ideales de vastos sectores del conservadurismo nacional que decían defender los verdaderos postulados de su partido; de ahí que se autodenominaran conservadores doctrinarios. Sin embargo, como ya lo anotamos, no toda la derecha se alineó bajo esos mismos principios. Para dar cuenta de esas divisiones —que permiten hacerse una idea más compleja de las derechas colombianas—, seguiremos a los conservadores republicanos, quienes intentaron contrarrestar el radicalismo de sus copartidarios, recordando que el autoritarismo no era propio del conservadurismo. Los debates entre esas dos facciones giraron particularmente en torno al papel del catolicismo en la sociedad colombiana y los derechos de los sectores populares. Es cierto que también hubo discusiones sobre el indigenismo, la inmigración y la búsqueda de “la identidad propia”, pero estos asuntos no tuvieron la relevancia que alcanzaron en otros países latinoamericanos en ese mismo momento.

Las controversias ideológicas se dieron en un contexto que, a pesar de muchas continuidades, empezaba a conocer importantes transformaciones. Es cierto que el país seguía siendo mayoritariamente rural —y lo seguiría siendo hasta mediados de siglo—; que la Iglesia y el bipartidismo, ante la ausencia de otras instituciones fuertes, como el Ejército, tenían un papel decisivo en los más variados ámbitos de la sociedad; que las tasas de analfabetismo se acercaban a 70%; que los dos partidos tradicionales monopolizaban el ejercicio de la política, y que la izquierda, por consiguiente, representaba a una muy pequeña minoría cuyas posibilidades de consolidarse electoralmente se veían limitadas por el voto censitario y por la desorganización de los sectores populares. Sin embargo, al mismo tiempo, la relativa calma política, sumada al auge económico propiciado por el café, permitió el desarrollo de la industria, el crecimiento de las ciudades y

las migraciones del campo a la ciudad. A su vez, surgían los primeros partidos de izquierda. Los cambios también se apreciaban en el ámbito cultural, con el avance de la secularización: las reivindicaciones femeninas, las modas, las nuevas formas de diversión, entre otros aspectos, cuestionaban patrones de conducta hasta entonces fuertemente arraigados en el catolicismo. En ese contexto, en el que se vislumbraba un incipiente proceso de modernización, la “nueva derecha” definió sus contornos.

## **PRENSA Y SOCIABILIDADES CATÓLICAS**

Los Leopardos formaban parte de una nueva generación llamada, precisamente, los Nuevos, y que también estaba integrada por los jóvenes liberales.<sup>2</sup> Nacidos hacia 1900, irrumpieron en el escenario nacional veinte años más tarde, con el fin, según ellos, de revitalizar la política colombiana, sumida en un profundo marasmo por la falta de intrepidez tanto de los gobernantes como de la débil oposición. Si bien los Nuevos, en su conjunto, veían a sus antecesores —los Centenaristas— como el principal escollo para llevar a cabo su obra renovadora, muy rápidamente se abrió una fisura en el seno de la nueva generación que daría lugar a un fuerte enfrentamiento ideológico no sólo entre lo que sus protagonistas llamaban la “nueva derecha” y la “nueva izquierda”, sino en el interior mismo del Partido Conservador. En tono beligerante, los primeros empezaron a defender el clericalismo y el autoritarismo; inspirados en el fascismo italiano y en la Action française de Charles Maurras, denostaban los principios democráticos. Debido a ello, la brecha en el seno del conservadurismo se hizo cada vez más evidente: frente a lo que en realidad se estaba convirtiendo en una extrema derecha, los conservadores republicanos, minoritarios en su partido, ofrecían una faceta muy diferente del conservadurismo dominante, ya fuese por la firmeza con la que denunciaron el autoritarismo y el clericalismo de sus copartidarios, ya por su sensibilidad con respecto al problema social. En cuanto a la “nueva izquierda” —constituida en realidad por una nueva generación de liberales que se decía sensible a las inquietudes de los sectores populares—, más allá de sus evidentes divisiones y de una retórica también combativa, fue muy moderada, pues, salvo contadas excepciones, no la animaba el deseo de identificarse con las corrientes socialistas, ya existentes para ese entonces en el escenario político colombiano. Buscaba impulsar ciertas reformas sociales y distanciar a la Iglesia de la actividad política, pero de una manera tan mesurada y cautelosa que para ello no había necesidad alguna de salirse de las

filas del liberalismo.

Las disputas y las redefiniciones del campo político encontraron en la prensa un escenario privilegiado. La generación de los Nuevos ingresó muy pronto al periodismo, que constituía una tribuna clave para posicionarse en los distintos campos (político, intelectual, literario). En la década de 1920, los liberales contaban, en particular, con *El Tiempo* y *El Espectador*, dos diarios bogotanos con alta resonancia en otras ciudades. Los Leopardos, aunque escribían en distintos medios, multiplicaron sus diatribas en órganos “doctrinarios” como *El Nuevo Tiempo*, *La Patria* y, al final de la década, en *El Debate*, desde donde fustigaban tanto al liberalismo como a los conservadores moderados. Las páginas de *La República* y, luego, del *Diario del Comercio* ofrecían distintos puntos de vista a sus lectores, de acuerdo con la pluralidad ideológica que los republicanos se esforzaban por inculcar en el ambiente político de los años veinte. Por su parte, el naciente socialismo estaba respaldado por una prensa obrera tan numerosa como inestable.

Así, en aquella década la prensa desempeñó un papel fundamental en diversos planos de la política. Lo primero que habría que resaltar es que sorpresivamente se gozaba de una plena libertad de expresión, teniendo en cuenta la intolerancia de los gobiernos de la época frente a muchas formas de oposición. La prensa era el principal medio de comunicación, pues la radio aún no se había consolidado. La actualidad del país se difundía por medio de los numerosos diarios y revistas de las distintas ciudades venciendo toda suerte de obstáculos, como las elevadas tasas de analfabetismo y los altos costos de la prensa para una población bastante pobre. A pesar de esas dificultades, en efecto, estudios sobre la cultura popular de izquierda en Colombia coinciden en señalar el fuerte impacto de todo tipo de escritos en obreros y campesinos, quienes, reunidos en torno a diferentes espacios de sociabilidad (clubs de lectura, bibliotecas, salas de prensa, sedes de los partidos, cafés, escuelas populares, chicherías,<sup>3</sup> cantinas, talleres artesanales y demás), escuchaban la lectura en voz alta que hacía algún compañero letrado.<sup>4</sup> Pero no sólo se enteraban de lo que sucedía, sino que también tomaban parte en las discusiones, deliberaban, argumentaban: “Esas prácticas de difusión ayudaron a democratizar el acceso a la prensa y a crear espacios de debate y de intercambio de opiniones, incluso para quienes no sabían leer”.<sup>5</sup> Si tenemos en cuenta que para los años veinte existieron más de ciento cincuenta publicaciones de izquierda que podían llegar a un numeroso auditorio a pesar de sus tirajes tan limitados, se puede pensar que el impacto de la prensa debió ser significativo.

El interés depositado en la prensa por los más distintos sectores permite resaltar dos aspectos clave para entender mejor el impacto potencial del discurso político en la opinión pública. Por una parte, había una estrecha relación entre política y periodismo: la prensa era una clara herramienta política en un contexto en el que se presentaban importantes redefiniciones motivadas tanto por las transformaciones del país como por las convulsiones generadas en el mundo tras la primera Guerra Mundial. La aspiración de los diferentes bandos enfrentados era contar con su propio medio de comunicación. Silvio Villegas, como los demás políticos, combinaba el periodismo con sus actividades proselitistas. En 1926 este leopardo, mientras era director de La Patria de Manizales, uno de los diarios regionales más influyentes, fue elegido concejal y diputado. Luego, en las postrimerías de la hegemonía conservadora, cuando ya era director de El Debate, fue diputado en la Asamblea de Caldas, representante en la Cámara y senador.

Por otra parte, el activismo católico, en efecto, no era menos intenso: las transformaciones que empezaron a darse en la sociedad colombiana a comienzos del siglo XX suscitaban nuevas preocupaciones en los círculos católicos. La incipiente agitación social; el tímido crecimiento de las industrias y las ciudades —acompañado de ciertos cambios en los hábitos de los ciudadanos—, y la aparición de los primeros movimientos feministas bastaron para que el clero y los sectores conservadores vieran una amenaza al orden cristiano sobre el que había reposado hasta entonces la sociedad. El arzobispo de Bogotá, Bernardo Herrera, estaba al tanto de los llamados del Concilio Plenario Latinoamericano (1899) y de Pío X para fomentar un catolicismo de acción, un movimiento social que restaurase nuevamente a Cristo en la sociedad. En la segunda década del siglo, el jerarca colombiano instaba a sus colegas a formalizar el programa asociativo creando, sin más dilaciones, la Acción Social Católica:

Entre nosotros el movimiento hacia la apostasía ha empezado ya bajo la dirección del movimiento masónico, protestante, impío y aun socialista que se hace sentir. Aplazar para más tarde la Acción Católica Social, so pretexto de que el pueblo todavía es católico, sería exponernos a correr la suerte de otros pueblos donde la clase obrera ha sido arrebatada a la fe por la organización socialista.<sup>6</sup>

El programa de la Acción Social Católica, que intentaba retomar algunos puntos de la *Rerum novarum*, sostenía que el fin de las obras sociales era “la moralización y mejoramiento de las costumbres mediante las ventajas temporales que con ellas se obtienen”.<sup>7</sup> Para conseguir ese objetivo, la Acción Social debía concentrar sus esfuerzos principalmente en dos áreas: la educación de los sectores populares y la creación de una serie de asociaciones católicas que debían velar por el buen comportamiento de sus miembros. En cuanto al primer aspecto, afirmaba que debía instruirse a los obreros y sus hijos bajo los preceptos del cristianismo, “procurándoles el aprendizaje y perfeccionamiento en las artes u oficios”<sup>8</sup> sin menoscabo de su moralidad, fomentando siempre el espíritu religioso “y trabajando especialmente por la unión de las clases sociales”.<sup>9</sup>

Las asociaciones católicas, por su parte, eran movimientos laicos que, bajo el estrecho control del clero, debían constituirse en baluartes frente a la crisis de valores y la “decadencia moral”. Para ello, la Acción Social, con el respaldo de políticos y empresarios, se encargó de crear juntas llamadas ligas de decencia, las cuales eran comités de censura que, con “criterio cristiano”, defendían las buenas costumbres. A lo largo de la segunda y la tercera décadas, surgieron también diferentes movimientos, como las Juventudes Católicas, los Círculos Obreros y la Liga de Damas Católicas, todos ellos compuestos por sectores que, según el episcopado, eran presa fácil de las múltiples tentaciones del mundo moderno.

Como parte del mismo programa, el episcopado había lanzado la Cruzada Nacional de la Prensa Católica a comienzos de siglo. Esta campaña buscaba reforzar el discurso que se hacía desde el púlpito y las escuelas para llegar a un público lector que empezaba, tímidamente, a aumentar. El arzobispo de Bogotá ya había manifestado su preocupación ante la ausencia de publicaciones periódicas de “carácter netamente católico”.<sup>10</sup> Al parecer, su llamado tuvo buena acogida, pues, al poco tiempo, numerosas diócesis contaban con su propio periódico.<sup>11</sup> Sólo así, creía el alto prelado, se podrían contrarrestar los “desenfrenos” de la prensa enemiga. En los años veinte, favorecidas por ciertas transformaciones en la sociedad y por la aparición del periodismo moderno, las campañas religiosas y políticas dirigidas por el clero y los líderes de la derecha llegaron a un público más amplio por medio de sus diarios.

En realidad, la prensa en general se estaba modernizando. En primer lugar, empezó a alejarse del formato exclusivamente político o religioso, que había caracterizado a las publicaciones periódicas del siglo anterior, para darle cabida a

una gama informativa mucho más amplia y variada que incluía secciones femeninas, deportivas, infantiles y de “vida social”, manuales prácticos, avisos publicitarios, etc. Esta apertura, dirigida a conquistar un nuevo tipo de público más numeroso y diverso, implicaba, a su vez, nuevos lenguajes, más apropiados para llegar a un lector menos familiarizado con la escritura. La redefinición del público pasaba, entonces, por la proliferación de temas tratados en formas de expresión más accesibles y enriquecidos por el recurso creciente de la imagen (caricatura, dibujos y, cada vez más, fotografías). De esta manera, incluso los asuntos políticos y religiosos resultaban más atractivos para el lector, quien, de una u otra manera, se enteraba de algunos debates viendo un titular, ojeando una caricatura o leyendo uno que otro artículo. En el caso del catolicismo, tales cambios habían sido impulsados por Pío XI. Bajo su pontificado (1922-1939) apareció la prensa católica para la familia y para los niños. El objetivo era evidente:

Se trata de tomar de la modernidad sus instrumentos con el fin de crear una prensa católica, edificante, informativa o entretenida, que inmunice a sus lectores contra las amenazas del ambiente. En ese contexto [...] la obra de la prensa se define como un apostolado, al mismo nivel que las tareas más comprometidas de Acción Católica.<sup>12</sup>

En Colombia, el leopardo Silvio Villegas tuvo un papel central dentro de ese proceso. Durante los años veinte, no sólo fue un prolífico colaborador de numerosas publicaciones católicas, sino que además dirigió varias de ellas. Tuvo a su cargo diarios de provincia y de la capital del país, unos laicos y otros del clero, y les imprimió su sello ideológico mientras impulsó su modernización. Como director de El Debate, fundado por la curia bogotana en 1927, Villegas sabía que, si no recurría a un periodismo “moderno”, el éxito de su empresa se podía ver comprometido. En su ardua lucha por sobrevivir, decía, la prensa católica debía recurrir a las estrategias comerciales que tantos logros les habían deparado a los enemigos:

El diario católico debe ser vigoroso, robusto, no sólo en su parte intelectual y

moral, sino en su formato. Debe tener lectura copiosa, porque no hará nada un diario católico enclenque, de pocas páginas al frente de un adversario que le aventaje en corpulencia, en extensa propaganda, en lectura para todos los gustos y en el número de páginas. Es claro que el público no vacila en comprar un diario como éste.<sup>13</sup>

Por otra parte, la prensa tuvo un papel muy importante en la formación de la naciente “opinión pública”, que empezaba a esbozarse gracias al crecimiento de las ciudades y de la clase media; a la politización creciente de los sectores populares, y a nuevas prácticas culturales que permitían acceder a los medios de comunicación, los cuales, por su parte, intentaban llegar a un público más extenso y variado. Lo que dice un historiador sobre la prensa liberal bogotana se puede aplicar, en buena medida, a los diarios católicos y conservadores:

La intelectualidad urbana liberal [especialmente los directores de El Tiempo y de El Espectador] usaron la prensa [a finales de los años veinte] para preparar un cambio en la opinión pública. El Tiempo se puso a la cabeza de la rehabilitación del liberalismo. Estableció un nuevo tipo de periodismo; los gerentes viajaban regularmente a Europa y Estados Unidos para conocer métodos modernos de información y tecnología de imprenta. La circulación de El Tiempo creció gracias a nuevas técnicas de venta, métodos avanzados de presentación, informe de actos criminales y columnas de opinión.<sup>14</sup>

Desde la orilla del catolicismo, la conciencia acerca de la importancia central de la prensa como forjadora de opinión era igualmente evidente. Con motivo de la aparición de El Debate (1927), que dirigía Villegas, El Escudo, órgano del catolicismo de la ciudad de Bucaramanga, tras darle una efusiva bienvenida, aprovechaba para recordar la misión fundamental que le competía a la prensa católica en medio de un contexto preocupante:

Hemos alcanzado épocas en que hace más falta el sacerdote en las calles y en las encrucijadas de la acción social, que en el púlpito desde donde se rocían con

palabras suaves las espaldas impermeables de creyentes rutinarios, indolentes y apáticos. Se ha dicho que si San Pablo viviera, se haría periodista antes que predicador, y esto se acerca mucho a la verdad. Hoy hay la necesidad de decir muchas cosas a los que nunca pisan una iglesia, pero se suelen divertir sus ocios con las hojas periódicas [...] Contra este estado de indiferencia viene a reaccionar el nuevo diario. Hay que abrirle de par en par los hogares. Hay que prestarle la colaboración que esté a nuestro alcance. El que menos pueda, con una suscripción. El periódico se ha convertido hoy día, por obra de la vida urgente que vivimos, en la universidad para todos. Los católicos y los conservadores debían fundar la suya: ya la tienen, afortunadamente.<sup>15</sup>

Así, tanto las sociabilidades como las transformaciones en la prensa fueron fundamentales para acercar los sectores populares a la actividad política. Si bien en la década de 1920 el voto todavía estaba restringido por criterios culturales y económicos, es igualmente cierto que la participación en la vida política se hacía por medio de otros canales diferentes al sufragio:<sup>16</sup> el acceso a la prensa, la participación en diversas redes de sociabilidad, el proselitismo previo a las campañas, la paulatina adquisición de una formación política y el creciente contacto con una clase política que empezaba a realizar giras por ciertas regiones fueron algunos de esos puentes. Las álgidas discusiones en torno al papel de la Iglesia y del catolicismo en la sociedad, así como las no menos candentes disputas acerca de la llamada cuestión social permiten ver la importancia de la prensa, la radicalización de la mayor parte del conservadurismo y las crecientes dificultades de los republicanos para hacerse escuchar dentro de su partido.

## **EL PROBLEMA RELIGIOSO<sup>17</sup>**

Para entender la radicalización de Los Leopardos, los debates que empezaron a darse en torno al papel de la Iglesia en la sociedad colombiana son determinantes, así como los problemas que enfrentaba el catolicismo en Rusia, en México, en Francia y en otros países. Veamos cómo ocurrió ese proceso.

Una vez vinculados formalmente al diario El Nuevo Tiempo (1923), Los Leopardos expusieron sus principios rectores, los cuales, según ellos, debían orientar toda la acción de los conservadores. En sus artículos se destacaban dos

asuntos estrechamente relacionados y que requerían acciones urgentes. Por una parte, la necesidad de asegurar las bases católicas de la sociedad; por otra, poner fin a cualquier vínculo con el liberalismo: “Labor nuestra es condenar las alianzas con los contrarios, las cuales debilitan la doctrina y nos contagian los vicios y los extravíos ajenos”.<sup>18</sup> Según Villegas, era necesario “realizar una obra doctrinaria, moldeada en la lógica cristiana, que restaure y magnifique nuestras tradiciones políticas”, tan olvidadas por los vetustos gobiernos conservadores y amenazadas por los liberales.<sup>19</sup>

Después de una relativa calma en materia religiosa, a partir de los años veinte las discusiones en torno al papel de la Iglesia y el catolicismo volvían así a convertirse en materia de disputa bipartidista. Para los adeptos más acérrimos del clericalismo, la religión debía moldear, determinar todos los aspectos de la sociedad, a niveles tanto individual como colectivo. Es lo que Émile Poulat ha llamado el catolicismo integral e intransigente, un régimen de cristiandad que impulsaba el papado desde Roma.<sup>20</sup> En Colombia ese mismo catolicismo regía la sociedad desde 1886 con la sanción de la nueva carta constitucional, que convertía a la religión católica en una pieza esencial de la “nación”. Según este modelo, el catolicismo debía intervenir en todos los ámbitos importantes para el ser humano (educación, política, moral, vida familiar, sexualidad, cultura, etc.), y borraba así las fronteras entre lo público y lo privado; de ahí su carácter integral. También era intransigente, pues el catolicismo no podía ceder ante el error, es decir, ante todos los males que se derivaban de la modernidad. Como corolario, la política y la religión no podían marchar por caminos diferentes, pues no constituían dos esferas independientes, como pretendían los “paganos”.

Los incipientes procesos de modernización que había en Colombia, acompañados por un lento desarrollo de la secularización, eran motivo más que suficiente para que la “nueva derecha” sintiera que el orden tradicional, sustentado en los valores del catolicismo, estaba en serio peligro: el crecimiento de las ciudades, el desarrollo industrial, la migración del campesinado y las nuevas modas y diversiones trastocaban los valores del catolicismo. Según esas corrientes, la situación era aún más dramática si se pensaba en la creciente hostilidad de los liberales contra “los derechos naturales” de la Iglesia. A todo esto se añadía la “indiferencia” de las autoridades conservadoras frente a las transformaciones del país o, peor aún, ciertos ímpetus reformistas de los propios gobernantes. Por ejemplo, Los Leopardos, en alianza con la mayor parte del clero, se escandalizaban ante las iniciativas del ministro de Educación, que pretendía abrirle nuevos espacios educativos a las niñas y fomentar la formación

científica. A propósito de esas controversias internas, Christopher Abel anota que “los clericales”, es decir, los sectores más recalcitrantes, “veían la educación como un instrumento del statu quo, y los republicanos como un medio para obtener cambios graduales”.<sup>21</sup>

Estas disputas son una muestra más de las divisiones dentro de las filas del conservadurismo. Además de una extrema derecha —compuesta por Los Leopardos y demás “doctrinarios”—y de los republicanos, hay que señalar ciertas tendencias que no se identificaban con el espíritu de tolerancia ni con el anticlericalismo de los republicanos, pero tampoco veían con buenos ojos el creciente rechazo a la democracia por parte de Los Leopardos y compañía.<sup>22</sup> Conviene, asimismo, advertir que el clero tampoco constituía un bloque homogéneo: mientras que algunos jerarcas, como el arzobispo de Bogotá, Bernardo Herrera, pensaban que era necesario mostrar un mínimo de tolerancia frente al liberalismo para evitar nuevos conflictos, otros, por el contrario, sostenían que tales alianzas eran antinaturales.<sup>23</sup> Sin embargo, esos matices desaparecían tan pronto unos y otros creían entrever algún peligro para el orden católico.

En los años veinte las discusiones en torno a la “cuestión religiosa” estuvieron relacionadas, principalmente, con la intervención del clero en la política, una injerencia cada vez más cuestionada por buena parte del liberalismo y del republicanismo. Armando Solano fue un crítico permanente de las extralimitaciones de la Iglesia y es un buen representante del tipo de críticas que muchos liberales dirigían a esa institución eclesiástica. Su posición no era la de los radicales del siglo XIX, animados por un anticlericalismo furibundo que los llevó a ser tan intransigentes e intolerantes como el clero. En sus artículos periodísticos denunció el ánimo pendenciero del clero, presto a estallar por motivos políticos. Semejante nivel de beligerancia resultaba incomprensible, máxime en un contexto en el que nadie pretendía contrariar el “sentimiento religioso” de los colombianos, agregaba, dejando claro que no desconocía la importancia de la religión en una sociedad como la colombiana: “Quienes no somos anticatólicos profesionales, ni pretendemos, por imposible y perjudicial, arrancar el sentimiento religioso del alma popular, lamentamos de veras los extravíos de cierto clero, atacado por una sed de sangre y por una fiebre de odio”.<sup>24</sup>

Desde las páginas de La República, su director, Alfonso Villegas Restrepo, consideraba que el problema religioso era una cuestión simplemente estadística:

el censo afirmaba que la mayoría de los colombianos era católica, y todos aceptaban la manera como estaban reguladas las relaciones entre el Estado y la Iglesia, “sin que eso obste para que cada uno de nosotros profese como particular las ideas que en religión y filosofía le parezcan preferibles”. Y en una clara alusión a la instrumentalización del elemento religioso por parte de los conservadores, el diario lamentaba que las ventajas que el Concordato le había concedido al clero fuesen utilizadas

para favorecer los intereses de un partido mediante alianzas políticas entre la Iglesia y ese partido [...] Cada vez que las prerrogativas de aquélla sirvan para que un partido gane elecciones, fulmine a sus adversarios o haga propaganda política, se está desvirtuando aquel pacto y se están concediendo a un partido fueros de religión nacional.<sup>25</sup>

*La República contaba con dos secciones políticas: La “Página liberal”, dirigida por Germán Arciniegas, un dinámico gestor cultural fundador de revistas y casas editoriales que también destacaba como uno de los líderes del movimiento estudiantil, y la “Página conservadora”, dirigida por Abel Carbonell (1879-1971) y Rafael Escallón (1891-1951), este último, profesor de derecho penal de Arciniegas y de Silvio Villegas. Los dos fueron grandes contradictores de las tendencias radicales de su partido y de la indebida mezcla de la religión con la política. Ante la preocupación de ciertos religiosos por la modernidad, que, según ellos, distanciaba a los católicos de la Iglesia, los republicanos presentaban una versión diferente:*

lo que aleja a la gran mayoría de los jóvenes colombianos, primero del clero y después los hace indiferentes para con la Iglesia, es esa actitud imperiosa, que a veces raya en la inurbanidad, del clero colombiano. Esta actitud ha nacido de la inmoderada, de la excesiva ingerencia [sic] del clero en la política y de la mezcla que muchos conservadores han hecho entre sus ideas políticas y la doctrina católica. ¿Acaso no sueñan muchos con hacer del Partido Conservador un partido católico?<sup>26</sup>

Ese tipo de posiciones, por moderadas que fuesen, contribuyeron a exacerbar los ánimos de los conservadores doctrinarios. En su arremetida contra los “enemigos de la Iglesia”, El Nuevo Tiempo, en el que Los Leopardos tenían un papel preponderante, reafirmaba una y otra vez la supremacía del poder religioso sobre el poder civil:

Esta superioridad de la Iglesia no significa sólo mayor dignidad, ni derecho a dictar normas directivas, sino que implica autoridad en el poder espiritual para corregir los actos civiles perjudiciales a las almas, y obligación en el poder civil de sujetarse en esto al eclesiástico.<sup>27</sup>

Augusto Ramírez, otro de los leopardos, en un intercambio epistolar con José Vasconcelos, por quien los Nuevos sentían una viva admiración debido a su vasta cultura, le recordaba a su corresponsal la importancia que tenía el catolicismo en Colombia. El secretario de Educación mexicano le había manifestado previamente que la unidad latinoamericana, por la cual supuestamente abogaban los estudiantes conservadores, era impensable si existían estados confesionales, como ocurría en Colombia. En tono provocador, le pedía al leopardo luchar contra el clericalismo para liberar al estudiantado colombiano de las trabas de la Iglesia, tal como lo habían hecho sus coterráneos. Puesto que la Iglesia no era más que “una rémora”, convenía “sacudir el poderío eclesiástico, que cuando pesa sobre los pueblos no sólo los corrompe, sino que prostituye la religión misma”.<sup>28</sup> Ramírez, sin inmutarse, afirmaba que

el pueblo de Colombia, el de México, el de todas las hijas de España es fervorosamente católico y se humilla, sin recato, ante el cáliz que aparece en la altura. Para combatir el catolicismo en estos países, sería necesario amasar nueva arcilla para constituir sus gentes.

Debido a la preeminencia del “hecho social católico”, era entonces natural que la Iglesia interviniera en todos los asuntos para evitar el arraigo de las tesis del liberalismo, “contrarias al dogma de la Iglesia”. Frente al “error” no se podía

claudicar:

Y no vale decir como usted lo hace que el catolicismo debe acoger o acogerse a las más avanzadas ideas socialistas, porque el único bagaje de la verdad es la intransigencia y la Iglesia de Roma perecería si aceptara alguna mutación en sus principios fundamentales.<sup>29</sup>

## **EL PROBLEMA SOCIAL Y EL AUTORITARISMO**

La cuestión social estaba estrechamente relacionada con las disputas en torno al papel de la Iglesia. Si para los sectores anticlericales el catolicismo legitimaba y naturalizaba las inequidades sociales, para la derecha sólo la doctrina de la Iglesia tenía la respuesta adecuada para poner fin a la lucha de clases. Para comienzos de los años veinte los conflictos sociales, cada vez más evidentes, atizaron aún más los ánimos de la “nueva derecha”. El surgimiento del Partido Socialista (1919) y, luego, el del Partido Socialista Revolucionario (1926) llevaron a ciertos liberales a mostrar un mayor interés por la precariedad en la que vivían los sectores populares. La izquierda, por su parte, estaba cada vez más involucrada en campañas de agitación para despertar el ánimo de obreros y campesinos que, sin embargo, en su mayoría no parecían dispuestos a abandonar a los partidos tradicionales.

El clero colombiano no fue ajeno al problema social. Los obispos conocían la doctrina social de la Iglesia, que fue la respuesta elaborada por el papado para enfrentar el descontento de “las masas” en el mundo industrializado. No obstante, los prelados del país señalaron que el origen de la llamada cuestión social se hallaba exclusivamente en la “demagogia socialista”, y que sus consecuencias podrían arrastrar a la sociedad colombiana hacia la guerra de clases y la revolución. Ya en 1913, al trazar el programa de la Acción Social Católica, el conjunto del episcopado lanzaba una voz de alerta:

Es el momento presente el más fatal de la historia del género humano. Desde sus orígenes hasta hoy no se había encontrado el mundo ante el enigma de la revolución social que se aproxima para entregar los estados civiles al proletariado victorioso [...] O ha llegado la última hora para la sociedad civil, después de la cual no puede venir sino la barbarie y el caos, o la civilización tiene que apelar al único remedio que puede salvarla [...] Sólo hay un remedio contra la plaga; sólo un baluarte contra el anarquismo: la vuelta al cristianismo bajo la acción restauradora de la Iglesia. Sólo el freno de la moral, aplicado a los intereses materiales, puede establecer el equilibrio social destruido; sólo así puede reivindicarse el proletario de la opresión del capitalismo.<sup>30</sup>

Las distintas iniciativas sociales adoptadas por el episcopado —cajas de ahorros, círculos de obreros, cooperativas de agricultura, bibliotecas, escuelas de artes y oficios, bancos agrícolas, etc.— estuvieron principalmente destinadas a contrarrestar el influjo de la izquierda, no a atacar las raíces de la miseria en la que vivía buena parte de los católicos colombianos.

Los Leopardos retomaron esa misma actitud para contraponerla al socialismo. En un documento publicado en 1924 que fijó su posición en materia social promulgaban que el “orden católico” debía ser la solución frente al “individualismo extremo” —propio del liberalismo— y también frente al comunismo, que “destruye la integridad humana”. El liberalismo representaba un serio peligro, pues su respaldo a la iniciativa privada y a la libre competencia había dado origen al “egoísmo capitalista” y a “las desigualdades irritantes”. El pensamiento liberal era, por consiguiente, el principal responsable no sólo de la miseria social, sino también de la ausencia de respuestas adecuadas para enfrentar ese flagelo. La lucha de clases, a su vez, había engendrado un problema aún más temible: el socialismo. Si bien esta doctrina tenía razón en preocuparse por la suerte de los abandonados, las soluciones que proponía, no obstante, eran del todo erradas:

los partidos socialistas aceptan los derechos de la sociedad, desconocidos por la filosofía individualista, pero la solidaridad que reclaman es mecánica, inhumana, porque está ausente de ella la mirra de la parábola eterna que arde en la Oración de la Montaña.<sup>31</sup>

Sólo la doctrina cristiana ofrecía respuestas adecuadas a la cuestión social, sólo ella podía evitar que la amenaza revolucionaria se convirtiera en realidad:

El movimiento socialista no ha empezado en Colombia. Hay problemas sociales, se juega con las quimeras rusas, pero el sentimiento de clase en el proletariado no despierta todavía [...] Nosotros podemos esquivar el ciclo comunista marchando hacia un orden social católico.<sup>32</sup>

Un componente importante del discurso de Los Leopardos era la representación que hacían de la población rural, más precisamente, de la vida pastoril, bucólica, revestida de todas las virtudes imaginables, mientras que degradaban el mundo urbano a una especie de sucursal del pecado. Según Los Leopardos, el campesino, a diferencia del obrero de las ciudades, conservaba toda su pureza, su ingenuidad, su religiosidad, lo que lo protegía de las andanzas revolucionarias. Villegas y compañía se lamentaban de la desmedida importancia que, en los últimos tiempos, muchos sectores le habían concedido al proletariado de las ciudades, muy dado “a los extravíos anárquicos” y “a la sedición sistemática”. Lo que debería hacerse, por el contrario, era prestarle máxima atención a la población rural, pero dentro de una gran vaguedad: “Invocamos el sentido tradicional de las clases campesinas que son el espíritu de la tierra”, decían, sin señalar reformas concretas mediante las cuales supuestamente pretendían alcanzar tales objetivos.<sup>33</sup>

En su lucha contra el “caos revolucionario”, Los Leopardos no tardaron en legitimar cada vez más el autoritarismo. Si bien para justificar las prerrogativas del Ejecutivo en detrimento de los otros poderes apelaban a circunstancias coyunturales, como el desorden causado por las huelgas, la razón de fondo para explicar su apego a los gobiernos “fuertes” radicaba en la enorme desconfianza que suscitaba en ellos el régimen democrático. Era necesario, decían, establecer un gobierno fuerte como garante del “orden”, amenazado por las ideas secularizantes y ateas que propagaban sin límite alguno los numerosos enemigos de la Iglesia. En sus discursos se aprecia, sin dificultad, la imagen negativa que tenían de la democracia. José Camacho, otro leopardo, en un lenguaje

eminentemente beligerante sostenía que el país requería con carácter urgente la mano firme de un caudillo que retomara el ejemplo de Bolívar, e introdujo así un nuevo elemento en la ideología de la extrema derecha: el culto al Padre de la Patria en su versión autoritaria, muy útil para los propósitos de Los Leopardos:

Sobre la Colombia decrepita, vergonzante, raquítica, que nos entrega el civilismo; espectro de legalidad; con [un] ejército que desconcierta la corrediza instrucción de los gobernantes; sin áspera noción de fiereza criolla ni de varonía nacional, con endeble cultura, abismo de ideales desbarrancados; renegada de todo principio másculo, de la autoridad, de la Iglesia, de la gloria guerrera, de la arbitrariedad ambiciosa, reconstruyamos la Colombia de Bolívar, almizclada y atormentada como el Padre.<sup>34</sup>

Para 1924, los “conservadores doctrinarios” ya no ocultaban su desprecio por las fórmulas democráticas ni sus simpatías por los regímenes dictatoriales, de los cuales el fascismo italiano constituía el gran paradigma. El Nuevo Tiempo se detenía en los males del parlamentarismo, con todo lo que ello implicaba en términos de gestión del Estado:

Ha tiempo que sostenemos en esta hoja la ineficacia de aquel régimen y hemos sustentado nuestro concepto con ejemplos que suministra la Europa actual, a cuya reconstrucción se tiende, mas no con ese gobierno locuaz, vacilante e irresponsable de los parlamentos, sino con el mando de Ejecutivos cuya responsabilidad rezida [sic] en una sola persona. El parlamentarismo es un régimen rezagado en todos los países y debiera serlo muy más entre nosotros, pueblo en formación que requiere para su desarrollo un empuje fuerte y unificador. Triste condición la del liberalismo de estas naciones latinas, que vive a la zaga, alimentado con los reziduos [sic] europeos. Cuando el viejo continente rechaza unánimemente el parlamentarismo y proclama a hombres como Mussolini, nosotros nos halagamos con el gobierno de las turbas demagógicas y con la orientación tortuosa y vacilante que pueda imprimirle a nuestras instituciones el parlamento, donde, al decir popular, “mucho se habla, luego mucho se yerra”.<sup>35</sup>

Al mismo tiempo que denunciaba los estragos propios de la democracia, el diario multiplicaba los elogios a Mussolini, quien había hecho de Italia una nación digna, fuerte, orgullosa de sí. Los propósitos del Duce constituían la “síntesis más perfecta de la doctrina conservadora”. Lamentablemente, los gobiernos latinoamericanos seguían aferrados al anticlericalismo y despreciaban el apoyo que la Iglesia podía prestarle al Estado:

Cuando las demagogias cerreras de la América Latina arrecian su persecución a la iglesia y la señalan como un muro obstinado en estancar las corrientes de la civilización, el hombre cuyas palabras se recogen en Europa como mandamientos de Gobierno, proclama la urgencia social de la religión católica y dice que sólo dentro de su espíritu puede forjarse el alma nacional de la Italia [...] En los bronce de su estilo, Benito Mussolini reconoce la función social de la iglesia.

Por tal razón, proseguía El Debate,

sus conceptos forman un programa conservador que nosotros queremos acoger en estas páginas para decirle al liberalismo que no estamos envejecidos ni caducos y que sólo en nuestras ideas rejuvenece la Europa. No lo decimos nosotros: lo afirma Benito Mussolini.<sup>36</sup>

La deriva hacia el autoritarismo también tenía otra fuente, otro principio legitimador: la Action française (AF), un movimiento que congregaba a una serie de intelectuales del país galo, enemigos a ultranza de la revolución de 1789 y defensores acérrimos del “tradicionalismo”. De ahí sacaron Los Leopardos muchas de sus ideas, en particular relacionadas con el autoritarismo, con las que iban a polarizar el escenario político colombiano. En su libro No hay enemigos a la derecha, publicado en 1937, Silvio Villegas arroja luces sobre los nexos entre Los Leopardos y la AF. El proceso que lo había llevado a convertirse en uno de los principales instigadores del sectarismo político se había iniciado desde muy temprano, fomentado, en parte, por las lecturas que hizo desde su adolescencia: de un extenso y variado listado de autores, que incluía pensadores de todos los tiempos y de múltiples corrientes ideológicas, Villegas señala que la mayor

influencia, al menos en un comienzo, provenía de Francia, lo que se explica por la viva admiración que sentía por los pensadores de la contrarrevolución: Ernest Renan, Remy de Goncourt, Anatole France y, sobre todo, Hippolyte Taine, “reaccionarios en ciencia social”, ratificaron su desprecio en torno “a la mitología democrática y revolucionaria”. Sin embargo, continúa, “la más fuerte impresión intelectual de mi juventud” provino de Charles Maurras, el principal animador de la AF: “Todos los movimientos contra-revolucionarios del siglo XX encuentran en Maurras su acta de nacimiento”. Adversario total de las ideas de 1789, elaboró una crítica furiosa contra la sociedad democrática, responsable de la atomización del cuerpo social, luego de haber destruido los agentes intermediarios (familia, oficio, región).<sup>37</sup>

José Camacho dedicó unos cuantos pasajes de su libro *El último leopardo*, publicado en 1935, al pensamiento reaccionario y católico, y a la atracción que sintieron en sus inicios Los Leopardos por esa doctrina. La AF, nos dice, revitalizó la vida política colombiana, sumida hasta entonces en un ambiente “mansurrón”, dominada como estaba por “las medias tintas republicanas”. Gracias a las lecturas del “pensamiento tradicionalista, católico y reaccionario”, “la nueva derecha” fue “labrando un concepto autocrático y fuerte de la política” que dotó a la juventud de “ideales machos, de énfasis, de categorías espirituales, de principios enérgicos”.<sup>38</sup>

El autoritarismo fue firmemente cuestionado por los conservadores republicanos Escallón y Carbonell, quienes en la sección que tenían en La República rechazaron tanto la apología de los regímenes europeos de extrema derecha como los llamados que los “doctrinarios” le hacían al gobierno colombiano para que limitara el ejercicio de la democracia. Incluso entraron en disputas con el arzobispo de Cartagena, el italiano Pedro Adán Brioschi, quien había instado a las autoridades a imitar el ejemplo de los gobiernos italiano y español, por considerarlos como la mejor defensa frente al anticlericalismo y al comunismo. Los republicanos conservadores acusaron al prelado de hacer invitaciones deshonorosas a los colombianos, ajenas por completo a su talante democrático:

Cuán exótica nos parece, y cuán peregrina la evocación de las sombras dictatoriales de Primo de Rivera y de Mussolini en este feudo de la libertad y de la ley [...] El señor Arzobispo de Cartagena, a pesar de serlo desde hace varios años, no ha podido conocer aún ni la índole de nuestro pueblo, ni tan siquiera las

modalidades sustantivas de nuestros hombres dirigentes, [porque] los hijos de esta tierra son esencialmente refractarios a los sistemas de gobierno que Monseñor preconiza.

Incitación insólita, toda vez que Mussolini y Primo de Rivera “han pasado por sobre la Constitución vigente y por sobre las autoridades legítimamente constituidas”. Los colombianos, “afortunadamente”, no han escuchado “las vibraciones del caramillo de un pastor de almas que para nosotros tiene ciertos estridentes sonos de clarín guerrero”.<sup>39</sup>

Silvio Villegas respondió afirmando que Italia se había salvado del caos gracias a “la obra portentosa de Mussolini”: ante la disyuntiva que, tarde o temprano, debían enfrentar todas las naciones, “el imperator, el dominador, el Holofernes bíblico” no dudó en escoger el camino correcto:

Oscilando su patria entre la anarquía y la autoridad, acepta la autoridad y restablece el orden. Que las libertades se disminuyan, pero que se salve Italia, fue su prospecto doctrinario; siguiendo la lógica jacobina, el Dr. Escallón hubiera dicho: que las libertades se salven aunque la Italia perezca.<sup>40</sup>

Escallón, en la “Página conservadora”, lamentaba que tales razonamientos, contrarios al derecho, provinieran de alguien de su propio partido:

El colega, que se dice conservador, admira un poder de origen viciado, reprobable a la luz de los más elementales principios de derecho natural y de derecho constitucional. Admira una dictadura y justifica esa usurpación del mando supremo y esa dictadura, en virtud del inmoral concepto de que el fin justifica los medios.<sup>41</sup>

En el segundo lustro de la década de 1920, la agitación social se intensificó. Para

entonces, las campañas de la derecha contra los sectores populares ya habían difundido ampliamente una imagen negativa del obrero y de sus luchas, presentándolo como enemigo de la patria. Por consiguiente, cuando estalló la “huelga de las bananeras” en el departamento de Magdalena a finales de 1928, las circunstancias eran muy desfavorables para los trabajadores. Pocos meses antes, el Congreso, dominado por la extrema derecha, había aprobado una serie de medidas de “orden social” destinadas a extinguir las asociaciones “bolcheviques o comunistas o las que pretendan propagar ideas encaminadas a suprimir o debilitar el sentimiento y la noción de patria” o a difundir “el desprecio en contra de la religión católica”.<sup>42</sup>

Un número reducido de conservadores denunció la represión del gobierno. Abel Carbonell y Guillermo Camacho Carrizosa, periodistas y políticos de derecha, reconocían que el Partido Conservador estaba en la obligación de enfrentarse a las ideas socialistas, pues de lo contrario “faltaría a su misión”.<sup>43</sup> Asimismo, agregaban que ningún conservador podía desconocer que el comunismo era “una de las más peligrosas aberraciones ideológicas que pueden afligir a la sociedad”.<sup>44</sup> Pero la manera de combatir las no era debilitando la democracia, sino adelantando las reformas necesarias:

Cumple también al Partido Conservador, puesto que tiene la responsabilidad del gobierno, crear, por medio de leyes bien meditadas, un estado social reactivo a los fenómenos que generan las luchas de clases, como son la miseria, el latifundio y las desigualdades injustas.<sup>45</sup>

Carbonell daba un paso más, al admitir, tal como lo hacía la izquierda, la relación directa entre pobreza y lucha de clases: “Es preciso reconocer que [las doctrinas revolucionarias] no habrían germinado ni se habrían desarrollado en la forma que estamos viendo si el ambiente social no favoreciera su germinación y desarrollo”.<sup>46</sup>

Varios ejemplos históricos servían para corroborar sus postulados: “nosotros no creemos que la intimidación, ni las leyes que borran los linderos entre la libertad y la licencia, entre la autoridad y la opresión, valgan nada contra los movimientos sociales. Valieran algo, y Rusia no sería hoy presa de la demagogia

comunista”, puesto que el zarismo no andaba corto en la persecución de los opositores. “No sabemos, no hemos oído de ningún terrorismo rojo que no reconozca sus antecedentes en sistemas de represión”, tal como sucedió igualmente en México, donde la “tiranía porfirista abrió el camino al revolucionismo de los Obregones y de los Calles”. El caso inglés, en representación del otro extremo, confirmaba la tesis: “el culto de las garantías individuales mantiene inaccesible el alma inglesa a los delirios de las izquierdas extremas”.<sup>47</sup>

Ante la dificultad para llegar a un acuerdo con los trabajadores bananeros, la prensa derechista lamentaba que los obreros ignoraran reiteradamente las propuestas presentadas por la compañía y por los intermediarios designados por el gobierno; denunciaba los ataques de los huelguistas contra las instalaciones de la empresa bananera, lo que constituía “no sólo un acto delictuoso, sino también un movimiento revolucionario que debe ser reprimido de modo rápido y con mano fuerte”.<sup>48</sup> Los desmanes que habían caracterizado la huelga comprobaban “plenamente la razón que asistía al conservatismo para exigir la expedición de una ley sobre defensa social”.<sup>49</sup> Una vez conocido el infeliz desenlace de la huelga, que se saldó con la muerte de varios trabajadores, la prensa derechista vio en el uso de la fuerza un acto del que había que mostrarse orgulloso: “lo que ha ocurrido quedará como severa lección. Lección de dignidad personal, de patriotismo y de amor a la bandera que oficiales y soldados juraron defender”.<sup>50</sup> Poco después, Silvio Villegas recalcaba que su diario, *El Debate*, había tenido un papel decisivo en una coyuntura muy delicada para el país, en la que la “república tradicionalista” se había visto seriamente en peligro por la “amenaza revolucionaria”. Los elogios también se extendían al gobierno, pues gracias a su “actitud valerosa y temible” la izquierda había sido derrotada: “la revolución cayó trágicamente bajo el soplo benigno de las balas oficiales ‘que volaban como palomas mensajeras’. Los revolucionistas existen todavía, pero es de esperarse que el proyecto de defensa social termine con ellos en el año de 1929”.<sup>51</sup>

Si la izquierda, en efecto, salía debilitada por la política represiva del gobierno, la “hegemonía conservadora” se vio amenazada por otros problemas. El más serio, el que puso fin a varias décadas de gobiernos de derecha, fue la propia división de los conservadores. Para las elecciones de febrero de 1930 sus dos candidatos fueron derrotados por el representante del liberalismo, Enrique Olaya. Los Leopardos, desde las páginas de *El Debate*, apoyaban a Guillermo Valencia, adalid de la “doctrina conservadora” y autor de “las páginas más

elevadas sobre la república cristiana”.<sup>52</sup> El rival de Valencia estaba apoyado por un sector del clero; en sus críticas a este grupo, recurrieron a todo tipo de argumentos. Así, Silvio Villegas, quien desde hacía años venía cuestionando la democracia, se mostraba ahora preocupado por las tendencias caudillescas y autoritarias del general Alfredo Vásquez,<sup>53</sup> claro “enemigo de las libertades públicas”.<sup>54</sup>

El clero vasquista, como ya se dijo, fue igualmente blanco de las críticas de Villegas, a quien también contrariaba la injerencia política de los preladados, en otro vuelco de los principios de uno de los más destacados ideólogos del conservadurismo doctrinario... Villegas abogaba ahora por la separación de poderes basándose en textos bíblicos que recién parecía descubrir: “El clero católico, en su condición de maestro, debe dar ejemplo de acatamiento a las autoridades políticas y civiles, como lo estableció la propia palabra divina cuando dijo que era preciso dar a Dios lo que era de Dios y al César lo suyo”.<sup>55</sup> Villegas citaba una pastoral del papa en la que el sumo pontífice no sólo llamaba la atención al clero mexicano por sus “indebidas intervenciones en negocios civiles y en asuntos meramente políticos”, sino que además “su sabiduría paternal” atribuía a esa injerencia “muchas de las calamidades que afligían a la Iglesia mejicana”.<sup>56</sup> Ninguna de sus piruetas retóricas sirvió para evitar la derrota de los conservadores.

## CONCLUSIONES

Después de un corto —e inédito— experimento en la política colombiana en el que un nuevo movimiento intentó establecer la concordia política congregando a los dos partidos tradicionales, la mayoría de los liberales y conservadores se alejó pronto del republicanismo para regresar a sus respectivos enclaves. En el reajuste, las corrientes mayoritarias de la derecha, preocupadas por la conformación de la izquierda y por la reaparición de las tendencias anticlericales, se empeñaron en defender un modelo social cuyos principales soportes debían ser el autoritarismo y el catolicismo.

Como lo vimos, la predominancia de la extrema derecha en el seno del conservadurismo no debe ocultar la existencia de otras corrientes. A pesar de ser minoritarias dentro de la derecha y de que sus esfuerzos no dieron mayores resultados, es importante tener en cuenta que un puñado de republicanos

conservadores, partidarios de nuevas relaciones bipartidistas, se opuso a los usos políticos de la religión, defendió cierta laicidad, dio muestra de una sensibilidad social afín con los sectores “progresistas”, y, simultáneamente, apoyó la democracia. Todo esto en la década de 1920, conviene recordarlo, cuando la tendencia general de las derechas en Colombia y en otras latitudes las había llevado a identificarse sin tapujos con los regímenes dictatoriales. Si la historiografía colombiana ha puesto el foco en el conservadurismo más reaccionario, también es relevante tener presentes otras tendencias, lo que permite matizar y ampliar el panorama ideológico de las derechas colombianas.

La radicalización del conservadurismo en Colombia se enmarcó en un contexto más amplio en el que la oposición entre “izquierda” y “derecha”, entre “ateos” y “católicos” y entre “revolucionarios” y “tradicionalistas” remitía a una confrontación mundial: en México, en Rusia, en Francia, en Italia, en España, por todas partes las derechas creían librar el mismo combate contra los enemigos del “orden cristiano”. En ese sentido, para las derechas más radicales, el triunfo de los liberales en 1930 no significó solamente el fin de la “hegemonía conservadora”, sino el inicio de una verdadera catástrofe para el país, a pesar de que el nuevo mandatario convocó a varios conservadores a participar en su gobierno. Para entonces, la retórica beligerante e incendiaria que la extrema derecha había desplegado en la década anterior se iba a incrementar y polarizaría cada vez más un ambiente político donde las voces moderadas, como la de los republicanos, encontrarían muy poco eco.

## **REFERENCIAS**

ABEL, Christopher

1987 Política, Iglesia y partidos en Colombia, 1886-1953, Bogotá, FAES–Universidad Nacional.

ARCHILA, Mauricio

1991 Cultura e identidad obrera. Colombia 1910-1945, Bogotá, Cinep.

ARIAS, Ricardo

2007 Los Leopardos. Una historia intelectual de los años 1920, Bogotá, Universidad de los Andes.

2010 “La Guerra de los Cristeros vista desde Colombia”, en Jean MEYER (ed.), Las naciones frente al conflicto religioso en México, México, Tusquets.

CAMACHO CARREÑO, José

1935 El último leopardo, Bogotá, Talleres Mundo al Día.

CARBONELL, Abel

1929 Por la doctrina, Barranquilla, Editorial del Diario del Comercio.

Conferencias Episcopales de Colombia

1956 Conferencias Episcopales de Colombia, t. I, 1908-1953, Bogotá, El Catolicismo.

FOUILLOUX, Étienne

1990 “Courants de pensée, piété, apostolat”, en Jean-Marie MAYEUR, Charles PIETRI, Luce PIETRI, André VAUCHEZ, Marc VENARD (dirs.), Histoire du christianisme, t. 12, Guerres mondiales et totalitarismes (1914-1958), París, Desclée–Fayard.

HELG, Aline

1984 Civiliser le peuple et former les élites, París, Éditions L’Harmattan.

HERRERA, Bernardo

1912 Pastorales, circulares, decretos y otros documentos del ilmo. y rvdmo. sr. dr. d. Bernardo Herrera Restrepo, arzobispo de Bogotá, Primado de Colombia, Bogotá, Imprenta de San Bernardo.

NÚÑEZ, Luz Ángela

2006 El obrero ilustrado. Prensa obrera y popular en Colombia: 1909-1929, Bogotá, Universidad de los Andes.

PALACIOS, Marco

2003 Entre la legitimidad y la violencia. Colombia 1875-1994, Bogotá, Norma.

PÉCAUT, Daniel

1987 Orden y violencia: Colombia 1930-1954, Bogotá, Siglo XXI. POULAT, Émile

1983 Le catholicisme sous observation. Entretiens avec Guy La-fon, París, Éditions du Centurion.

1997 La solution laïque et ses problèmes, París, Berg International.

RAMÍREZ MORENO, Augusto

1984 Obras selectas, Bogotá, Cámara de Representantes.

RESTREPO, Carlos E.

1972 Orientación republicana, t. II, Bogotá, Banco Popular.

SIERRA, Rubén

2002 Miguel Antonio Caro y la cultura de su época, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.

SOLANO, Armando

1980 Glosas y ensayos, Bogotá, Biblioteca Básica Colombiana.

VEGA CANTOR, Renán

2002 Gente muy rebelde. Protesta popular y modernización capitalista en Colombia (1909-1929), Bogotá, Ediciones Pensamiento Crítico.

VILLEGAS, Silvio

1937 No hay enemigos a la derecha, Manizales, Casa Editorial y Talleres Gráficos Arturo Zapata.

## ***Periódicos***

*Diario del Comercio, Bogotá, 1927-1930*

*El Debate, Bogotá, 1927-1930*

*El Espectador, Bogotá, 1920-1930*

*El Nuevo Tiempo, Bogotá, 1920-1930*

*El Tiempo, Bogotá, 1920-1930*

*La Defensa, Medellín, 1928-1929*

*La República, Bogotá, 1921-1926*

Tales eran los propósitos que Restrepo transmitía a algunos de sus hermanos en una carta fechada el 25 de marzo de 1911. RESTREPO, 1972, t. II, p. 384.

El grupo de Los Leopardos estaba conformado por Silvio Villegas (1902-1972), Augusto Ramírez Moreno (1900-1974), José Camacho Carreño (1903-1940) y Eliseo Arango (1900-1977). Entre los Nuevos que optaron por el liberalismo se puede mencionar a Germán Arciniegas, importante gestor cultural, Alberto Lleras, periodista y político de primera importancia, Jorge Eliécer Gaitán, quien llegaría a ser el gran líder social del siglo XX colombiano, asesinado en 1948, y Luis Vidales, uno de los cronistas más llamativos de la época.

Expendios de chicha, una bebida popular que se obtenía de la fermentación del maíz. En estos locales, muy numerosos en Bogotá, se reunían campesinos y obreros en sus momentos libres.

Entre otros, véanse ARCHILA, 1991, y VEGA CANTOR, 2002.

NÚÑEZ, 2006, pp. 63-64.

“Acción Social Católica” (1913), en Conferencias Episcopales de Colombia, 1956, t. I, p. 53.

“Acción Social Católica” (1916), en Conferencias Episcopales de Colombia, 1956, t. I, p. 62.

“Acción Social Católica” (1913), en Conferencias Episcopales de Colombia, 1956, t. I, p. 54.

“Organización Obrera” (1924), en Conferencias Episcopales de Colombia, 1956, t. I, p. 67.

“Carta al director de El Hogar Católico” (11.XII.1907), en HERRERA, 1912, t. 1, p. 369.

ABEL, 1987, p. 52.

FOUILLOUX, 1990, pp. 122-123.

“El periódico católico”, El Debate, 15.III.1929.

ABEL, 1987, p. 203. Según este autor, El Tiempo pasó de vender 800 ejemplares en 1912 a 30 000 en 1929, cifra que llegaba a los 50 000 los fines de semana.

“Opiniones de la prensa. El Debate”, citado en El Debate, 3.VII.1927.

Mientras que la elección del jefe de Estado estaba reservada para los hombres alfabetizados y con bienes de propiedad, la de concejales y senadores se hacía de manera indirecta.

Este apartado y el siguiente provienen de ARIAS, 2007.

“De política”, El Nuevo Tiempo, 19.X.1923.

Idem.

POULAT, 1997; 1983.

ABEL, 1987, p. 47.

Además de Los Leopardos, Laureano Gómez, uno de los dirigentes conservadores más influyentes, lideraba una corriente que también se mostraba cada vez más hostil frente al sistema democrático.

También es posible apreciar diferencias entre las distintas órdenes religiosas, que dejan entrever posiciones encontradas dentro del episcopado: “mientras que [el arzobispo de Bogotá] trajo las [órdenes] más educadas, más conciliatorias y más caritativas entre las francesas [...], Caycedo [arzobispo de Medellín] prefirió las órdenes españolas de un corte más fanático”. ABEL, 1987, p. 40.

SOLANO, 1980, pp. 55-57.

“Exposición de motivos del Programa republicano adoptado por la Convención Nacional”, La República, 11.V.1921.

“La juventud y la irreligión”, La República, 1.I.1924.

“La Iglesia y el Estado. Doctrina católica y doctrina liberal”, El Nuevo Tiempo, 3.XI.1923.

“Méjico y Colombia. Importantísima carta de don José Vasconcelos al señor Ramírez Moreno”, La República, 27.VI.1922.

“Carta-réplica al señor Vasconcelos”, El Nuevo Tiempo, 26.VI.1922, en RAMÍREZ MORENO, 1984, pp. 52-56. La respuesta de Ramírez apareció un día antes que la carta de Vasconcelos, porque La República, que era el diario al que estaba destinada, aplazó un día la publicación de la misiva del ministro mexicano. La lucha entre el catolicismo integral y sus múltiples enemigos —el liberalismo, el socialismo, la secularización, etc.— era un combate internacional. De ahí el interés especial con el que la prensa colombiana seguía los acontecimientos que involucraban al catolicismo en otros países. Tal fue el caso de la Guerra de los Cristeros, objeto de gran atención en Colombia.

“Acción Social Católica” (1913), en Conferencias Episcopales de Colombia, 1956, t. I, pp. 50-51.

“El manifiesto nacionalista”, El Nuevo Tiempo, V.1924, en VILLEGAS, 1937, p. 231.

Idem.

Ibid., pp. 231-232.

CAMACHO CARREÑO, 1935, p. 142.

“La convención liberal”, El Nuevo Tiempo, 29.I.1924.

“ El catolicismo exaltado por Mussolini”, ElNuevo Tiempo, 28.I.1924.

VILLEGAS, 1937, pp. 17-18.

CAMACHO CARREÑO, 1935, p. 8. Después de un periodo de auge político y de gran brillo literario, la AF cayó en desgracia en 1926. Para el papa Pío XI, se había convertido en un movimiento inquietante, tanto por su nacionalismo exacerbado, que ponía en peligro la “armonía internacional”, como por la preeminencia dada a la esfera política sobre la religión (la politique d’abord). Roma prohibió a los católicos leer las publicaciones del movimiento bajo pena de ser excluidos de los sacramentos. Dos años después, cuando Silvio Villegas asumió la dirección del diario católico El Debate, se vio en la necesidad de marcar distancias con su venerable padre espiritual explicando que había admirado al escritor, por su forma, mas no por sus ideas. Véase “Pretextos. Carlos Maurras y nosotros”, El Debate, 1.VI.1928. En realidad, Villegas continuaría profesando una viva admiración por la AF.

“Hacia el fascismo”, La República, 14.I.1924.

“Carta de Silvio Villegas”, El Nuevo Tiempo, 4.II.1924.

“Rectificación y ratificación”, La República, 4.II.1924.

“Conservatismo integral”, El Debate, 7.VII.1928.

“Alimentando la revuelta”, en CARBONELL, 1929, pp. 17-18.

“Estadistas en potencia”, en CARBONELL, 1929, p. 117.

“Política absurda”, en CARBONELL, 1929, pp. 21-22.

“Los estadistas de ahora”, en CARBONELL, 1929, p. 65.

“Alimentando la revuelta”, en CARBONELL, 1929, pp. 17-18.

“Se agrava la situación en la zona bananera”, El Nuevo Tiempo, 7.XII.1928.

Idem.

“Cuadrilla de malhechores”, El Nuevo Tiempo, 11.XII.1928.

“Hoy”, El Debate, 1.I.1929.

“La demagogia mística”, El Debate, 23.XI.1929.

“La condenación eclesiástica”, El Debate, 26.X.1929.

“El peligro vasquista”, El Debate, 30.XI.1929.

“La demagogia mística”, El Debate, 23.XI.1929.

Idem.

## TRADICIÓN, ANTICOMUNISMO Y NACIONALISMO EN EL MÉXICO DE LOS AÑOS VEINTE (1922-1929)

RICARDO PÉREZ MONTFORT

*ciesas-México*

México tiene el orgullo de ser el país americano de mayor tradición [...] Un pueblo sin tradiciones no tiene cohesión, le falta esa cadena de eslabones fantásticos, forjados en el yunque de la historia, por el herrero caprichoso de los siglos...

ALFREDO B. CUÉLLAR

### I

Las nociones elementales del “nacionalismo revolucionario”, tan caro para las “versiones oficiales” del México de los años veinte, tendieron a ajustar la pluralidad y versatilidad de las características locales, regionales y de la mayoría de los estratos sociales urbanos a los requerimientos políticos de quienes, a partir de entonces y a lo largo de toda la década, ejercieron el poder: los militares sonorenses. Justo después de una década de enfrentamientos violentos y de un intento de reestructuración política, social, económica y cultural expresado en el modelo de país que aparecía en la Constitución de 1917, la unidad nacional era más una ilusión que una realidad. La guerra entre las facciones se dio entonces por concluida, de manera un tanto ficticia, en vista de que dicha constitución pretendía reunir las aspiraciones de la mayoría de las fuerzas contendientes. Al asumir Venustiano Carranza la presidencia constitucional en diciembre de 1917, todavía quedaban varios grupos alzados, principalmente los zapatistas en Morelos y los villistas en el norte del país. Cierto que ambos quedarían

reducidos durante el resto del gobierno de Carranza; sin embargo, suficiente inquietud generó a finales de aquella década revolucionaria el Plan de Agua Prieta en abril de 1920, mismo que fue conocido como “la huelga de los generales” y que era capaz de desconocer al mismo régimen carrancista.

Encabezados por Plutarco Elías Calles, Adolfo de la Huerta y el candidato a ocupar la presidencia a finales de 1920 por los partidos Revolucionario Sonorense y Liberal Constitucionalista, el general invicto Álvaro Obregón, los aguaprietistas controlaron el país en un par de semanas. Carranza fue asesinado en Tlaxcalantongo en mayo de 1920, e inmediatamente el congreso nombró como presidente provisional a Adolfo de la Huerta, quien asumió el poder con miras a reorganizar las elecciones, pacificar el país, principalmente a las fuerzas villistas en el norte, y, finalmente, entregar el poder a Álvaro Obregón. Inició entonces el llamado periodo de los caudillos revolucionarios, cuyos gobiernos determinarían el transcurrir político y económico del país durante cinco lustros, siendo particularmente activos durante los años veinte.

Los generales Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles serían las figuras epónimas de aquella década. Ambos dirigieron los destinos del país con mano férrea, comandando un ejército que requirió una puntual reorganización y depuración, estableciendo alianzas con movimientos obreros y campesinos, reestructurando la maltrecha economía nacional y tratando de aplicar algunos de los principios establecidos en la Constitución de 1917. Sus gobiernos se confrontaron con intereses internacionales, particularmente de los dueños estadounidenses, ingleses y españoles de grandes territorios, minas y empresas, siendo especialmente tensas las relaciones entre Estados Unidos y México durante 1923 y 1927. A la hora de buscar el reconocimiento estadounidense mediante la firma de los Tratados de Bucareli entre julio y agosto de 1923, aquellas tensiones empezaron a ceder. Sin embargo, cuando el gobierno del general Calles pretendió reajustar las condiciones de la explotación petrolera en manos de las grandes compañías extractivas estadounidenses e inglesas en territorio mexicano en 1927, nuevamente el conflicto entre el vecino del norte y el régimen revolucionario se puso al rojo vivo. Al año siguiente las cosas empezaron a mejorar, especialmente gracias a la labor diplomática del nuevo embajador y banquero Dwight W. Morrow.

Ambos gobiernos, el de Obregón y el de Calles, también se confrontaron de manera creciente con los intereses de la Iglesia católica, al grado de que a partir de 1923 la tensión entre el régimen laico y los religiosos desató la llamada

Guerra Cristera, que asoló principalmente al Occidente del país entre 1926 y 1929. Nuevamente gracias a las intervenciones diplomáticas estadounidenses y a las supuestas concesiones tanto de los revolucionarios como de la alta jerarquía católica, poco a poco las aguas retomaron su cauce.<sup>1</sup>

Mientras todo ello sucedía, un discurso múltiple que podía resumirse en el binomio “nacionalismo revolucionario” fue permeando tanto los ámbitos políticos y económicos, como los sociales y culturales. Los gobiernos se identificaron con esa reivindicación transformadora que apelaba al rompimiento con el pasado y su proyección hacia el futuro progresista, pero también tendieron a la revaloración de lo propio y lo popular, recurriendo al patriotismo y no pocas veces a la xenofobia y al fanatismo civilista y localista.<sup>2</sup>

Convertido en una especie de bandera ideológica enarbolada principalmente por las élites políticas, intelectuales y artísticas, el nacionalismo revolucionario se utilizó tanto para justificar disposiciones y reestructuraciones económicas como para dar contenido a los proyectos educativos y culturales de quienes asumieron el poder a partir de 1920. Una tendencia determinante fue la apropiación de lo nacional por parte de estas élites, que ahora le adosaban el adjetivo de revolucionario a todo lo que les servía para diferenciarse de aquellas que habían gobernado y educado “al pueblo” antes de la guerra civil iniciada en 1910-1913.

Si bien por medio del propio nacionalismo revolucionario se reconocieron múltiples actores políticos y económicos capaces de someterse unitariamente a los dictados de las necesidades de los gobiernos en turno después de 1920, especialmente aquellos ligados a las reformas agrarias, militares, económicas, sociales y educativas, durante esos mismos años también se afirmaron diversas reacciones de clara raigambre conservadora, que igualmente apelarían a un nacionalismo sui generis y que rápidamente desembocaría en severas confrontaciones. El debate en torno del nacionalismo, ya fuese conservador o revolucionario, estuvo a la orden del día, y fue utilizado como argumento diferencial en las principales disputas por el poder. Sin duda las más relevantes de aquella época fueron las que protagonizaron los propios miembros de la élite político-militar, como la rebelión delahuertista de 1923-1924, las asonadas de los generales Francisco Serrano y Arnulfo R. Gómez en 1927, la revuelta encabezada por el general Gonzalo Escobar en 1929, y, desde luego, la Guerra Cristera.

De muy diversas maneras, casi todas estas fuerzas contrarias al establecimiento

del nuevo régimen encabezado por los generales Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles justificaron sus acciones acusándolo de ajeno a la voluntad popular, de enemigo de “las clases productivas” y de la idiosincrasia católica nacional, de someterse a los dictados de los vecinos del norte, así como de simpatizar con las ideas socialistas, comunistas y “bolcheviques”. El nacionalismo de aquellos regímenes revolucionarios fue uno de los aspectos mayormente cuestionados por estos conservadores, a pesar de insistir en que el nuevo modelo constitucional se preocupaba en primera instancia por los intereses y el bienestar de todos los mexicanos. Ciertamente que muchos de los llamados revolucionarios que se alzaban en contra del régimen de los sonorenses lo hacían por razones conservadoras, además de que por debajo del agua muchas de sus pugnas escondían la ambición de obtener beneficios económicos o de mando. Algunos incluso buscaron vincularse con las resistencias conservadoras encabezadas por la Iglesia católica o las empresas transnacionales, como sucedió en determinado momento con la rebelión del general Escobar.<sup>3</sup>

El nacionalismo revolucionario presumía estar al servicio del pueblo de México, recurriendo con frecuencia a tratar de definirse mediante el reconocimiento de las herencias indígenas, ancestrales, de las masas campesinas y obreras, de la necesidad del mexicano de contar con un buen trabajo o con los frutos de su propia tierra. Se identificaba con los símbolos populares en una dinámica cambiante, que claramente tendía a disputarle a las derechas y a los conservadores la legitimidad de su particular valoración de aquellos elementos que constituían la nación mexicana.

Por su parte, y para implementar a su manera los principios nacionalistas de las derechas, algunos de los movimientos que se organizaron contra el régimen posrevolucionario no sólo establecieron argumentos autoritarios y de unificación nacional, sino que se inventaron —con la alianza de intelectuales, artistas y empresarios— una serie de patrones capaces de generar identidades que resultaron por demás ambiguas. Más que un afán transformador, los conservadores apelaron a una esencia nacional, a una “mexicanidad”, que se construiría a partir de cierta tipificación en la cual no se podían poner en duda sus más preciados valores: el amor a la patria y la defensa de la familia, la herencia colonial e hispana, su responsabilidad como protectores e intérpretes del pueblo, de su cultura, de su historia gloriosa y de la religión católica.<sup>4</sup> El nacionalismo conservador no solía recurrir al pasado prehispánico, sino más bien a las épocas coloniales y a la hispanidad como las determinantes a la hora de forjar aquella esencia que hacía del pueblo mexicano un sujeto particular en la

historia de la humanidad.<sup>5</sup>

La fijación de “tipos” y de “valores” que apelaban a una supuesta “autenticidad”, a un “respeto a las tradiciones” e incluso a una diferenciación tácita entre lo ajeno y lo propio estuvo en el centro de la construcción de estos supuestos principios nacionalistas, tanto del lado de los revolucionarios como del de los conservadores, que también se sustentaban en complejos imaginarios colectivos caracterizados por su índole profundamente tradicionalista. Al apelar a la defensa de las tradiciones solían identificarse como genuinos representantes populares, y con frecuencia recurrían a sancionar lo que era favorable o negativo para “el pueblo mexicano”. Así, se tendió a favorecer, tanto de un lado como del otro, la estructuración de normas a partir del establecimiento del deber ser o de diversos deberes seres que, una vez transformados en referencias obligatorias y en imágenes de lo que era propiamente “mexicano”, parecían no estar sujetas a los avatares concretos de la historia.<sup>6</sup> La disputa entre revolucionarios y conservadores por los símbolos y los significados de las tradiciones, de las formas de ser, de las idiosincrasias, pero sobre todo de aquello que hacía al pueblo de México el principal protagonista de sus respectivos proyectos de nación estuvo muy presente a la hora de las confrontaciones, tanto ideológicas como militares, que caracterizaron aquella década de los años veinte.

Mientras los revolucionarios se adjudicaban ser los principales exégetas del nacionalismo mexicano del momento, una interpretación particular de la realidad nacional enarbolada por diversas organizaciones de derecha comandadas por determinadas élites tanto rurales como urbanas se manifestó en la construcción de muchas propuestas reaccionarias, en no pocas resistencias y en una búsqueda alternativa a la pretendida unidad de la nación que encabezaban los revolucionarios triunfantes.

De esta manera, dos nacionalismos que revisaban, a veces de forma muy distinta pero también a veces con ciertas semejanzas, las tradiciones, la historia, los componentes populares, los discursos identitarios, las expresiones culturales, los proyectos nacionales y las proyecciones internacionales se confrontaron en una arena que en el medio local apenas se encontraba reconstruyendo su proyecto de futuro después de una cruenta guerra civil, mientras se vivían incertidumbres, intentos de organización y fanatismos en una escala mayor, recién concluida la primera Guerra Mundial.

## II

La etapa armada de la Revolución mexicana trajo como consecuencias más palpables no sólo la desarticulación económica, política y social producida por la guerra civil, sino también la clara manifestación de las múltiples diversidades regionales en prácticamente todos sus ámbitos y niveles. Ante la violencia, la población generó infinidad de movimientos horizontales y verticales que permitieron la revelación de miles de recovecos desconocidos o ninguneados hasta entonces a lo largo y ancho del territorio nacional. Ello impulsó una gran variedad de reflexiones sobre lo que había sido y lo que en ese tiempo pretendía ser aquel país que se autonombraba Estados Unidos Mexicanos, o simplemente México.

En plena crisis bélica y económica, hacia 1915 un proceso de introspección obligada descrito por Martín Luis Guzmán, José Vasconcelos y Manuel Gómez Morín, tan sólo para mencionar a los tres escritores y ensayistas más destacados, dio como resultado un retrato nacional de enormes diferencias entre ricos y pobres, entre nortños y abajeños, entre indios y mestizos, entre ciudadanos y rancheros, entre nacionales y extranjeros, en fin: entre todos aquellos que eran capaces de colorear los matices del gigantesco espectro social y cultural albergado por el territorio mexicano.<sup>7</sup>

Martín Luis Guzmán reflexionó sobre este tema de manera interesante:

Cuando pienso en las semejanzas y contrastes que hacen una la vida mexicana, no es lo típico mexicano [...] lo que viene a mi imaginación. Queda entonces en la sombra nuestra masa indígena en bruto, desnuda, miserable, taciturna y cuanto de ella se deriva y se traduce [...] Tampoco vuelvo entonces la vista hacia otro aspecto, elocuente en nuestras grandes ciudades: espectáculo de hermosos edificios contemporáneos, grandes empresas, máquinas de la última hora y, en fin, todo cuanto nuestros ingenuos snobs querían poner siempre ante la cámara fotográfica de los turistas, en vez de lo que a éstos más atrae: nuestros charros cubiertos con enormes y picudos sombreros de palma o de fieltro; nuestros hombres embozados en mantas multicolores; nuestros niños color de tierra, con desnudos vientrecitos combos y lustrosos; nuestros tianguis y campamentos eternamente improvisados, donde las inmundicias y los manjares se confunden [...] Pero el verdadero México no está en tales extremos, sino en el contraste y la

armonía de sus tintas medias, en el escenario modesto donde, a la luz del sol o bajo las sombras, se renuevan día a día los atributos de dos razas, de dos culturas, de dos atavismos fundidos ahora en un solo nuevo modo de ser, peculiar e incongruente: en la vida de nuestras poblaciones chicas.<sup>8</sup>

El intento por definir lo que era el país y su gente se encontraba con una respuesta bastante ambigua ante tanta diversidad, pero en la retórica oficial satisfacía algunos indicios específicos de quienes se preguntaban por él. El pueblo mexicano, según estos pensadores, parecía estar más en el espacio intermedio del campo o de las rancherías; estaba formado por la mezcla de dos razas: la india y la española; su condición económica era ante todo modesta y era en su mayoría analfabeta. Pero lo que en general lo caracterizaba era su heterogeneidad, su apego a las tradiciones y a su religión, y también su particular arraigo a la tierra.

Cierto es que esta diversidad ya había quedado manifiesta en múltiples ocasiones a lo largo del turbulento siglo XIX. La intención modernizadora del régimen porfiriano, al identificarse con la institucionalización del sistema y la explotación capitalista, había hecho lo inimaginable para someter tantas diferencias sociales y culturales a un solo modelo unificador y occidental. A la hora de tocar la reproducción misma del estado en formación, en los contenidos de diversas materias de la instrucción oficial la premisa homogeneizadora porfiriana saltaba a la vista. Por ejemplo, en el Primer Congreso Nacional de Instrucción llevado a cabo a fines de 1889 y principios de 1890 el sentido de la enseñanza de la historia de México se planteó de la siguiente forma:

Conseguir la unidad nacional, por el conocimiento de que todos los mexicanos formamos una gran familia, debe ser otro de los fines que se perseguirán en la enseñanza de la historia patria, aprovechándose las circunstancias que se presentan para destruir el espíritu de localismo.<sup>9</sup>

Sin embargo, el afán por marcar características propias y locales ya se podía percibir en algunas representaciones de aquello que era considerado como factor indicativo y diferencial de “lo mexicano” frente al resto de las naciones. Por

ejemplo, a fines del siglo XIX y principios del XX las participaciones de México en ferias y exposiciones internacionales, como la de París en 1889 o la de Búfalo en 1901, sirvieron, entre otras cosas, para tratar de demostrar que México ya podía incorporarse al mundo moderno, pero que mantenía, desde luego, algunas particularidades muy significativas.<sup>10</sup>

La apelación a las “culturas precolombinas”, como parte del exotismo que se encontraba en boga en el ámbito internacional, fue uno de los recursos más socorridos a la hora de mostrar las posibles aportaciones “mexicanistas” a la cultura universal. Arquitectos, pintores y hombres de negocios trataron de llevar el nombre de México en alto y la expresión popular expuesta en “tipos” como los charros, las chinias, las tehuanas y los cancioneros típicos tuvieron cabida en aquellos envíos de “mexicanidad” al extranjero.<sup>11</sup> Aun cuando todavía no se hacía un reconocimiento particular a la cultura popular, ésta se lograba colar entre muestras y caravanas, en forma de “tradicción” o “costumbres” que caracterizaban el amor a la patria de los mexicanos.<sup>12</sup> El escritor Federico Gamboa, por ejemplo, en una apología sobre los hombres del campo y las haciendas mexicanas, decía: “Amo a estos otros: administradores, mayordomos, dependientes, caporales, etc., porque para mí son los representativos del nacionalismo más desinteresado y puro”.<sup>13</sup>

Poco a poco, y más avanzado el siglo XX, estas figuras rurales pudieron convertirse paulatinamente en vasos comunicantes entre el antiguo régimen, los gobiernos posrevolucionarios y las clases medias y semiaristocráticas afectadas por las reformas en el campo.<sup>14</sup> El mundo urbano tuvo poco que aportar a estos intentos de definición nacional; sin embargo, paulatinamente los trabajadores y sus organizaciones empezaron a contar como elementos constitutivos del discurso posrevolucionario, sobre todo al incorporarse como partícipes imprescindibles de la anhelada industrialización, necesaria para construir un México moderno y a la altura de su tiempo. Pero mientras obreros y campesinos organizados empezaron a incorporarse al discurso del nacionalismo revolucionario de los años veinte, el mundo de la hacienda, de los charros y de las chinias, en fin, ese México rural lleno de costumbres y “tipos” se quedó poblando principalmente el nacionalismo conservador, para el cual los obreros y los trabajadores del campo ligados a las corporaciones impulsadas por los gobiernos revolucionarios tenían más que ver con el “comunismo” o el “bolcheviquismo” que con la “mexicanidad”.

### III

Si bien los gobiernos emanados de la Revolución no se apartaron del todo del proyecto capitalista porfiriano en materia de pretensiones industrializadoras y de fomento al comercio y a la inversión extranjera, una orientación intensamente nacionalista buscó hacer las veces de principio diferencial entre el antiguo y el nuevo régimen. Ese nacionalismo revolucionario se refugió fundamentalmente en el discurso, en donde resultó ser bastante más inofensivo que en los proyectos de desarrollo económico.

Este nacionalismo se apoyó por lo menos en tres claras vertientes complementarias: por un lado, adquirió un tono eminentemente defensivo, imponiéndose como un escudo frente a la voracidad de la expansión anglosajona; por otro, pretendió la generación de una reconciliación nacional — en la que debían coincidir tanto revolucionarios como conservadores— basándose en la ya mencionada autoafirmación, y, finalmente, se estructuró a partir de una búsqueda de los contenidos de lo que se debía considerar como lo distintivo de lo mexicano. Algunos se plantearon la exploración de la diversidad, y otros se empeñaron en dar con la esencia de la mexicanidad. El poeta Ramón López Velarde interpretó ese proceso líricamente de la siguiente manera:

nuestro concepto de la Patria es hoy hacia adentro. Las rectificaciones de la experiencia, contrayendo a la justa medida la fama de nuestras glorias sobre españoles, yankees y franceses, y la celebridad de nuestro republicanismo, nos han revelado una Patria no histórica ni política, sino íntima.<sup>15</sup>

La “tradicción” y la “costumbre” se convirtieron en valores fundamentales al identificarlas como elementos distintivos de “el pueblo mexicano”. El contenido central de ese nacionalismo enarbolado por las élites políticas e intelectuales sería, pues, “el pueblo”. Mas no aquel que conformaban los sectores pertenecientes a las clases medias o los sectores que ahora ejercían el poder; mucho menos aquel que había sido el sujeto político predilecto del Porfiriato, a saber, los propietarios educados mayores de 21 años, sino aquel que dichos sectores encumbrados identificaban como pobre y masivo. El “pueblo mexicano” de los años veinte y treinta fue aquel que se reconocía como rural,

provinciano, marginado, miserable, analfabeta y, sobre todo, mayoritario. Eran los mexicanos habitantes de aquellos pueblos chicos a los que se refería Martín Luis Guzmán y cuyos suspiros y anhelos, según el cronista y folclorólogo Rubén M. Campos, se exhalaban por sus expresiones artísticas y sus paisajes. Para Campos había una valoración especial para quienes abrevaran del caudal popular al enaltecer la creación nacional. Decía barrocamente, al concluir su estudio sobre el folclore literario en México, publicado en 1928:

Rindo en estas líneas finales mi admiración tributaria a los escritores que no desdeñaron beber en el carquesio folklórico el hidromiel natal. Su renunciación a las altas formas artísticas está largamente compensada con la elevación del nivel intelectual que ella produjo en el reflujó de las aguas tranquilas [...] del bruñido poliédrico de la obsidiana popular que es tan noble como la tarea del lapidario diamantista.<sup>16</sup>

Para consolidar la nación había que contar de entrada con este pueblo, tratando de orientarlo hacia los procesos de modernización, pero también reconociéndole valores propios y ancestrales. Había, pues, que “conocer” a este nuevo sujeto y al mismo tiempo modelarlo en función de los intereses del estado posrevolucionario. Había que “orientar a las masas”; en otras palabras, había que “dirigir al pueblo”. En esto, tanto los revolucionarios como los conservadores no parecían distanciarse demasiado de las corrientes liberales del régimen porfiriano, ya que éstas invariablemente apelaron a la maleabilidad del llamado entonces “pueblo bajo” o la “plebe”.<sup>17</sup>

Dos claros ejemplos de este afán por dar a conocer al pueblo lo que es del pueblo, valorado y sancionado por una élite intelectual o dirigente, podrían ser, por un lado, la primera exposición de arte popular y artesanías mexicanas, organizada por el pintor Gerardo Murillo, el Dr. Atl, en 1921, y, por otro, el Método de dibujo; tradición resurgimiento y evolución del arte mexicano del artista plástico Adolfo Best Maugard, publicado en 1923. La exposición se llevó a cabo durante los festejos del Centenario de la Consumación de la Independencia entre agosto y septiembre del primer año de gobierno del general Obregón. En el catálogo de dicha muestra, el propio Dr. Atl comentaba que las artes autóctonas “constituyen invariablemente una de las más importantes

manifestaciones de la idiosincrasia de los pueblos”. Estudiándolas se podían valorar “con grande precisión ciertas cualidades de una raza”, entre las que destacaban su sentimiento artístico, su resistencia física, su espíritu de asimilación, “una admirable habilidad manual y una grande fantasía”. Estas virtudes contrastaban con “las manifestaciones políticas y sociales de este pueblo, tumultuosas, desordenadas y violentas”. El Dr. Atl reconocía así una doble dimensión en el pueblo mexicano: “un extraño quietismo que inmoviliza a los sensuales, a los pasionales, a los artistas durante la ejecución de una obra de arte, y el dinamismo animal que los empuja a la venganza y a la lucha”.<sup>18</sup> De esta manera, una especie de exaltación de la fortaleza del pueblo, de su innata condición de artista y de su músculo pasional, muy al estilo de las nociones de lo popolare o völkisch que caracterizarían al fascismo italiano y al nacionalsocialismo alemán unos años más tarde, ya se podía percibir en el discurso de quien, también avanzado el tiempo, mostraría una especial afición por el nazi-fascismo.<sup>19</sup>

En un sentido semejante, la obra de Best Maugard pretendía ejercer una especie de autoridad sancionadora de lo típicamente mexicano. Presentando una serie de “leyes universales” de dibujo y descomponiendo las “formas de la naturaleza” a siete líneas primarias, dicho pintor siguió uno de sus particulares postulados de simplificación en el que, de forma un tanto arrogante aunque tal vez con buenas intenciones, pretendía enseñarle al pueblo a hacer arte popular.<sup>20</sup> Había, pues, una pretensión muy clara de mostrarle al pueblo, por medio de la enseñanza artística y también del espectáculo público promovido por los gobiernos revolucionarios, cuáles eran los valores que debía atesorar y expresar a la hora de dar a conocer su autenticidad y su “verdadero ser”.

Al igual que durante el Porfiriato tardío, los regímenes posrevolucionarios mostrarían que el gran proyecto de la educación popular tenía un papel determinante en su propuesta política. Si bien los programas de alfabetización y enseñanza técnica adquirieron un lugar preponderante, no cabe duda de que un particular empeño se puso en el fomento de lo que el ministro de Educación José Vasconcelos llamó “los valores y quehaceres de tipo espiritual”. Éstos se referían fundamentalmente al estímulo de los sentidos, la sensibilidad y la moral; en otras palabras, al arte y la cultura. Vasconcelos insistiría de manera categórica en que:

es innegable que no hay un solo pueblo que haya dejado huella en la historia

presente, algo en la civilización, donde no se encuentre el gobierno ejerciendo una acción tenaz y decisiva con el fomento del arte en todas sus manifestaciones [...] El estado debe exigir del artista que trabaje [...] [en] una producción artística rica y elevada [que] traerá consigo la regeneración y la exaltación del espíritu nacional.<sup>21</sup>

Esta idea de lo espiritual como continente que serviría para construir una conciencia nacional fue parte sustancial del nacionalismo imperante en muchos países en aquel momento, y, al reivindicar el “alma del pueblo”, el nacionalismo utilizó las ideas de lo tradicional, de la conciencia de su especificidad o su espíritu nacional como nutriente de la legitimación de sus propias propuestas políticas.<sup>22</sup>

En esta revaloración de los bienes espirituales y culturales del pueblo, lo que quedaba claro era que “lo popular” era sancionado principalmente por los intelectuales y los artistas del momento que pretendían formar parte de las élites dirigentes del país. Ellas se lanzaron a “analizar, juzgar, comentar o psicoanalizar a ‘los otros’ [...] es decir: al pueblo, y especialmente sus modos de expresar entelequias tales como las sensaciones, las emociones y los sentimientos”.<sup>23</sup> Este reconocimiento, al seguir el camino que llevó finalmente a dar con el deber ser de tal o cual manifestación popular idiosincrática, contribuyó no sólo a la invención de tradiciones y esencias nacionales — fundamentales para apuntalar el discurso nacionalista—, sino también al establecimiento o a la consolidación de diversas organizaciones políticas de claro signo conservador. De manera muy semejante a como sucedió entre las izquierdas y los revolucionarios, tanto los intelectuales de clara raigambre derechista como los activistas ligados al clero y a las clases medias se adjudicaron el derecho de decidir cuál era ese deber ser que debía imponerse a las mayorías mexicanas.

## IV

Teniendo antecedentes importantes entre algunas organizaciones socialistas decimonónicas, en el anarcosindicalismo magonista y en experimentos como la Casa del Obrero Mundial durante los años revolucionarios, el Partido Comunista

Mexicano se constituyó en 1919. En un principio buscó acercarse a algunas organizaciones obreras así como de trabajadores del campo, y a pesar de propiciar ciertas alianzas tácticas con el régimen de los sonorenses, el comunismo mexicano no logró arraigarse del todo en el país y tampoco se convirtió en una fuerza política relevante. Su organización y sus acciones jamás fueron una amenaza para los gobiernos posrevolucionarios.<sup>24</sup>

Sin embargo, varias figuras importantes de aquellos años veinte mostraron abiertamente sus simpatías por el socialismo y los cambios que se vivían en la Unión Soviética. Felipe Carrillo Puerto en Yucatán; Francisco J. Múgica y Primo Tapia en Michoacán, y Adalberto Tejeda y Úrsulo Galván en Veracruz, así como Guadalupe Zuno en Jalisco y varios más destacaron entre dichos simpatizantes. Incluso el propio Partido Comunista Mexicano, queriendo insertarse en la mecánica electoral férreamente controlada por los sonorenses, postuló al propio general Plutarco Elías Calles como su candidato para ocupar la presidencia durante el periodo de 1924-1928.<sup>25</sup> Sin embargo, los desacuerdos entre comunistas y revolucionarios afloraban con frecuencia, y las posibles alianzas mostraban muchas más fisuras que compromisos tácticos. Aun así, el comunismo y el socialismo generaron una reacción particularmente violenta entre terratenientes y sectores medios o aristocráticos mexicanos. Siguiendo un patrón previsible en el que le achacaban todos los males de aquella época a los seguidores de la Tercera Internacional y sus simpatizantes, los conservadores identificaban al comunismo como una doctrina que atentaba claramente en contra de los intereses nacionales. El anticomunismo se convertiría no sólo en una de las banderas más importantes de los movimientos reaccionarios tanto católicos como laicos, sino que también se utilizaría como argumento primordial al anatemizar a los enemigos de la derecha en turno, ya fuesen integrantes del propio gobierno o de las organizaciones agraristas y obreras.

Tal vez una de las organizaciones que con mayor vehemencia utilizó el anticomunismo entre sus principales consignas fue el Partido Fascista Mexicano, que surgió en 1922 y que tuvo una corta pero muy escandalosa existencia.<sup>26</sup>

El 16 de noviembre de 1922, sólo un mes después de haberse realizado la marcha de los cincuenta mil camisas negras sobre Roma comandados por Benito Mussolini, se dio a conocer en la ciudad de México la noticia de que en Veracruz se había constituido un grupo de fascisti. La nota en el periódico Excelsior resultaba por demás entusiasta, y decía que en Jalapa se había conformado un partido “cuyos miembros, a semejanza de los fascisti de Italia, que encabezados

por Mussolini han alcanzado un definitivo triunfo contra los bolcheviques, se proponen luchar contra las teorías disolventes y antisociales que han tratado de impartir en nuestro país determinados elementos de las clases obreras”. El periódico saludaba el surgimiento de esta organización integrada por “elementos sanos que están muy lejos de considerar que las doctrinas exterminadoras que han convertido a Rusia en un país de sangre, de miseria y de exterminio, puedan salvar a las clases trabajadoras de México”.<sup>27</sup> Al día siguiente, el editorialista jalisciense Javier Pérez Verdía, de ese mismo periódico, continuó en tesitura semejante, congratulándose del surgimiento del fascismo en México, pues su existencia estaba completamente justificada “por la serie de atentados y depreciaciones que han cometido los elementos demagógicos y bolcheviques”, que, según él, ya se habían insertado en las esferas gubernamentales.<sup>28</sup>

No tardaron en aparecer otras notas que decían que la nueva organización fascista mexicana había causado entusiasmo en los estados de Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Colima y Jalisco.<sup>29</sup> Pero no fue sino hasta diciembre de aquel año cuando se dieron a conocer los nombres de quienes estaban directamente involucrados en la creación de esta organización política y cuáles eran sus principios fundamentales. En primer término se nombró al ingeniero Gustavo Sáenz de Sicilia como jefe provisional del fascismo mexicano. También entre sus organizadores iniciales estuvieron el propio Benito Javier Pérez Verdía, el comerciante Alfredo B. Cuéllar, el ingeniero Jesús Rabasa y el industrial Alfredo de la Cuadra.<sup>30</sup> Todos ellos pertenecían a una clase media urbana que al parecer se sentía amenazada por las medidas que el gobierno posrevolucionario estaba implementando en materia agraria y entre organizaciones obreras.

Tanto Sáenz de Sicilia como Cuéllar estuvieron vinculados a la vieja aristocracia terrateniente por medio de Carlos Rincón Gallardo Romero de Terreros, quien todavía en los años veinte y treinta se hacía llamar “Marqués de Guadalupe”, y que había sido funcionario porfiriano y huertista, además de propietario de grandes extensiones en los estados de Zacatecas, Jalisco, Aguascalientes, Puebla, Hidalgo y de México. Cuéllar había fundado junto con Rincón Gallardo la primera Asociación Nacional de Charros en 1921, y eventualmente sería un gran promotor de esta imagen nacionalista y conservadora del México rural.<sup>31</sup> Sáenz de Sicilia era gerente de la Compañía Nacional Productora de Películas y había realizado un par de cintas a principios de los años veinte de clara “filiación racista”. Formaba parte de lo que se llegó a considerar “el triunvirato precursor del cine mexicano”, integrado por él mismo, el español Germán Camus y el cineasta mexicano Miguel Contreras Torres.<sup>32</sup> En 1929 incursionaría junto con

Carlos Rincón Gallardo en la incipiente industria cinematográfica nacional con la película La boda de Rosario, que sería uno de los principales antecedentes de las comedias rancheras y el cine de charros que tanto caracterizaron a la producción nacional durante los años venideros.<sup>33</sup>

Así, por lo menos dos de los fundadores del Partido Fascista Mexicano contribuirían de manera fehaciente a la construcción y la difusión de ese México rural estereotípico, plagado de terratenientes buenos, mayoresales amables, chinas guapas y charros fanfarrones y mujeriegos; esa “arcadia bucólica” que fue la hacienda mexicana en la que se cantaba y bailaba, se asistía a las fiestas y muy ocasionalmente se trabajaba la tierra.<sup>34</sup>

En cuanto a los principios fundamentales de aquel Partido Fascista Mexicano estaba “su resolución de emprender una ruda batida contra los émulos de Lenine”. Y, siguiendo con un discurso claramente emparentado con las intenciones nacionalistas de salvar y redimir a la patria y a su pueblo, decía textualmente en una nota especialmente enviada al periódico Excelsior:

La situación socialista por la que atravesamos ya pesa como plomo sobre el actual momento y oscurece el provenir. La sociedad alarmada en nombre de sus derechos, la propiedad en nombre de sus intereses lesionados, y la patria en nombre de su autoridad materna y santa, llaman a todo buen mexicano para agruparlo, para excitarlo, pedirle y ordenarle que salve a la sociedad, que salve a la República y que salve a la Patria.<sup>35</sup>

En otros periódicos un tanto más conservadores y radicales como el Omega, las simpatías que despertaba el fascismo evidenciaban desde luego su carácter no sólo anticomunista sino además contrarrevolucionario. Sin ocultar su añoranza por el llamado “orden y progreso” porfiriano, otro simpatizante del fascismo, el escritor neoleonés y connotado exfuncionario huertista Nemesio García Naranjo, desde su columna en aquel periódico le aconsejaba al naciente Partido Fascista Mexicano que

evitando choques y haciendo obra de prudencia, de patriotismo y de armonía

para todos los intereses, tal vez después de once años trágicos, la intervención de los más aptos y de los moralmente más capacitados, más ilustrados y más sanos, salve a la Patria para que vuelva a ser nuestro México, el que antes brilló como uno de los países más adelantados y cultos entre los pueblos hispanoamericanos.<sup>36</sup>

Ya se percibía, en dichos argumentos, cómo los hombres más diestros y calificados, los superhombres, los *Übermenschen*, debían ser, según este simpatizante del fascismo, quienes encabezaran a la sociedad en su marcha por la salvación. Muy en el tono de los gritos reivindicativos y manipuladores del slogan político, con gran entusiasmo el mismo periodista lanzaba la consigna: “Que la voz del amor y la justicia sea escuchada por los llamados a constituir las falanges entusiastas de la Patria en reconstrucción”.<sup>37</sup>

Además de su declarado anticomunismo y su nacionalismo patriotero, el fascismo mexicano se pronunció muy vagamente y de manera general sobre diversos temas como el trabajo, diciendo “nos oponemos a la tiranía del capital sobre el trabajo, como del trabajo sobre el capital”. Aunque se reconocía la oposición entre el capital y el trabajo, no se especificaba qué era lo que se consideraba como tiranía. De igual manera, entre ambigua y demagógica, aquel fascismo mexicano se manifestó en favor del sufragio efectivo, de los derechos políticos, de las garantías a los terratenientes y a los pequeños propietarios; abogó igualmente por la moralidad administrativa, la libertad de prensa y de cultos, y por la eficacia de la educación pública.<sup>38</sup>

Según sus propios panegiristas, el Partido Fascista Mexicano llegó a reunir hasta 100 000 integrantes hacia principios de 1923, y prometía tener un millón en los próximos seis meses.<sup>39</sup> Su dirigente, Gustavo Sáenz de Sicilia, les aseguraba a los reporteros que en abril de aquel año lograría reclutar por lo menos a 150 000 individuos más para el fascismo nacional, y que su cercanía con diversos elementos católicos le significaría un apoyo de cinco millones de pesos para alistarse y participar en las elecciones de 1924.<sup>40</sup> Desde luego, esas cifras eran exageradas, y muy probablemente nunca pasó de unos doscientos simpatizantes. Sus vínculos con el conservadurismo católico resultaban por demás evidentes y no tardó en ser tema de debates importantes en la Cámara de Diputados, justo cuando empezaba a generarse la división entre los propios sonorenses encabezados por Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, de un lado, y el

ministro Adolfo de la Huerta, por otro.<sup>41</sup>

La situación entre el clero católico y el gobierno posrevolucionario también se empezaba a complicar, dado que en enero de aquel año el régimen del general Obregón había expulsado del país al delegado apostólico, monseñor Ernesto Philippi, por haber violado el artículo 24 constitucional al poner la primera piedra del monumento a Cristo Rey en el Cerro del Cubilete en el estado de Guanajuato, y no acatar la prohibición del culto externo.<sup>42</sup>

Las actividades del Partido Fascista Mexicano y su presencia en la prensa nacional se fueron desvaneciendo hacia mediados de 1923. Sin embargo todavía mantuvo cierta relevancia, sobre todo, porque su surgimiento y su propaganda habían tenido algún eco en la opinión pública estadounidense, y ésta parecía estar bastante pendiente de lo que sucedía en México durante los meses de mayo y junio de aquel año en que se iniciaron las sesiones bilaterales que darían lugar a los Tratados de Bucareli y que a su vez restablecerían las relaciones diplomáticas y comerciales entre Estados Unidos y México.<sup>43</sup> Si bien es posible especular que la presencia del fascismo en territorio mexicano en esos precisos momentos pudo haber servido a los intereses estadounidenses para presionar al gobierno de Obregón y así obtener algunas prerrogativas al aplicar los preceptos de la Constitución de 1917, la cual se consideraba como “socialista” en algunos frentes de opinión pública del vecino del norte, lo más probable es que el Partido Fascista Mexicano poco tuviese que ver con dicha controversia. En ella sería mucho más importante la alianza entre el clero mexicano y el estadounidense, misma que serviría como acicate para presionar primero al régimen obregonista y después de 1924 al callista. Además, justo es decir que ya para entonces el propio Partido Fascista se encontraba en desbandada. Alfredo B. Cuéllar, por ejemplo, renunció al mismo por considerar que se estaba llenando de “antiguos enemigos —los conservadores— vestidos de liberales”.<sup>44</sup>

El analista contemporáneo estadounidense Carleton Beals le restó importancia a la existencia del Partido Fascista Mexicano y lo calificó de “diletante y carente de respaldo”, incluso dentro de los propios movimientos de resistencia conservadora mexicana. Según él, aquel partido estaba integrado principalmente por “fifíes” y “holgazanes decadentes”.<sup>45</sup> Sin articularse ni estructurarse medianamente, el fascismo mexicano se diluyó sin mayor pena ni gloria. Su escandaloso anticomunismo y su altiva fanfarronería se esfumarían prácticamente sin dejar mayor huella en la historia de los fascismos latinoamericanos. Ni siquiera parece haberse registrado oficialmente, y por lo

tanto tampoco pudo participar de manera cabal en el proceso electoral de 1924. Terminó adhiriéndose a la candidatura del general Plutarco Elías Calles, y el ingeniero Sáenz de Sicilia se retiró momentáneamente del quehacer político para dedicarse al cine. Volvería por sus fueros en la siguiente década creando la Confederación de la Clase Media, que por cierto también tendría una existencia escandalosa, pero particularmente efímera.<sup>46</sup>

## V

Confluyendo con el propio surgimiento del Partido Fascista Mexicano se dio la noticia de la organización del Partido Reconstructor Nacional (PNR) y de la Liga Política Nacional. Este último se vinculaba claramente con líderes de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana (ACJM) y la Liga Nacional de Defensa de la Libertad Religiosa (LNDLR), como René Capistrán Garza o Manuel Palomar y Vizcarra, que después tendrían una activa militancia en la guerra cristera. La LNDLR se fundó en marzo de 1925 y trató de mantenerse un tanto al margen de la jerarquía católica, desde luego sin oponerse a ella, aunque insistiendo en su “carácter cívico”. En ella tuvieron cabida diversas organizaciones, como la Unión de Damas Católicas, los Caballeros de Colón y la Confederación Nacional Católica Mexicana. Su protagonismo a partir de 1926, una vez decretada la Ley Calles, que radicalizó las medidas jacobinas revolucionarias, sería incuestionable.<sup>47</sup>

Sin embargo, el PRN, más que una organización ligada a la Iglesia católica, inició su errática presencia en el ambiente político mexicano como un movimiento reaccionario que pretendía distanciarse del régimen de los sonorenses. Se propuso restaurar el tejido de la red de militares y civiles desarticulada por el gobierno de Obregón y Calles bajo una sombrilla notablemente conservadora y en gran medida inocente. Según uno de sus iniciales promotores, el licenciado Manuel Romero Palafox, se contaba con “una fuerte suma de dinero” para que con un “alto sentido nacionalista” se trabajara “por la reconstrucción del país y que ya nadie vuelva a mezclarse en agitaciones de carácter político, tan perjudiciales para la patria”. Detrás de esta propuesta se encontraba la intención de neutralizar la labor de algunos generales, como Pablo González, Manuel Peláez y Pedro Villaseñor, que desde territorio estadounidense tenían el fin de armar un frente opositor a los sonorenses. Unos meses antes estos mismos generales habían hecho un llamado para crear el Partido de

Reconstrucción Nacional, y ahora Romero Palafox parecía hacer las veces de mensajero del régimen para incentivar su regreso al país tratando de pacificarlos e incluso ofrecerles algunas jugosas dádivas. El argumento más importante que se esgrimía para lograr la unión entre aquellos militares y algunos civiles conservadores era un nacionalismo por demás anodino. Su promotor afirmaba que este nuevo partido estaría formado por

un grupo de hombres serios y de buenas intenciones, prominentes y humildes, pero ninguno de ellos político, [cuya misión sería] unir en un fuerte abrazo a todos los mexicanos, haciéndolos olvidar viejas rencillas y convenciéndolos de la necesidad imperiosa de que, todos estrechamente ligados, trabajen por el mejoramiento y progreso de nuestro país, estancado a causa de las convulsiones habidas en los últimos doce años.<sup>48</sup>

Sin embargo, lejos se estaba de poder unir a los mexicanos, mucho menos si la propia élite política mostraba sus eminentes fisuras y una fuerte oposición contrarrevolucionaria se veía venir, azuzada por el clero y los terratenientes afectados por las reformas agrarias. Estos últimos ya se habían organizado en un Sindicato Nacional de Agricultores, que para algunos analistas era una especie de extensión del Partido Fascista Mexicano y cuyos simpatizantes rurales eran precisamente representantes de los intereses de los hacendados afectados por el gobierno obregonista.<sup>49</sup> Este sindicato tenía sus antecedentes en la Cámara Agrícola Nacional Jalisciense (CANJ), que se había constituido en Guadalajara desde finales del siglo XIX como una asociación de terratenientes y latifundistas. Sus miembros habían resistido la presencia de los revolucionarios en su estado natal y se oponían a cualquier medida estatal que implicara la intervención del gobierno en repartos, fragmentación o venta de sus terrenos. En 1919 la CANJ había apuntalado la creación de la Confederación de Cámaras Agrícolas que solicitó al gobierno de Venustiano Carranza su protección incondicional, así como “la abolición de las leyes que consideraban restrictivas para el libre comercio”. Esta confederación no reconocía la validez del artículo 27 de la Constitución de 1917, al que tildaron de antieconómico y contraproducente. Sólo se aceptaba que el gobierno fomentara la agricultura, sin mayor derecho sobre el futuro de las tierras ociosas y menos fomentando disposiciones relativas a expropiar, dotar o repartir. Los integrantes de esta organización desde luego se

opusieron al “agrarismo funesto que amenaza a nuestro gremio”, y ya durante el periodo obregonista se dispusieron a “salvar a los agricultores de todas las dificultades originadas por una inmoderada tributación, por la carencia de crédito, por falta de transportes y, especialmente, por los ataques a la propiedad privada”.<sup>50</sup> Como representante oficial de los terratenientes del Occidente del país, aquella Cámara no ocultaba su alianza con el clero católico, y ante el rumor de las tendencias “bolcheviques” que supuestamente empezaban a caracterizar al gobierno de los sonorenses, estableció que sus principios serían los de “Justicia y Caridad”, mismos que, según sus ideas, salvarían tanto a los trabajadores del campo como a los de las ciudades de “caer en las manos de los agitadores del pueblo que enarbolan la bandera socialista”.<sup>51</sup>

Aun teniendo estos antecedentes, varios miembros de la CANJ decidieron utilizar la retórica del momento y tocó también a Jalisco ser la sede del primer Sindicato de Agricultores en 1920. Teniendo un programa bastante simple, este sindicato se adjudicaba la defensa de “los legítimos derechos de los propietarios rústicos cuando sean perjudicados injustamente por leyes o autoridades”, proponía la “moralización e instrucción del obrero campesino” y se alineaba en favor de “fomentar el mejoramiento de la agricultura a través de obras de irrigación y de uso de maquinaria”.<sup>52</sup>

El ejemplo del Sindicato de Agricultores de Jalisco cundió en varios estados de la República, y no tardaron en surgir otras agrupaciones de terratenientes afines que darían lugar al Sindicato Nacional de Agricultores, el cual hizo las veces de unificador de terratenientes y hacendados frente a una reforma agraria que, aunque incipiente todavía, formaba parte imprescindible de la retórica agrarista del gobierno posrevolucionario. Así, con el claro propósito de “defender el derecho de propiedad que debe permanecer incólume”, y dado que sus haciendas frecuentemente se veían “expuestas a las leyes injustas y a la acción disolvente y perturbadora de los demagogos”, los miembros del Sindicato Nacional de Agricultores decidieron también organizarse para incidir en las lides políticas nacionales.<sup>53</sup> Y lo hicieron de manera cautelosa, ligándose con una oposición que también se caracterizaría por su tibieza y su condición acomodaticia.

Tratando de deslindarse de las desavenencias que produjeron las violentas rupturas entre el secretario de Hacienda, Adolfo de la Huerta, y los generales Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, mismas que darían pie a la rebelión delahuertista a finales de 1923 y principios de 1924, el Sindicato Nacional de Agricultores esperó a que terminara dicho conflicto para participar en el proceso

electoral de 1924. Formado principalmente por terratenientes del Occidente del país, dicho Sindicato nombró como su candidato a la presidencia al general Ángel Flores. Oriundo del estado de Sinaloa, Flores llegó a ser gobernador de su estado natal al principio de la década de 1920. Como tal, se opuso al reparto indiscriminado de tierras y a la sindicalización forzada de los trabajadores. Con ello logró ganarse las simpatías de los patrones y terratenientes, así como de algunos sectores medios.

Mientras tanto el Sindicato Nacional de Agricultores organizó una convención, a la cual acudieron 180 representantes de diversos sindicatos, haciendas, comercios e industrias. Su presidente, el ingeniero Manuel Marroquín y Rivera, quien era un conocido miembro de las antiguas élites porfiristas, indicó durante aquella convención que los miembros del Sindicato debían organizar un comité en cada localidad y estado en donde tuvieran simpatizantes, así como buscar alianzas con otras organizaciones semejantes, tratando de deslindarse de los representantes del gobierno posrevolucionario.<sup>54</sup> Esto último sucedió al poco tiempo, cuando la Liga Política Nacional comandada por Guillermo Pous, un reconocido militante conservador, decidió sumarse a los trabajos organizativos del Sindicato.<sup>55</sup> Si bien los Agricultores todavía no se vinculaban abiertamente con la oposición clerical, eran notorias las simpatías existentes entre católicos alebrestados y los terratenientes, las clases medias y los pequeños industriales que formaban parte del Sindicato Nacional de Agricultores. En diversas ocasiones, dicha organización fue criticada por el propio gobierno obregonista como una agrupación retardataria que sólo quería “echar abajo las conquistas revolucionarias para llevar al fracaso la reforma agraria y retardar la promulgación de la ley del trabajo”.<sup>56</sup>

Aún así, una vez liquidada la rebelión delahuertista e iniciadas las labores para participar en las elecciones presidenciales de julio de 1924, el Sindicato Nacional de Agricultores decidió finalmente elegir como su candidato al general Flores. El ajuste político correspondiente a aquellos tiempos durante los cuales el régimen revolucionario se volvía cada vez más intolerante con la oposición, la falta de cohesión del propio Sindicato y la magra actividad propagandista que llevó a cabo durante aquel proceso redundaron en su fracaso. Aunque también tales condiciones y características permiten suponer que aquella campaña opositora fue más bien una especie de “comparsa” que sirvió para darle cierta legitimidad a las elecciones, las cuales, desde un inicio, ya le daban el triunfo al general Plutarco Elías Calles.<sup>57</sup> Al poco tiempo de concluir dicho proceso electoral, el Sindicato Nacional de Agricultores dejó de ser una fuerza

representativa de los hacendados y terratenientes que, con la escalada violenta de la Guerra Cristera que ya se veía venir, decidieron salvar sus intereses particulares, ya fuera aliándose con el gobierno o apoyando clandestinamente a los católicos rebeldes.

## VI

Una vez que el general Plutarco Elías Calles asumió el poder, la identificación de los “enemigos de la revolución”, así como de la mayoría de aquellos grupos que cabían bajo el adjetivo de “reaccionarios” se hizo de manera mucho más abierta y sin mayores consideraciones. Al iniciarse la presidencia callista, la Revolución se volcó hacia adelante y justificó prácticamente toda actividad gubernamental en función de su propia condición revolucionaria, exacerbando el tono anticlerical y tildando de retardatario a cualquier afán opositor.<sup>58</sup> José Vasconcelos, quien ya se había distanciado del grupo en el poder, se refirió a aquella época de la siguiente manera: “Contra todo lo tradicional se libraba guerra secreta, implacable. Y para poder desarrollar tal programa sin estorbos, se recrudeció el terror en todas sus formas”. En materia educativa el callismo fue, según aquel exministro de Educación, “una imitación del bolchevismo dirigida más bien a la propaganda política que al estudio de las cuestiones sociales”.<sup>59</sup>

Curiosamente en ese campo, el de la educación, una organización que terminó aliándose también estrechamente con el clero católico, pero que en sus inicios pareció inclinarse en favor de cierta defensa del laicismo antisocialista y antirrevolucionario de los sectores medios y pudientes mexicanos, fue la Asociación Nacional de Padres de Familia. Establecida inicialmente como un frente en contra de los postulados del artículo 3º de la Constitución de 1917, esta unión no escondía su inspiración en la doctrina social de la Iglesia católica, proclamada sobre todo en la encíclica *Rerum Novarum* (1891) de León XIII. Tampoco negó que en sus primeros momentos sus principales instigadores fueran miembros del Partido Católico Nacional o de la poderosa organización de los Caballeros de Colón, la cual, si bien era una especie de corporación de seculares, se había constituido como una asociación civil que “reconocía obediencia absoluta a las autoridades eclesiásticas”.<sup>60</sup>

Uno de sus documentos fundadores fue uno titulado “Protesta de la sociedad mexicana contra la violación de la libertad de enseñanza”, que circuló desde

diciembre de 1916 y que no tuvo mayor eco entre los propios constituyentes, quienes, por cierto, manifestaban su convencido jacobinismo a la menor provocación.<sup>61</sup>

Aquella protesta la hizo “un grupo de padres de familia” que querían defender sus derechos ante el peligro del tono que predominaba en el Constituyente y que “atentaba contra la libertad religiosa y de educación”. El jacobinismo, según ellos, impedía a los padres enseñarles a los infantes valores como la libertad de conciencia, la preocupación por sus semejantes y diversos códigos morales como la bondad, la caridad y la justicia. Alegaban que, en caso de instrumentarse el anticlericalismo como una ideología de Estado, generaría mucho más odio y confrontación, corrompiendo el alma de la juventud mexicana. Si bien los valores cristianos y las “buenas costumbres” eran, para los miembros de aquella asociación inicial, la base del orden público y el bienestar, tanto de la familia como de la sociedad, la proscripción misma de la libertad religiosa en la enseñanza se convertía en un acto de violación a la neutralidad escolar, misma que pretendían defender los propios constituyentes. Cuando la asociación civil de aquellos inconformes con los postulados del artículo 3º de la Constitución mexicana adquirió un carácter formal el 25 de abril de 1917, se decidió llamarla Asociación Nacional de Padres de Familia (ANPF). En sus estatutos se cuidó de no evidenciar su perfil confesional, y se autodefinió como una organización de “ciudadanos celosos de sus derechos y obligaciones, preocupados por la educación”, que quería impedir las “intromisiones ilegales en las escuelas privadas y el sectarismo en los colegios públicos, además de vigilar la integridad de la educación y el correcto desempeño de los docentes”. Como la propia Constitución prohibía las agrupaciones con denominaciones religiosas, aquella Asociación se mantuvo supuestamente al margen del clero y fue integrada sólo por “jefes de familia de reconocida moralidad”.<sup>62</sup>

Según uno de sus apologistas, entre 1917 y 1925 la ANPF se abstuvo de fomentar creencias religiosas y de combatir el laicismo. En las escuelas particulares, según el mismo comentarista conservador, no se trataron de imponer los preceptos del artículo 3º constitucional, por lo que la “enseñanza se desarrolló con absoluta libertad”.<sup>63</sup> Sin embargo, es muy probable que la misma asociación no fuera ajena a las campañas y cruzadas que, en favor del catolicismo y la defensa de la fe, se instrumentaron a raíz de las primeras confrontaciones entre la Iglesia católica y el gobierno de Obregón, sobre todo después de la expulsión del delegado apostólico en enero de 1923.

De cualquier manera, promovidos por el gobierno callista, los anticlericalismos y las llamadas “campañas de desfanatización” ya se estaban instrumentando en varias regiones del país. En Yucatán y en Tabasco, por ejemplo, los gobernadores Felipe Carrillo Puerto y Tomás Garrido Canabal habían implementado la escuela racionalista, y su discurso insistía en que ésa era una de las acciones medulares para lograr la transformación social y beneficiar al campesinado y al proletariado mexicanos. El presidente Plutarco Elías Calles parecía estar dispuesto a radicalizar las medidas de control de la educación como parte de su política educativa y de confrontación con la alta jerarquía católica, así como contra diversas organizaciones de resistencia conservadora tanto rurales como urbanas. En su discurso abundaron las referencias al socialismo, por lo que muchos reaccionarios pusieron el grito en el cielo. La Guerra Cristera ya se estaba anunciando. Además de los incipientes levantamientos en el Centro y el Occidente del país, el año de 1926 fue relevante para aquellos grupos que conformarían un frente católico de resistencia: la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, la Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa, las Congregaciones Marianas, los Caballeros de Colón y la Unión de Damas Católicas Mexicanas.

Pero volviendo a la Asociación Nacional de Padres de Familia, ésta convocó a una asamblea general en la ciudad de México el 19 y el 20 de junio de aquel año de 1926. En dicha asamblea decidió cambiar su nombre por el de Unión Nacional de Padres de Familia, esgrimir el lema “Por mi deber y por mi derecho”, y, a partir de entonces, optar por una serie de acciones mucho más militantes, decididas y procatólicas. Un argumento para el cambio de nombre fue que el propio gobierno callista había creado una organización que actuaba bajo la misma denominación y que, a través de la Secretaría de Educación Pública, agrupaba a los padres de familia de las escuelas oficiales. La idea de convertirse en “unión” parecía reivindicar su carácter cívico y esconder su vinculación con el clero católico. Lo mismo hicieron al replantear sus cuatro objetivos, en los cuales no aparecía por ningún lado la religión cristiana. Se propusieron entonces:

1. Proteger y hacer respetar a la familia;
2. Defender los derechos inalienables de los padres de familia sobre la educación de sus hijos;
3. Pugnar por que el Estado garantice la libertad de enseñanza, y
4. Denunciar cualquier intervención partidista o sectaria en las escuelas públicas o privadas.<sup>64</sup>

Sin embargo, era evidente que detrás de la renombrada Unión Nacional de Padres de Familia estaban la Iglesia católica y sus organizaciones más aguerridas. Por ejemplo, Manuel de la Peza, miembro prominente de la Unión, había sido militante del Partido Católico Nacional y era Caballero de Colón y dirigente de la Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa. El presidente de la Unión en 1926, Luis G. Bustos, también pertenecía a las Caballeros y a la Liga, lo mismo que Edelmiro Traslosheros, quien presidiría la Unión a partir de 1929. De la Peza era también asesor de René Capistrán Garza, el líder de la LNDLR, y la representó frente a la Santa Sede cuando buscó el respaldo del Papa y su intervención en el conflicto cristero.<sup>65</sup>

Al igual que los fascistas mexicanos y los terratenientes del Sindicato Nacional de Agricultores, la Unión de Padres de Familia apeló al discurso anticomunista, nacionalista y tradicionalista como parte central de sus llamados a la resistencia y a la oposición al régimen revolucionario. La intervención del Estado en la educación y el fomento de la enseñanza racionalista, según ellos, debía ser motivo de preocupación de toda la población, porque por ese medio el gobierno buscaba

depravar a los niños y jóvenes, fomentando la unión libre y destruyendo a la familia, convirtiendo a la escuela en el instrumento del Partido Comunista para desestabilizar las instituciones morales y envilecer a las personas, en consecución de fines abominables y antipatrióticos.<sup>66</sup>

Sin embargo, mientras que el Partido Fascista Mexicano y el Sindicato Nacional de Agricultores decidieron actuar abiertamente como agrupaciones políticas conservadoras, incluso con pretensiones de convertirse en grupos de presión e interlocución que defendían los intereses de sus integrantes, la Unión de Padres de Familia mantuvo oculta su vinculación con el clero católico en un principio y se presentó como una asociación que quería impedir la aplicación de los postulados revolucionarios de la nueva Constitución mexicana. Nunca se reconoció como partidaria, aunque su condición de reaccionaria, tradicionalista, anticomunista, patriotería y clerical no fue un secreto para nadie. Esta Unión

sobrevivió los avatares posrevolucionarios y fue especialmente activa en la década de los años treinta, cuando la tomó contra la “educación socialista” del gobierno del general Lázaro Cárdenas. Nuevamente recuperó sus bríos a finales de los años cincuenta y principios de los sesenta al organizarse en contra de los libros de texto gratuitos impresos y distribuidos por la Secretaría de Educación Pública, durante el sexenio de Adolfo López Mateos.<sup>67</sup>

## EPÍLOGO

La sucesión presidencial de 1928, que debía inaugurar una especie de alternancia de caudillos al volver a colocar al general Obregón en la primera magistratura del país, concluyó trágicamente. El presidente electo y héroe invicto de la Revolución fue asesinado en el Parque de la Bombilla el 17 de julio de aquel año. La Guerra Cristera seguía en estado candente en el Occidente del país, y la muerte de Obregón exacerbó las tensiones entre la Iglesia y el gobierno revolucionario. Sin embargo, también generó la conciencia de que era necesario hacer lo posible para llegar a un arreglo. Desde el inicio de los años veinte, que coincidió con la llegada de los sonorenses al poder, la vida de la política partidaria nacional había sido particularmente errática, pero aun así el modelo de Obregón-Calles parecía haberse convalidado. Éste consistía en identificar esquemáticamente sólo dos grandes “partidos” en México: el de los “revolucionarios” o “liberales”, por un lado, y el de los “reaccionarios”, por el otro.<sup>68</sup> Si bien hubo una gran cantidad de partidos regionales y nacionales, entre los que habría que destacar al Partido Liberal Constitucionalista, al Partido Nacional Cooperatista, al Partido Socialista del Sureste, al Partido Laborista, al Partido Nacional Agrarista, a la Alianza de Partidos Socialistas y al propio Partido Comunista Mexicano,<sup>69</sup> el aparato estatal posrevolucionario consistía básicamente en la estructura de poder emanada de la propia presidencia y sus alianzas con los líderes “revolucionarios”, mediadores entre el poder central y las masas. Integrado así, el poder estatal combatió a sus enemigos justificando su legitimidad por ser ellos, los sonorenses, los herederos de “la Revolución”. Sin preocuparse demasiado por los procesos electorales, su autoridad descansaba en el control del Ejército y en ciertas concesiones otorgadas a organizaciones campesinas y obreras, así como a industriales y oficiales ligados a grandes propietarios de tierras leales al gobierno. Dedicado a combatir a sus opositores, tanto de izquierda como de derecha, aquel aparato entró en crisis en 1928 con el asesinato de Obregón, y a la frágil unidad revolucionaria hubo que anteponerle

la organización de un gran partido de la Revolución. Como diría uno de sus principales estudiosos: “Luego de su experiencia como presidente de la República, Calles tenía la firme convicción de que un aparato estatal fuerte no podía constituirse sin un partido que agrupase a todos los ‘revolucionarios’, militares y civiles, firmemente disciplinados a la autoridad central”.<sup>70</sup>

Y, en efecto, influido en parte por modelos tan disímiles como el del régimen soviético y el del gobierno fascista italiano, y a la vez por un control de las masas que se distanciara del comunismo, al estilo del APRA peruano, el Partido Nacional Revolucionario (PNR), cuya organización se echó a andar a finales de 1928, debía enfrentar la tarea de resolver los problemas políticos y electorales con nuevos métodos y procedimientos, aglutinando las fuerzas organizadas y convirtiéndolas en el principal respaldo del gobierno constituido. La hechura de aquel PNR marcaría un hito en la historia contemporánea mexicana. Convertido en PRM en 1938 y luego en PRI en 1946, sería el partido más longevo de México, y el que más tiempo estuvo en el poder en la América Latina del siglo XX. La novedad y el afán revolucionario de aquel PNR debían tender a romper con las nostalgias del pasado y las reivindicaciones de la tradición. Si bien simpatizaba con ciertos postulados socialistas, veía al comunismo como una ideología ajena a la idiosincrasia nacional, y por lo tanto también se asumió inicialmente como anticomunista. Y lo que sin duda explotó al máximo fue la enorme cauda nacionalista que recogía como herencia de la Revolución y a la que recurrió como si fuera su propiedad particular, logrando arrebatársela a las derechas, a las que invariablemente acusó de extranjerizantes y vendepatrias. Pero la conformación, los principales postulados y el eventual desenvolvimiento del PNR durante los años siguientes es una historia ya conocida, que queda fuera de las pretensiones de este ensayo.

## **REFERENCIAS**

ALEGRÍA DE LA COLINA, Margarita

1995 Nuevas ideas: Viejas creencias, México, UAM-Azcapozalco.

BEALS, Carleton

1923 Mexico. An Interpretation, Nueva York, B.W. Huersbusch.

BEST MAUGARD, Adolfo

1923 Método de dibujo: tradición, resurgimiento y evolución del arte mexicano, México, Departamento Editorial de la Secretaría de Educación–Talleres Gráficos de la Nación.

CAMPOS, Rubén M.

1928 El folklore literario en México, México, Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública–Talleres Gráficos de la Nación.

CASADO NAVARRO, Arturo

1984 Gerardo Murillo. El Dr. Atl, México, UNAM.

CÓRDOVA, Arnaldo

1989 La Revolución y el Estado en México, México, Era.

DÁVALOS OROZCO, Federico

1996 Albores del cine mexicano, México, Clío.

DE LOS REYES, Aurelio

1987 Medio siglo de cine mexicano (1896-1947), México, Trillas.

DULLES, John W.F.

1977 Ayer en México. Una crónica de la Revolución (1919-1936), México, FCE.

ESCALANTE, Fernando

1992 Ciudadanos imaginarios, México, El Colegio de México.

FELL, Claude

1989 José Vasconcelos. Los años del águila (1920-1925): educación, cultura e iberoamericanismo en el México postrevolucionario, México, UNAM.

GAMBOA, Federico

1977 Diario (1892-1939), José Emilio PACHECO (sel., pról. y notas), México, Siglo XXI Editores.

GARCÍA RIERA, Emilio

1993 Historia documental del cine mexicano, vol. 1, México, Conaculta–Universidad de Guadalajara–Gobierno de Jalisco–Imcine.

GARRIDO, Luis Javier

1982 El partido de la revolución institucionalizada. (La formación del nuevo estado en México 1928-1945), México, Siglo XXI Editores.

GÓMEZ MORÍN, Manuel

1973 1915 y otros ensayos, México, Jus.

GONZÁLEZ RAMÍREZ, Manuel

1974 La revolución social de México, vol. III, México, FCE.

GUZMÁN, Martín Luis

1958 La querrela de México, A orillas del Hudson y otras páginas, México, Compañía General de Ediciones.

ILLADES, Carlos (coord.).

2017 Camaradas. Nueva historia del comunismo en México, México, Secretaría de Cultura–FCE.

JEIFETS, Víctor y Lazar

2017 “La alianza que terminó en ruptura: el PCM en la década de los años veinte”, en Carlos ILLADES (coord.), Camaradas. Nueva historia del comunismo en México.

JOSÉ, Georgette

1982 El relevo del caudillo, México, El Caballito–Universidad Iberoamericana.

1998 La campaña presidencial de 1923-1924 en México, México, INEHRM.

LAJOUS, Alejandra

1985 Los partidos políticos en México, México, Premiá Editora.

LOAEZA, Soledad

1988 Clases medias y política en México, México, El Colegio de México.

LÓPEZ VELARDE, Ramón

1921 “Novedad de la Patria”, El Maestro. Revista de Cultura Nacional, núm. 1.

MACGREGOR CAMPUZANO, Javier

1999 “‘Orden y Justicia’: el Partido Fascista Mexicano, 1922-1923”, Signos Históricos, vol. 1, t. 1, junio.

2016 Imaginar el futuro. Partidos nacionales y programas políticos en México, 1918-1928, México, UAM-Iztapalapa.

MEYER, Jean

1973-1974 La cristiada, 3 tomos, México, Siglo XXI Editores.

MEYER, Lorenzo

1976 “El primer tramo del camino”, Historia general de México, vol. 4, México, El Colegio de México.

MONTELLANO, Francisco

1994 C. B. Waite, Fotógrafo. Una mirada diversa sobre el México de principios del siglo XX, México, Grijalbo–Conaculta.

MORENO, Daniel

1970 Los partidos políticos del México contemporáneo, 1916-1982, México, Impresora Galve.

MURILLO, Gerardo (Dr. Atl)

1922 Las artes populares en México, vol. 1, México, Publicaciones de la Secretaría de Industria y Comercio–Editorial Cvltvra.

OLIVERA DE BONFIL, Alicia

1966 Aspectos del conflicto religioso de 1926 a 1929. Sus antecedentes y consecuencias, México, INAH.

PALACIOS, Guillermo

1973 “Calles y la idea oficial de la Revolución mexicana”, en Historia Mexicana, XII-3.

PÉREZ MÉNDEZ, Marco Aurelio

2015 “La Unión Nacional de Padres de Familia”, en Carmen COLLADO (coord.), Las derechas en el México contemporáneo, México, Instituto Mora.

PÉREZ MONTFORT, Ricardo

1992 Hispanismo y falange. Los sueños imperiales de la derecha española y México, México, FCE.

1993 Por la patria y por la raza. La derecha secular en el sexenio de Lázaro Cárdenas, México, UNAM.

2000 Avatares del nacionalismo cultural. Cinco ensayos, México, CIESAS–Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos.

2002 Estampas de nacionalismo popular mexicano, 2ª ed., México, CIESAS.

*Primer Congreso Nacional de Instrucción Pública. Informe y Resoluciones 1890 México, Imprenta Francisco Díaz de León.*

ROCKER, Rudolf

*ca. 1976 Nacionalismo y cultura, México, Alebrije–Reconstruir.*

RODRÍGUEZ GARCÍA, Rubén

1990 La Cámara Agrícola Nacional Jalisciense. Una sociedad de terratenientes en la Revolución mexicana, México, INEHRM.

SÁNCHEZ MEDAL, Ramón

1961 “Historia de la Unión Nacional de Padres de Familia”, Boletín de la Unión Nacional de Padres de Familia, vol. 9, junio-julio.

1964 En defensa del derecho de los padres de familia, México, Jus.

SCHÁVELZON, Daniel (comp.)

1988 La polémica del arte nacional en México, 1850-1910, México, FCE.

STRAUSS NEUMANN, Martha

1983 El reconocimiento de Álvaro Obregón: opinión americana y propaganda mexicana (1921-1923), México, UNAM.

TARACENA, Alfonso

1962 La verdadera Revolución mexicana. Octava etapa (1920-1923), México, Jus.

TENORIO TRILLO, Mauricio

1998 Artilugio de la nación moderna. México en las exposiciones universales, 1880-1930, México, FCE.

TORRES SEPTIÉN, Valentina

1997 La educación privada en México 1903-1976, México, El Colegio de México–Universidad Iberoamericana.

VASCONCELOS, José

1938 El desastre, tercera parte de Ulises Criollo, México, Botas. 1956 Breve historia de México, México, Compañía Editorial Continental.

VÁZQUEZ VALLE, Irene

1989 La cultura popular vista por las élites (antología de artículos publicados entre 1920 y 1952), México, UNAM.

VILLA LEVER, Lorenza

1988 Los libros de texto gratuitos. La disputa por la educación en México, México, Universidad de Guadalajara.

MEYER, 1976, pp. 111-155.

CÓRDOVA, 1989, p. 324.

DULLES, 1977, pp. 402-408.

Como bien señaló Carlos Monsiváis al prologar la obra de Rudolf Rocker: “las perversiones del nacionalismo y los ejercicios del autoritarismo limitan, niegan, aplastan el desenvolvimiento cultural”. ROCKER, ca. 1976, p. 3.

PÉREZ MONTFORT, 1992, pp. 15-19.

PÉREZ MONTFORT, 2000, p. 12.

GUZMÁN, 1958; VASCONCELOS, 1938; GÓMEZ MORÍN, 1973.

GUZMÁN, 1958, p. 173.

*Primer Congreso Nacional de Instrucción. Informe y Resoluciones, 1890.*<sup>10</sup>  
SCHÁVELZON, 1988; TENORIO TRILLO, 1998.

TENORIO TRILLO, 1998, pp. 122-133.

MONTELLANO, 1994, pp. 210 y 212.

GAMBOA, 1977, p. 149.

Esta hipótesis se explora en PÉREZ MONTFORT, 2002.

LÓPEZ VELARDE, 1921, p. 6.

CAMPOS, 1928, pp. 673-675.

ESCALANTE, 1992, pp. 279-286.

MURILLO, 1922, p. 16.

CASADO NAVARRO, 1984, pp. 140-148.

BEST MAUGARD, 1923.

FELL, 1989, pp. 390-396.

ALEGRÍA DE LA COLINA, 1995, pp. 47-62.

VÁZQUEZ VALLE, 1989, pp. 11-12.

ILLADES, 2017, p. 64.

JEIFETS, 2017, p. 75.

Este partido ha sido estudiado de manera puntual y rigurosa por el historiador Javier MacGregor Campuzano. Su artículo “ ‘Orden y Justicia’: el Partido Fascista Mexicano 1922-1923” fue pionero en el estudio de este tipo de organizaciones en México. La historiadora Georgette José también hizo referencia a dicho partido en sus libros *El relevo del caudillo* y *La campaña presidencial de 1923-1924 en México*. Ambos trabajos son de singular relevancia para entender la actividad política durante los años veinte en México. Véase MACGREGOR CAMPUZANO, 1999; JOSÉ, 1982; 1998.

Excelsior, 16.XI.1922.

Excelsior, 17.XI.1922.

Excelsior, 25.XI.1922.

MACGREGOR CAMPUZANO, 1999, p. 153; 2016, pp. 311-327.

PÉREZ MONTFORT, 2002, p. 138.

GARCÍA RIERA, 1993, pp. 25-26.

DÁVALOS OROZCO, 1996, pp. 50-51.

DE LOS REYES, 1987, pp. 160-162.

Excelsior, 4.XII.1922.

Omega, 28.XII.1922.

Omega, 4.I.1923, también citado en JOSÉ, 1982, p. 65.

MACGREGOR CAMPUZANO, 1999, p. 155.

MACGREGOR CAMPUZANO, 1999, p. 153.

BEALS, 1923, p. 142.

Un análisis puntual de los debates puede consultarse en MACGREGOR CAMPUZANO, 1999, pp. 159-163.

OLIVERA DE BONFIL, 1966 pp. 90-92; TARACENA, 1962, pp. 186-192.

JOSÉ, 1982, p. 52; 1998 p. 40; STRAUSS, 1983, pp. 97-109.

*El Universal*, 21.I.1923, citado en JOSÉ, 1982, p. 75.

BEALS, 1923, p. 142, citado también en MACGREGOR CAMPUZANO, 1999, p. 158.

PÉREZ MONTFORT, 1993, pp. 52-62.

Como se trata de una organización que ya se ha estudiado con cierto detalle y cuyas actividades corresponden más a un momento de clara confrontación entre la Iglesia católica y el régimen posrevolucionario, en este artículo no se profundizará mayormente en ella. Sin embargo, sobre sus miembros y acciones políticas pueden consultarse OLIVERA DE BONFIL, 1966, pp. 110-118; MEYER, 1973, pp. 50-92.

Excelsior, 20.XI.1922.

BEALS, 1923, p. 142.

RODRÍGUEZ GARCÍA, 1990, pp. 96-108.

RODRÍGUEZ GARCÍA, 1990, pp. 96-108.

Estatutos del Sindicato de Agricultores de Jalisco, 4.XI.1920, citado en RODRÍGUEZ GARCÍA, 1990, p. 105.

GONZÁLEZ RAMÍREZ, 1974, p. 104.

JOSÉ, 1998, p. 238.

MACGREGOR CAMPUZANO, 2016, p. 355.

*El Universal*, 17.VI.1923, también citado en JOSÉ, 1982, p. 78.

JOSÉ, 1998, p. 281.

PALACIOS, 1973, pp. 263-268.

VASCONCELOS, 1956, p. 487.

TORRES SEPTIÉN, 1997, pp. 94-95.

PÉREZ MÉNDEZ, 2015, p. 116.

SÁNCHEZ MEDAL, 1961.

SÁNCHEZ MEDAL, 1964, también citado en PÉREZ MÉNDEZ, 2015, p. 126.

PÉREZ MÉNDEZ, 2015, p. 119.

PÉREZ MÉNDEZ, 2015, p. 129.

*El Universal*, 30.V.1933, también citado en PÉREZ MÉNDEZ, 2015, p. 149.

LOAEZA, 1988; VILLA LEVER, 1988.

GARRIDO, 1982, p. 45.

MORENO, 1970; LAJOUS, 1985.

GARRIDO, 1982, p. 65.

LA LIBERACIÓN DE LA MUJER. CONFLICTOS, (DES)ENCUENTROS Y PARALELISMOS ENTRE MUJERES DERECHISTAS Y PROGRESISTAS EN AMÉRICA LATINA DURANTE LAS DÉCADAS DE 1920 Y 1930

\*  
—

SANDRA MCGEE DEUTSCH

*University of Texas at El Paso*

En 1928 la doctora argentina Ernestina Acevedo destacó positivamente el hecho de que las mujeres en todo el mundo estaban ganando derechos.<sup>1</sup> Ocho años después, el doctor Plutarco Badilla Urrutia, de nacionalidad chilena, hizo un llamado a la “liberación de la mujer”.<sup>2</sup> Cualquiera imaginaría que Acevedo y Badilla Urrutia estaban entre los progresistas que luchaban por los derechos femeninos, pero no es el caso. Acevedo formaba parte de la Liga Patriótica Argentina, que surgió a partir de la represión a los obreros durante la Semana Trágica de Buenos Aires de 1919, y Badilla Urrutia, por su parte, pertenecía al Movimiento Nacional-Socialista. Uno se pregunta por qué los miembros de la extrema derecha tomaron en consideración la idea de “liberar” a las mujeres, lo que parece oponerse a su deseo de preservar un sistema estratificado de clases y de género que enfatizaba más los deberes que los derechos.

Me concentraré aquí en la liberación de las mujeres, y para ello yuxtapongo declaraciones<sup>3</sup> y algunas prácticas de derechistas y progresistas en la década de 1920 y, especialmente, en la de 1930, con la intención de identificar conflictos, puntos de encuentro y desencuentro y paralelismos entre ambos sectores. Estos individuos y movimientos de derecha forman parte de los sectores más radicales de lo que Arno Mayer llamó “la tríada antirrevolucionaria” de conservadores, reaccionarios y contrarrevolucionarios: fueron, pues, los contrarrevolucionarios, y para la década de 1930 casi todos eran fascistas.<sup>4</sup> Del otro lado, entre los progresistas se incluye a feministas, pacifistas, socialistas, comunistas y simpatizantes.<sup>5</sup> La mayoría de las voces son de mujeres, pero también inserto las de algunos hombres de la extrema derecha.

El tema estaba entrelazado con otros asuntos, como la autonomía de las mujeres, la paz y el nacionalismo. Por ello, los debates acerca de la emancipación de las mujeres sirven de marco para comprender más ampliamente las izquierdas y las derechas del periodo de entreguerras. Así, este trabajo se inscribe en el debate sobre la relación entre derecha e izquierda. Como lo explica Enzo Traverso, “los extremos nunca llegan a tocarse, pero es posible que sus oposiciones procedan del mismo punto de origen”.<sup>6</sup> Según Traverso, izquierdistas y derechistas comparten el mismo contexto histórico, pero sus percepciones de los problemas surgidos de éste son radicalmente distintas. Verónica Valdivia opina que “entre izquierdas y derechas existe una interdependencia [...] pero no en una vinculación causa-efecto, es decir, como acción y reacción, sino como parte de un mismo proceso”.<sup>7</sup> La mayoría de los especialistas coincide en que no se puede entender a los derechistas de modo aislado y sin considerar a sus antagonistas, y viceversa.

A diferencia de la teoría de la “interdependencia” de Valdivia, muchos académicos han destacado que desde la Revolución francesa las derechas y las izquierdas se desarrollaron y definieron a sí mismas en mutuo contraste la una con la otra. Esto puede apreciarse en particular a mediados de la década de 1930, cuando detonó lo que Eric Hobsbawm llamó “guerra civil ideológica internacional”.<sup>8</sup> En esta coyuntura, muchos activistas políticos creyeron apasionadamente que debían escoger un bando, ya sea el fascismo o el antifascismo. Cada bando tomó una distancia radical respecto al otro.

Examinó ambas aproximaciones académicas en la relación entre derechas e izquierdas. ¿Acaso los progresistas y los contrarrevolucionarios surgieron del mismo proceso? ¿O quizá los contrarrevolucionarios crearon sus identidades y proyectos como una reacción a los progresistas? ¿Los derechistas radicales rechazaron completamente las nociones progresistas o adoptaron aspectos de ellas? Encuentro evidencia de todas estas posibilidades.

Este artículo se divide en cuatro secciones. En la primera introduciré el contexto político del surgimiento de movimientos de izquierda y extrema derecha en las décadas de 1920 y 1930. Detallaré luego las posturas de algunos miembros de estos grupos después de la primera Guerra Mundial. En la tercera sección examinaré las declaraciones de progresistas y contrarrevolucionarios en la década de 1930. Finalmente, recapitularé en torno a los conflictos, (des)encuentros y paralelismos entre los dos bandos, y volveré al tema de la relación entre ellos.

## **EL CONTEXTO DE LAS DÉCADAS DE 1920 Y 1930**

Comienzo mi análisis con dos movimientos latinoamericanos de los años posteriores a la primera Guerra Mundial. La Ação Social Nacionalista brasileña (ASN) y la Liga Patriótica Argentina (Liga) se opusieron a la movilización obrera tras la revolución bolchevique, cuya posible réplica se atribuyó a inmigrantes subversivos. Grupos pequeños de mujeres privilegiadas estuvieron activamente involucrados en la Liga y la ASN.<sup>9</sup> En aquel entonces, las socialistas, comunistas y feministas habían comenzado a organizarse en varios países latinoamericanos, pero existían muy pocos signos de resistencia femenina organizada contra grupos como la ASN o la Liga.<sup>10</sup>

Una combinación de fuerzas internas y externas desencadenó el crecimiento tanto de las izquierdas como de la derecha radical en la década de 1930. El ascenso de la Alemania nazi funcionó como catalizador para ambos bandos, más que la revolución bolchevique o el fascismo italiano.<sup>11</sup> La Guerra Civil española fermentó el terreno tanto para el antifascismo como para el fascismo, obteniendo apoyo y reclutas de ambos grupos en Latinoamérica y en otros lugares.<sup>12</sup> La desigualdad imperante y la crisis económica precipitaron el declive del liberalismo y cambios gubernamentales, algunos de los cuales abrieron nuevos espacios a la participación política. En la extrema derecha, las mujeres participaron en la Ação Integralista Brasileira (AIB, también llamados integralistas o “camisas verdes”/“blusas verdes”), el Movimiento Nacional Socialista chileno (MNS) y el nacionalismo argentino. Las profundas reformas del presidente mexicano Lázaro Cárdenas (1934-1940) y su simpatía por la República española incitaron la reacción de muchos en favor y en contra de estas medidas: un gran número de mujeres se congregó en el Frente Único Pro Derechos de la Mujer (FUPDM) y en la contrarrevolucionaria Unión Nacional Sinarquista (UNS). Chile atestiguó la aparición del Movimiento Pro-Emancipación de las Mujeres de Chile (MEMCh). Así, la década de 1930 fue clave para el desarrollo de fuerzas progresistas y derechistas.

## **DESPUÉS DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL**

Los hombres que dirigían la Liga Patriótica Argentina despreciaban el

feminismo. El presidente de la Liga, Manuel Carlés, denunció a las escuelas públicas por excluir la enseñanza de la religión. De acuerdo con él, ello estimulaba el feminismo, al que definió como la lucha contra los hombres para feminizarlos y para masculinizar a las mujeres. Éstas no necesitaban votar, ni tampoco estaban interesadas en ello, declaró (también criticaba el sufragio universal masculino). Otro liguista aconsejó a las mujeres mantenerse “libres” de la plaga feminista.<sup>13</sup> No obstante, algunas mujeres de la Liga parecían tener otras ideas.

En 1928 la doctora Ernestina Acevedo, perteneciente a la Liga, dio un discurso en el congreso anual de este grupo. Ahora que las mujeres ganaban derechos en todo el mundo, insistió, debían estar preparadas para utilizarlos de modo efectivo. Debían pensar por sí mismas, equilibrar la bondad con la razón, y promover amor y respeto mutuo por sobre el odio en la sociedad. Acevedo consideraba que debía enseñarse a las mujeres a exigir sus derechos “no como adversaria del hombre, sino como aliada en la obra que ha de mejorar la suerte de la especie”.<sup>14</sup>

Acevedo había contactado a la doctora Elvira Rawson, una destacada líder liberal feminista. En enero de 1919, en tiempos de la Semana Trágica, Rawson reclamó en un manifiesto “la dignificación social de la mujer y la conquista gradual de los derechos civiles, políticos y económicos que ejercita el hombre”. Se distanció de toda forma de “fanatismos” y credos políticos. Rawson exhortó a mujeres conscientes e informadas, de un estatus aparentemente privilegiado, a generar conciencia entre las mujeres de clases populares y “confortar el espíritu ansioso de paz, que actualmente ignora orientaciones”. Aceptaba la “sagrada misión de esposa y madre” de la mujer. Acevedo le escribió a Rawson para sumarse a su iniciativa, declarando que “es tiempo ya de que la mujer ocupe en la sociedad el papel que le corresponde, por cuanto la vida exclusivamente de hogar, no satisface las aspiraciones femeninas del presente”.<sup>15</sup> Evidentemente, Acevedo estuvo de acuerdo con la moderación de Rawson, con su rechazo de los “fanatismos” y su deseo de armonía con las clases más humildes.<sup>16</sup> A pesar de las opiniones de los hombres líderes de la Liga, es probable que Acevedo y algunas otras liguistas apoyaran el sufragio silenciosamente.<sup>17</sup>

La vicepresidenta de la Comisión de Señoritas de la Liga, Elisa Campillo, recomendó otro tipo de liberación femenina. En 1922 destacó que las obreras sin educación formal se encontraban dominadas por “elementos subversivos” que se aprovechaban de su ignorancia y descontento para fomentar el desorden. La

Comisión buscaba liberar a estas mujeres de su sometimiento mediante la creación de escuelas en las fábricas del Gran Buenos Aires. Con vistas a fomentar el nacionalismo y liberar a sus alumnas, el plan de estudios de estas escuelas incluía clases de patriotismo, reconciliación entre las clases y catequismo, además de la alfabetización y destrezas básicas para salir del resentimiento y la pobreza.<sup>18</sup>

En contraste, la Unión Feminista Nacional (UFN) de Argentina, liderada por socialistas, favoreció en 1921 la emancipación política, social y económica de la mujer y la creación de un orden social más justo. Su meta era una sociedad donde sólo las capacidades de cada persona, por sobre su género o clase social, fuesen sus limitaciones.<sup>19</sup> Estas socialistas y liguistas coincidían en el deseo de liberar a las mujeres, pero no necesariamente en la definición de aquello de lo que las mujeres debían ser liberadas. Todas estaban en favor de la educación de las mujeres, pero la UFN promovía la igualdad de género y una versión laica, mientras que las liguistas favorecían la instrucción en materias de moralidad, piedad y armonía de clases. Las socialistas enfatizaron que las mujeres se emanciparían a sí mismas; las derechistas radicales pensaban que la gente acomodada debía emancipar a las obreras.

En los años que siguieron a la guerra la percepción de los derechistas radicales brasileños sobre la liberación femenina se encontraba determinada por su tipo de nacionalismo. La ASN, que se fundó en 1920, culpó a los extranjeros, y en especial a los portugueses, por el conflicto de clases.<sup>20</sup> Algunas voces en el movimiento defendieron el voto femenino, el papel de las mujeres fuera del hogar, salarios iguales a los de los hombres y mejores oportunidades laborales. Sin embargo, los líderes varones querían mejorar el estatus de las mujeres con vistas a integrarlas en la campaña para convertir a Brasil en una nación plenamente independiente. Álvaro Bomilcar, por ejemplo, esperaba que las mujeres remplazaran a los hombres en la burocracia gubernamental, para permitir que éstos se enfocaran en ganar el control de la industria y el comercio de las manos de los portugueses y otros extranjeros.<sup>21</sup> La emancipación de las mujeres se encontraba entrelazada con la emancipación nacional, y este segundo objetivo eclipsó al primero.<sup>22</sup>

María Junqueira Schmidt, una directora de escuela, activista católica y miembro de la ASN, aceptó la incorporación de las mujeres a la fuerza laboral, a la educación superior y a la administración pública. Aunque desde su punto de vista las mujeres eran primordialmente amas de casa, apoyaba al principal grupo

feminista brasileño, la Federação Brasileira pelo Progresso Feminino (FBPF), fundada en 1922. El carácter mesurado y burgués de la Federação le permitió ganar apoyo para los derechos de las mujeres entre la élite y la ASN.<sup>23</sup> Schmidt y Acevedo tendieron su mano a las feministas, al menos a aquellas ubicadas ideológicamente en el centro. Aun así, este espíritu no caracterizaba a toda la Liga o a la ASN ni tampoco duró mucho tiempo.

## LA DÉCADA DE 1930

Algunas integrantes de la Liga y de la ASN establecieron una relación de lo que percibieron como su misión de paz y armonía social con la liberación femenina. En la década de 1930 al menos una militante de la AIB (una “blusa verde”) lo hizo también. Según Nilza Pérez, la columnista de la sección “Señora” de la revista Anauê, de la AIB, había comenzado una guerra global entre los comunistas y los nacionalistas. Denunció que la Comintern intentaba destruir la familia al sacar a las mujeres de sus casas y fomentar el feminismo. Separar a la gente por su sexo cuando ya se encontraba dividida políticamente debilitaría aún más a Brasil y lo entregaría al comunismo. Pérez indicó que no le interesaban los derechos feministas cuando los derechos de la patria y de la cristiandad se encontraban amenazados. Una vez que esta batalla terminase y la patria se encontrase libre, las mujeres brasileñas estarían satisfechas y sus “derechos” estarían asegurados.<sup>24</sup> Para los derechistas radicales, la tranquilidad y la “emancipación” de las mujeres dependían de erradicar el bando opuesto. De hecho, les dieron a las fuerzas armadas y a las organizaciones fascistas paramilitares la función de imponer la paz.<sup>25</sup>

Las mujeres progresistas también establecieron una relación entre la paz y la liberación femenina. Las preocupaciones de la izquierda por la guerra fueron creciendo en los años treinta. Los pacifistas e izquierdistas europeos organizaron el Comité Mundial contra la Guerra y el Fascismo a principios de la década. Su ala femenina invitó a las mujeres del mundo a un congreso en París, en 1934, que vinculó la paz con la “emancipación total” femenina. La amenaza nazi llevó a los comunistas a cooperar con otros antifascistas en el Comité y en lo que llegó a ser conocido como la política del Frente Popular, así como a movilizar a las mujeres en estos esfuerzos.<sup>26</sup>

Las iniciativas internacionales de principios de la década de 1930, junto con el

ascenso de gobiernos autoritarios en Latinoamérica y la Guerra del Chaco (1932-1935), detonaron un activismo radical. Fundada en Argentina en 1935, la Agrupación Femenina Antiguerrera (AFA), asociada al comunismo, atrajo entre 3 000 y 4 000 mujeres de distintas creencias políticas. Las integrantes invitaron a todas las mujeres a unirse a su campaña de cese al fuego en el Chaco y a oponerse a la militarización en Argentina.<sup>27</sup>

Culpando al imperialismo y al fascismo por la guerra, la AFA asoció estas fuerzas con la opresión de las mujeres y acusó a las firmas británicas y estadounidenses de utilizar el conflicto del Chaco para apropiarse del petróleo de la región. Estos dos países mantendrían a Argentina en una situación dependiente que afectaba a las mujeres al reforzar su subordinación a sus esposos. El subdesarrollo limitó sus oportunidades e incrementó su dependencia del salario de los hombres. El fascismo las hizo prisioneras en sus casas y las transformó en madres de soldados.<sup>28</sup> Puesto que el estatus de las mujeres sólo sufriría un mayor deterioro bajo el fascismo, para emanciparse debían luchar activamente contra sus manifestaciones locales e internacionales, según Sofía Arzarello, poetisa uruguaya y activista antifascista ligada al comunismo.<sup>29</sup> Tanto para los progresistas como para los derechistas radicales, la paz y la emancipación femenina exigieron la victoria sobre sus oponentes.

Si bien es cierto que la AFA apoyó la emancipación femenina, no movilizó explícitamente a las mujeres para que la obtuvieran. Los líderes comunistas ordenaron a la AFA concentrarse en “las cuestiones específicas de la lucha por la paz. El problema de los derechos políticos y sociales de la mujer deben ser tratados en sus aspectos de cuestiones derivadas de aquéllas”.<sup>30</sup> Estas limitaciones son muestras de la manera en que el apoyo de la ASN brasileña a la emancipación de las mujeres dependía de su participación en su campaña nacionalista. En ninguno de estos casos la liberación de las mujeres fue una prioridad.

El Partido Comunista avaló otro movimiento de mujeres del Frente Popular, la Unión Argentina de Mujeres (UAM, 1936-1944). La UAM veló por los derechos de las mujeres casadas, el sufragio, la revisión de leyes discriminatorias y mejores condiciones para las obreras y campesinas. También quería que las amas de casa fuesen remuneradas por su trabajo, que compartieran las ganancias de los negocios familiares y que contaran con el apoyo de una paternidad responsable.<sup>31</sup> Tal vez los líderes comunistas pensaron que dividir las responsabilidades entre la UAM y la AFA iba a promover la eficacia. Sin

embargo, esta estrategia perjudicó la causa de los derechos femeninos, puesto que la AFA era más grande que la UAM y más popular en su composición.

Similar fue el caso de otro movimiento del Frente Popular que combinó antifascismo, pacifismo y una fuerte defensa de las reivindicaciones femeninas y la justicia social. El Frente Único Pro Derechos de la Mujer surgió en México en 1935, con el lema “Por la liberación de la mujer”. Atrajo a unas 50 000 mujeres de varias procedencias políticas. Con el tiempo, su ferviente movilización en favor del voto desvió la atención de otras reivindicaciones más radicales; no obstante, el grupo no podría asegurar su objetivo. Los líderes comunistas decidieron incorporarlo en el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y así restringir su independencia, para reforzar su alianza con este partido.<sup>32</sup> Éste fue otro caso en el que las mujeres de la derecha y de la izquierda fueron víctimas de lo que los hombres consideraban una prioridad.

Las nociones fascistas sobre la liberación femenina se diferenciaron mucho de las de los grupos de mujeres del Frente Popular. Un vocero de los nacionalsocialistas chilenos (autodenominados nacistas),<sup>33</sup> el doctor Badilla Urrutia, explicó que las privaciones impuestas por el sistema económico liberal empujaron a las mujeres a competir con los hombres en la lucha por proveer de un sustento. “Es decir, el liberalismo pretende formar cabezas de hombre sobre rostros y cuerpos de mujeres”. Al diferenciar entre ambos sexos, el nacismo haría posible “la liberación de la mujer” de sus condiciones de “semiesclavitud”. Como reacción al argumento de la izquierda de que el capitalismo esclavizaba a las mujeres, Badilla Urrutia atribuyó esta subyugación al peso de las libertades que supuestamente disfrutaban bajo regímenes liberales. Los nacistas emanciparían a las mujeres al establecer la cooperación entre ricos y pobres y al instruir a los hombres en el cumplimiento de sus obligaciones, lo que les permitiría a las mujeres ser madres de verdad.<sup>34</sup> Liberar a las mujeres significaba enviarlas a casa.<sup>35</sup>

La AIB brasileña compartía la visión de los nacistas chilenos acerca del efecto nefasto que el liberalismo tenía sobre las mujeres; no obstante, también culparon al comunismo. Obedeciendo órdenes comunistas, las feministas habían masculinizado a las mujeres al fomentar su pelea con los hombres y al incentivar que utilizaran vestimentas masculinas y que realizaran trabajos inapropiados. Como sostuvo Nilza Pérez, al erradicar la propiedad privada los comunistas destruyeron familias, forzándolas a vivir en el mismo edificio en “la más repugnante y odiosa de las promiscuidades”. Puesto que la Unión Soviética

permitía el divorcio, el casamiento equivalía a la “prostitución oficial”, ya que dejaba a las mujeres sin ningún tipo de protección. Los comunistas veían a las mujeres como cuerpos sexualizados y animales reproductivos.<sup>36</sup> Así, los llamados integralistas no sólo se distanciaron de sus enemigos, sino que además repudiaron la modernidad en muchas de sus manifestaciones. Según ellos, cultivar sus cualidades femeninas y espirituales por sobre la satisfacción de apetitos sensuales ayudaría a las mujeres a obtener su verdadera libertad.<sup>37</sup>

A diferencia de los derechistas radicales, algunas izquierdistas concibieron a las amas de casa como esclavas que debían ser liberadas.<sup>38</sup> El MEMCh, del Frente Popular, que surgió en 1935, concluyó que las políticas fascistas que promovían el “maravilloso” retorno de las mujeres a sus hogares significaba para ellas dejar a sus hijos hambrientos y trabajar como empleadas domésticas sin sueldo. Pero admitió que la incorporación de las mujeres al campo laboral no las enaltecía necesariamente. Tenían una doble jornada de trabajo y sus salarios eran inferiores a los de los hombres. Dada esta situación, estaba justificado que las obreras quisieran liberarse a sí mismas del peso de tener hijos que no podían mantener con vida. El MEMCh abogó por emancipar a la mujer de la maternidad obligatoria y en cambio propuso la creación de una “maternidad consciente”, que formó parte de su proyecto de “liberación integral”. Apoyó la diseminación de anticonceptivos y la legalización del aborto.<sup>39</sup>

Los fascistas objetaron estos medios de prevención de la reproducción, a la cual consideraban el deber sagrado de la mujer. También declararon que la Unión Soviética les estaba quitando a los padres el derecho a cuidar de su descendencia, y que despojaba así al matrimonio de su significado más alto, con lo que ofendía la dignidad femenina. Según Belisário Penna, miembro de la AIB, bajo el comunismo las mujeres eran meras “vacas lecheras” que producían leche para los niños que le pertenecían al Estado. A Offensiva colocó fotografías explícitas de mujeres italianas que amamantaban a sus bebés junto a imágenes de mujeres rusas que les daban biberones a los niños. Este periódico integralista afirmó que el gobierno soviético les quitaba los hijos a sus madres y las obligaba a dejar leche para criaturas que no eran suyas. Insistió en que estas fotografías eran prueba de que el comunismo convertía a las mujeres en “máquinas de fabricar esclavos para el Soviet”.<sup>40</sup> Pero las fotografías y las descripciones parecían contradecir las garantías de la AIB de que Italia les daba una atención individual y respetuosa a las madres. Sugirieron que tanto el régimen fascista como el soviético organizaban la maternidad y el embarazo como si fuesen parte de una línea de producción.<sup>41</sup>

De hecho, muchos izquierdistas, así como derechistas, apoyaron los roles maternales femeninos y denunciaron al otro bando por incapacitarlos. Las integrantes de la AFA y otras progresistas declararon que los regímenes fascistas convirtieron a las mujeres en máquinas de tener bebés que iban a ser carne de cañón. La médica uruguaya Paulina Luisi destacó que estos regímenes se hacían cargo de los niños y los adoctrinaban en el militarismo. De esta manera, el fascismo abolió la misión de las mujeres al obstruir su capacidad de criar a su descendencia, inculcarle sus valores y mantenerla con vida.<sup>42</sup>

Mientras que los movimientos fascistas promovieron un sueldo familiar para los hombres que les permitiese a las mujeres dedicarse a ser amas de casa de tiempo completo, los nacistas y camisas verdes aceptaron con reticencias que muchas mujeres tuvieran que ganar salarios. Bajo estas circunstancias, la AIB favoreció salarios igualitarios para hombres y mujeres.<sup>43</sup> Aparentemente no haría falta el trabajo femenino remunerado cuando la AIB tomara el poder, porque implantaría la justicia social. Al mismo tiempo, no descartó la posibilidad de que las mujeres integraran diversas ocupaciones en un régimen integralista futuro, en la medida en que fuesen capaces de atender sus deberes en el hogar.<sup>44</sup> Aunque la maternidad seguiría siendo una prioridad, esta perspectiva de las mujeres profesionales era más positiva que la que tenían los demás movimientos contrarrevolucionarios.<sup>45</sup>

Los derechistas radicales insistieron en que la Iglesia católica había liberado a las mujeres y mejorado su estatus, puesto que a sus ojos hombres y mujeres eran iguales y compartían el mismo objetivo espiritual. No obstante, como hizo notar Margarida Corbisier, una destacada “blusa verde”, hombres y mujeres tenían funciones, atributos y psicologías distintas. Ella se opuso a las teorías “masculinistas”, que denigraban a las mujeres, y a los conceptos “feministas”, que negaban las diferencias existentes entre hombres y mujeres. No hay ninguna indicación de que leyera textos feministas, algunos de los cuales, de hecho, aceptaban la diferencia de género.<sup>46</sup> Otra vocera de la AIB opinó que los esposos merecían más derechos que las esposas porque tenían más obligaciones, y que esto establecía orden en la familia.<sup>47</sup>

A pesar de estas contradicciones y desacuerdos acerca de la liberación de las mujeres, los integralistas brasileños fueron los más visionarios de los fascistas latinoamericanos. Las blusas verdes que trabajaban fuera del hogar aparecieron en la prensa de la AIB, como Rosa Malta Lins Albuquerque, autoridad de la sección de mujeres y jóvenes, y empleada de la compañía de teléfonos. Proclamó

que las mujeres debían acabar con su sumisión y adquirir un sentido de valor propio y autonomía.<sup>48</sup>

Es entendible por qué algunos brasileños podían haber visto a las blusas verdes como feministas —o al menos eso declaró Nilza Pérez—,<sup>49</sup> a pesar de que negaran serlo. De hecho, algunos voceros describieron las ideas de la AIB como “un feminismo racional” y “verdadero, cristiano y brasileño”.<sup>50</sup> El fascismo brasileño hábilmente hizo suya y adaptó la jerga feminista a sus propósitos, mientras que mitigaba las preocupaciones tradicionalistas. Habiendo ganado el voto para las mujeres alfabetizadas, el feminismo en Brasil había progresado más que en otros países latinoamericanos con movimientos fascistas importantes.<sup>51</sup> Con su pretensión de ser moderno y revolucionario, la AIB debía reconocer al feminismo. Mientras los fascistas se oponían teóricamente a las elecciones, los integralistas y nacistas presentaron candidatos para difundir su mensaje y ganar seguidores. El hecho de que algunas brasileñas pudiesen votar en todos los niveles, a diferencia de Argentina, México y Chile, las transformó en un electorado más importante para la AIB que para los grupos fascistas en otros países.<sup>52</sup>

La AIB insertó a las mujeres en roles nuevos, y esto representó una especie de liberación. Las mujeres difundieron la doctrina de la AIB en cursos de alfabetización y dieron discursos a personas de ambos sexos. A diferencia de sus pares, este movimiento fascista auspició congresos femeninos. Las blusas verdes, algunas de las cuales ya habían postulado y ganado en las elecciones, fueron clave en los esfuerzos de la AIB por crear un partido masivo durante la campaña para las elecciones de 1938. La AIB las exhortó a registrarse y votar y les pidió que a su vez instruyeran y registraran al menos a un hombre o una mujer. De ser necesario, las blusas verdes les enseñarían a los analfabetos en sus propias casas, y así sus hogares se transformarían en centros electorales.<sup>53</sup>

Las madres progresistas también remodelaron sus hogares para representar sus creencias políticas. Durante la Guerra Civil española, el Comité Argentino de Mujeres Pro Huérfanos Españoles, vinculado al comunismo, confeccionó ropa cosiendo y tejiendo en las mesas de las cocinas para los niños de la República progresista española, que había incorporado a mujeres en el sistema político. Las madres, de este modo, ejemplificaron las ideas emancipadoras para sus familias.<sup>54</sup> De la misma manera que las blusas verdes convirtieron sus casas en centros electorales integralistas, las pertenecientes al Comité transformaron las suyas en centros antifascistas.

Algunas militantes derechistas parecían abrigar ideas más amplias de la liberación femenina que sus camaradas varones. Una “blusa verde” declaró que tanto ella como sus pares eran mujeres “modernas” que estudiaban, trabajaban e iban a las calles a defender con “valor varonil” sus identidades e ideas. Marchaban junto a los hombres, con los cuales, ella insistió, compartían los mismos derechos y posibilidades.<sup>55</sup> Esta declaración se asemejó a los comentarios de la líder socialista argentina, la doctora Alicia Moreau de Justo: “las muchachas modernas” se estaban emancipando mediante su educación y su trabajo, y centraban sus ideas en obtener los mismos derechos y oportunidades que los hombres. No obstante, puede que la “blusa verde” haya estado en desacuerdo con la insistencia de Moreau de que buscar un esposo no figuraba entre las prioridades de estas muchachas.<sup>56</sup>

Abrazando incluso más la modernidad, la nacionalista Isabel Giménez hizo público su apoyo al sufragio para las mujeres alfabetizadas nacidas en Argentina. Sus ideas se acercaron a las del grupo moderado feminista, la Asociación Argentina del Sufragio Femenino. Acusando a las inmigrantes comunistas de enseñarles a sus hijos a odiar la nación, Giménez se opuso a darle el voto a las mujeres naturalizadas, mientras que la Asociación lo apoyó para aquellas que habían residido en Argentina por muchos años. La postura de Giménez era intolerante, pero aun así era más liberadora para las mujeres nacidas en Argentina que la posición del periódico nacionalista *Bandera Argentina*, que declaró que el voto femenino era “una locura”.<sup>57</sup>

Algunas mujeres derechistas radicales promovieron niveles de autonomía y de crítica que contradecían la visión de la liberación exaltada por sus movimientos. María José Nunes, una mecanógrafa soltera brasileña, era vista como una “mujer macho”, puesto que fumaba, usaba pantalones y vestía una blusa verde en público. En una marcha de la AIB, intercambió insultos con obreros, que arrojaron piedras y cigarros a Nunes y a otros manifestantes. La violencia resultante dejó a un integralista muerto.<sup>58</sup> La escritora brasileña comunista Patricia Galvão (Pagu) puede que haya superado a Nunes: su libertad sexual ridiculizó el matrimonio, y su novela *Parque industrial* atacó los roles domésticos femeninos. Pagu contrató a una enfermera para que cuidara a su bebé y le dedicó menos atención a él que a su militancia y a su escritura. El Partido la reprendió por su feminismo abierto y sus descripciones del abuso sexual de las obreras.<sup>59</sup>

Otra mujer que desafió las nociones de género de sus coetáneos varones fue

Teresa Bustos, una trabajadora textil perteneciente a la UNS de México. Llevando la bandera sinarquista, encabezó una procesión al entierro de seis camaradas asesinados en 1939. La policía la mató junto con otros manifestantes. Irónicamente, se transformó en un símbolo de valentía para un movimiento que instaba a las mujeres a seguir su ejemplo, y sin embargo, al mismo tiempo les decía que se quedaran en la casa y en la retaguardia.<sup>60</sup>

Reacias a buscar refugio en la esfera doméstica, Nunes y Bustos fueron soldados de la causa. Algunos movimientos de extrema derecha describieron a sus seguidoras utilizando un lenguaje con ecos marciales. La Liga Patriótica Argentina y los nacistas organizaron “brigadas femeninas”.<sup>61</sup> Iveta Ribeiro, directora de la revista femenina de la AIB, le aconsejaba a la mujer integrante de este movimiento: “honra[r] y dignifica[r] tu blusa verde en las horas de combates morales por la victoria del integralismo, con el mismo ardor [...] con que los soldados honran y dignifican el uniforme en los combates rudos en defensa de la Patria”.<sup>62</sup> Pero al retratar a las mujeres como soldados, socavaba los constructos maternos. También corría el riesgo de sugerir que las mujeres eran ciudadanas y por lo tanto merecían votar, dado que por lo general la ciudadanía y el sufragio se basaban en el servicio militar. Uno podría interpretar esto como un mensaje liberador, aunque tal vez no intencional, consistente con la naturaleza contradictoria de la contrarrevolución.

## CONCLUSIONES

Los conflictos y desencuentros entre contrarrevolucionarios y progresistas fueron muchos. Los primeros (en particular los hombres), creyendo tanto en la jerarquía de género como en la de clase, tendían a ver la emancipación de las mujeres como un proceso facilitado por las clases altas. Casi todas las progresistas pensaron que las mujeres debían emanciparse a sí mismas.

Por momentos, los de la extrema derecha utilizaron los mismos términos que los progresistas, pero los interpretaron de modo distinto, o bien su acuerdo aparente con ciertas ideas progresistas era superficial. En la década de 1930, para la mayoría de los fascistas liberar a las mujeres significaba enviarlas a casa. En cambio, las feministas promovieron una liberación amplia que les permitiría disfrutar los mismos derechos y oportunidades que tenían los hombres. Asociándola a la liberación femenina, para la derecha radical la paz significaba

la ausencia del conflicto de clases y una sociedad estratificada. Para las mujeres de izquierda significaba el fin del militarismo y de la opresión de clase y de género. Ambos bandos reconocieron las tensiones entre parejas en hogares empobrecidos; mientras que las progresistas suponían que mitigarían estas condiciones al restringir la dominación masculina y la explotación capitalista, la derecha radical instaría a los hombres a llevar a cabo sus deberes y estimularía la cooperación entre clases.

Los progresistas y contrarrevolucionarios establecieron algunos paralelismos. Ambos pensaban que el otro bando debía ser derrotado para obtener la paz y la liberación femenina; ambos politizaron los hogares y acusaron al otro de destruir la misión de las mujeres al convertirlas en máquinas de producir bebés. Los hombres en la extrema derecha y en la izquierda solían ver los problemas de las mujeres como no prioritarios. De hecho, a lo largo de todo el espectro ideológico, las mujeres carecían de autonomía, en particular aquellas de la extrema derecha.<sup>63</sup> Los hombres de la izquierda y de la extrema derecha, salvo los camisas verdes, subestimaron la participación femenina. Pero las progresistas establecieron sus propias publicaciones periódicas; en la extrema derecha, sólo las blusas verdes parecen haber tenido una.

Otro paralelismo fue la variedad de perspectivas sobre la liberación de la mujer dentro de las filas del progresismo y el derechismo. No sorprende que hombres de diversas proveniencias políticas poseyeran nociones más restringidas que las de sus camaradas mujeres. No obstante, algunas mujeres fascistas discreparon entre sí. En general los progresistas fueron más consistentes que sus adversarios. Con todo, esta diferencia también refleja una tendencia general entre los contrarrevolucionarios: su estilo ambiguo y cambiante les permitía aparecer a veces como retrógrados y a veces como visionarios, aumentando, de esta manera, su atractivo. La AIB es un buen ejemplo.<sup>64</sup>

También hubo puntos de encuentro entre miembros de bandos opuestos. Por ejemplo, los contrarrevolucionarios, especialmente en la década de 1930, enfatizaron la diferencia de género, de la misma manera en que lo hicieron muchas feministas e izquierdistas. Las mujeres progresistas y algunas personas de extrema derecha, especialmente en Brasil, aparentemente podían estar de acuerdo respecto a la necesidad del voto, la educación, el trabajo fuera de casa y la igualdad de oportunidades y salarios. Ambos lados reconocieron la injusticia económica y la UAM y los nacistas promovieron la paternidad responsable. En la década de 1920 la doctora Ernestina Acevedo y María Junqueira Schmidt

estuvieron de acuerdo con un feminismo moderado.<sup>65</sup>

No obstante, Acevedo y Schmidt parecen ser casos únicos. No pude encontrar ninguna evidencia de que en la década siguiente los fascistas hayan leído declaraciones feministas o progresistas, y mucho menos de que hayan contactado a sus autores. Las líneas ideológicas se habían endurecido.<sup>66</sup> En cambio, los contrarrevolucionarios se refirieron a fuerzas amorfas y conspiradoras<sup>67</sup> que, a su parecer, se habían aliado para destruir la noción burguesa de feminidad, familia, propiedad y patria. Los hombres y mujeres contrarrevolucionarios demonizaron a los progresistas y torcieron sus ideas, y al mismo tiempo adaptaron algunas de estas nociones y frases. Es decir, se definieron a sí mismos en relación con sus enemigos.

Pero estos dos lados también surgieron del mismo proceso y por eso fueron interdependientes. Reaccionaron de diferentes maneras a la expansión del capitalismo y sus desigualdades inherentes; a la creciente política de masas; a la revolución bolchevique y su programa para mujeres, y a la incorporación de las mujeres a la fuerza laboral urbana, a la educación superior y al campo profesional —en suma, a la modernización—. La denuncia de Pérez del casamiento y de formas de convivencia al estilo soviético ilustra de modo notable los temores de la derecha de que la modernidad resultaría en la disolución social. Pero en algunos casos y momentos, ella y otras blusas verdes aceptaron aspectos de la modernidad.

Entonces, ¿por qué los hombres de la extrema derecha tomaron en consideración la idea de “liberar” a las mujeres? Su interpretación de la emancipación femenina no contradijo necesariamente su ideal de un sistema estratificado de género y de clase. Aun cuando lo hizo, esto sirvió para demostrar que supuestamente podrían ser revolucionarios, al menos en estilo y retórica. Teóricamente, este rasgo podía servir para atraer el apoyo popular. Sin embargo, sin el respaldo de los militares, la Iglesia católica y la derecha moderada, este apoyo resultó insuficiente para llevarlos al poder.

Los contrarrevolucionarios vieron el feminismo como un desafío, una amenaza o, especialmente en Brasil, una fuerza que no podían ignorar. Por tanto, sus perspectivas giraron en torno a nociones progresistas de la liberación de las mujeres que ocasionalmente abordaron de modos complejos. Algunas mujeres derechistas radicales podían combinar un antiizquierdismo ferviente con un interés módico en los derechos civiles y políticos. Para el estudio de género y las

mujeres en Latinoamérica resulta vital saber que a veces el feminismo tuvo simpatizantes inesperados. También es necesario para los que estudian las derechas latinoamericanas comprender de qué manera cuestiones de mujeres y de género se entrecruzan con asuntos de gran importancia para estos movimientos.

## SIGLAS Y REFERENCIAS

■

|        |   |
|--------|---|
| AFA    | Agrupación Femenina Antiguerrera  |
| AGN    | Archivo General de la Nación, Montevideo                                |
| AIB    | Ação Integralista Brasileira  |
| ALBN   | Archivo Literario, Departamento de Investigaciones, Biblioteca Nacional |
| ao     | A Offensiva   |
| APSF   | Archivo de la Provincia de Santa Fe, Santa Fe                           |
| ASN    | Ação Social Nacionalista  |
| FCRE   | Fondo Centro Republicano Español, Facultad de Humanidades y Ciencias    |
| F UPDM | Frente Único Pro Derechos de la Mujer                                   |
| HLUND  | Department of Special Collections, Hesburgh Libraries, University of    |
| MC     | Memoria Chilena (sitio web)   |
| MEMCH  | Movimiento Pro-Emancipación de las Mujeres Chilenas                     |
| MNS    | Movimiento Nacional Socialista  |
| SCPC   | Swarthmore College Peace Collection, Swarthmore, Pennsylvania           |
| UAM    | Unión Argentina de Mujeres  |
| UNS    | Unión Nacional Sinarquista  |

## *Libros y artículos*

Agrupación Femenina Antiguerrera

1936 La mujer argentina y sus derechos. A la paz, al trabajo, a la cultura, Buenos Aires, AFA.

ANTEZANA-PERNET, Corinne

1997 Movilización femenina en la época del Frente Popular: feminismo, clases sociales y política en el Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres Chilenas (memch), 1935-1950, Santiago de Chile, Fundación Biblioteca y Archivo de la Mujer Elena Caffarena.

BADILLA URRUTIA, Plutarco

1936 “La mujer y el naciismo”, Acción Chilena (Santiago de Chile), 5, 1, pp. 51-56.

BAIRROS, Lilian Tavares de

2013 “O integralismo de saia: militância feminina nas fileiras integralistas em Santos”, en Seminário Internacional Fa-zendo Gênero 10: Desafios Actuais dos Feminismos, memoria electrónica, Florianópolis. Consultado el 29 de junio de 2017.

BARRANCOS, Dora

2001 Inclusión/exclusión: historia con mujeres, Buenos Aires, FCE.

2007 Mujeres en la sociedad argentina: una historia de cinco siglos, Buenos Aires, Sudamericana.

BERTONHA, João Fábio

2012 “Los latinoamericanos de Franco. La ‘Legión de la Falange Argentina’ y otros voluntarios hispanos en el bando sublevado durante la Guerra Civil española”, Alcores. Revista de Historia Contemporánea, 14, pp. 143-167.

BESSE, Susan K.

1987 “Pagu: Patrícia Galvão-Rebel”, en William H. BEEZLEY y Judith EWELL (comps.), *The Human Tradition in Latin America: The Twentieth Century*, Wilmington, Delaware, Scholarly Resources.

1996 *Restructuring Patriarchy: The Modernization of Gender Inequality in Brazil, 1919-1940*, Chapel Hill, University of North Carolina Press.

Biblioteca de La Liga Patriótica Argentina

1927 Octavo congreso nacionalista organizado por la Liga Patriótica Argentina, Buenos Aires, Caporaletti.

1928 Noveno congreso nacionalista organizado por la Liga Patriótica Argentina, Buenos Aires, Imprenta P. Ventriglia.

BOHOSLAVSKY, Ernesto

2007 “El nacionalismo fascistoide frente a los indígenas del sur (1930-1943): ¿pragmatismo, giro plebeyo o revisionismo?”, *Sociohistórica*, 21-22.

CALDEIRA, João Ricardo de Castro

1999 *Integralismo e política regional. A ação integralista no Maranhão (1933-1937)*, São Paulo, Annablume.

CARLE, Emmanuelle

2004 “Women, anti-fascism and peace in interwar France: Gabrielle Duchêne’s itinerary”, *French History*, 18, 3, septiembre.

CARLSON, Marifran

1988 *¡Feminismo! The Woman’s Movement in Argentina from Its Beginnings to Eva Perón*, Chicago, Academy Chicago.

CATERINA, Luis María

1995 *La Liga Patriótica Argentina. Un grupo de presión frente a las convulsiones sociales de la década del 20*, Buenos Aires, Corregidor.

CAVALARI, Rosa María Feiteiro

1999 Integralismo: ideologia e organização de um partido de massa no Brasil (1932-1937), Bauru, Edusc.

CEPLAIR, Larry

1987 Under the Shadow of War: Fascism, Antifascism, and Marxists, 1918-1939, Nueva York, Columbia University Press.

CHALMERS, Beverley

2005 “Maternity care in the former Soviet Union”, BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 112, 4, abril.

CHERNYAEVA, Natalia

2009 “Childcare manuals and construction of motherhood in Russia, 1890-1990”, tesis de doctorado, University of Iowa, consultado en <<http://ir.uiowa.edu/etd/344>>.

Comisión de Señoritas de la Liga Patriótica Argentina

1922 Sus escuelas de obreras en las fábricas, Buenos Aires, s.p.i.

COONS, Lorraine

1999 “Gabrielle Duchêne: Feminist, pacifist, reluctant bourgeoisie”, Peace & Change, 24, 2, abril.

CORBISIER, Margarida

1959 “Integralismo e educação do feminino”, en Everardo BA-CKEUSER et al., Enciclopédia do Integralismo, t. IX, O integralismo e a educação, Rio de Janeiro, Livraria Clássica Brasileira.

DEUTSCH, Sandra McGee

1984 Counterrevolution in Argentina, 1900-1932: The Argentine Patriotic League, Lincoln, University of Nebraska Press.

1991 “The Catholic Church, work, and womanhood in Argentina, 1890-1930”, *Gender & History*, 3, 3, otoño.

1997 “What difference does gender make? The extreme right in the abc countries in the era of fascism”, *Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe*, 8, 2, julio-diciembre.

1999 *Las derechas: The Extreme Right in Argentina, Brazil, and Chile, 1890-1939*, Stanford, Stanford University Press.

FINCHELSTEIN, Federico

2010 *Transatlantic Fascism: Ideology, Violence, and the Sacred in Argentina and Italy, 1919-1945*, Durham, Duke University Press.

2014 *The Ideological Origins of the Dirty War: Fascism, Populism, and Dictatorship in Twentieth Century Argentina*, Nueva York, Oxford University Press.

FISHER, David James

1988 *Romain Rolland and the Politics of Intellectual Engagement*, Berkeley, University of California Press.

FONT, Miguel J.

1921 *La mujer: encuesta feminista argentina. Hacia la formación de una Liga Feminista Sudamericana*, Buenos Aires, Costa Hermanos.

FRANCO, Clara del

2011 *Mujeres, ese fuego, esas luchas, 1930-1960*, Buenos Aires, Cuadernos Marxistas.

GERALDO, Endrica

2001 “Entre a raça e a nação: a família como alvo dos projetos eugenista e integralista de nação brasileira nas décadas de 1920 e 1930”, tesis de maestría, Universidade Estadual de Campinas.

GIORDANO, Verónica

2012 Ciudadanas incapaces. La construcción de los derechos civiles de las mujeres en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay en el siglo XX, Buenos Aires, Teseo.

GONZÁLEZ, Victoria, y Karen KAMPWIRTH (comps.)

2001 Radical Women in Latin America: Left and Right, University Park, Pennsylvania State University Press.

GRANDIN, Greg

2010 “Living in revolutionary time: Coming to terms with the violence of Latin America’s long cold war”, en Greg GRANDIN y Gilbert M. JOSEPH (comps.), A Century of Revolution: Insurgent and Counterinsurgent Violence during Latin America’s Long Cold War.

GRANDIN, Greg, y Gilbert M. JOSEPH (comps.)

2010 A Century of Revolution: Insurgent and Counterinsurgent Violence during Latin America’s Long Cold War, Durham, Duke University Press.

GRAZIA, Victoria de

1992 How Fascism Ruled Women: Italy, 1922-1945, Berkeley, University of California Press.

H. Senado de la Nación

1940 Represión del comunismo. Proyecto de ley, informe y antecedentes por el senador Matías Sánchez Sorondo, t. 2, Antecedentes, Buenos Aires, H. Senado de la Nación.

HAHNER, June E.

1990 Emancipating the Female Sex: The Struggle for Women’s Rights in Brazil, 1850-1940, Durham, Duke University Press.

HALPERÍN DONGHI, Tulio

2004 La república imposible: 1930-1945, Buenos Aires, Ariel. 2008 Son memorias, Buenos Aires, Siglo XXI.

HOBBSBAWM, Eric

1996 The Age of Extremes. A History of the World, 1914-1991, Nueva York, Vintage Books.

KLEIN, Marcus

2000 “A comparative analysis of fascist movements in Argentina, Brazil, and Chile between the Great Depression and the Second World War”, tesis de doctorado, Institute of Latin American Studies, University of London.

LAVRIN, Asunción

1995 Women, Feminism, and Social Change in Argentina, Chile, and Uruguay, 1890-1940, Lincoln, University of Nebraska Press.

MARINO, Katherine M.

2014 “Transnational Pan-American feminism: The friendship of Bertha Lutz and Mary Wilhelmine William, 1926-1944”, Journal of Women’s History, 26, 2, verano.

En prensa Feminism for the Americas: The Making of a Hemispheric Movement, Chapel Hill, University of North Carolina Press.

MAYER, Arno

1971 Dynamics of Counterrevolution in Europe, 1870-1956: An Analytic Framework, Nueva York, Harper and Row.

MEYER, Doris

1979 Victoria Ocampo: Against the Wind and the Tide, Nueva York, George Braziller.

OIKIÓN SOLANO, Verónica

2017 “Mujeres en el Partido Comunista Mexicano. Desigualdad social y lucha

política, 1935-1955”, en Adriana VALOBRA y Mercedes YUSTA RODRIGO (comps.), Queridas camaradas. Historias iberoamericanas de mujeres comunistas, 1935-1975, Buenos Aires, Miño y Dávila.

OLCOTT, Jocelyn

2005 Revolutionary Women in Postrevolutionary Mexico, Durham, Duke University Press.

OLIVER, María Rosa

1969 La vida cotidiana, Buenos Aires, Sudamericana.

1971 Entrevista con Leandro Gutiérrez. Proyecto de Historia Oral, Buenos Aires, Instituto Torcuato di Tella, Universidad Torcuato di Tella.

1981 Mi fe es el hombre, Buenos Aires, Carlos Lohlé.

OROZCO, Eva Nohemí

En prensa “Teresa Bustos, la mujer bandera”, en “Las mujeres sinarquistas en México en los años cuarenta y cincuenta: las manos ocultas en la construcción del sentimiento nacionalista mexicano”, tesis de doctorado, University of Texas at El Paso.

PASQUALI, Laura

Sin fecha “El activismo antifascista femenino en México y Argentina en los años 30”, manuscrito inédito.

PASSALAUQUA ELIÇABE, H.V.

1935 El movimiento fascista argentino, Buenos Aires, La Argentina.

PAXTON, Robert O.

2004 The Anatomy of Fascism, Nueva York, Vintage.

PENNA, Belisário

1959 “A mulher, a familia, o lar, e a escola”, en Everardo BACKEUSER et al.,

Enciclopédia do Integralismo, t. IX, O integralismo e a educação, Rio de Janeiro, Livraria Clássica Brasileira.

PIEPER-MOONEY, Jadwiga

2009 The Politics of Motherhood: Maternity and Women's Rights in Twentieth-Century Chile, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press.

POSSAS, Lídia Maria Vianna

2004 "O integralismo e a mulher", en Renato ALENCAR DOTA y Rosa Maria FEITEIRO CAVALARI (comps.), Integralismo: no-vos estudos e reinterpretaciones, Rio Claro, Arquivo Público do Município de Rio Claro.

QUIEROLO, Graciela

2004 "La década de 1930 a través de los escritos feministas de Victoria Ocampo", en Alicia N. SALOMONE et al. (comps.), Modernidad en otro tono. Escritura de mujeres latinoamericanas, 1920-1950, Santiago, Cuarto Propio.

ROJAS MIRA, Claudia, Edda GAVIOLA, Lorella LOPESTRI y Jimena JILES

2007 Queremos votar en las próximas elecciones, Santiago, Lom.

ROSEMBLATT, Karin Alejandra

2000 Gendered Compromises: Political Cultures and the State in Chile, 1920-1950, Chapel Hill, University of North Carolina Press.

RUBINZAL, Mariela

2012 "Women's work in Argentina's nationalist lexicon, 1930-1943", en Kathleen M. BLEE y Sandra MCGEE DEUTSCH (comps.), Women of the Right: Comparisons and Interplay Across Borders, University Park, The Pennsylvania State University Press.

SARNOFF, Daniella

2012 "Domesticating fascism: Family and gender in French fascist leagues", en Kathleen M. BLEE y Sandra MCGEE DEUTSCH (comps.), Women of the

Right: Comparisons and Interplay Across Borders, University Park, The Pennsylvania State University Press.

SIMÕES, Renata Duarte

2009 “A educação do corpo no jornal A Offensiva (1932-1938)”, tesis de doctorado, Universidade de São Paulo.

2011 “Nem só mãe, esposa e professora: os múltiplos campos de atuação da mulher militante integralista”, en Anais do XXVI Simpósio Nacional de História, ANPUH, São Paulo, julio.

TRAVERSO, Enzo

2016 Fire and Blood: The European Civil War 1914-1945, Londres, Verso.

TUÑÓN PABLOS, Esperanza

1992 Mujeres que se organizan: El Frente Único Pro Derechos de la Mujer, 1935-1938, México, Miguel Ángel Porrúa.

VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE, Verónica

2006a “Presentación”, en Verónica VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE, Rolando ÁLVAREZ VALLEJOS y Julio PINTO VALLEJOS, Su revolución contra nuestra revolución. Izquierdas y derechas en el Chile de Pinochet (1973-1981).

2006b “Izquierdas y derechas en los años setenta: la reversión de la historia”, en Verónica VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE, Rolando ÁLVAREZ VALLEJOS y Julio PINTO VALLEJOS, Su revolución contra nuestra revolución. Izquierdas y derechas en el Chile de Pinochet (1973-1981).

VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE, Verónica, Rolando ÁLVAREZ VALLEJOS y Julio PINTO VALLEJOS

2006 Su revolución contra nuestra revolución. Izquierdas y derechas en el Chile de Pinochet (1973-1981), Santiago, Lom.

VALOBRA, Adriana

2015 “Formación de cuadros y frentes populares: relaciones de clase y género en el Partido Comunista de Argentina, 1935-1951”, Revista Izquierdas, núm. 23, abril.

VALOBRA, Adriana, y Mercedes YUSTA RODRIGO (comps.)

2017 Queridas camaradas. Historias iberoamericanas de mujeres comunistas, 1935-1975, Buenos Aires, Miño y Dávila.

VASSALLO, Jacqueline (comp.)

2012 Señoras patriotas ¿o reacción oligárquica? Actas del Primer Congreso Patriótico de Señoras en América del Sud, 1910, Córdoba, Editorial de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.

### ***Periódicos y revistas***

*A Offensiva, Rio de Janeiro 1935-1937*

*Anauê, Rio de Janeiro, 1935-1937*

*Bandera Argentina, Buenos Aires, 1938*

*Brasil Feminino, Rio de Janeiro, 1937*

*El Ideal, Montevideo, 1934*

*El Rayo, Valdivia, 1935*

*Gil Blas, Rio de Janeiro, 1919-1922*

*La Fronda, Buenos Aires, 1931-1932*

*La Mujer Nueva, Santiago de Chile, 1935-1936*

*La Nación, Buenos Aires, 1919*

*La Razón, Buenos Aires, 1919*

*La Vanguardia, Buenos Aires, 1938*

*Monitor Integralista, São Paulo, 1936*

¡Mujeres!, Buenos Aires, 1937

*Nuestra Causa, Buenos Aires, 1921*

Trabajo, Santiago, 1935-1936, 1939

Uruguay, Montevideo, 1936

*Vida Femenina, Buenos Aires, 1935-1936*

\* Agradezco a Eleonora Ardanaz, Dora Barrancos, Sueann Caulfield, Aileen El Kadi, Teresa Meade, John Sherman, Kathleen Staudt, Teresa Suárez, Marcela Vignoli, Barbara Weinstein y, en especial, a Ernesto Bohoslavsky, Clara Lida, Katherine Marino y Margaret Power por sus provechosas sugerencias y ayuda, y a Clara Lida, Ernesto Bohoslavsky y David Jorge por haberme invitado a dar esta conferencia.

Biblioteca de la Liga Patriótica Argentina, 1928, p. 401.

BADILLA URRUTIA, 1936, p. 53.

De este modo, mi investigación se diferencia del trabajo de VALDIVIA, ÁLVAREZ VALLEJOS y PINTO VALLEJOS, 2006, quienes hacen hincapié en las estrategias y en los destinos entrelazados.

Sobre la contrarrevolución y la tríada contrarrevolucionaria, véase el clásico estudio de MAYER, 1971; para estudiar el caso de América Latina, GRANDIN y JOSEPH, 2010, aplicaron algunas de las ideas que Mayer expresa en ese trabajo. FINCHELSTEIN, 2010 y 2014, describió como fascistas a todos los argentinos nacionalistas de la década de 1930. En DEUTSCH, 1999, expongo que muchos nacionalistas son fascistas, pero no todos lo eran.

No estoy empleando el término progresista para referirme sólo a los simpatizantes del comunismo, como a veces se lo emplea. No incluyo a los anarquistas que, no obstante, merecen atención.

TRAVERSO, 2016, p. 236.

VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE, 2006a, pp. 9-10 (cita), y 2006b, p. 207. Acerca de la naturaleza entrelazada de la revolución y la contrarrevolución, véase también GRANDIN, 2010, p. 16.

HOBBSAWM, 1996, p. 144.

Sobre estos y otros movimientos de la extrema derecha en la década de 1920, consultar DEUTSCH, 1999. Para otro análisis comparativo, uno que trata la década de 1930, véase KLEIN, 2000.

LAVRIN, 1995; VALOBRA y YUSTA RODRIGO, 2017.

TRAVERSO, 2016, pp. 254, 259.

BERTONHA, 2012.

FONT, 1921, p. 163; Biblioteca de la Liga Patriótica Argentina, 1927, p. 57 y 410; CARLSON, 1988, p. 164.

Biblioteca de la Liga Patriótica Argentina, 1928, p. 401.

HLUND, Elvira Rawson de Dellepiane Collection; Rawson en La Razón, 6.I.1919, recorte, y Acevedo a Rawson, carta, 7.I.1919. Acerca de Rawson, véase BARRANCOS, 2001; LAVRIN, 1995, pp. 26-27, 269, *passim*.

Ya en 1928 Rawson había desplazado su pensamiento hacia la izquierda en la dirección de una crítica de la guerra, de la injusticia social y del imperialismo; véase BARRANCOS, 2001, pp. 88-89.

DEUTSCH, 1991. La escritora Mercedes Pujato Crespo se unió a la Liga. Formaba parte del Consejo Nacional de Mujeres, que se había distanciado del feminismo y renunció al derecho al voto. Véase VASSALLO, 2012. No obstante, como subrayó BARRANCOS, 2001, pp. 27-31, ella era una feminista moderada y para 1921 sutilmente aprobaba la entrada de las mujeres en la política.

Comisión de Señoritas de la Liga Patriótica Argentina, 1922, pp. 4 (cita), 22; La Nación, 2.IX.1919. Para más información sobre las mujeres liguistas, véase DEUTSCH, 1984; CATERINA, 1995, pp. 83-89.

*Nuestra Causa*, núm. 24, VI.1921, página sin número, y pp. 277-281.

*Gil Blas*, 13.II.1919; 27.II.1919; 3.III.1921. Las páginas de este periódico no están numeradas.

*Gil Blas*, 23.IX.1920; 7.VII.1921; 21.VII.1921; 28.VII.1921; 22. IX.1921; HAHNER, 1990, p. 145.

Esto nos recuerda que en la década de 1930 los nacionalistas argentinos mostraban preocupación por el trato abusivo de la gente indígena; utilizaron este problema para reforzar sus argumentos contra la oligarquía y las conspiraciones internacionales. Consultar BOHOSLAVSKY, 2007.

*Gil Blas*, 1.I.1921; 29.XII.1921; 6.I.1922; 8.XII.1922; HAHNER, 1990, en especial, pp. 137, 163; MARINO, 2014; BESSE, 1996, pp. 166-178, 183-192.

*Anauê*, núm. 19, IX.1937, p. 58.

Véase, por ejemplo, el manifiesto de la Agrupación Femenina de la Legión Cívica Argentina, en *La Fronda*, 12.VI.1931, p. 3; 17.VI.1931, p. 6.

FCRE, Subfondo P. Luisi, “Manifiesto del Comité del Mundo de Las Mujeres”, *El Ideal*, 4.VII.1934, recorte, Serie Italia, Sección Nazi-Fascismo, caja 1, núm. 4; AGN, Archivo Paulina Luisi, “Congreso Internacional de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo, París”, 1934, núm. 19, caja 256, carpeta 5. Véase también, entre otras fuentes, CARLE, 2004, pp. 306-308; COONS, 1999, pp. 128-129, 131-132; FISHER, 1988, pp. 147-170; CEPLAIR, 1987, pp. 78-93; H. Senado de la Nación, 1940, t. 2, esp. pp. 99-100.

AFA, 1936, p. 12. H. Senado de la Nación: 1940, t. 2, p. 206. Sobre los siguientes párrafos, véase SCPC, WILPF, Part 3: U.S. Section, A4, Part 1, Reca a Brainerd, carta, 30.I.1936, y adjunto AFA manifiesto, “A todas las mujeres contra la guerra”, caja 22, carpeta de la correspondencia de Brainerd con personas en Argentina, 1934-1936, DG 043; AFA, 1936. Véase también FRANCO, 2011, pp. 16-18; ¡Mujeres!, 1937.

AFA, “A todas las mujeres”.

BN, Colección Paulina Luisi, Uruguay, 20.IV.1936, recorte, carpeta 1936-1938, y “Primer Congreso Nacional de Mujeres”, 17-22.IV.1936, carpeta 1939.

H. Senado de la Nación, 1940, t. 2, p. 211.

APSF, Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, Provincia de Santa Fe, Mesa de Entradas y Salidas, Soc. UAM (Filial Rosario), 1940, Expediente 5066, Letra S, Libro 38, pp. 17-18; ALBN, Colección Paulina Luisi, La Vanguardia, 8.VIII.1938, recorte, carpeta 1939. Sobre UAM, entre otras fuentes, véase también OLIVER, 1969, pp. 321-322, 348-357; 1981, p. 42, y 1971, pp. 50-51; VALOBRA, 2015, pp. 138-142; HALPERÍN DONGHI, 2008, p. 80, y 2004, pp. 209-210; GIORDANO, 2012, pp. 157-163; QUEIROLO, 2004; MEYER, 1979, pp. 135-140.

TUÑÓN PABLOS, 1992; OIKIÓN SOLANO, 2017; OLCOTT, 2005; PASQUALI, s.f.; MARINO, en prensa.

El Movimiento Nacional Socialista y el Partido Nazi (alemán) de Chile eran dos grupos distintos. El primero se diferenció de los que consideraba “nazis” (con z).

BADILLA URRUTIA, 1936, pp. 51-56, en especial pp. 51 y 53. Los derechistas radicales prefirieron reprender al liberalismo y al marxismo por sacar a las mujeres del hogar, más que al capitalismo per se; no obstante, algunos atribuyeron este problema al capitalismo “especulativo” o “internacional”, por lo general caracterizado como judío por ellos. Consultar, por ejemplo, PASSALQUA ELIÇABE, 1935, p. 50.

Sobre el papel de las mujeres en la familia, considerada la base del Estado fascista, véase SARNOFF, 2012.

Anauê, núm. 21, XI.1937, p. 49.

*Monitor Integralista*, núm. 16, 5.XII.1936, p. 6; *ao*, 8.IX.1936, p. 1.

*Vida Femenina*, núm. 34, 15.V.1936, pp. 27-28.

MC, MEMCh, “A las mujeres”, 28.V.1935, en Correspondencia de la Secretaria General de MEMCh, Elena Caffarena (citas), consultado el 13. VIII.2012; *La Mujer Nueva*, 8.IX.1935, p. 1; 3.II.1936, p. 1. Acerca del MEMCh véanse también ANTEZANA-PERNET, 1997; ROJAS MIRA, GAVIOLA, LOPESTRI y JILES, 2007; ROSEMBLATT, 2000. Sobre los anticonceptivos y el aborto, véanse LAVRIN, 1995, pp. 174-191; PIEPER-MOONEY, 2009.

ao, 15.VI.1935, p. 5 (fotografías); 8.IX.1936, p. 1; PENNA, 1959, t. IX, p. 52; GERALDO, 2001.

Las declaraciones del periódico eran equivocadas. No mencionó que algunas mujeres soviéticas se ofrecieron a donar leche materna para los bebés que lo necesitaban, y que muchas obreras amamantaban a sus hijos en las guarderías de las fábricas durante sus jornadas laborales. Tal vez darle biberones a los bebés les pareció inhumano a los integralistas; les habría sorprendido enterarse de que de hecho la URSS alentaba a las mujeres a amamantar. La prensa integralista tampoco informó a sus lectores que la Agencia Nacional para la Maternidad e Infancia italiana (ONMI) promovía el uso de la leche en polvo, además de dar de mamar. Véanse GRA-ZIA, 1992, p. 65; CHALMERS, 2005, pp. 497-498, consultado el 6.IX.2017; CHERNYAEVA, 2009, en particular pp. 142-204.

ALBN, Colección Paulina Luisi, La Vanguardia, 30.X.1938, recorte, carpeta 1936-1938. Los fascistas latinoamericanos favorecieron las políticas italianas y alemanas de aumentar la tasa de natalidad y remover a las mujeres de la universidad y la fuerza de trabajo. Véase Bandera Argentina, 2.IX.1938, p. 1; ao, 15.VI.1935, p. 5; Trabajo, 14.III.1935, p. 5.

ao, 9.II.1936, p. 16; Trabajo, 20.V.1936, p. 6. Según BESSE, 1996, p. 133, el reconocimiento de la necesidad de trabajo de las mujeres se había hecho común en Brasil.

*Monitor Integralista*, núm. 16, 5.XII.1936, p. 6.

RUBINZAL, 2012, p. 234.

CORBISIER, 1959, t. IX, pp. 67-69.

*Brasil Feminino*, núm. 38, XI.1937), p. 8.

Ibid., pp. 22-23. Véase también SIMÕES, 2011, p. 11, consultado el 29.VI.2017.

Anauê, núm. 11, VII.1936, p. 8.

Anauê, núm. 4, X.1935, p. 29; Ribeiro, en *Brasil Feminino*, núm. 38, XI.1937, p. 1. Estas ideas se asemejan al feminismo católico abordado por BESSE, 1996, pp. 183-190.

Las mujeres también habían obtenido el derecho a votar en Ecuador, que no tenía un movimiento feminista importante, y en Cuba, que sí lo tenía. Cuba, sin embargo, parecía carecer de la presencia de una derecha radical tan marcada como en Argentina, Brasil, Chile y México.

DEUTSCH, 1997. Después de que las mujeres obtuvieron el voto municipal en Chile en 1934, los nacistas les permitieron ingresar al MNS, que, alegaron, practicaba una “política feminista”. Véase DEUTSCH, 1999, p. 173.

ao, 1.V.1937, pp. 1-2, y 4.XI.1937, p. 2; Monitor Integralista, núm. 15, 3.X.1936, pp. 13-14; Anauê, núm. 15, V.1937, p. 41. Véanse también CAVALARI, 1999, pp. 62-68; GERALDO, 2001, pp. 124-125; POSSAS, 2004; SIMÕES, 2009, pp. 159-160, 173, y 2011, pp. 1-11, 15; CALDEIRA, 1999, p. 46; BAIRROS, 2013. En relación con el voto, hay que mencionar a Rosalina Coelho Lisboa, diplomática e intermediaria entre Getúlio Vargas y Plínio Salgado que apoyaba a la AIB y tal vez perteneció a ella. Favoreció los derechos políticos y civiles de las mujeres y ejerció presión en pro de estas ideas en las conferencias panamericanas de 1936 y 1938. MARINO, 2019, cap. 6 y comunicación, 25.XI.2017.

FRANCO, 2011, p. 23.

SIMÕES, 2011, pp. 13-14. RUBINZAL, 2012, p. 236, describió a una nacionalista argentina que afirmó el derecho de las mujeres a trabajar fuera de casa, en contra de sus pares masculinos.

*Vida Femenina*, núm. 18, I.1935, pp. 5-6, 16.

Giménez de Bustamante, en *La Fronda*, 5.VIII.1932, p. 6; HLUND, Isabel Giménez de Bustamante Collection, borrador de su discurso, 1932; *Bandera Argentina*, 7.VII.1938, p. 1. Véanse también LAVRIN, 1995, pp. 277-279; BARRANCOS, 2001, pp. 115-120, y 2007, p. 160; CARLSON, 1988, pp. 172-174. Isabel Carrera de Reid escribió en favor del voto municipal en *El Rayo*, 3.IV.1935, p. 1, pero *Trabajo*, 10.VI.1936, p. 6, se opuso. Sólo después de que el nazismo giró a la izquierda apoyó (temporalmente) la igualdad de derechos entre hombres y mujeres; véase *Trabajo*, 17.I.1939, p. 1.

POSSAS, 2004.

BESSE, 1987, pp. 103-117, y 1996, pp. 44, 180-183, *passim*.

OROZCO, en prensa.

Las publicaciones de la Liga y el periódico nazi Trabajo mencionaban con frecuencia las brigadas femeninas. Las descripciones militares de las mujeres de izquierda parecieron volverse más comunes al final de la década de 1930 y en la década de 1940, con el ejemplo de la participación de mujeres en la Guerra Civil española y en la segunda Guerra Mundial, tema que amerita investigación.

*Brasil Feminino*, núm. 38, XI.1937, p. 33.

GONZÁLEZ y KAMPWIRTH, 2001, pp. 17, 21-22. Esta importante colección se enfoca en el último tercio del siglo XX.

MAYER, 1971, pp. 62-63, 66, 80; DEUTSCH, 1999.

Según GONZÁLEZ y KAMPWIRTH, 2001, pp. 20-22, las mujeres derechistas y las progresistas estuvieron de acuerdo respecto de ciertos asuntos en ocasiones.

Enzo Traverso destacó la “imposibilidad de un diálogo entre revolucionarios de la izquierda y de la derecha” en este periodo, declarando que carecían de un “espacio público común” y del respeto mutuo. En Europa algunos de ellos intentaron intercambiar ideas, pero fueron incapaces de cruzar la división existente. Véase TRAVERSO, 2016, pp. 233, 246-247, quien discute todo el periodo de entreguerras en Europa, pero, aparentemente, esto fue más cierto en Latinoamérica en relación con la década de 1930 que en la década de 1920. Algunas feministas eran liberales; muchas socialistas argentinas eran moderadas, y los movimientos de extrema derecha hasta finales de la década de 1920 aún no eran fascistas. Mientras los fascistas se pensaban a sí mismos como revolucionarios —y HOBBSAWM, 1996, p. 117, los llamó los “revolucionarios de la contra-revolución”—, yo pongo en duda si resulta apropiado referirse a ellos de esta manera. Las revoluciones anulan las relaciones de propiedad y de poder, pero los fascistas ganaron control por medio de alianzas con figuras conservadoras poderosas en la tríada antirrevolucionaria, y, una vez en poder del gobierno, conservaron el capitalismo, aunque fuese una versión extremadamente regulada de éste. Consultar PAXTON, 2004, pp. 98, 145-147.

MAYER, 1971, p. 65.

## PERFILES BIOGRÁFICOS

**José Ricardo Arias Trujillo.** Profesor de planta del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia). Doctor en historia por la Universidad de Aix-en-Provence (Francia). Sus investigaciones se centran en la historia del catolicismo y en la historia intelectual en Colombia durante el siglo XX. Sus últimas publicaciones son: *Chile-Colombia. Diálogos sobre sus trayectorias históricas* (en coautoría con Fernando Purcell, 2014); *Historia de Colombia contemporánea, 1920-2010* (2011), y *Los Leopardos. Una historia intelectual de los años 1920* (2007).

**João Fábio Bertonha.** Licenciado, maestro y doctor en historia por la Universidad Estatal de Campinas. Cuenta con una habilitación en historia por la Universidad de São Paulo, con posdoctorados en la Universidad de Roma, en la de São Paulo y en el Instituto Universitario Europeo. Especialista en estudios estratégicos y en defensa por la Universidad Nacional de Defensa de Estados Unidos. Docente en la Universidad Estatal de Maringá (UEM) e investigador del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq). Fue investigador visitante en numerosos países. Sus últimos libros son *Aventureros, utopistas, emigrantes. Del Imperio Habsburgo a las Américas* (como coeditor, 2017); *Italianos e austro-húngaros no Brasil: nacionalismos e identidades* (2018); *Plínio Salgado: biografía política* (2018) y *La Legione Parini. Gli italiani all'estero e la guerra d'Etiopia* (2018).

**Ernesto Bohoslavsky.** Investigador-docente concursado en la Universidad Nacional de General Sarmiento e investigador asociado del Conicet (Argentina). Completó el doctorado en América Latina contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid. Se ha especializado en historia de las derechas de Argentina, Brasil y Uruguay en el siglo XX. Actualmente coordina el Grupo de Trabajo de Clacso “Derechas contemporáneas: dictaduras y democracias”. Su última compilación es *Circule por la derecha. Percepciones, redes y contactos entre las derechas sudamericanas, 1917-1973* (2016, con Fábio Bertonha).

**Magdalena Broquetas San Martín (Montevideo, 1978). Doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata (Argentina). Profesora e investigadora de tiempo completo en el Departamento de Historia del Uruguay de la Universidad de la República. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. Entre 2002 y 2016 participó en la creación y el desarrollo del Centro de Fotografía de Montevideo desde 2009, en calidad de coordinadora del Área de Investigación. Es autora de numerosas publicaciones sobre fotografía, historia contemporánea del Uruguay e historia de las derechas en Uruguay y América Latina. Entre sus publicaciones destacan La trama autoritaria. Derechas y violencia en Uruguay, 1958-1966 (2014) y Fotografía en Uruguay. Historia y usos sociales, t. I, 1840-1930, y t. II, 1930-1990 (2011 y 2018), en los que participó como coordinadora y coautora.**

**Norberto O. Ferreras (Mar del Plata, Argentina, 1963). Es doctor en historia social del trabajo por la Unicamp (Universidade Estadual de Campinas, Brasil). Profesor de Historia de América Contemporánea en la Universidad Federal Fluminense (Brasil) y miembro del sistema de pesquisadores del Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq-Brasil). Sus temas de especialidad son la historia del trabajo y los trabajadores en Argentina y Brasil durante los siglos XIX y XX, así como las relaciones de la Organización Internacional del Trabajo con América Latina. Ha colaborado, entre otras, con la Harvard University, la Princeton University, la Universidad Nacional de Quilmes (Argentina) y la Université Paris III. Publicó O cotidiano dos trabalhadores de Buenos Aires (Eduff, 2006), Os pobres e a política, junto con María Verónica Secreto (Mauad X, 2013), además de diversos artículos en libros y revistas. Asimismo, ha participado en la organización de varios libros.**

**Eduardo González Calleja. Catedrático en la Universidad Carlos III de Madrid. Doctor en historia contemporánea por la Universidad Complutense; sus investigaciones han versado sobre la teoría y la historia de la violencia política, la evolución de los grupos de extrema derecha y fascistas en la Europa de entreguerras, la acción política y cultural del franquismo y de la monarquía democrática hacia América Latina, la emigración política española, la historia del deporte, la teoría y la historia del terrorismo, la historia de los instrumentos estatales de orden público y la relación entre memoria e historia. Entre sus últimas obras figuran Asalto al**

**poder. La violencia política organizada y las ciencias sociales (Madrid, Siglo XXI, 2017); Socialismos y comunismos. Claves históricas de dos movimientos políticos (Madrid, Paraninfo, 2017) y Guerras no ortodoxas. La “estrategia de la tensión” y las redes del terrorismo neofascista en Europa del Sur y América Latina (Madrid, La Catarata, 2018). Ha sido coordinador de La Segunda República española (Barcelona, Pasado & Presente, 2015).**

**David Jorge. Profesor-investigador del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido investigador posdoctoral en España (Juan de la Cierva-incorporación) y en México (DGAPA-UNAM). Ha enseñado en Wesleyan University, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad del Mar-Huatulco. Es autor de Inseguridad colectiva: la Sociedad de Naciones, la Guerra de España y el fin de la paz mundial (Valencia, Tirant lo Blanch, 2016) y coordinador de Tan lejos, tan cerca: miradas contemporáneas entre España y América Latina (Valencia, Tirant lo Blanch, 2018). Su libro War in Spain aparecerá próximamente en Routledge.**

**Clara E. Lida (Buenos Aires, Argentina). Es doctora por la Universidad de Princeton y doctora Honoris causa por la Universidad de Cádiz. En la actualidad es profesora-investigadora en El Colegio de México e Investigadora Nacional Emérita del Conacyt (México). Sus investigaciones incluyen los movimientos sociales y socialistas españoles y europeos, especialmente el anarquismo; el trasvase de poblaciones europeas a América, y el exilio republicano español en México. Es autora de más de un centenar y medio de artículos y más de veinte libros y compilaciones. Entre éstos destacan: Anarquismo y revolución en la España del xix (1972), Antecedentes y desarrollo del movimiento obrero español (1973), Inmigración y exilio (1997), Caleidoscopio del exilio (2009) y La main noire. Anarchisme rural, sociétés clandestines et répression en Andalousie: 1870-1888 (2011).**

**Sandra McGee Deutsch. Profesora de la Universidad de Texas en El Paso, Estados Unidos. Especialista en historia de fascismo, antifascismo, mujeres y género en América Latina. Ha sido profesora visitante en las universidades nacionales de Buenos Aires y La Plata, Argentina. Destacan entre sus libros Counterrevolution in Argentina, 1900-1932: The Argentine**

**Patriotic League (1986; edición en español, 2003); Las derechas: The Extreme Right in Argentina, Brazil, and Chile, 1890-1939 (1999; edición en español, 2005), y Crossing Borders, Claiming a Nation: A History of Argentine Jewish Women (2010; edición en español, 2018). Compiló (con Ronald Dolkart) The Argentine Right (1993; edición ampliada en español, 2001), y (con Kathleen Blee) Women of the Right: Comparison and Interplay across Borders (2012). Recibió becas del National Endowment for the Humanities, American Council of Learned Societies, Fulbright y otras fundaciones, así como el premio de la Latin American Jewish Studies Association por el libro Crossing Borders.**

**Ricardo Pérez Montfort (México, 1954). Doctor en historia de México por la UNAM. Investigador en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores. Sus temas de especialidad han sido la historia y la cultura de México y América Latina durante los siglos XIX y XX. Ha colaborado, entre otras, con la Freie Universität de Berlín, la Universidad de Oslo y la Columbia University. Sus libros más recientes son: Lázaro Cárdenas. Un mexicano del siglo XX, vol. 1 (Random House, 2018), Tolerancia y prohibición. Aproximaciones a la historia social y cultural de las drogas en México 1840-1940 (Random House, 2016), y México contemporáneo 1808-2014, t. 4, La Cultura (El Colegio de México–Fundación Mapfre–Fondo de Cultura Económica, 2015).**

**António Costa Pinto. Profesor en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa. Doctorado por el Instituto Universitario Europeo, Florencia. Fue profesor invitado en las universidades de Stanford y Georgetown e investigador invitado en la Universidad de California-Berkeley, la New York University y en Science Po, París. Sus temas de investigación han sido autoritarismo y dictaduras; democratización y justicia de transición. Publicó recientemente O passado que não passa. A sombra das ditaduras na Europa do Sul e América Latina (2014); Rethinking Fascism and Dictatorship in Europe (2014); A Onda Corporativa (2016), y Corporatism and Authoritarianism in Europe and Latin America (2018).**

**Verónica Valdivia Ortiz de Zárate. Profesora-investigadora titular en la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales,**

**Chile. Doctora en estudios americanos, mención historia, por la Universidad de Santiago de Chile; especialista en historia política contemporánea de las derechas, fuerzas armadas y movimientos nacionalistas chilenos. Autora de numerosos libros y artículos, entre los que destacan Subversión, coerción y consenso. Creando el Chile del siglo XX (1918-1938) (2017); Nacionales y gremialistas. El “parto” de la nueva derecha política chilena, 1964-1973 (2008); El golpe después del golpe. Leigh vs Pinochet (1960-1980) (2003); La Milicia Republicana. Los civiles en armas, 1932-1936 (1992); en co-autoría La alcaldización de la política. Los municipios en la dictadura pinochetista (2012), y Su revolución contra nuestra revolución, 2 vols. (2006, 2008).**

*Las derechas iberoamericanas: desde el final de la primera Guerra hasta la Gran Depresión*

Portada de Pablo Reyna.

Tipografía y formación a cargo de Socorro Gutiérrez, en

Redacta, S.A. de C.V.

Cuidó la edición Antonio Bolívar con la supervisión de la

Dirección de Publicaciones de El Colegio de México

[libros.colmex.mx](http://libros.colmex.mx)

[video-comentarios de libros COLMEX](#)

Junio 2020



## «AMBAS ORILLAS»

Este libro rastrea las maneras en las cuales las derechas de los países iberoamericanos procesaron los desafíos vividos entre el final de la Primera Guerra Mundial y la crisis económica de 1929-1930, así como la forma en que desarrollaron ideologías, culturas y prácticas políticas específicas. Para ello se examina el vínculo entre los regímenes políticos y los intereses dominantes.

El análisis de los actores centrales y de sus intereses permite conocer los enfrentamientos producidos por la conflictividad sindical, la influencia de la Revolución rusa (y también de la mexicana), la creación de partidos comunistas, el impacto del fascismo italiano y la reacción de los dueños del capital y de las fuerzas oligárquicas tradicionales. Sus ideologías y prácticas políticas son fundamentales en muchos de los artículos, mismos que examinan los mecanismos que las derechas desarrollaron para organizar y defender sus intereses, empleando a menudo la violencia de agentes estatales, paraestatales y particulares.

El corte temporal inicia tras la Gran Guerra, con sus vendavales económicos, las réplicas del comunismo fuera de la Unión Soviética y el impacto del fascismo más allá de Italia, y cierra con la crisis financiera y económica de 1929, cuyos efectos en algunos países durarían hasta la Segunda Guerra Mundial. No cabe duda de que, en el mundo iberoamericano, la experiencia de la década de 1920 marcó el surgimiento de nuevas culturas políticas y de construcciones de derecha e izquierda, de las cuales se desprendieron retos y confrontaciones que continuaron hasta la llamada Guerra Fría y más allá.